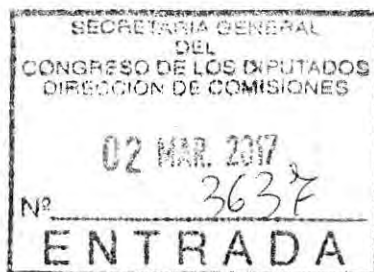


Grupo  
Parlamentario  
Socialista  
de Cortes  
Generales



Grupo  
Socialista

### A LA MESA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes **ENMIENDAS** al **ARTICULADO** al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23 UE y 2014/24 /UE, de 26 de febrero de 2014. (Núm. expte. 121/00002).

En el Congreso de los Diputados a 2 de marzo de 2017

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

## **ENMIENDA**

A la Exposición de Motivos, en su Apartado II, primer párrafo.

### **De modificación**

Se propone la modificación de la exposición de motivos en el primer párrafo de su apartado II del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, el de conseguir una mejor relación calidad-precio, para lo cual se introducen nuevas consideraciones en la contratación pública, de manera que los órganos de contratación darán prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación”.*

## **MOTIVACIÓN:**

El Proyecto de Ley establece en su Exposición de Motivos una serie de objetivos que inspiran su regulación y, desde COCETA consideramos que la redacción que se da a los tiempos verbales en condicional dista de ser el medio para lograr los citados objetivos. La actuación de los órganos de contratación debería de regularse como un imperativo y no como “una posibilidad”.

Con esta normativa, la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de revisión y modernización de las vigentes normas sobre contratación pública, que posibiliten incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes.

Debe recordarse que la política de fomento de la contratación pública con pequeñas y medianas empresas impregna las nuevas Directivas de contratación pública, ya desde sus primeros Considerandos, medida destacada en la Estrategia Europa 2020, que señala que la contratación pública desempeña un papel esencial, debiendo trasladarse al ordenamiento jurídico español a través de este Proyecto de Ley.

(65)

## **ENMIENDA**

A la Exposición de Motivos

De adición, después del párrafo 4 correspondiente al apartado V

Se propone la siguiente redacción incluyendo un párrafo nuevo después del párrafo 4 correspondiente al apartado V dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*En el ámbito medio ambiental, se exigen certificados de gestión medioambiental a las empresas licitadoras (...) del régimen jurídico del sector público.*

*“Además con el ánimo de favorecer el respeto hacia los Derechos Humanos, en especial los derechos laborales básicos que satisfagan las necesidades de las personas trabajadoras y los pequeños productores de países en vías de desarrollo, se introduce la posibilidad de considerar los principios de comercio justo recogidos en artículo 2 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo (2005/2245(INI) tanto como criterios de adjudicación como condiciones especiales de ejecución del contrato.”*

## **MOTIVACIÓN:**

Enriquece sustancialmente la Exposición de Motivos

(13)

## **ENMIENDA**

A la exposición de motivos

De modificación

Se modifica el tercer párrafo del apartado I de la exposición de motivos, quedando como sigue:

“La Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, establece que ésta desempeña un papel clave en la Estrategia Europea 2020, por lo que se hace preciso, de conformidad con la norma comunitaria, adaptar las normas vigentes sobre contratación pública para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos incrementar la eficiencia del gasto público, y facilitar en particular la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública, así como la mejor utilización de la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes.”

## **MOTIVACIÓN:**

Se hace necesario revisar las normas vigentes sobre contratación pública para incrementar la eficiencia del gasto público, y de facilitar en particular la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública, así como la mejor utilización de la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes.

(22)



## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 1**

De adición, incorporar un apartado 3 (nuevo)

Se propone la siguiente redacción incluyendo un nuevo apartado 3 en el artículo 1 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

Al artículo 1. Objeto y finalidad.

*“3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. “*

## **MOTIVACIÓN:**

Se trata incorporar de manera clara y expresa el objetivo y necesidad respecto a la inclusión de objetivos sociales y medioambientales, tal y como con insistencia reconoce la Directiva Europea y no, que aparezca, como en el presente proyecto, como mención en la Exposición de Motivos.

Se fundamenta la enmienda en la necesidad de transmitir la idea fundamental de que la inclusión de criterios sociales y ambientales debe impregnar de forma transversal toda la contratación pública, configurando de este modo un sistema de corresponsabilidad social y de contratación pública responsable. Se trata igualmente de explicitar que la inclusión de criterios sociales y ambientales no supone tan solo una cuestión ética o de justicia social, sino una potente y sinérgica herramienta de transformación que resulta altamente eficiente desde el punto de vista del interés público y de la propia eficiencia y racionalización de los presupuestos públicos destinados a contratación.

(13)

## **ENMIENDA**

Al artículo 1

De adición de un nuevo apartado 4

Se propone la siguiente redacción del artículo 1 incorporando un nuevo apartado 4 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

“(Nuevo 4)

*La presente Ley no afecta a la libertad de los poderes públicos de establecer cómo deben organizarse y financiarse, y a qué obligaciones específicas deben estar sujetos, los servicios de interés económico general.*

*En concreto, los servicios a las personas -como ciertos servicios sociales, sanitarios, incluyendo los farmacéuticos, y educativos- incluidos en los catálogos y carteras de servicios de los sistemas de responsabilidad pública, constituyen servicios de interés económico general y los poderes públicos tienen libertad para prestarlos por sí mismos u organizarlos de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos y disponen de una amplia discrecionalidad para seleccionar a los prestadores de servicios de la manera que consideren más apropiada*

## **MOTIVACIÓN:**

La referencia a la discrecionalidad en la selección de prestadores de servicios conecta no sólo con la adopción de formas de organización de los servicios alternativas a la contratación pública, sino también con la posibilidad de simplificar el régimen de contratación en el caso de los servicios sociales y con la posibilidad de adoptar el procedimiento de licitación con negociación en determinados supuestos.

La propia Directiva 2014/24/UE incluye en el articulado una salvedad en relación a los servicios de interés económico general y la potestad de los Estados miembros de definirlos, de conformidad con el Derecho de la Unión, y establecer cómo deben organizarse y financiarse, con arreglo a las normas sobre las ayudas estatales, y a qué obligaciones específicas deben estar sujetos. Y señala también que la Directiva no afecta a la decisión de las autoridades públicas de definir si desean asumir ellas mismas determinadas funciones públicas, en qué forma y en qué medida, en virtud, precisamente, del artículo número 14 del TFUE y del Protocolo nº 26.

(16)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 2**

#### **De modificación, apartado 4**

Se propone la modificación completa del apartado 4 del artículo 2 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“4.- A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, no constituyen contratos y, por lo tanto, no están sometidos a la misma los denominados regímenes de autorización o licencia en los que, independientemente de su denominación, no sea necesario acudir a ningún procedimiento de selección en concurrencia competitiva, en tanto que todos los operadores económicos que cumplan determinadas condiciones, previamente establecidas y publicadas debidamente por el ente, organismo o entidad del sector público, sean autorizados a prestar servicios, a cambio de una remuneración y bajo unas condiciones también establecidas y publicadas previamente.”*

## **MOTIVACIÓN:**

La propia Directiva en su Considerando 2 establece que «deben revisarse y modernizarse las normas vigentes sobre contratación [...] Asimismo, es preciso aclarar determinadas nociones y conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica e incorporar determinados aspectos de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación pública.»

Asimismo, la legislación sobre contratación pública debe ser interpretada a la luz de la legislación europea sobre la materia, en tanto que nuestra legislación interna incorpora al ordenamiento interno español lo dispuesto en el Derecho de la Unión Europea, que goza de primacía. De tal manera que la legislación interna debe distinguir, al igual que el Derecho de la Unión, la contratación pública de los denominados regímenes de autorización, conforme establecen los Considerandos 4 y 114 de la Directiva 2014/24/UE.

El Considerando 4) de la Directiva dispone lo siguiente:

“Las formas cada vez más diversas de acción pública han originado la necesidad de definir con mayor claridad el propio concepto de contratación. Sin embargo, esa clarificación no debería ampliar el ámbito de aplicación de la presente Directiva en relación con el de la Directiva 2004/18/CE. Las normas de la Unión sobre contratación pública no tienen por objetivo regular todas las

formas de desembolso de fondos públicos, sino únicamente aquellas destinadas a la adquisición de obras, suministros o servicios prestados mediante un contrato público. Es preciso aclarar que dicha adquisición de obras, suministros o servicios debe estar sujeta a la presente Directiva tanto si se realiza mediante adquisición, arrendamiento o cualquier otra forma contractual.

El concepto de adquisición debe entenderse de manera amplia, en el sentido de obtener los beneficios de las obras, suministros o servicios de que se trate, sin que ello implique necesariamente una transferencia de propiedad a los poderes adjudicadores. Es más, la mera financiación, en particular mediante subvenciones, de una actividad, a menudo ligada a la obligación de reembolsar las cantidades recibidas cuando no se hayan utilizado para los fines previstos, no suele estar regulada por las normas de contratación pública. De modo similar, aquellas situaciones en las que todos los operadores que cumplan determinadas condiciones están autorizados a desempeñar una determinada tarea, sin ningún procedimiento de selección, como los sistemas de elección de los clientes o de cheques de servicios, no deben entenderse como una contratación, sino como simples regímenes de autorización (por ejemplo, las licencias para medicamentos o servicios médicos)."

En similares términos está redactado el último párrafo del Considerando 114) de la Directiva, si bien referido concretamente a los servicios sociales:

"Los Estados miembros y los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos esos servicios u organizar los servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación."

Asimismo, mención especial merece la Guía de la Comisión Europea, tanto en su versión de diciembre de 2010 como en su versión de 29 de abril de 2013 relativa a la aplicación a los servicios de interés económico general y, en particular, a los servicios sociales de interés general, de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales, de contratos públicos y de Mercado Interior.

La Guía plantea expresamente la siguiente cuestión: ¿Existen modalidades de externalización de Servicios Sociales de Interés General distintas de los contratos públicos y las concesiones que sean compatibles con los principios de transparencia y no discriminación y que ofrezcan una amplia gama de prestadores de servicios?

Pues bien, la Guía da respuesta a la citada cuestión de forma positiva, en los siguientes términos:

“Así es. La autoridad pública competente puede por ejemplo definir de antemano las condiciones en las que debe prestarse un servicio social y, previa publicidad adecuada, respetando los principios de transparencia y no discriminación (véase la respuesta a la pregunta 4.2.3), conceder licencias o autorizaciones a todos los prestadores de servicios que cumplen esas condiciones. Este sistema no prevé límites o cuotas en cuanto al número de prestadores de servicios; todos los que cumplan las condiciones pueden participar.

Los prestadores de servicios que hayan obtenido una licencia o una autorización deberán prestar el servicio a petición del usuario, que podrá así elegir entre distintos prestadores de servicios, y a un precio que habrá sido fijado previamente por la autoridad pública.”

(62)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 2**

De adición incorporando un 5º apartado nuevo

Se propone la siguiente redacción en el artículo 2 incorporando un 5º apartado nuevo dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“Nuevo 5.- A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, no constituyen contratos y, por lo tanto, no están sometidos a la misma los denominados regímenes de autorización o licencia en los que, independientemente de su denominación, concierto social u otra, no sea necesario acudir a ningún procedimiento de selección en concurrencia competitiva, en tanto que todos los operadores económicos que cumplan determinadas condiciones, previamente establecidas y publicadas debidamente por el ente, organismo o entidad del sector público, sean autorizados a prestar servicios, a cambio de una remuneración y bajo unas condiciones también establecidas y publicadas previamente.”*

## **MOTIVACIÓN:**

La propia Directiva en su Considerando 2 establece que «deben revisarse y modernizarse las normas vigentes sobre contratación [...] Asimismo, es preciso aclarar determinadas nociones y conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica e incorporar determinados aspectos de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación pública.»

Asimismo, la legislación sobre contratación pública debe ser interpretada a la luz de la legislación europea sobre la materia, en tanto que nuestra legislación interna incorpora al ordenamiento interno español lo dispuesto en el Derecho de la Unión Europea, que goza de primacía. De tal manera que la legislación interna debe distinguir, al igual que el Derecho de la Unión, la contratación pública de los denominados regímenes de autorización, conforme establecen los Considerandos 4 y 114 de la Directiva 2014/24/UE.

El Considerando 4) de la Directiva dispone lo siguiente:

*Las formas cada vez más diversas de acción pública han originado la necesidad de definir con mayor claridad el propio concepto de contratación. Sin embargo, esa clarificación no debería ampliar el ámbito de aplicación de la presente Directiva en relación con el de la Directiva 2004/18/CE. Las normas de la Unión sobre contratación pública no tienen por objetivo regular todas las formas de desembolso de fondos*

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 2**

De adición, apartado 6 (nuevo)

Se propone la incorporación de un nuevo apartado 6 (nuevo) al artículo 2 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*"6. (nuevo) También se encontrará excluida de la presente ley la fórmula de los conciertos sociales u otras denominaciones de significado similar que celebre las administraciones públicas u otros poderes adjudicadores con las entidades del tercer sector social para la concertación de la prestación por éstas de servicios sociales o de atención las personas, de acuerdo con la normativa en cada caso aplicable, si ésta previera esta prestación sin necesidad de celebrar contratos públicos".*

## **MOTIVACIÓN:**

Con esta propuesta se pretende incluir dichos convenios de concertación en los convenios excluidos de la aplicación de la futura LCSP; es importante señalar que estos convenios entre administraciones y entidades del tercer sector para la prestación de servicios sociales o de atención a las personas se hallan recogidos en diferentes normativas autonómicas (sin ánimo exhaustivo pueden citarse el artículo 61 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de servicios sociales del País Vasco o el artículo 89 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de las Islas Baleares)

Esta exclusión se halla amparada en el considerando 114 de la DCP: "Teniendo en cuenta la importancia del contexto cultural y el carácter delicado de estos servicios (servicios a las personas) debe ofrecerse a los Estados miembros un amplio margen de maniobra para organizar la elección de los proveedores de los servicios de modo que consideren más oportuno... Los estados miembros siguen teniendo libertad para prestar por si mismos esos servicios y organizar los servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos".

En análogos términos en el considerando 54 de la DC. En base a estos pronunciamientos nada impide que las Comunidades Autónomas, competentes en dichos servicios, puedan regular un sistema de concertación de las administraciones y las entidades sin ánimo de lucro o entidades del tercer sector para la prestación de dichos servicios, extramuros de la normativa sobre contratación pública, como así lo han hecho ya algunas de ellas; concertación que estaría avalada también por la

jurisprudencia comunitaria (Sentencia del TJCE de 17 de junio de 1997, caso Sodemare, y mucho más recientemente Sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2014, caso Azienda Sanitaria Locale "Spezzino" y otros contra San Lorenzo Soc. coop. sociale)

Se propone en consecuencia, en coherencia con dichos considerandos de las directivas, la exclusión de la regulación de la futura LCSP de dichos convenios de concertación.

(32)



## **ENMIENDA**

### **Artículo 3**

#### **De modificación, apartado 1 e)**

Se propone modificar el apartado 1 e) del artículo 3 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“e) Las fundaciones públicas. A efectos de esta Ley, se entenderá por fundaciones públicas aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos:*

*1.º Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciban de éstas aportaciones posteriores con destino a la dotación fundacional, de forma que ésta quede integrada en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por ellas.*

*2.º Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente.*

*3.º Que las entidades del sector público tengan derecho a nombrar a más de la mitad de los miembros del patronato”.*

## **MOTIVACIÓN:**

La definición de fundación del sector público que se recoge es la contenida en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, si bien con dos diferencias. Por un lado, el párrafo primero hace referencia en el proyecto al sector público en general, como es lógico, y no sólo al estatal. Por otra el segundo párrafo hace referencia también al sector público en general, y no al sector público institucional, tal y como se recoge, de forma injustificada en la Ley 40/2015.

Sin embargo, esta definición adolece del mismo defecto que la recogida en la Ley 40/2015. No aclara si por aportación inicial debe entenderse “dotación fundacional” y si por aportaciones posteriores quiere hacerse referencia a aportaciones sucesivas a la dotación. Lo contrario podría hacer que cualquier fundación, por el mero hecho de recibir una aportación posterior de un ente del sector público, pasara a ser pública. Además es contradictorio con el párrafo segundo en el que se establece un mínimo del

50 por 100 y se hace referencia al patrimonio con carácter de permanencia, que no es otro que la dotación.

Asimismo, si bien el tercer párrafo reproduce el párrafo tercero del artículo 128.1, c), de la Ley 40/2015, debe advertirse que, por sí solo, el hecho de que coyunturalmente un patronato pudiera estar formado mayoritariamente por administraciones públicas no convierte a la fundación en pública. Además, en una fundación no existen "derechos" de voto dado que no existe un capital dividido en acciones.

(63)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 6**

De modificación, apartado 1 y adición de un apartado 2 (nuevo)

Se propone la modificación del apartado 1, y se plantea un apartado 2 (nuevo), cambiando de orden los actuales apartados 2 y 3 que pasan a ser respectivamente los apartados 3 y 4 dentro del artículo 6 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

### **Artículo 6. Convenios y encomiendas de gestión.**

“1. Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los negocios jurídicos en los que se cumplan las condiciones señaladas a continuación: los convenios interadministrativos celebrados entre sí por la Administración General del Estado, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales o las entidades con personalidad jurídico-pública de ellas dependientes.

Su *exclusión* queda condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) En el caso de que interviniesen entidades instrumentales con personalidad jurídico pública, éstas no han de tener vocación de *mercado*, la cual se presumirá cuando realicen en el mercado abierto más del 20% de las actividades objeto de colaboración, sin considerar la actividad en los mercados internacionales. Para el cálculo de dicho porcentaje se tomará en consideración el promedio del volumen de negocios total u otro indicador alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados considerados en relación con la prestación que constituya el objeto del convenio en los tres ejercicios anteriores a la adjudicación del contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad o a la reorganización de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador alternativo de actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial, mediante proyecciones de negocio.
- b) El objeto del negocio jurídico debe consistir en la *realización* conjunta de una tarea de interés público común a las partes intervinientes.
- c) El fin perseguido con el negocio jurídico debe consistir en el logro de los objetivos de interés público que las partes tienen en común.

2. Los convenios de colaboración celebrados entre la Administración General del Estado, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y las entidades con personalidad jurídico-privada o por estas últimas entre sí. Estos convenios quedarán excluidos únicamente cuando se cumplan los requisitos señalados anteriormente para el caso de los convenios interadministrativos, además de cumplir las entidades intervinientes con las siguientes particularidades como organismos de Derecho Público a los efectos de la normativa de contratación:

- a) Que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil;
- b) Que tengan personalidad jurídica propia independientemente de la participación privada o no en las mismas; y
- c) Que estén financiadas mayoritariamente por el Estado, las autoridades regionales o locales, u otros organismos de Derecho público, o cuya gestión esté sujeta a la supervisión de dichas autoridades u organismos, o que tenga un órgano de administración, de dirección o de supervisión, en el que más de la mitad de los miembros sean nombrados por el Estado, las autoridades regionales o locales, u otros organismos de Derecho público.”

“3. (...)”

“4. (...)”

*\*(Los apartados 2 y 3 actuales del artículo 6 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público pasan a ser correspondientemente el 3 y el 4 )*

#### **MOTIVACIÓN:**

Esta propuesta persigue la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico nacional de la lógica interna de las directivas, y de la lógica sistémica o del Ordenamiento jurídico en el que se integran las anteriores, puesto que si cualquier entidad que cumpla los requisitos para ser considerada organismo de Derecho público, aun contando con participación privada tiene la consideración de poder adjudicador a efectos de la aplicación de la normativa de contratación pública y, por tanto, debe sujetar su actividad a lo dispuesto en la misma, no parece coherente el que no se le permita, al igual que a los demás poderes adjudicadores, emplear la excepción prevista en los citados artículos 17.4 de la DCP y 12.4 de la DAC a las relaciones de colaboración con otros poderes adjudicadores: *cuius incommoda eius et commoda*, invirtiendo el brocardo latino *cuius commoda eius et incommoda*.

(68 y 44)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 11

De modificación del apartado 5

Se propone la siguiente redacción de modificación del apartado 5 del artículo 11 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"5. Se encuentran, asimismo, excluidos los contratos que tengan por objeto servicios relacionados con campañas políticas, incluidos en los códigos CPV 79341400- 0, 92111230-3 y 92111240-6, cuando sean adjudicados por un partido político en el contexto de una campaña electoral".*

## **MOTIVACIÓN:**

La directiva europea obliga a incluir a partidos, sindicatos y asociaciones empresariales, siempre que la mayoría de su financiación provenga de fuentes públicas, como sujetos obligados, aunque con unas obligaciones menores que las AA.PP. Este es un paso adelante muy importante, marcado por Europa, pero que debemos aprovechar para mejorar la transparencia y las medidas anticorrupción vinculadas a la financiación de los partidos, como complemento a posibles reformas en este ámbito.

Entre el anteproyecto y el proyecto ha habido un cambio sustancial, como ha pasado en muchos otros apartados. Si en la directiva y el anteproyecto quedaba claro que se excluyen del ámbito de la norma los contratos relacionados con campañas políticas "en el contexto de una campaña electoral", el redactado del proyecto elimina este entrecomillado. Para cumplir la norma europea y no permitir que esta excepción se use de forma demasiado amplia, proponemos volver al redactado anterior.

(9)

## **ENMIENDA**

### **Al artículo 11**

De adición de un apartado 6 (nuevo) y ligera modificación de nomenclatura al artículo 11

Se propone la siguiente redacción de modificación de nomenclatura del artículo 11 y la incorporación de un nuevo apartado 6 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

#### ***“Nueva Nomenclatura del artículo 11: Otros negocios, sistemas de financiación y contratos excluidos”***

*(Nuevo) “6.- A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, no constituyen contratos y, por lo tanto, están excluidos de la misma los denominados regímenes de autorización o licencia en los que, independientemente de su denominación, concierto social u otra, no sea necesario acudir a ningún procedimiento de selección en concurrencia competitiva, en tanto que todos los operadores económicos que cumplan determinadas condiciones, previamente establecidas y publicadas debidamente por el ente, organismo o entidad del sector público, sean autorizados a prestar servicios, a cambio de una remuneración y bajo unas condiciones también establecidas y publicadas previamente”.*

## **MOTIVACIÓN:**

Como opción alternativa, y únicamente para el caso de que no prosperara la adición del apartado 5 al artículo 2 interesado, proponemos que la exclusión de los regímenes de licencia o autorización del ámbito de aplicación de la LCSP venga por vía del artículo 11

(15)

### **ENMIENDA NÚM.**

Al artículo 12

De modificación

Se propone la siguiente redacción del artículo 12:

*«Artículo 12. Calificación de los contratos.*

*1. Los contratos de obras, concesión de obras, **gestión de servicios públicos**, suministro, servicios y **concesión de servicios no públicos** que celebren las entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la presente sección.*

*2. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación»*

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 14.1

De adición, al primer párrafo del primer apartado

Se propone la siguiente redacción de adicción al final del primer párrafo del primer apartado del artículo 14 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*1. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos contruidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. **“Los contratos de concesión de obras deberán garantizar que el concesionario asume la mayoría de los riesgos de construcción y de explotación de las obras.”***

## **MOTIVACIÓN**

La concesión de obras públicas tiene, de acuerdo con la normativa europea y con la regulación del déficit público un elemento esencial en el traslado de la mayor parte de los riesgos de construcción y de explotación de la obra al concesionario. Es una necesidad que afecta a la gestión pública, en la medida en que con ella realmente el concesionario asume el riesgo y ventura de la concesión y permitirá clarificar los supuestos en los que nos encontramos ante concesiones o meros contratos de obras.

(33)



### **ENMIENDA**

Al artículo 14

De modificación

Se modifica el primer párrafo del apartado 4 del artículo 14, quedando como sigue:

“4. El derecho de explotación de las obras, a que se refiere el apartado primero de este artículo, deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de disponibilidad, o ambos.”

### **MOTIVACIÓN**

Mejora técnica

(24)

### **ENMIENDA**

Al artículo 15

De modificación

Se modifica el apartado 1 del artículo 15, quedando como sigue:

“1. El contrato de concesión de servicios es aquél en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, o la prestación y gestión de servicios para el poder adjudicador, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.”

### **MOTIVACIÓN**

Se amplía ligeramente la definición de concesión de servicios para dar cabida al supuesto, no previsto en ningún precepto del Proyecto, en que la prestación del servicio se realice para el poder adjudicador.

(24)

### **ENMIENDA NÚM.**

Al artículo 15

De modificación

Se propone la siguiente redacción

#### **«Artículo 15. Contrato de gestión de servicios públicos.**

- 1. El contrato de gestión de servicios públicos es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio público cuya prestación ha sido atribuida o asumida como propia de su competencia por los poderes encomendantes.**
- 2. La contratación de la gestión de los servicios públicos adoptará una de las siguientes modalidades:**

**a) Concesión de servicios públicos, por la que el contratista gestionará el servicio público y cuya contraprestación a su favor consiste o bien en el derecho a explotarlo o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio, lo que implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional en la explotación del servicio público, abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos.**

**Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación del servicio público que sea objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.**

**b) Cuando no se transfiera el riesgo operacional al contratista, la contratación de la gestión de servicios públicos habrá de adoptar una de las modalidades siguientes:**

**b.1) Gestión interesada, en cuya virtud el poder adjudicador y el gestor participarán en los resultados económicos de la prestación del servicio público en la proporción que se establezca en el contrato.**



***b.2) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate y mediante la utilización de sus servicios o instalaciones.***

***b.3) Arrendamiento de las instalaciones pertenecientes al poder adjudicador titular del servicio público al contratista para ser utilizadas por este en la prestación del servicio público.***

***b.4) Sociedad de economía mixta en la que el poder adjudicador participe en concurrencia con personas naturales o jurídicas»***

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Se incluye la mención a los poderes adjudicadores en concordancia con el art. 15.

(53)

## ENMIENDA

### Al Artículo 16

#### De modificación al apartado 3b)

Se propone la siguiente redacción que modifica el apartado 3b) del artículo 16 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

#### 3. (...)

*"b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos **en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición**, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios".*

## MOTIVACIÓN

El avance de los procesos tecnológicos permite en la actualidad el acceso a los programas de ordenador en las formas tradicionales, pero también, y cada vez de forma más habitual y extendida, el acceso a los programas de forma remota, en la nube (Cloud).

En la práctica, algunos órganos de contratación han mostrado sus dudas sobre si, conforme a la redacción actual del precepto, la calificación como contrato de suministro puede extenderse también a la cesión del derecho de uso de programas de ordenador cuyo acceso es remoto; esto es, cuando el programa está instalado y se ejecuta en la nube (Cloud).

La calificación como contrato de suministro o no de los contratos de cesión del derecho de uso de los programas de ordenador no viene determinada por la modalidad de acceso o puesta a disposición del producto que se contrata, sino que deriva conceptualmente de la "cesión del derecho de uso". En definitiva, la autorización a un tercero del titular de los derechos de propiedad intelectual para el uso de dichos productos.

Por ello, para evitar dudas e interpretaciones erróneas se sugiere incluir en el artículo 16.3.b) del Borrador de Anteproyecto un inciso que aclare que estaremos ante un contrato de suministro con independencia de la modalidad de puesta a disposición que se utilice.

(19)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 16.3

De adición, incorporar un apartado d) (nuevo)

Se propone la inclusión de un apartado d) (nuevo) en el artículo 16.3 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes:

(...)

*"d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada."*

## **MOTIVACIÓN**

Si bien es algo asumido y recogido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en informes y recomendaciones (p.e. Recomendación 43/2009); consideramos conveniente precisar que también es Contrato de Suministro la comercialización de energía primaria (gas, petróleo, biomasa...) o transformada (calor y/o frío), cada vez más habitual en los contratos de alumbrado público municipal o de gestión energética de edificios.

(5)

## **ENMIENDA**

Al artículo 17

De adición de un nuevo apartado 2

Se propone la siguiente redacción del artículo 17 incorporando un nuevo apartado 2 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*Nuevo 2. “Los contratos de servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el apartado tercero del artículo 1 y el anexo IV constituyen una modalidad particular de los contratos de servicios, para la cual **únicamente será necesario seguir la observancia de los principios fundamentales de transparencia e igualdad de trato con el fin de perseguir los objetivos de simplificación y reducción de la carga administrativa de poderes adjudicadores y operadores económicos.***

*Los poderes públicos establecerán procedimientos adecuados para la adjudicación de dichos contratos, a fin de garantizar el pleno cumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato de los operadores económicos y permitir a los poderes adjudicadores tener en cuenta las especificidades de los servicios en cuestión, (en lo referido a los apartados 5 y 6 (nuevas enmiendas GPS) del artículo 2).*

*En todo caso, los poderes adjudicadores podrán utilizar un sistema diferenciado para la adjudicación de contratos de servicios sociales y otros servicios específicos del Anexo IV, debiendo publicar un anuncio de licitación o un anuncio de información previa conforme a lo previsto en esta Ley, y darán a conocer los resultados del procedimiento de contratación por medio de un anuncio de adjudicación de contrato que incluya lo especificado en la Sección 7ª del Anexo III de esta Ley.*

*A través de dichos sistemas, los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el Anexo IV, **podrán ser objeto de adjudicación exclusivamente a operadores sin ánimo de lucro, a través de contratos reservados, o de procedimientos restringidos, o de procedimientos negociados,** siempre que dichos sistemas garanticen una publicidad suficiente y se ajusten a los principios de transparencia y no discriminación.*

*Además, los poderes públicos podrán organizar estos servicios enumerados en el Anexo IV, siempre que el valor estimado sea inferior a 750.000 euros, de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios, mediante la concertación específica con operadores sin ánimo de lucro previamente acreditados, mediante convenios, o mediante la concesión de licencias o autorizaciones a los operadores económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador.*

## **MOTIVACIÓN**

La Directiva 2014/24/UE regula en su artículo 4.d) que los contratos de servicios sociales y otros específicos señalados en el Anexo XIV (que se corresponde con el Anexo IV del Proyecto de Ley de Contratos), cuyo valor estimado sea inferior a 750.000 euros, se encuentran por debajo del umbral de regulación armonizada. Y esto significa -siempre en términos de la propia Directiva- que los poderes públicos gozan de libertad para determinar su sistema de adjudicación, incluida la concertación, la prestación por medios propios, la reserva, e inclusive la propia exclusión de la normativa de contratos públicos.

Por lo tanto, dichos contratos de servicios sociales y otros específicos quedan expresamente fuera de los umbrales armonizados de aplicación de las Directivas Comunitarias, y cabe aplicarles el denominado "régimen simplificado". Las propias Directivas explican que se trata de servicios con carácter e interés transfronterizo limitado.

En consecuencia, nos encontramos con un doble régimen de regulación de los servicios sociales que es preciso respetar: los de importe inferior a 750.000 euros pueden incluso quedar excluidos de la normativa de contratos públicos, mientras que los de importe superior no cabe excluirllos, pero sí que pueden gozar de un régimen diferenciado que tenga en cuenta las especificidades de dichos sectores de actividad.

Debemos destacar también, como argumentación y fundamentación de la regulación específica de los servicios sociales que existen unos precedentes muy claros en España, ya que numerosas leyes autonómicas de servicios sociales, ya establecen sistemas de concertación específicos y exclusivos para entidades sin ánimo de lucro.

Todas ellas han considerado -y amparado- que los operadores no lucrativos gocen de preferencia en la contratación, sin menoscabo de los principios de libre concurrencia y no discriminación.

(16 y 63)



## **ENMIENDA**

Al artículo 17

De modificación

**Se propone la siguiente redacción**

**«Artículo 17. Contratos de servicios y de concesión de servicios no públicos.**

**1. Son contratos de servicios aquellos en los que el contratista no asume la transferencia del riesgo operacional del contrato y cuyo objeto viene constituido por prestaciones de hacer consistentes en:**

- a) el desarrollo de una actividad para las entidades del sector público;**
- b) la realización de una actividad cuyos destinatarios sean los ciudadanos y su objeto no tenga la consideración de servicio público;**
- c) la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.**

**2. El contrato de concesión de servicios no públicos es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio de su titularidad que no tenga la consideración de servicio público y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio, lo que implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional en la explotación del servicio, abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos.**

**Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación del servicio no público que sea objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.**

**3. No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos»**

**MOTIVACIÓN:**

Adecuación a la propuesta que contemple el contrato de servicios y la concesión de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Artículo 17 (bis) nuevo**

#### **De adición**

Se propone la adición de un nuevo artículo 17 bis al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

#### *“Artículo 17 bis. Contrato de partenariado.*

1. Son contratos de partenariado aquellos en que una Administración Pública o una Entidad pública empresarial u organismo similar de las Comunidades Autónomas encarga a una entidad o a un grupo de entidades de derecho privado, por un período determinado en función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general, comprenda alguna de las siguientes prestaciones:

- a) La construcción, instalación, transformación, desmantelamiento o destrucción de obras, equipos, sistemas, y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión.
- b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas.
- c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado.
- d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del servicio público o actuación de interés general que le haya sido encomendado.

2. Sólo podrán celebrarse contratos de partenariado entre el sector público y el sector privado cuando previamente se haya puesto de manifiesto y así se explice en la decisión adoptada de acuerdo con el artículo 116 bis de esta ley que la evaluación previa de otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas.

La normativa de desarrollo de esta ley deberá establecer los umbrales mínimos para poder recurrir a esta tipología de contratos contrato, así como las capacidades técnicas y financieras del poder adjudicador y la intensidad del riesgo que se podrá asumir.

Se podrán celebrar contratos de partenariado para diversos poderes adjudicadores, previo convenio entre ellos y delimitando quien asume el procedimiento, la adjudicación y la ejecución del contrato.

*3. El contratista puede asumir, en los términos previstos en el contrato, la dirección de las obras que sean necesarias, así como realizar, total o parcialmente, los proyectos para su ejecución y contratar los servicios precisos.*

*4. La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá en un precio que se satisfará durante toda la duración del contrato, y que podrá estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento.*

*También se podrá encomendar al contratista el cobro, en nombre y por cuenta de la Administración o entidad pública, de los pagos por el usuario de prestaciones ejecutadas en virtud del contrato."*

### **MOTIVACIÓN:**

Revitalizar el contrato de colaboración con un nuevo enfoque que permite mejorar las debilidades del planteamiento del Proyecto de Ley: el diseño de un marco adecuado para las relaciones contractuales entre el sector público y el privado, el contrato de partenariado.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Al artículo 18**

#### **De modificación**

Se propone la siguiente redacción:

*«Artículo 18. Contratos mixtos.*

*1. Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase.*

*Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 34.2 de la presente Ley.*

*El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2.*

*Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos cuyo objeto contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se estará a las siguientes reglas:*

*a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal.*

*En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte servicios especiales del Anexo IV, y en parte otros servicios, o en el caso de los contratos mixtos compuestos en parte por servicios y en parte por suministros, el objeto principal se determinará en función de cuál sea el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o suministros.*

*b) Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los contratos de obras, suministros o servicios, por una parte, y contratos de concesiones de obra, concesiones **de servicios públicos o concesiones de servicios no públicos**, de otra, se actuará del siguiente modo:*

*1.º Si las distintas prestaciones no son separables se atenderá al carácter de la prestación principal.*

*2.º Si las distintas prestaciones son separables y se decide adjudicar un contrato único, se aplicarán las normas relativas a los contratos de obras, suministros o*

*servicios cuando el valor estimado de las prestaciones correspondientes a estos contratos supere las cuantías establecidas en los artículos 20, 21 y 22 de la presente Ley, respectivamente. En otro caso, se aplicarán las normas relativas a los contratos de concesión de obras, **concesión de servicios públicos o concesión de servicios no públicos, según corresponda.***

*2. Cuando el contrato mixto contemple prestaciones de contratos regulados en esta Ley con prestaciones de otros contratos distintos de los regulados en la misma, para determinar las normas aplicables a su adjudicación se atenderá a las siguientes reglas:*

*a) Si las distintas prestaciones no son separables se atenderá al carácter de la prestación principal.*

*b) Si las prestaciones son separables y se decide celebrar un único contrato, se aplicará lo dispuesto en esta Ley.*

*3. No obstante lo establecido en el apartado 1, en los casos en que un elemento del contrato mixto sea una obra y esta supere los 50.000 euros, deberá elaborarse un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 229 y siguientes de la presente Ley.*

*En el supuesto de que el contrato mixto contenga elementos de una concesión de obras, de una **concesión de servicios públicos o de una concesión de servicios no públicos**, deberá acompañarse del correspondiente estudio de viabilidad y, en su caso, del anteproyecto de construcción y explotación de las obras previstos en los artículos 245, 246 y 283 de la presente Ley.»*

#### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al artículo 19.1

De modificación

Se propone la siguiente redacción del apartado 1 del artículo 19:

*«Artículo 19. Delimitación general.*

*1. Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras, los de concesión de obras, los de gestión de servicios públicos, los de suministro, los de servicios y los de concesión de servicios no públicos, cuyo valor estimado, calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 101, sea igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos siguientes, siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador. Tendrán también la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada los contratos subvencionados por estas entidades a los que se refiere el artículo 23.»*

Resto de apartados del artículo sin variación.

## **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

### **ENMIENDA**

Al artículo 20

De supresión

Se suprime el artículo 20

### **MOTIVACIÓN**

No existe motivo para que haya contratos no sujetos a regulación armonizada y con diferentes límites cuantitativos. Se debería tener un mismo límite o, dejar de diferenciar entre contratos sujetos o no a regulación armonizada.

(35)



## **ENMIENDA**

Al artículo 20

De modificación

Se propone la modificación del artículo 20 que quedará redactado de la forma que siguiente:

«Artículo 20. Contratos de obras, de concesión de obras, de **concesión de servicios públicos y de concesión de servicios no públicos** sujetos a una regulación armonizada: umbral.

1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras, **de concesión de servicios públicos y de concesión de servicios no públicos** cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.225.000 euros.

2. En el supuesto previsto en el artículo 101.12 relativo al cálculo del valor estimado en los contratos de obras que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la obra iguale o supere la cantidad indicada en el apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a un millón de euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del valor acumulado de la totalidad de los mismos.»

## **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 22.1

De modificación, apartado 1 c)

Se propone la siguiente redacción de la letra c) del apartado 1 del artículo 2 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"c) 750.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el Anexo IV."*

## **MOTIVACIÓN**

El redactado que se propone reproduce literalmente el artículo 4 d) de la DCP, lo que el texto del Proyecto de Ley no hace. La directiva utiliza la referida conjunción copulativa de modo que a todos los contratos que tengan como objeto servicios sociales les sería de aplicación dicho umbral al efecto de determinar los contratos sujetos a regulación armonizada, lo cual no es un tema menor toda vez que, al ser el umbral en este caso muy superior al del resto de contratos de servicios, la libertad de las legislaciones estatales para regular la adjudicación de dichos contratos es mucho mayor, sin perjuicio que, incluso en el caso de los contratos por encima de ese umbral, cuando se refieran a servicios sociales, existe una regulación especial en la directiva que da también mayor libertad a los estados en la regulación de la adjudicación de dichos contratos.

(32)

## **ENMIENDA**

Al artículo 22

De modificación

Se propone la modificación del artículo 22, que quedara redactado de la forma siguiente:

*«Artículo 22. Contratos de servicios **y de gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista** sujetos a una regulación armonizada: umbral.*

*1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios **y los de gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista** cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades:*

*a) 135.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.*

*b) 209.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.*

*c) 750.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios enumerados en el Anexo IV.*

*2. En el supuesto previsto en el artículo 101.12 relativo al cálculo del valor estimado en los contratos que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la contratación de servicios iguale o supere los importes indicados en el apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote. No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del valor acumulado de la totalidad de los mismos.»*

## **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al artículo 22

De adición de un nuevo apartado 3

Se propone la siguiente redacción del artículo 22 incorporando un nuevo apartado 3 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*Nuevo 3. "En relación a los contratos que tengan por objeto los servicios enumerados en (el apartado tercero del artículo 1 y) el anexo IV, únicamente será necesario seguir la observancia de los principios fundamentales de transparencia e igualdad de trato con el fin de perseguir los objetivos de simplificación y reducción de la carga administrativa de poderes adjudicadores y operadores económicos."*

## **MOTIVACIÓN**

La Directiva 2014/24/UE: Título III, capítulo I, artículos 74 al 77 establece un régimen simplificado para la contratación de servicios sociales y otros servicios específicos no recogido en el proyecto de Ley que nos ocupa.

Si bien podría reproducirse dicho régimen íntegramente, considerando el modo en que estas previsiones se han integrado en el proyecto de Ley parece más razonable incluirlo de una manera más sencilla, añadiendo un nuevo apartado 3 en el artículo 22 del proyecto de ley.

(16)

### **ENMIENDA NÚM.**

Al artículo 25.1

De modificación

Se propone la modificación del artículo 25.1, que quedara con la siguiente redacción:

«Artículo 25. Contratos administrativos.

1. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración Pública:

a) Los contratos de obra, concesión de obra, **de gestión de servicios públicos, suministro, servicios y concesión de servicios no públicos**. No obstante, tendrán carácter privado los siguientes contratos:

1.º Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros con número de referencia CPV de 66100000-1 a 66720000-3 y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos con número de referencia CPV de 79995000-5 a 79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8, excepto 92230000-2, 92231000-9 y 92232000-6.

2.º Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.»

Resto de apartados del artículo sin variación.

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 26**

#### **De modificación, apartado 2**

Se propone la siguiente redacción de modificación de texto al apartado 2 del artículo 26 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“2. Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley con carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a su efecto y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado. **El régimen de modificación de los contratos administrativos se aplicará a la modificación de los contratos privados**”.*

## **MOTIVACIÓN**

Buena parte de los poderes adjudicadores no son Administraciones públicas. Dejar al derecho privado la modificación de los contratos que suscriban supone dejar sin límites los cambios en buena parte de ellos y provoca un cambio muy importante en el control de la contratación del sector público, uno de cuyos agujeros se encuentra precisamente en el régimen de la modificación de los contratos públicos. Por una parte supone un riesgo para los competidores que puedan ver alteradas las condiciones de la licitación. Y, al mismo tiempo, supone un riesgo de que se puedan producir conductas contrarias al interés general tanto por la vía de un incremento de costes como del abuso en la utilización de entidades instrumentales para eludir la aplicación del régimen más estricto de los contratos administrativos.

(33)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 26

De modificación del apartado 4

Se propone la siguiente redacción:

*"4. Los contratos que celebren las Entidades del Sector Público que no posean la condición de poder adjudicador, se registrarán por esta Ley."*

## **MOTIVACIÓN**

Mejora Técnica del artículo.

(35)

## **ENMIENDA**

Al artículo 26

De modificación

Se modifica el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 26, quedando como sigue:

“3. Los contratos privados que celebren los poderes adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de Administraciones Públicas mencionados en la letra b) del apartado primero del presente artículo, cuyo objeto esté comprendido en el ámbito de la presente Ley, se regirán por lo dispuesto en el Título I del Libro Tercero de la misma, en cuanto a su preparación y adjudicación.

En cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado y aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 316 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización técnica de la contratación, y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 202 y 203.”

## **MOTIVACIÓN**

Mejora técnica

(24)



### **ENMIENDA NÚM.**

Al artículo 27

De modificación

Se propone la modificación del artículo 27, que quedará con la siguiente redacción

«Artículo 27. Jurisdicción competente.

1. Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las siguientes cuestiones:

a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos.

b) Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas.

Adicionalmente, respecto de los contratos referidos en los números 1.º y 2.º de la letra a) del apartado primero del artículo 25 de la presente Ley que estén sujetos a regulación armonizada, las impugnaciones de las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 202 y 203 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

c) Las referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 202 y 203 de la presente Ley, cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública.

d) Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.

e) Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de resolución de los recursos previstos en el artículo 44 de esta Ley, así como en el artículo 319.5.

f) Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y modificación de los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la presente Ley.

2. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver:

a) Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las modificaciones contractuales citadas en las letras b) y c) del apartado anterior.

b) De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.

c) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de concesión de obra pública, de concesión de servicios **públicos o de concesión de servicios no públicos**, salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la Administración concedente, y en las que será competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.»

#### **MOTIVACIÓN:**

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

### ENMIENDA NÚM.

Al artículo 29

De modificación

Se propone la modificación del artículo 29, que quedará con la siguiente redacción

«(...)

4. Los contratos de **gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prorrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.

Excepcionalmente, en los contratos de **gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista** y de servicios se podrá establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija la amortización de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que dicha amortización sea un coste relevante en la prestación del servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su plazo de amortización. El concepto de coste relevante en la prestación del servicio será objeto de desarrollo reglamentario.

No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

(...)

6. Los contratos de concesión de obras, de concesión de servicios **públicos y de concesión de servicios no públicos** tendrán un plazo de duración limitado, el cual se

calculará en función de las obras y de los servicios que constituyan su objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Si la concesión de obras, de servicios **públicos o de servicios no públicos** sobrepasara el plazo de cinco años, la duración máxima de la misma no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos.

Las inversiones que se tengan en cuenta a efectos del cálculo incluirán tanto las inversiones iniciales como las realizadas durante la vida de la concesión.

En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras, de concesión de **servicios públicos o de concesión de servicios no públicos** a la que se refiere el segundo párrafo del presente apartado, no podrá exceder, incluyendo las posibles prorrogas, de:

- a) Cuarenta años para los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, **tengan la consideración de públicos o no**, que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicios.
- b) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios, **tengan la consideración de públicos o no**, que comprendan la explotación de un servicio **cuyo objeto no consista en la prestación de servicios públicos sanitarios, sin incluir la ejecución de obras.**
- c) Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio **público** cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios, **sin incluir la ejecución de obras.**

Los plazos fijados en los pliegos de condiciones solo podrán ser ampliados en un 15 por ciento de su duración inicial para restablecer el equilibrio económico del contrato en las circunstancias previstas en los artículos 268 y 288.

No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la concesión y del establecido para la ejecución de las obras aquellos períodos en los que estas deban suspenderse por una causa imputable a la Administración concedente o debida a fuerza mayor. Si el concesionario fuera responsable del retraso en la ejecución de las obras se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en esta Ley, sin que haya lugar a la ampliación del plazo de la concesión.

**Las previsiones sobre la prórroga del contrato originario contenidas en el último párrafo del apartado 4 de este artículo serán igualmente de aplicación a contratos de concesión de obras, de concesión de servicios públicos y de concesión de servicios no públicos.**

(...)»

Resto del artículo sin modificación.

**MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 29**

De adición, nuevo párrafo al final del apartado 4

Se propone la adición de un nuevo párrafo al final del apartado 4 del artículo 29 al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

#### **4. (.....)**

*"Asimismo podrá establecerse en los contratos de servicios relativos a los servicios a las personas un plazo de duración mayor cuando ello fuera necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en los que el cambio del prestador pudiera repercutir negativamente."*

## **MOTIVACIÓN**

En determinados servicios como los relativos a las personas con discapacidad el mantenimiento de los tratamientos en el mismo centro puede ser importante de modo que se trataría de acomodar la duración de los contratos a esta realidad.

**(32)**

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 29**

#### **De modificación apartado 4**

Se propone la siguiente redacción al apartado 4 del artículo 29 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*4. "Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica o profesional o, en los casos que así lo exija esta Ley se encuentren debidamente clasificadas. Cuando por la naturaleza del contrato o por así determinarlo la normativa aplicable se requiera al contratista determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, éstos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo."*

## **MOTIVACIÓN**

Cabe que, por aplicación de la propia normativa sobre contratación pública o por la naturaleza del contrato, se requiera al contratista determinados requisitos en cuanto a su organización, estructura, financiación, destino de los beneficios u otros en cuyo caso dicha posibilidad debe estar contemplada en la LCSP al objeto de la admisión de la correspondiente oferta en la licitación.

(32)

### **ENMIENDA**

#### **Al Artículo 29**

**De adición, nuevo párrafo al final del apartado 4**

Se propone la adición de un nuevo párrafo al final del apartado 4 del artículo 29 al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

#### **4. (.....)**

*“Asimismo podrá establecerse en los contratos de servicios relativos a los servicios a las personas un plazo de duración mayor cuando ello fuera necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en los que el cambio del prestador pudiera repercutir negativamente.”*

### **MOTIVACIÓN**

En determinados servicios como los relativos a las personas con discapacidad el mantenimiento de los tratamientos en el mismo centro puede ser importante de modo que se trataría de acomodar la duración de los contratos a esta realidad.

**(32)**



## **ENMIENDA**

Al Artículo 29, Apartado 6

De adición

Se propone la adición, entre el párrafo segundo y el tercero del apartado 6 del artículo 29, de un nuevo párrafo, del apartado 2 del artículo 87, que tendrá la siguiente redacción:

“/.../

Las garantías definitivas exigibles por los contratos que excedan de cinco años de duración, podrán ser renovables con un preaviso de dos meses al vencimiento, con el objeto de poder presentar una nueva garantía por el tiempo que exceda de dicho plazo.

/.../”

## **MOTIVACIÓN:**

Se propone introducir una matización en el caso de los contratos cuya duración exceda de cinco años, de tal forma, que las garantías definitivas puedan ser renovadas cuando concluya dicho plazo, con un preaviso de dos meses del vencimiento, para poder constituir una nueva garantía que cubra el plazo que exceda de esos cinco años.

A este respecto hay que tener en cuenta, las prácticas de mercado en materia de seguro y reaseguro, y muy especialmente, por lo que se refiere al plazo de cobertura, ya que las entidades de reaseguro no cubren riesgos por un plazo superior a cinco años y ello condiciona la duración de los contratos de seguro directo y por ende, de las garantías definitivas en forma de seguro de caución.

Además, también habría que tener bien presente que la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro en su art. 22 establece un plazo máximo de duración del contrato de seguro de diez años, previendo que en el caso de que se pretendiera otorgar una cobertura por un plazo superior, que se pudiera prorrogar la póliza de seguro con carácter anual.

De no tener prevista esta peculiaridad del seguro, se estaría colocando en una situación de desventaja competitiva al seguro de caución frente a otras garantías financieras, como son los avales ya que en este último caso, al no existir límites temporales de cobertura, serían más atractivos como medio de formalizar una garantía definitiva que los contratos de seguro, lo cual tendría sus efectos negativos en el mercado de los seguros de caución.

Por todo ello, si se quiere tener una adecuada respuesta del mercado asegurador para ofrecer este tipo de productos, sería necesario prever que en los supuestos de contratos de duración superior a cinco años, se puedan constituir garantías renovables para poder cubrir lo que exceda de ese plazo ya que de otra forma se estaría perjudicando al seguro de caución frente a otras garantías financieras.

(50)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 29.6

De adición, nuevo párrafo apartado 6

Se propone la adición de un nuevo párrafo al apartado 6 del artículo 29 (entre los actuales párrafos tercero y cuarto, por consiguiente será el nuevo párrafo cuarto) al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“Las concesiones de servicios a las personas acomodaran su duración a la naturaleza y características de las prestaciones o tratamientos a los usuarios que incluyan.”*

### **MOTIVACIÓN**

En determinados servicios como los relativos a las personas con discapacidad el mantenimiento de los tratamientos en el mismo centro puede ser importante de modo que se trataría de acomodar la duración de los contratos a esta realidad.

(32)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 29**

De adición se propone añadir un nuevo apartado (el 7, pasando el 7 actual a ser el 8)

Se propone la siguiente redacción de un nuevo apartado 7 de adición del artículo 29, pasando el apartado 7 actual a ser el apartado 8 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“7. La duración de los contratos mixtos vendrá determinada por la naturaleza de la prestación principal salvo que fuese necesario un plazo mayor por razones excepcionales como son, la adecuada amortización de inversiones, para que el adjudicatario recupere las inversiones realizadas para la exportación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos, entre otras. La ampliación del plazo deberá estar convenientemente justificada en el expediente.”*

## **MOTIVACIÓN**

En ocasiones, determinadas necesidades propias de los proyectos Smart City pueden requerir, esencialmente, por razones de financiación y amortización de la inversión, periodos de duración superiores a los contemplados por los contratos tipos en el actual redactado del proyecto.

(8)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 29**

De modificación del articulado denominando el apartado 8 actual como el apartado 9 (nuevo).

Se propone la siguiente redacción para denominar al apartado 8 actual del artículo 29, como apartado 9, nuevo en el articulado, del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“9. Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”.*

## **MOTIVACIÓN**

El propósito de la enmienda consiste en ajustar la estructura definitiva de los apartados del artículo 29 en función de la aprobación de la enmienda anterior que plantea un apartado 7 de adicción, pasando el 7 a ser el apartado 8 y el apartado 8 anterior pasa a ser el 9 (nuevo).

(8)

## **ENMIENDA**

### **Artículo 30**

De modificación, 3

Se propone modificar el apartado 3 del artículo 30 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

“3. La prestación de servicios públicos se realizará normalmente por la propia Administración por sus propios medios. No obstante, cuando carezca de medios suficientes, previa la debida justificación en el expediente, se podrá contratar de conformidad con lo establecido en el Capítulo V del Título II del Libro II de la presente Ley.”

## **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica.

(53)

## **ENMIENDA**

Al artículo 32

De modificación

Se propone la modificación del artículo 32, que quedará con la siguiente redacción

«Artículo 32. Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados.

1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, **gestión de servicios públicos**, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios **no públicos**, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a ésta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.»

Resto de apartados del artículo sin variación.

## **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 32, Apartado 2

De modificación, apartado 2 punto a)

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 32, que tendrá la siguiente redacción:

“2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una única entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuación:

- a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.

En todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede conferirle encargos ostenta sobre el ente destinatario del mismo un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios o unidades cuando él mismo o bien otro u otros poderes adjudicadores o personas jurídicas controlados del mismo modo por el primero puedan conferirle encargos que sean de ejecución obligatoria para el ente destinatario del encargo por así establecerlo los estatutos o el acto de creación, de manera que exista una unidad de decisión entre ellos, de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el ente que puede realizar el encargo.

La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado, aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes. Las tarifas serán publicadas anualmente para todos los medios propios.

## **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica de la enmienda.

(44)



## **ENMIENDA**

Al Artículo 32, Apartado 2, letra b)

De modificación

Se propone la modificación de la letra b) apartado 2 del artículo 32, que tendrá la siguiente redacción:

“b) Que más del 80% de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudicatarios que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo.

A estos efectos, para calcular el 80% de las actividades del ente destinatario del encargo se tomarán en consideración el promedio del volumen global de negocios del ente destinatario en relación a todos los adjudicatarios, los gastos soportados por los servicios prestados a los poderes adjudicatarios en relación con la totalidad de los gastos en que haya incurrido el medio propio por razón de las prestaciones que haya realizado a cualquier entidad, u otro indicador alternativo de actividad que sea fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo.

Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad del poder adjudicador que hace el encargo, o debido a la reorganización de las actividades de éste, el volumen global de negocios, u otro indicador alternativo de actividad, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, no estuvieran disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores a la formalización del encargo o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con justificar que el cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial mediante proyecciones de negocio.

El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá quedar reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo y, en consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.”

**MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica para mejorar el régimen jurídico de TRAGSA Y TRAGSATEC, que pueda permitir el periodo de la actividad de ambas empresas.

(58)

## **ENMIENDA**

### **Artículo 32**

De adición, apartado 4 (bis)

Se propone incluir un apartado 4 (bis) en el artículo 32 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

“4 (Bis). El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en el apartado anterior comportará la pérdida de la condición de medio propio personificado y, en consecuencia, la imposibilidad de seguir efectuando encargos a la persona jurídica afectada.”

## **MOTIVACIÓN:**

Se trata de precisiones orientadas a reforzar los principios de publicidad, concurrencia e integridad, la no discriminación en el acceso a las licitaciones, la eficiente asignación de los fondos públicos y la eficaz satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Artículo 32**

De modificación, apartado 6 b)

Se propone modificar el apartado 6 b) del artículo 32 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

“b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no excederá del 50% de la cuantía del encargo.”

## **MOTIVACIÓN:**

Se trata de precisiones orientadas a reforzar los principios de publicidad, concurrencia e integridad, la no discriminación en el acceso a las licitaciones, la eficiente asignación de los fondos públicos y la eficaz satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 32**

De adición, párrafo de adición al final del apartado 6b)

Se propone la siguiente redacción añadiendo un párrafo nuevo al finalizar el apartado 6f) del artículo 32 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"b). No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que celebren los medios propios a los que se les haya encargado una concesión, ya sea de obras o de servicios. **"Igualmente no será de aplicación en los supuestos en los que la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública"**.*

## **MOTIVACIÓN**

La redacción actual del artículo 32.6 del Proyecto de Ley plantea un grave problema a los entes instrumentales al aplicar un criterio restrictivo del requisito de idoneidad del medio propio, no exigido por la legislación europea, al obligar que éste realice materialmente por sí misma el 60% de la cuantía del encargo, salvo casos justificados.

Se confunde el encargo de una obra o servicio concreto con el encargo de "gestionar un servicio" que es lo que hacen habitualmente los entes instrumentales, ya que son una forma de gestión directa de los servicios públicos, especialmente los locales (artículo 85 de la Ley 7/1985, LBRL). De acuerdo con el Proyecto si se pretende encargar una promoción urbanística concreta o de un grupo de viviendas, por mucho que sea en valor del conjunto de las actuaciones de gestión que hay que realizar (elaboración de proyectos, licencias, dirección de obras, acogimiento a la protección oficial, solicitud de ayudas y créditos de los planes de vivienda, selección de adjudicatarios, planes de seguridad y salud, contratación de obras de urbanización y/o edificación, etc.), nunca puede ser comparado económicamente con el valor de la obra a ejecutar (el valor de la obra edificada o urbanizada) que paradójicamente es lo más simple de realizar. Además va en contra de la normativa específica de las Sociedades Urbanísticas, competencia de las CC.AA., que le imponen la obligación de ser solo promotoras y no constructoras, al prohibirle la ejecución material de las obras y obligarlas a ofertarlas públicamente.

(34)

## **ENMIENDA**

### **Al artículo 33**

#### **De modificación**

Se propone la modificación del artículo 33, que quedará con la siguiente redacción

«Artículo 33. Encargos de entidades pertenecientes al sector público que no tengan la consideración de poder adjudicador a medios propios personificados.

1. Las entidades del sector público que no tengan la consideración de poder adjudicador podrán ejecutar de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, **gestión de servicios públicos**, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios **no públicos** a cambio de una compensación valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, previo encargo a ésta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos, de conformidad con lo dispuesto en el apartado siguiente. El encargo que cumpla estos requisitos no tendrá la consideración de contrato.»

Resto de apartados del artículo sin modificación.

## **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

### Artículo 33

De adición, apartado 2 (bis) nuevo

Se propone modificar el apartado 6 b) del artículo 32 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

"2 (bis). El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en el apartado anterior comportará la pérdida de la condición de medio propio personificado y, en consecuencia, la imposibilidad de seguir efectuando encargos a la persona jurídica afectada".

## **MOTIVACIÓN:**

Se trata de precisiones orientadas a reforzar los principios de publicidad, concurrencia e integridad, la no discriminación en el acceso a las licitaciones, la eficiente asignación de los fondos públicos y la eficaz satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 34

De modificación al apartado 2 y de adición al crear un nuevo apartado 3

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 2 y de adición por crear un nuevo apartado 3 dentro del artículo 34 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

2. *“En los contratos mixtos el órgano de contratación justificará, al inicio del expediente, la necesidad de adjudicar un único contrato para prestaciones correspondientes a distintos tipos de contratos, atendiendo a consideraciones objetivas de interés público tales como el carácter complementario de las prestaciones, la vinculación entre ellas o la consecución de un fin institucional propio de la entidad contratante.*

3. *El régimen jurídico de los contratos mixtos se determinará en las condiciones reguladoras del contrato, aplicando el régimen jurídico de cada prestación en la medida en la que sea compatible con el carácter mixto del contrato y con el régimen jurídico de la prestación principal. Se considerará prestación principal a los efectos de la aplicación de las normas de publicidad y adjudicación, la prestación más relevante de acuerdo con la finalidad del contrato.”*

## **MOTIVACIÓN**

Definir el contrato mixto como aquel contrato que necesaria y objetivamente aúna diferentes prestaciones (a las que corresponderían diferentes tipos de contratos de los previstos en el Proyecto) por razones de interés público sin necesidad de condicionar la definición del contrato mixto con otras connotaciones o exigencias adicionales y que la Directiva no exige.

(8)



## **ENMIENDA**

Al Artículo 34

De adición

Se propone la adición de un nuevo apartado 4 (nuevo) al artículo 34, que tendrá la siguiente redacción:

“4. En el caso de la contratación de servicios se entenderá que las prestaciones cumplen el requisito de hallarse directamente vinculadas entre sí, a los efectos de poder fusionarse en un mismo lote, o en un mismo contrato si éste no estuviera dividido en lotes, solo cuando las mismas sean de igual o similar naturaleza, atendiendo para ello a los cuatro primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.”

## **MOTIVACIÓN:**

Por criterios de transparencia, buen gobierno y eficiencia de las empresas públicas, se considera que todas ellas deben prestar sus servicios en base a unas tarifas públicas.

(45)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 35, Apartado 1

De adición

Se propone la adición de una nueva letra n) en el apartado 1 del artículo 35, que tendrá la siguiente redacción:

“n) La obligación de las partes de cumplir el contrato respetando las normas y condiciones laborales, incluidas las salariales, contenidas en el convenio colectivo de aplicación, considerándose su incumplimiento como causa de resolución del contrato.”

## **MOTIVACIÓN:**

Resulta relevante incluir esta enmienda para prevenir eventuales operaciones por parte de empresas concurrentes orientadas a reducir de forma anormal o desproporcionada los precios de mercado y los costes vinculados al contrato en perjuicio de los derechos de los trabajadores y de la competencia.

(50 y 45)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 35, Apartado 1

De adición

Se propone la adición de una nueva letra n) al apartado 1 del artículo 35, que tendrá la siguiente redacción:

*"n) La obligación de los licitadores de cumplir con las normas y condiciones laborales contenidas en el convenio colectivo sectorial nacional, autonómico o provincial de aplicación."*

## **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica. En coherencia con lo establecido en el resto del articulado, en orden al cumplimiento de las normas y estándares laborales. El texto de esta enmienda es alternativo y complementario a la anterior. Hace hincapié en la necesaria "aplicación del convenio colectivo sectorial nacional, autonómico o provincial".

(10 y 72)

### **ENMIENDA**

#### Artículo 36

##### De modificación apartado 1

Se propone modificar el apartado 1 del artículo 36 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

“1. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, se perfeccionan con su formalización.

### **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica, en defensa de la transparencia.

(53)

## **ENMIENDA**

### Artículo 36

#### De supresión del apartado 3

Se propone suprimir el apartado 3 del artículo 36 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

## **MOTIVACIÓN:**

Se elimina este apartado en coherencia con lo propuesto en el apartado 1.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Artículo 37**

De adición, al final del párrafo del apartado 1

Se propone incluir un texto de adición al final de párrafo del apartado 1 del artículo 37 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

"Añadir al final del párrafo "1. (...) La contratación verbal provocará, en su caso, la nulidad absoluta o la anulabilidad si los vicios del procedimiento, por afectar a contratos menores, fuesen subsanables. En todo caso, el reconocimiento extrajudicial de créditos derivados de una contratación irregular exige la tramitación del procedimiento de revisión en vía administrativa."

## **MOTIVACIÓN:**

Se trata de precisiones orientadas a reforzar los principios de publicidad, concurrencia e integridad, la no discriminación en el acceso a las licitaciones, la eficiente asignación de los fondos públicos y la eficaz satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al artículo 41

De adición, apartado 6 (nuevo)

Se propone la incorporación de un nuevo apartado 41.6 (nuevo) en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 con la siguiente redacción:

*(nuevo) “6. En los casos de contratos adjudicados por entidades del sector público que no tengan la condición de Administraciones públicas, éstas serán las competentes para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio de los contratos, en las mismas condiciones que los adjudicados por ellas”.*

## **MOTIVACIÓN**

Hace falta establecer una concreción sobre quién es el competente y en qué condiciones se ha de proceder a la revisión de oficio de los contratos adjudicados por poderes adjudicadores que no son administraciones públicas. De no ser así, el marco de la Ley 39/2015 podría considerarse excluyente del ejercicio de dicha potestad.

(33)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 44.1.

De modificación del párrafo primero del apartado 1 del artículo 44

Se propone la siguiente redacción de modificación del párrafo primero del apartado 1 del artículo 44 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a alguno de los siguientes tipos de contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores.”*

## **MOTIVACIÓN**

Las Directivas del Consejo 89/665/CEE, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, y 92/13/CEE, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, establecen un *sistema de recursos caracterizado por su rapidez y eficacia y es el que, en esencia, prevén los artículos 44 y siguientes. Las propias Directivas disponen que los Estados miembros habrán de establecer un sistema equivalente para los recursos de los contratos no sujetos a regulación armonizada*, y sobre esa base, Comunidades Autónomas como Aragón, Navarra o Islas Baleares han extendido el sistema de recurso especial por debajo de los umbrales de los contratos sujetos a regulación armonizada. En esas Comunidades, el control por órganos independientes y realizado en apenas un mes y medio se ha extendido más allá de los grandes contratos. El recurso especial ha demostrado ser una medida muy eficaz para detectar infracciones de procedimiento, pues algunos órganos de recurso tienen una tasa de éxito (estimación total o parcial) de los recursos de más del cincuenta por ciento, tasa que se reduce a cero cuando quien resuelve el recurso no es un órgano independiente. Por eso en lugar de ceñir el mecanismo de recurso exclusivamente a los contratos sujetos a regulación armonizada lo que debe hacerse es potenciarlo y extenderlo también a los contratos no sujetos a regulación armonizada.

(14, 22, 26, 33, 35 y 53)



### **ENMIENDA**

Al artículo 44

De modificación

Se propone la modificación del apartado 5, con la siguiente redacción:

“5. En cualquier caso, el recurso de especial en materia de contratación será gratuito para los recurrentes”

### **MOTIVACIÓN:**

En este sentido, el CES entiende que debería mantenerse el carácter potestativo del recurso especial, tal y como contempla la normativa actual y, considera que, en cualquier caso, la interposición de dicho recurso debiera ser gratuito para los recurrentes, evitando tasas o impuestos disuasorios.

(72)

## **ENMIENDA**

Al artículo 44

De adición

Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 44, con la siguiente redacción:

“7. La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo.”

## **MOTIVACIÓN**

En la redacción actual del Proyecto no se determina la naturaleza potestativa o preceptiva del recurso especial. La adición se propone para aclarar, en línea con lo manifestado por el Consejo de Estado en su Dictamen de 10 de marzo de 2016, el carácter potestativo de este recurso que podrá o no interponerse □ como ocurría en el texto refundido vigente de la Ley de Contratos del Sector Público □ con carácter previo al recurso contencioso-administrativo.

(24 y 7)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 46**

De modificación del apartado 4, primer párrafo

Se propone la siguiente redacción de modificación del primer párrafo del apartado 4 del artículo 46 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

***“4. En lo relativo a la contratación en el ámbito de las Corporaciones Locales, la competencia para resolver los recursos será asumida por el órgano que tenga encomendado el control de los recursos especiales autonómicos”.***

## **MOTIVACIÓN**

Permite establecer una regla general que permite la unificación en el tipo de entidad que va a conocer de todos los recursos especiales, proporcionando, de este modo, una mayor seguridad jurídica a los operadores. Es una medida que entra dentro de las competencias que tiene recogidas el Estado en el artículo 149.1.18 de la Constitución.

(33)

## **ENMIENDA**

### **Artículo 48**

#### **De modificación**

Se propone modificar el artículo 48 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

“Artículo 48. Legitimación.

Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica con derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos”.

## **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica.

(53)

### **ENMIENDA**

Al artículo 48

De adición, incluir un párrafo nuevo al final del artículo 48

Se propone incluir un párrafo nuevo al final del artículo 48, con la siguiente redacción:

“Se entenderán legitimadas las organizaciones sindicales cuando el objeto del recurso verse sobre condiciones de empleo que deban formar parte del pliego, por subrogación legal o convencional”.

### **MOTIVACIÓN:**

Se viene denegando, en algunas ocasiones, la legitimación de las organizaciones sindicales a acudir al recurso especial en materia de contratación, pese a que dicha posibilidad está amparada en la Ley Orgánica de Libertad Sindical cuando, con el citado recurso, pretenda preservar bien el volumen de empleo, bien la adecuada subrogación de personal o bien el mantenimiento de los derechos y condiciones laborales. Para evitar dicha litigiosidad, deberá recogerse expresamente la legitimación de las organizaciones sindicales para acudir a dicho recurso especial. Esta enmienda va en coordinación con la anterior presentada por el GPS

(72)

### **ENMIENDA**

Al artículo 49

De supresión

Se suprime el apartado 3 del artículo 249

### **MOTIVACIÓN**

Se suprime el apartado 3, que recoge la posibilidad de que al recurrente se le exija caución o garantía, para no impedir la interposición del recurso, o hacerlo inviable en la práctica, disuadiendo del recurso mediante la imposición de fianzas disuasorias.

(22)

## **ENMIENDA**

Al artículo 52

De modificación

Se modifica el apartado 3 del artículo 44, quedando como sigue:

“3. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el apartado 1 anterior no eximirá a los interesados de la obligación de interponer el recurso especial dentro del plazo legalmente establecido. Ello no obstante, el citado incumplimiento podrá ser alegado por el recurrente en su recurso en cuyo caso el órgano competente para resolverlo, deberá conceder al recurrente el acceso al expediente de contratación en sus oficinas por plazo de diez días, con carácter previo al trámite de alegaciones, para que proceda a completar su recurso. En este supuesto concederá un plazo de dos días hábiles al órgano de contratación para que emita el informe correspondiente y cinco días hábiles a los restantes interesados para que efectúen las alegaciones que tuvieran por conveniente.”

## **MOTIVACIÓN**

Se propone modificar la opción de dar acceso al expediente («podrá») por una obligación («deberá»). El apartado 3 del artículo 52 regula los casos irregulares en los que el interesado se haya visto obligado a presentar recurso especial sin acceder al expediente, pese a su derecho a ello. Por tanto, resulta más coherente con la finalidad de la previsión que el órgano encargado de resolver el recurso dé obligatoriamente ese acceso para superar la incidencia anterior.

(24)

### **ENMIENDA**

Al artículo 58

De supresión del segundo párrafo del apartado 1

Se propone la supresión del segundo párrafo del artículo 58:

### **MOTIVACIÓN:**

En este artículo se regula la posibilidad de que el órgano de recursos contractuales competente, a solicitud del interesado, imponga a la entidad contratante la obligación de indemnizar a la persona interesada por los daños y perjuicios causados por la infracción legal que hubiese dado lugar al recurso, así como el establecimiento de una multa para el caso de apreciarse temeridad o mala fe en su interposición o en la solicitud de medidas cautelares.

(72)



## **ENMIENDA**

Al Artículo 62, Apartado 1

De modificación

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 62, que tendrá la siguiente redacción:

“1. Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.”

## **MOTIVACIÓN:**

En relación con el necesario seguimiento del contrato, es necesario establecer con carácter preceptivo la designación de un responsable del contrato a quién corresponderá supervisar su ejecución y para verificar el correcto cumplimiento del contrato y para verificar el cumplimiento de las condiciones ofertadas por licitador ganador de la adjudicación.

(26 y 24)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 62**

Adición de un apartado 3 (nuevo)

Se propone la siguiente redacción de adición de apartado 3 (nuevo) en el artículo 62 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*Artículo 62. (...) (...)*

***“3. En los casos de concesiones de obra pública y de concesiones de servicios, la Administración designará una persona que actúe en defensa del interés general, para obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio o de la obra.”***

## **MOTIVACIÓN**

El otorgamiento de una concesión no puede suponer un olvido por parte de la Administración de cómo se está ejecutando el contrato con arreglo a los índices de calidad que han de aparecer en los pliegos. Al mismo tiempo, las eventualidades que vayan surgiendo proporcionan un excelente camino para la concreción de nuevas prestaciones que pueda reclamar la ciudadanía.

(33)

## **ENMIENDA**

Al artículo 63

De adición

Se añade un nuevo apartado a continuación del apartado 2 del artículo 63, con la siguiente redacción:

“2 (bis). Se publicará en el perfil del contratante la documentación, desde su inicio, de los expedientes de contratación y de licitación, incluyendo todos los actos de trámite, estudios, informes, actas de los órganos intervinientes y resto de documentos que los integren, hasta la aprobación final del expediente de contratación y hasta la adjudicación de la licitación respectivamente. La incorporación de estas actuaciones y documentos al perfil del contratante se producirá inmediatamente tras su dictado o elaboración. Tan sólo quedará excluida de publicidad aquella información que deba mantenerse confidencial de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.”

La publicidad en el perfil del contratante incluirá las proposiciones de los licitadores en los procedimientos abierto y restringido, una vez abiertos los correspondientes sobres o archivos, con excepción de aquellas partes que deban ser consideradas confidenciales en aplicación de la presente Ley.”

## **MOTIVACIÓN**

El perfil del contratante es uno de los instrumentos para implementar la transparencia en el ámbito de la contratación pública. El artículo 63 del Proyecto regula el perfil pero sin determinar expresamente la información que debe publicarse. La propuesta que se realiza impone la obligación de publicar los documentos del expediente de contratación y del procedimiento de licitación, con los límites de confidencialidad previstos en el Proyecto.

(24)

## **ENMIENDA**

Al artículo 63

De modificación

Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo 63, quedando como sigue:

“3 En el caso de la información relativa a los contratos ya celebrados deberá publicarse su objeto, duración, el presupuesto base de licitación, el valor estimado, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, el procedimiento utilizado para su adjudicación, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación en el perfil de contratante las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos, la declaración de desierto, así como la interposición de recursos y la eventual suspensión de los contratos con motivo de la interposición de recursos. Entre la documentación publicada, se incluirán las decisiones e informes correspondientes a los recursos administrativos que pudieran interponerse, que se incorporarán inmediatamente tras su dictado o elaboración.”

## **MOTIVACIÓN**

La modificación que se propone incluye aclarar que este apartado se refiere a los contratos «ya celebrados», y añadir que serán objeto de publicación los informes y documentos correspondientes a los recursos administrativos relacionados con este contrato. La finalidad de esta modificación es contribuir a la transparencia y evitar la disparidad de criterios entre entidades contratantes sobre la información que debe hacerse pública. Asimismo, la previsión legislativa evitará el empleo de tiempo y medios para decidir qué debe publicarse o no en cada caso.

(24)

## **ENMIENDA**

### **Artículo 63**

De adición, al final del apartado 3

Se propone la adición de un nuevo párrafo al final del apartado 3 del artículo 63 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*"Igualmente serán objeto de publicación en el perfil de contratante la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato, el desistimiento del procedimiento de adjudicación, la declaración de desierto, así como la interposición de recursos y la eventual suspensión de los contratos con motivo de la interposición de recursos."*

## **MOTIVACIÓN:**

En coherencia con la enmienda propuesta al artículo 150 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 63.4**

De modificación al primer párrafo del apartado 4

Se propone la siguiente redacción de modificación al primer párrafo del apartado 4 del artículo 63 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“4. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario”.*

## **MOTIVACIÓN**

Dado que la figura del contrato menor (necesaria para dotar de herramientas de respuesta rápida a necesidades perentorias) es susceptible de ser utilizada para eludir el cumplimiento de los principios de transparencia e igualdad en la contratación pública, es necesario rodearla de las mayores garantías para asegurar la limpieza y la objetividad en su utilización.

Dentro de esas garantías, la esencial para permitir un control exigente es facilitar el acceso a la información sobre su uso, los adjudicatarios, el objeto del contrato y su importe.

(36)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 63**

De modificación de los apartados 1 y 5 y adición de un apartado 8 (nuevo)

Se propone la siguiente redacción de modificación de los apartados 1 y 5 y adición de un apartado 8 (nuevo) en el artículo 63 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“1. Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet su perfil de contratante, como elemento que agrupa la información y documentos relativos a su actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos. La forma de acceso al perfil de contratante deberá hacerse constar en los pliegos y documentos equivalentes, así como en los anuncios de licitación en todos los casos. El acceso siempre será libre y no se utilizarán sistemas de contraseña o se pedirán datos personales o empresariales para acceder a la información, aunque se podrán utilizar sistemas de suscripción para el envío de alertas. La difusión del perfil de contratante no obstará la utilización de otros medios de publicidad adicionales en los casos en que así se establezca. De hecho, se promoverá la publicación de la información contractual de forma accesible y visual de cara a que sea fácilmente entendible por los ciudadanos.*

*5. Deberán ser objeto de publicación en el perfil de contratante, asimismo, los procedimientos anulados, la composición de las mesas de contratación que asistan a los órganos de contratación, así como la designación de los miembros del comité de expertos o de los organismos técnicos especializados para la aplicación de criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor en los procedimientos en los que sean necesarios. En ambos casos, se publicará el nombre completo y cargo de los miembros de las mesas de contratación, de los interventores ciudadanos establecidos en el artículo 323.3 y de los comités de expertos, no permitiéndose alusiones genéricas tipo “un representante de X administración”.*

*8. Toda la información contenida en los perfiles del contratante se publicará en formatos abiertos y reutilizables y permanecerá accesible al público durante un periodo no inferior a 10 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información”.*

## **MOTIVACION:**

Información a incluir en los perfiles del contratante dirigida a ampliar la información disponible y a asegurar el acceso de todos los ciudadanos, para promover el acceso

efectivo y abrir la puerta a nuevas formas de publicidad encaminadas más hacia la rendición de cuentas y no solo a la libre concurrencia. En relación al punto 5, una de las claves para mejorar la responsabilidad compartida y la identificación y denuncia de casos de corrupción vinculados a la contratación pública pasa por que los participantes en el proceso estén identificados y se sientan responsables del resultado. Así, ante cualquier señal de alarma, preferirán alertar a los organismos competentes antes de que su nombre aparezca vinculado a una posible irregularidad.

La adición del punto 8 está destinada a que la información no caduque, como pasa hasta ahora, puesto que todo el esfuerzo de publicidad podría no servir de mucho si solo podemos acceder a expedientes en vigor (cosa que pasa si se entiende la transparencia en la contratación como garante de la concurrencia y no como ejercicio de rendición de cuentas)

(9)



### **ENMIENDA**

Al artículo 64

De adición

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 64, con la siguiente redacción:

“3. Las personas que se encuentren incursas en conflicto de interés o que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación.”

### **MOTIVACIÓN**

En desarrollo del principio de colaboración con la Administración pública, resulta pertinente completar las previsiones sobre conflictos de interés, con el deber general de poner en conocimiento del órgano de contratación la existencia de posibles conflictos de interés en el ámbito del procedimiento de contratación de que se trate.

(24)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 65

De modificación

Se propone la modificación del artículo 65, que tendrá la siguiente redacción:

“Artículo 65. Condiciones de aptitud.

1. Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna prohibición de contratar, y acrediten sus solvencias económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
2. Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.
3. En los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de esta Ley, el contratista deberá acreditar su solvencia y no podrá estar incurso en la prohibición de contratar a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 71.”

## **MOTIVACIÓN**

Mejora técnica para promover la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en los procesos de contratación pública.

(57)

## ENMIENDA

Al Artículo 65.

De adición al apartado 2

Se propone la siguiente redacción del apartado 2 del artículo 65 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"2. Los empresarios deberán contar, asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, **así como acreditar estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) preceptivo y en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) oportuna y el cumplimiento con el Convenio Colectivo de aplicación a cada sector de actividad.**"*

## MOTIVACIÓN

En la actualidad, desde FEDEM estamos observando y sufriendo que los procesos de nuestro sector de mudanzas se licitan por los organismos públicos sin exigir solvencia o capacidad adicional a la establecida en la Ley. De esta forma, empresas que no son prestadoras del servicio de mudanzas, si no que se dedican a materias "afines" o "generales de servicios" se presentan a estos procesos y son catalogados como aptas para licitar en ellos. De esta forma entidades del sector de la mensajería, servicios, limpieza, logística, por ejemplo, con exigencias fiscales y laborales mucho más laxas que las del sector de las mudanzas, se presentan a los procesos de nuestro sector ofertando precios mucho más bajos, como es lógico debido a que sus costes fiscales y laborales son mucho menores. Lo que provoca que las empresas del sector de mudanzas estén perdiendo toda posibilidad para contratar con la Administración, siendo las únicas habilitadas legalmente para desempeñar dichos servicios.

(2)

### **ENMIENDA**

Al artículo 66

De modificación

Se propone la modificación del artículo 66, que quedará con la siguiente redacción

«Artículo 66. Personas jurídicas.

1. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
2. Quienes concurren individual o conjuntamente con otros a la licitación de una concesión de obras, de servicios **públicos o de servicios no públicos**, podrán hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión. La constitución y, en su caso, la forma de la sociedad deberán ajustarse a lo que establezca, para determinados tipos de concesiones, la correspondiente legislación específica.»

### **MOTIVACIÓN:**

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## ENMIENDA

### Al artículo 69

#### De modificación, apartado 8

Se propone la modificación al apartado 8 del artículo 69, que quedará con la siguiente redacción

«Artículo 69. Uniones de empresarios.

(...)

8. Una vez formalizado el contrato con una unión temporal de empresas, se observarán las siguientes reglas:

a) Cuando la modificación de la composición de la unión temporal suponga el aumento del número de empresas, la disminución del mismo, o la sustitución de una o varias por otra u otras, se necesitará la autorización previa y expresa del órgano de contratación, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su importe o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras, concesión de servicios **públicos** o **concesión de servicios no públicos**, que se haya efectuado su explotación durante al menos la quinta parte del plazo de duración del contrato. En todo caso será necesario que se mantenga la solvencia o clasificación exigida y que en la nueva configuración de la unión temporal las empresas que la integren tengan plena capacidad de obrar y no estén incurso en prohibición de contratar.

b) Cuando tenga lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la unión temporal operaciones de fusión, escisión o transmisión de rama de actividad, continuará la ejecución del contrato con la unión temporal adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.

c) Cuando alguna o algunas de las empresas integrantes de la unión temporal fuesen declaradas en concurso de acreedores y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidación, continuará la ejecución del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que estas cumplan los requisitos de solvencia o clasificación exigidas.»

Resto de apartados del artículo sin modificación.

**MOTIVACIÓN:**

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53 y 57)

### **ENMIENDA**

#### **Al Artículo 69**

De adición del punto 9 (nuevo)

Se propone la siguiente redacción de adición del apartado 9 (nuevo) en el artículo 69 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"9. La información pública de los contratos adjudicados a estas uniones incluirá los nombres de las empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la UTE, sin perjuicio de la publicación obligatoria del registro de Uniones Temporales de Empresas incluido en la disposición 40ª".*

### **MOTIVACIÓN:**

Mientras los datos de creación de cualquier otro tipo de sociedad son públicos en el Registro Mercantil, los de las UTE, sociedades que se crean para contratar con la administración, permanecen bajo candado. El Registro de las UTE del Ministerio de Hacienda y Función Pública, regulado en la Ley 18/1982, no es público. Así, es imposible saber en la mayoría de casos qué porcentaje tiene cada empresa en la unión e, incluso, quiénes son las empresas participantes. Esta información es imprescindible para cumplir la premisa de dar publicidad a los adjudicatarios de los contratos públicos

(9)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 71.1

De modificación, apartado 1 letras a) y b)

Se propone la modificación del apartado 1 letras a) y b) del artículo 71 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*"1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concorra alguna de las siguientes circunstancias:*

*a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción entre particulares, en los negocios y en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de contratar alcanzará, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado.*

*b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, de extranjería, medioambiental, laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto".*

## **MOTIVACIÓN:**

Los cambios propuestos en estos apartados del artículo 71 responden a dos objetivos: endurecer las causas de prohibición, devolviendo ciertas causas que han sido excluidas del anteproyecto al proyecto; y volver al redactado del anteproyecto para



eliminar un párrafo del proyecto que excluye los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social cometidos por los representantes o los administradores, y no por la propia entidad jurídica.

(9)

## **ENMIENDA**

Al artículo 71

De modificación

Se modifica el segundo párrafo del apartado 1 a) del artículo 71, introduciendo una frase en el texto y quedando como sigue:

a) (...)

La prohibición de contratar alcanzará, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, *“se encontraran en la situación mencionada en este apartado, mientras esté vigente su cargo o representación y hasta su cese.”* (...)

## **MOTIVACIÓN**

Mejora técnica. Está redactada en coherencia con la enmienda anterior con el objetivo de intercalar la frase que se propone en la enmienda.

(24)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 71.1 c)

De modificación

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 1c) del artículo 71 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

1. (...)

*“c) La declaración en concurso de un deudor o de insolvencia en cualquier otro expediente requerirá la tramitación de un procedimiento por el órgano de contratación en el que se declare formalmente la prohibición. La resolución que éste dicte será motivada y deberá especificar la extensión y plazo de duración de la prohibición. En todo caso, la aprobación del convenio o el inicio de un acuerdo extrajudicial de pagos no constituirán causa de prohibición para contratar.*

*El deudor inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso no podrá contratar con la Administración.”*

## **MOTIVACIÓN**

Resulta reprochable que se establezca el concurso como causa automática o prohibición automática para contratar con la Administración sin procedimiento alguno que permita al contratista acreditar que reúne las condiciones de índole económica y financiera (Artículos 87 y 92 PLCSP) y de índole técnica (Artículos 88-91 PLCSP), necesarias para contratar con la Administración. El precepto de la Ley de contratos del sector público resulta, desde el punto de vista de la finalidad del procedimiento concursal y desde la idea según la cual la declaración de concurso no implica el cese automático de la actividad empresarial del deudor, criticable. La prohibición puede agravar la situación empresarial del deudor por cuanto puede llevar a la paralización de la actividad de aquellas compañías que centren su actividad, por ejemplo, en la adjudicación de contratos de obras. Así, la declaración de la prohibición de contratar con el sector público constituye pues la máxima sanción aplicable a un empresario, porque implica su expulsión del mercado en tanto permanezca en vigor la prohibición; cuando, además, la realización de contratos públicos es objeto principal de su actividad, la prohibición significará no sólo la reducción de ingresos -a veces por encima del nivel indispensable para subsistir-, sino también su desaparición o extinción.

Ello resulta coherente con lo previsto en el art. 166 c) 4º PLCSP.

Por otro lado, el hecho de que se apruebe un convenio con los acreedores (que adquiere eficacia con su aprobación judicial) implica, de alguna manera, que la entidad tiene visos de salir adelante. Durante la fase de convenio, además, la entidad queda bajo la supervisión de los administradores concursales y, en última instancia, del Juez.

En cuanto a los acuerdos extrajudiciales de pagos o las situaciones de precurso, el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón 6/2013, de 10 de abril deja muy claro que una sociedad en precurso no se encuentra incurso en una prohibición de contratar.

(33)

## **ENMIENDA**

Al artículo 71.1

De modificación y adición

Se modifica el epígrafe d) del artículo 71, y se crea un apartado d (bis) nuevo, quedando como sigue:

“d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen. Se considerará que las empresas se encuentran al corriente en dicho cumplimiento cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.

d (bis) En el caso de empresas con 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. En tanto que no se determine reglamentariamente el órgano administrativo competente para emitir la certificación acreditativa del cumplimiento de dicho requisito, el órgano de contratación podrá considerarlo cumplido si el licitador presenta, previa su exigencia en la cláusula relativa a la documentación a aportar de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, una declaración responsable haciendo constar el número global de trabajadores de plantilla, el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma y el porcentaje que representan estos respecto de aquellos, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas, todo ello sin perjuicio de su posterior comprobación por el propio órgano de contratación.”

## **MOTIVACIÓN**

El proyecto de ley supedita la eficacia de la nueva prohibición de contratar relativa a que las empresas de 50 o más trabajadores, no cumplan el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, a que se realice un posterior desarrollo reglamentario que regule la forma de acreditar frente al órgano de contratación el cumplimiento de esta obligación legal.

Sin embargo, no parece que sea conveniente dilatar la aplicación práctica de una medida que busca promover el cumplimiento de una obligación legal establecida ya en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, actualmente recogida en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las

personas con discapacidad y de su inclusión, en virtud de la cual las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vienen obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad.

(43)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 71.

De adición al apartado 1.d)

Se propone la siguiente redacción de adicción al apartado 1.d) del artículo 71 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"d) (...) o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social."*

## **MOTIVACIÓN**

El desarrollo reglamentario de la prohibición de contratar del citado apartado d), vinculada al incumplimiento del requisito del 2 por ciento, no se ha producido, no habiendo sido por ello muy operativa esta prohibición, precisamente porque la actual redacción del TRLCSP (tanto en el artículo 60.1 d. como en su DT 10ª) y de igual modo el Proyecto de LCSP (tanto en su artículo 71.1 d. como en la DA 18ª) la vincula a "las condiciones que reglamentariamente se determinen" y condiciona expresamente su efectividad a dicho desarrollo reglamentario.

Lo que se propone por todo ello es suprimir la condición de que se efectúe el desarrollo reglamentario y se incluya ya en la Ley una sencilla forma (mediante certificados propios de la empresa) de acreditar el cumplimiento de la obligación, lo mismo que se hace en el caso de otras causas de prohibición, lo que permitirá la aplicación inmediata de esta cláusula. De otra manera corremos el enorme riesgo de que esa falta de desarrollo reglamentario continúe y la inaplicación de este esencial precepto se haga indefinida.

(3)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 71.1

De adición, apartado 1 i)

Se propone la incorporación de un nuevo apartado 71.1. i) del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 con la siguiente redacción:

*"i) Las personas físicas o jurídicas que por sí o a través de filiales o sociedades participadas directa o indirectamente en más del 30% estén domiciliadas o tributen en los países o territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de medidas fiscales urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.*

*A este fin, los licitadores deberán suscribir una declaración responsable en la que indiquen los territorios en los que desarrollen su actividad; desagregando en cada territorio el número de empleados, la cifra de negocio, los beneficios por los que tributen y los impuestos pagados.*

*El incumplimiento de esta obligación será causa de exclusión de la licitación. La falsedad en la misma será causa de resolución automática del contrato con abono de indemnización de daños y perjuicios y sanción del 20% de la cuantía del contrato".*

## **MOTIVACIÓN:**

Los países y territorios que tienen la consideración de paraísos fiscales ocasionan un considerable daño a la Hacienda Pública española tanto por los impuestos que dejan de tributar en España como por la opacidad de operaciones que son perjudiciales para nuestro país.

Por ello, un principio básico es el de evitar que puedan recibir fondos de los poderes adjudicadores españoles a través de la condición de adjudicatarios de un contrato.

(33)



### **ENMIENDA**

Al Artículo 71, Apartado 1

De adición, letra j)

Se propone la adición de una nueva letra i) al apartado 1 del artículo 71, que tendrá la siguiente redacción:

1) (...)

*"j) Cuando el órgano contratante pueda demostrar por cualquier medio apropiado que se han incumplido reiteradamente en el pasado las obligaciones salariales con sus trabajadores."*

### **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica. En coherencia con lo establecido en el resto del articulado, en orden al cumplimiento de las normas y estándares laborales, erigiendo como prohibición para contratar a quienes incumplan sus obligaciones fundamentales como empleadores.

(10)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 71**

#### **De adición, apartado 3**

Se propone la siguiente redacción de adición al finalizar el texto del apartado 3 en el artículo 71 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. **“A este fin, en las licitaciones habrá de presentarse una declaración responsable que indique cuál es la relación directa con la del anterior contratista así como por las personas que forman parte del accionariado o tienen puestos de responsabilidad en las mismas. La falsedad en la declaración responsable es causa de nulidad del contrato”.***

## **MOTIVACIÓN**

La medida propuesta pretende hacer frente a uno de los problemas mayores que existe en relación con la sucesión de empresas: la prueba y las consecuencias en el caso de que se descubra este hecho. Por ello, a fin de ganar en efectividad se recurre a la figura de la declaración responsable y se establecen de forma clara las consecuencias de la falsedad en el contrato.

(33)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 72.

De adición al apartado 1, se incluye un segundo párrafo.

Se propone la siguiente redacción del apartado 1 del artículo 72, planteando la adición de un segundo párrafo, dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

1.(...)

***“En el caso del apartado d), a efectos de apreciar la existencia o inexistencia del cumplimiento del requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, se debe aportar por los licitadores un certificado de la propia empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas, todo ello sin perjuicio de la posible comprobación de estos extremos por los órganos de contratación. A los mismos efectos de acreditar el cumplimiento de esta obligación, podrá sustituirse ese certificado y esa documentación de la propia empresa aportándose por los licitadores una certificación del órgano administrativo correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o una certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos de que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo”.***

## **MOTIVACIÓN**

El desarrollo reglamentario de la prohibición de contratar del citado apartado d), vinculada al incumplimiento del requisito del 2 por ciento, no se ha producido, no habiendo sido por ello muy operativa esta prohibición, precisamente porque la actual redacción del TRLCSP (tanto en el artículo 60.1 d. como en su DT 10ª) y de igual modo el Proyecto de LCSP (tanto en su artículo 71.1 d. como en la DA 18ª) la vincula a “las condiciones que reglamentariamente se determinen” y condiciona expresamente su efectividad a dicho desarrollo reglamentario.

Lo que se propone por todo ello es suprimir la condición de que se efectúe el desarrollo reglamentario y se incluya ya en la Ley una sencilla forma (mediante

certificados propios de la empresa) de acreditar el cumplimiento de la obligación, lo mismo que se hace en el caso de otras causas de prohibición, lo que permitirá la aplicación inmediata de esta cláusula. De otra manera corremos el enorme riesgo de que esa falta de desarrollo reglamentario continúe y la inaplicación de este esencial precepto se haga indefinida.

(3)

## **ENMIENDA**

Al artículo 72.3

De modificación, apartado 3

Se propone la modificación del párrafo primero del apartado 3 del artículo 72, con la siguiente redacción:

*“3. La competencia para fijar la duración y alcance de la prohibición de contratar en el caso de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, en los casos en que no figure en la correspondiente sentencia o resolución, y la competencia para la declaración de la prohibición de contratar en el caso de la letra e) del apartado primero del artículo anterior respecto de la obligación de comunicar la información prevista en el artículo 82.4 y en el artículo 336, corresponderá al Ministro de Hacienda y Función Pública u órgano autonómico equivalente, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado u órgano autonómico equivalente.”*

## **MOTIVACIÓN**

Sin merma de la garantía de procedimiento contradictorio, y previo informe del órgano consultivo autonómico equivalente a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, los órganos competentes en el ámbito de las Comunidades Autónomas deberían poder fijar la duración y alcance de la prohibición de contratar en los supuestos previstos en las letras a) y b) del art. 71 en los casos en que no figure en la correspondiente sentencia o resolución. En ambos casos la prohibición de contratar deriva de la existencia de una sentencia o resolución administrativa firme, reduciéndose la tarea del órgano a fijar su duración y alcance. Dicho de otro modo, en el procedimiento contradictorio no hay que probar si concurre la causa de prohibición de contratar, que concurre desde la firmeza de la sentencia o resolución administrativa, sino únicamente fijar su duración y alcance, no resultando justificado atribuir al Ministro de Hacienda y Función pública la competencia exclusiva para determinar dichas circunstancias, privando de tal potestad a los órganos autonómicos equivalentes. Las conductas tipificadas en los apartados a) y b) del art. 71 son lo suficientemente graves como para procurar que sean apreciadas por el máximo de órganos en los procedimientos de contratación, resultando un obstáculo para su efectividad el hecho de que, en los casos en que no figure la prohibición de contratar en la correspondiente sentencia o resolución, únicamente el Ministro de Hacienda y Función pública sea el competente para apreciar su alcance y efectos.

(14)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 72

De adición, apartado 8 (nuevo)

Se propone la incorporación de un nuevo apartado 8 en el artículo 72 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 con la siguiente redacción:

*(Nuevo) "8. En el caso previsto en el apartado 71.1 i) el órgano de contratación podrá decidir la exclusión de la licitación en los supuestos en los que no se haya presentado la declaración responsable.*

*En los supuestos en los que la declaración responsable aparezcan territorios o países declarados paraísos fiscales de acuerdo con la legislación española, se comunicará asimismo al Ministerio de Hacienda a los efectos de establecer los efectos generales de dicho dato"*

## **MOTIVACIÓN:**

En correspondencia con la enmienda de adición al artículo 71.1 hace falta articular la forma de ejercicio de la exclusión de los licitadores a los que se aplique el régimen a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de medidas fiscales urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

(33)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 73.1**

De modificación, al párrafo primero, apartado 1

Se propone la modificación del párrafo primero del apartado 1, del artículo 73 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“1. En los supuestos en que se den las circunstancias establecidas en el apartado segundo del artículo 71, y en las letras a), b) del apartado primero del mismo artículo, cuando no figure en la correspondiente sentencia o resolución la duración y alcance de la prohibición de contratar, y en la letra e) del apartado primero, también del mismo artículo, en lo referente a haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable del artículo 140 o al facilitar otros datos relativos a su capacidad y solvencia, la prohibición de contratar afectará al ámbito del órgano de contratación competente para su declaración....”.*

## **MOTIVACIÓN**

Si se admite la posibilidad de que los órganos autonómicos equivalentes al Ministro de Hacienda y Función Pública pueden determinar la duración y alcance de la prohibición de contratar contemplados en las letras a) y b) del art. 71, en los casos en que no figure en la correspondiente sentencia o resolución la duración y alcance de la prohibición de contratar, debe aclararse que la prohibición de contratar afectará al ámbito del órgano de competente para su declaración.

(14)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 76

De modificación

Se propone la modificación artículo 76, que tendrá la siguiente redacción:

“Artículo 76. Concreción de las condiciones de solvencia.

1. En los contratos de obras, de servicios, concesión de obras y concesión de servicios, así como en los contratos de suministro que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

2. Los órganos de contratación deberán exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos se integrarán en el contrato, debiendo los pliegos o el documento contractual, atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 209, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 190.1 para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.”

## **MOTIVACIÓN:**

Se trata de evitar la adjudicación a empresas pantallas o a meros gestores del contrato principal, cuya ejecución hacen recaer en las empresas con las que subcontratan.

(26)



## **ENMIENDA**

Al artículo 76

De modificación

Se propone la modificación del artículo 76, que quedará con la siguiente redacción

“Artículo 76. Concreción de las condiciones de solvencia.

1. En los contratos de obras, **gestión de servicios públicos**, servicios, concesión de obras y concesión de servicios **no públicos**, así como en los contratos de suministro que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, exigirán a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. Los órganos de contratación exigirán a los licitadores que se comprometan a respetar a los trabajadores que sean adscritos a la ejecución de las prestaciones objeto del contrato los derechos adquiridos por éstos y las condiciones laborales de contenido económico, en los términos que estipule la legislación laboral y las normas convencionales de aplicación.

2. Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos se integrarán en el contrato, pudiendo los pliegos o el documento contractual, atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 209, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 190.1 para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.”

## **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53, 26, 17, 57, 61, 50)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 76

De adición, apartado 2 (nuevo)

Se propone la adición de un nuevo apartado 3 al artículo 76, que tendrá la siguiente redacción:

“3. La adscripción de los medios personales o materiales como requisitos de solvencia adicionales a la clasificación del contratista deberá ser razonable, justificada y proporcional a la entidad y característica del contrato, de forma que no limiten la participación de las empresas en la licitación.”

## **MOTIVACIÓN:**

Se trata de evitar que la petición desmesurada de perfiles profesionales muy concretos e innecesarios, o de experiencias constructivas muy difíciles de acreditar en los últimos años, en los que no ha habido además abundancia de contratación de obra pública, imposibilite su cumplimiento por las pequeñas y medianas empresas.

(50)

## ENMIENDA

Al Artículo 80.

De modificación del apartado 2

Se propone la siguiente redacción del apartado 2 del artículo 80 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán adoptar decisiones sobre clasificación de las empresas que serán eficaces **ante todos los órganos de contratación una vez inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público**. En la adopción de estos acuerdos, deberán respetarse, en todo caso, las reglas y criterios establecidos en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.*

*No obstante, una empresa no podrá disponer simultáneamente de clasificación en un determinado grupo o subgrupo otorgada por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y por una o más Comunidades Autónomas, o por dos o más Comunidades Autónomas, con distintas categorías de clasificación. A tal efecto, las empresas indicarán en sus solicitudes de clasificación o de revisión de clasificación las clasificaciones que tienen vigentes y que hayan sido otorgadas por otras Administraciones distintas de aquella a la que dirigen su solicitud, no pudiendo otorgarse a la empresa solicitante una categoría superior en subgrupo alguno a aquella de la que ya disponga, otorgada por cualquier otra Administración, en dicho subgrupo.*

*Reglamentariamente se articularán los mecanismos necesarios para evitar la coexistencia sobrevenida de clasificaciones en vigor contradictorias para una misma empresa en un mismo grupo o subgrupo de clasificación".*

## MOTIVACIÓN

La presente enmienda de modificación tiene por objeto proponer una redacción diferente del artículo 80 del proyecto de ley para establecer legalmente que los acuerdos de clasificación de las empresas que adopten los órganos competentes de las Comunidades Autónomas tengan eficacia general ante todos los órganos de contratación del sector público, siempre que dichos acuerdos se adopten respetando y ajustándose a las reglas y criterios establecidos en la Ley y en sus disposiciones de desarrollo.

La posibilidad de que los acuerdos de clasificación adoptados por una Comunidad Autónoma tuvieran efectos ante los órganos de contratación de la Administración

General del Estado o de otras CCAA ya tuvo un precedente en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículos 28.3 y 34.3 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 14 de noviembre), si bien en aquella ocasión se establecía como una posibilidad limitada a las empresas que tuvieran su domicilio social en la Comunidad que adoptara dichos acuerdos y previa remisión del expediente a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa para que, tras obtener su conformidad, procediera a su correlativa inscripción en el Registro dependiente de este órgano. Esta posibilidad, a la que se acogieron numerosas empresas mientras estuvo en vigor, fue suprimida en la Ley 30/2007 por las dificultades técnicas que hacían costoso tal procedimiento y que hoy no se dan gracias a los medios electrónicos e informáticos para la transmisión de información.

Por otra parte la presente propuesta se encuentra también en consonancia con los principios y disposiciones de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Desde este punto de vista, dificulta la competencia y el acceso a los procedimientos de contratación del sector público la restricción contenida en la redacción actual del artículo 80 del proyecto de ley, según la cual los acuerdos de clasificación adoptados por las CCAA sólo tendrían validez ante los órganos de contratación de su ámbito territorial, cuando su adopción se rige por las mismas normas reglamentarias estatales y se aplican los mismos criterios por todas las Administraciones que ejercen tal competencia sin excepción alguna, de forma análoga a como sucede en otras habilitaciones o autorizaciones que se conceden a los operadores económicos y que si gozan de reconocimiento general, mutuo y recíproco, de todas las Administraciones.

En el momento actual las empresas que desean licitar fuera de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de clasificación de empresas, tramitan dos expedientes de clasificación, ante la propia Comunidad Autónoma y ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.

Esto lejos de favorecer a las empresas, constituye una duplicidad de expedientes con el consecuente gasto en tiempo que ello comporta. O en otro caso, que la empresa opte por desistir de la clasificación autonómica, lo que en absoluto favorece a las PYMES de la propia comunidad autónoma que deben llevar a cabo sus expedientes deslocalizadamente, aunque se trate de expedientes electrónicos. No hay que dudar del valor añadido de disponer de Oficinas clasificadoras en el propio territorio.

Por todo ello no se acierta a comprender qué razones objetivas existen para no dotar de efectos generales a la clasificación autonómica.

(1)

### **ENMIENDA**

Al artículo 86

De adición

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 86, con la siguiente redacción:

“3. En los contratos de concesión de obras y servicios, o en otros contratos en los que puedan identificarse sucesivas fases en su ejecución que requieran de medios y capacidades distintas, los pliegos podrán diferenciar requisitos de solvencia distintos para las sucesivas fases del contrato.”

### **MOTIVACIÓN**

En algunos contratos de larga duración, como las concesiones (aunque no sólo), las prestaciones están claramente diferenciadas por fases, principalmente de obra y explotación (servicios, ya sea para la propia entidad contratante, ya sea directamente para los usuarios). La solvencia y capacidad técnica en una y otra fase son distintas y diferenciables. La diferenciación de requisitos de solvencia para ambas fases que se propone con esta adición permite ajustar esos requisitos a las necesidades concretas del contrato en cada período, y asegurar que el licitador dispone de los medios adecuados para cada prestación.

(24)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 86

Adición, apartado 3 (nuevo)

Se propone la siguiente redacción de adición de apartado 3 (nuevo) en el artículo 86 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

***“3. Cuando, por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el poder adjudicador, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado”.***

## **MOTIVACIÓN**

Con esta enmienda se recoge el contenido del artículo 60.3. 2º párrafo de la Directiva 2014/24/UE

(33)

## **ENMIENDA**

Al artículo 87

De adición

Se añade un nuevo epígrafe d) apartado 1 al artículo 87, con la siguiente redacción:

“d) Para los contratos de concesión de obras y de servicios, o para aquellos otros que incluyan en su objeto inversiones relevantes que deban ser financiadas por el contratista, el órgano de contratación podrá establecer medios de acreditación de la solvencia económica y financiera alternativos a los anteriores, siempre que aseguren la capacidad del contratista de aportar los fondos necesarios para la correcta ejecución del contrato.”

## **MOTIVACIÓN**

El artículo 87.1 tipifica los medios más comunes de acreditación de la solvencia económica y financiera. La finalidad de esta tipificación es facilitar la labor del órgano de contratación. No obstante, en ocasiones, los contratos presentan características que hacen que estos medios no sean los más idóneos para comprobar la solvencia del licitador. Esta circunstancia suele darse en supuestos como el del contrato de concesión, en el que un elemento esencial, según lo configura el propio Proyecto, es la financiación de las obras por el propio adjudicatario.

Por ello se propone que, sin perjuicio de mantener la estandarización de los medios que se recogen en la redacción del Proyecto, se añada la posibilidad de que el órgano de contratación pueda utilizar otros medios alternativos en los contratos de concesión u otros que, como este último, requieran importantes inversiones con financiación a cargo de la entidad adjudicataria. Esta flexibilización permitiría adaptar los medios para acreditar la solvencia a entidades que pueden formar parte del consorcio licitador en su calidad de fondos de inversión o similares. Generalmente estas entidades financieras no pueden acreditar su solvencia con los medios típicos que ahora recoge el Proyecto porque estos medios están fundamentalmente diseñados para entidades que realizan la actividad propia de cada contrato, no para inversores. Sin embargo, la participación de estas entidades inversoras en la licitación contribuye a incrementar la solvencia financiera del Proyecto, y a hacer más eficiente la inversión con las ventajas que ello supone para el precio del contrato que debe asumir la entidad contratante.

(24)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 87, Apartado 1, letra c)

De modificación

Se propone la modificación del segundo párrafo de la letra c) del apartado 1 del artículo 87, que tendrá la siguiente redacción:

"c) /.../

Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores de este apartado, el órgano de contratación deberá exigir que el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere el límite establecido en la normativa sobre morosidad."

## **MOTIVACIÓN:**

El Proyecto de Ley contempla la posibilidad de que el órgano de contratación tenga en cuenta, como medio adicional de acreditar la solvencia, el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad. Consideramos que, de igual forma que el apartado d) del Artículo 71 del presente proyecto de ley establece como causa de prohibición de contratar el hecho de no encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias o con la seguridad social, o que en el caso de las empresas de más de 50 trabajadores no cumplir con el requisito de que al menos el 2% de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, el cumplimiento de la normativa sobre morosidad tiene que ser un hecho necesario para acreditar la solvencia económica y financiera.

(26)



## **ENMIENDA**

Al Artículo 87, Apartado 2

De modificación

Se propone modificar el apartado 2 del artículo, que tendrá la siguiente redacción:

*"2. La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. En todo caso para contratos de cuantía superior a diez millones de euros será necesaria la presentación de las últimas cuentas anuales auditadas por auditora homologada y la calificación crediticia rating de la empresa emitida por agencia de calificación homologada. La inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario."*

## **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica en relación con la necesidad de acreditar la solvencia económica en los contratos de cuantía superior a los 10 millones de euros.

(49)

## **ENMIENDA**

Al artículo 87

De adición al apartado 2

Se propone un texto de adición al apartado 2 del artículo 87, con la siguiente redacción:

"2.- (...) "

Adicionalmente a lo establecido en el apartado 1 anterior, y con el mismo objeto de acreditar la solvencia económica y financiera, se exigirá, referido al periodo de ejecución de la prestación:

- a) Información sobre hechos relevantes que resulten previsibles y que podrían afectar la capacidad financiera del contratista;
- b) Previsiones de las principales masas patrimoniales del balance del contratista; particularmente deudas, créditos y existencias.
- c) Información de previsiones de los principales elementos de la cuenta de resultados del contratista -ingresos, gastos, margen bruto-.
- d) Análisis del flujo de caja de los últimos tres años y el previsto en el corto y largo plazo, como indicador de la salud financiera de la empresa.
- e) Análisis de los acuerdos fuera de balance: provisiones, deudas contingentes y transacciones con partes vinculadas.
- f) Análisis –si es el caso- de la gestión del efectivo de la filial por la empresa matriz y/o compromiso por escrito de ésta de atender las necesidades de efectivo de la filial adjudicataria.
- g) Presentación de estados financieros y de resultados intermedios, comprendidos entre las últimas cuentas aprobadas y la licitación.
- h) Presentación de estados financieros y de resultados intermedios previstos al inicio de la ejecución del contrato."
- i) Acceso a todos los datos que figure en los registros de las distintas administraciones referente a estados financieros, situación económica y sobre cumplimiento de la normativa".

## **MOTIVACIÓN:**

Esta enmienda es correlativa a la anterior presentada por el GPS. En definitiva, no puede afirmarse ni acreditarse que una empresa es solvente si se consideran únicamente datos de sus últimos estados financieros depositados en el Registro Mercantil y referidos a una cifra alzada de patrimonio neto o a un determinado

porcentaje del presupuesto de licitación, el coeficiente entre activo y pasivo y la cifra de ventas –que depende del comportamiento del mercado por lo que tampoco puede existir confianza en que los ingresos por ventas vayan a mantenerse en el futuro.

En todo caso, y una vez se produzca la implementación de la factura electrónica, registro y demás procedimientos relativos a la Administración electrónica, el órgano contratante debería poder tener acceso a la información que tenga la Administración sobre el adjudicatario, en cada fase del proceso de contratación pudiendo comprobar y valorar la evolución financiera del adjudicatario.

(72)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 87**

De adición, apartado 4 (nuevo)

Se propone la siguiente redacción incluyendo un nuevo apartado 4 al artículo 87 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“4. La solvencia económica y financiera requerida deberá resultar proporcional a la prestación contractual, no debiendo en ningún caso suponer un obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas. Con la excepción de sectores específicos, tecnológicos o altamente cualificados, ningún licitador deberá resultar excluido por carecer de un volumen específico de negocio siempre que pueda acreditar por otros medios cualesquiera su solvencia económica y financiera.”*

## **MOTIVACIÓN**

Una de las cuestiones que restringen el acceso de las pymes y micropymes a la contratación pública es el elevado listón de exigencias económicas y financieras que a menudo se señalan en los pliegos.

Recordamos que la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, nos insiste una y otra vez en facilitar la participación de las pequeñas, medianas y microempresas a la contratación pública. Así, entre otras referencias, señala de modo literal:

*(2). La contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, establecida en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 titulada «Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» («Estrategia Europa 2020»), como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos. Con ese fin, deben revisarse y modernizarse las normas vigentes sobre contratación pública... a fin de incrementar la eficiencia del gasto público, facilitando en particular la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública, y de permitir que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes.*

(83). *La imposición de unos requisitos de capacidad económica y financiera demasiado exigentes constituye a menudo un obstáculo injustificado para la participación de las PYME en la contratación pública. Los requisitos deben estar vinculados y ser proporcionales al objeto del contrato.*

(78). *Debe adaptarse la contratación pública a las necesidades de las PYME. Es preciso alentar a los poderes adjudicadores a utilizar el código de mejores prácticas que se establece en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 25 de junio de 2008, titulado «Código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso de las PYME a los contratos públicos», que ofrece orientaciones acerca de cómo aplicar el régimen de contratación pública de forma que se facilite la participación de las PYME.*

Y precisamente, el «Código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso de las PYME a los contratos públicos», Bruselas, 25.06.2008. SEC (2008)2193, señala:

#### 4. FIJAR NIVELES DE CAPACITACIÓN Y REQUISITOS FINANCIEROS PROPORCIONADOS

##### 4.1. Criterios de selección proporcionados

*Las Directivas comunitarias sobre contratación pública confirman expresamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, conforme a la cual los criterios de capacidad económica y financiera y de capacidad técnica deben estar vinculados y ser proporcionales al objeto del contrato.*

*La aplicación de criterios de selección proporcionados reviste una importancia capital para las PYME, dado que la fijación de niveles de capacidad excesivamente elevados por parte de los poderes adjudicadores excluye de hecho a gran parte de esas empresas de la participación en procedimientos de licitación.*

*Hay numerosos criterios de selección posibles y son diversos los documentos mediante los cuales puede demostrarse el cumplimiento de esos criterios. Es preciso decidir qué criterios son los adecuados en relación con el tipo de compra considerada y con el valor de la misma. Todos los criterios de selección han de ser claros, no discriminatorios y proporcionados al contrato de que se trate.*

Además de los objetivos e intenciones que acabamos de reproducir, la legislación nacional y comunitaria ha evolucionado de forma clara hacia la apertura de la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas. Y precisamente uno de los medios que se plasman en la normativa de contratos públicos es la minoración en los requisitos de acceso, aptitud o capacidad, de modo que no solo puedan participar en las licitaciones las empresas que ya vienen siendo adjudicatarias de contratos públicos y cuentan con un volumen de negocio concreto y específico, sino aquellas que hasta ahora no lo han sido y no lo tienen, pero que sí poseen los medios técnicos,

profesionales y económicos para prestar debidamente el contrato (o que se van a dotar de los mismos).

La primera medida para alcanzar este objetivo consistió en la eliminación de la obligatoriedad de la clasificación del contratista para los contratos de servicios, mediante Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto. La segunda, en el mismo RD 773/2015, en la exención de la necesidad de acreditar la solvencia técnica y económica y financiera cuando el valor estimado de los contratos de obras no exceda de 80.000 euros y el de los contratos de servicios no exceda de 35.000 euros.

Además, para los contratos de servicios se han flexibilizado los requisitos exigidos, con un especial énfasis en la no exclusión de las potenciales e interesadas empresas licitadoras, en lógica adecuación con la Directiva 2014/24/UE y la jurisprudencia del TJUE. Por ello, la doctrina, la jurisprudencia y la legislación amparan la opción de establecer exigencias flexibles siempre que resulten proporcionales. Así, puede verse la Resolución del TACRC de 23 de mayo de 2013 que estima el recurso y anula las cláusulas de un pliego por exigencias de solvencia económica y financiera excesivas.

Por lo tanto, la enmienda planteada lo que pretende evitar es un hecho habitual: que pequeñas y medianas empresas quedan fuera de las licitaciones públicas al no poder acreditar una solvencia económica o un volumen de negocios, que resulta desproporcionado e innecesario, y ha sido arbitrariamente establecido por los órganos de contratación cuando la normativa no establece mínimos o escalas precisas.

(13)

## **ENMIENDA**

Al artículo 87

De modificación

Se modifica el artículo 87, quedando como sigue:

**“Artículo 87. Acreditación de la solvencia económica y financiera.**

1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá del doble del valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El órgano de contratación indicará las principales razones de la imposición de dicho requisito en los pliegos de la contratación o en el informe específico a que se refiere el artículo 329.

Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con cada uno de los lotes. No obstante, el órgano de contratación podrá establecer el volumen de negocios mínimo anual exigido a los licitadores por referencia a grupos de lotes en caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al mismo tiempo.

b) En todo caso, justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. La ratio entre activo y pasivo podrá tenerse en cuenta si el poder adjudicador especifica en los pliegos de la contratación los métodos y criterios que se utilizarán para valorar este dato. Estos métodos y criterios deberán ser transparentes, objetivos y no discriminatorios

Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores de este apartado, el órgano de contratación deberá exigir que el periodo medio de pago a proveedores y

subcontratistas del empresario, siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.

2. La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa del importe mínimo, expresado en euros, de cada uno de ellos. Para los contratos no sujetos al requisito de clasificación, cuando los pliegos no concreten los criterios y requisitos mínimos para su acreditación los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificación que en su caso corresponda al contrato acreditarán su solvencia económica y financiera con los siguientes criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación:

a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

b) En los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales, en lugar del volumen anual de negocio, la solvencia económica y financiera se podrá acreditar mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su



oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 148 de esta Ley.

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.”

### **MOTIVACIÓN**

Hacer exigible un seguro de responsabilidad civil adecuado como medio de calidad y solvencia.

Hacer exigible la certificación de que el licitador no sobrepasa el periodo medio de pago a proveedores y subcontratistas, siempre que se trate de una gran empresa.

(22)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 88.1.a)

De modificación, al primer párrafo del apartado 1. a)

Se propone la siguiente redacción de modificación al primer párrafo del apartado 1.a) en el artículo 88 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

1.

*“a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, o en los diez últimos años cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.*

*A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera (...) (...) por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.”*

## **MOTIVACIÓN**

La incorporación como obligatorio del certificado de buena ejecución de los contratos cumple la finalidad de mejorar la comunicación entre administraciones públicas y de disponer de un instrumento más eficaz para la calidad en las prestaciones que se reciben de los contratistas

(33)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 88

De modificación al apartado 1. c)

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 1.c) del artículo 88 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras **así como de los técnicos encargados directamente de la misma**, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.”*

### **MOTIVACIÓN**

Pretende reforzar la cualificación profesional de las personas encargadas de la realización de la obra, en particular de aquellos que están más directamente al tanto de la misma

(33)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 88**

De modificación al apartado 1. e) y adición añadiendo un párrafo nuevo.

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 1.e) y adición añadiendo un párrafo nuevo al final del apartado dentro del artículo 88 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos –con indicación de las mujeres y hombres que existen en dichas posiciones– durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.*

***En particular, en la declaración se procederá a desagregar el porcentaje de la misma que tiene un contrato fijo, los contratos que se hayan suscrito para cubrir cada puesto de trabajo y el porcentaje de mujeres y hombres en el personal fijo de la empresa. La empresa habrá de indicar, asimismo, las medidas adoptadas en los últimos cinco años para prevenir la siniestralidad laboral y para mejorar la formación de sus trabajadores.”***

## **MOTIVACIÓN**

La modificación propuesta pretende incidir en dos de los aspectos más preocupantes del mercado de trabajo en España: la proliferación de los contratos temporales y la poca presencia de la mujer en puestos directivos y en los contratos fijos. Al mismo tiempo, se pretende fomentar la lucha contra la siniestralidad en el trabajo y para mejorar la formación de los trabajadores.

(33)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 89

De modificación, apartado 1, letra g)

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 1, letra g) del artículo 89 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

1. (...)

***“g) Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.”***

### **MOTIVACIÓN**

En cumplimiento de las Convenciones de la OIT tal y como expresa la nueva redacción del punto del apartado g).

(13)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 90**

#### **De modificación, al apartado 1 a), párrafo primero.**

Se propone la siguiente redacción que modifica dentro del artículo 90, el párrafo primero del apartado 1 a), dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

“1.a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en el pasado cuando sea necesario garantizar un nivel suficiente de experiencia que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado de los mismos.”

## **MOTIVACIÓN**

Adaptar el texto normativo a lo que al respecto prescribe la Directiva Comunitaria 2014/24/UE, en cuanto a la acreditación de la experiencia en los contratos de servicios. La Directiva alude a un “nivel suficiente de experiencia demostrada mediante referencias adecuadas de contratos ejecutados en el pasado”. El texto del Proyecto establece un criterio limitativo en el tiempo -que no está en la Directiva Comunitaria- al restringir la acreditación de la experiencia de los trabajos realizados a los tres o cinco últimos años, lo que no encuentra una justificación razonable y constituye un criterio contrario al principio de libre acceso a las licitaciones. Por ello se propone en congruencia con la Directiva, suprimir esa limitación temporal.

(18)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 90**

De adición, nuevo apartado 2

Se propone añadir un nuevo apartado 2 al artículo 90 (pasando el actual apartado 2 a ser apartado 3) al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“Si el objeto contractual requiere aptitudes específicas en materia social, de prestación de servicios de proximidad u otras análogas se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta experiencia, conocimientos y medios en las referidas materias, pudiéndose acreditar la referida solvencia mediante la presentación de relación de trabajos realizados por la entidad licitadora, determinación del personal que se afectará al servicio, su experiencia profesional, sus titulaciones académicas, descripción de las instalaciones y otros medios”.*

## **MOTIVACIÓN**

Se trata de incluir el concepto de la solvencia técnica en materia social; esta previsión no es sino concreción de la regulación de la solvencia técnica y profesional en el Proyecto de Ley.

(32)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 90**

De modificación al apartado 1. e)

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 1.e) del artículo 90 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

1. (...) (...) (...)

*“e) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.”*

## **MOTIVACIÓN**

Pretende reforzar la cualificación profesional de las personas encargadas de la realización de la obra, en particular de aquellos que están más directamente al tanto de la misma

(33)



## **ENMIENDA**

Al Artículo 90.1 g)

De modificación

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 1g) del artículo 90 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

1. (...)

*“g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos **–con indicación de las mujeres y hombres que existen en dichas posiciones–** durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.*

***En particular, en la declaración se procederá a desagregar el porcentaje de la misma que tiene un contrato fijo, los contratos que se hayan suscrito para cubrir cada puesto de trabajo y el porcentaje de mujeres y hombres en el personal fijo de la empresa.***

***La empresa habrá de indicar, asimismo, las medidas adoptadas en los últimos cinco años para prevenir la siniestralidad laboral y para mejorar la formación de sus trabajadores”.***

## **MOTIVACIÓN**

La modificación propuesta pretende incidir en dos de los aspectos más preocupantes del mercado de trabajo en España: la proliferación de los contratos temporales y la poca presencia de la mujer en puestos directivos y en los contratos fijos. Al mismo tiempo, se pretende fomentar la lucha contra la siniestralidad en el trabajo y para mejorar la formación de los trabajadores.

(33 y 36)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 90

De adición, nuevo apartado 2

Se propone añadir un nuevo apartado 2 al artículo 90 (pasando el actual apartado 2 a ser apartado 3) al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“Si el objeto contractual requiere aptitudes específicas en materia social, de prestación de servicios de proximidad u otras análogas se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta experiencia, conocimientos y medios en las referidas materias, pudiéndose acreditar la referida solvencia mediante la presentación de relación de trabajos realizados por la entidad licitadora, determinación del personal que se afectará al servicio, su experiencia profesional, sus titulaciones académicas, descripción de las instalaciones y otros medios”.*

## **MOTIVACIÓN**

Se trata de incluir el concepto de la solvencia técnica en materia social; esta previsión no es sino concreción de la regulación de la solvencia técnica y profesional en el Proyecto de Ley.

(32)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 93**

#### **De modificación apartado 1**

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 93 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“1. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantías de calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas en la materia, certificados por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación”.*

## **MOTIVACIÓN**

El texto que se propone es más fiel a lo dispuesto en el artículo 62 de la DCP, que el texto del Proyecto de Ley, toda vez que aquel incluye las normas de accesibilidad de las personas con discapacidad como una parte muy importante de las normas de garantía de calidad que deberá cumplir el operador económico, cuestión, ésta, que el Proyecto de Ley omite.

(32, 17, 57 y 61)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 94**

#### **De modificación**

Se propone la modificación del artículo 94, que tendrá la siguiente redacción:

“Artículo 94. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental.

1. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan como medio para acreditar la solvencia técnica o profesional la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el licitador cumple determinadas normas de gestión medioambiental, harán referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Unión Europea, o a otros sistemas de gestión medioambiental reconocidos de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 de 25 de noviembre de 2009 o a otras normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales pertinentes de organismos acreditados.

2. Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que presente el licitador, y en particular una descripción de las medidas de gestión medioambiental ejecutadas, siempre que el licitador demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema o norma de gestión medioambiental aplicable.”

## **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica para promover la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en los procesos de contratación pública.

(57)

## ENMIENDA

Al Artículo 94

### De modificación al apartado 1

Se propone la siguiente redacción que modifica el apartado 1 del artículo 94, dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"1. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, **los órganos de contratación exigirán** la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de gestión medioambiental, harán referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Unión Europea, o a otros sistemas de gestión medioambiental reconocidos de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 de 25 de noviembre de 2009 o a otras normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales pertinentes de organismos acreditados*

## MOTIVACIÓN

El certificado EMAS es una declaración de conformidad con el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y, en consecuencia, de obligado cumplimiento.

(17)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 94, Apartado 1

De modificación

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 94, que tendrá la siguiente redacción:

“1. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, los órganos de contratación exigirán la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de gestión medioambiental, harán referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Unión Europea, o a otros sistemas de gestión medioambiental reconocidos de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1221/2009 de 25 de noviembre de 2009 o a otras normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales pertinentes de organismos acreditados.”

## **MOTIVACIÓN:**

El certificado EMAS es una declaración de conformidad con el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y, en consecuencia, de obligado cumplimiento.

(50)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 98, Apartado 1

De adición

Se propone la adición de un nuevo párrafo tercero al apartado 1 del artículo 98, que tendrá la siguiente redacción:

"1. /.../

En estos casos, la garantía definitiva constituida a favor de la entidad absorbida, podrá, a criterio de la entidad otorgante de la misma, ser renovada o reemplazada por una nueva garantía que se suscriba por la nueva entidad que resulte de la fusión, teniendo en cuenta las especiales características del riesgo que constituya dicha entidad. "

## **MOTIVACIÓN:**

En los supuestos que se contemplan en este precepto de fusión de entidades, hay que tener en cuenta la repercusión que tendría esta fusión a los efectos del seguro de caución, por lo que en estos casos, se debería prever la posibilidad de, o bien renovar la garantía existente o bien reemplazar la misma por una nueva garantía a favor de la nueva entidad que resulte de la fusión.

A estos efectos hay que tener presente, los elementos de técnica aseguradora ya que los contratos de seguro se suscriben en unas determinadas condiciones teniendo en cuenta las características especiales del riesgo y del tomador del seguro por lo que las condiciones podrán cambiar, modificando, por ejemplo el importe de la prima, o bien incrementándola o bien disminuyéndola, en función de las características del nuevo tomador del seguro, es decir, la entidad absorbente. Asimismo, también podría darse el caso de que la entidad aseguradora con quien la entidad absorbida tenía suscrito el contrato de seguro de caución, no estuviera interesada en continuar su relación contractual con la nueva entidad, por lo que en este supuesto habría que recurrir a otra aseguradora para suscribir el riesgo.

Todo ello, en función de lo que se establece en los arts. 11 y 12 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, en el sentido de que en los casos de agravación del riesgo (supuesto que podría corresponderse con un cambio en el tomador del seguro), se deberían comunicar al asegurador estas circunstancias para que en su caso se modifiquen las condiciones del contrato de seguro o se rescinda el mismo, todo ello cumpliendo los plazos legales contemplados en dichos preceptos.

Por todo ello, se propone, que en estos supuestos de fusión que signifiquen un cambio del contratista al que se le hubiera adjudicado inicialmente el contrato, la aseguradora pudiera recurrir a las opciones mencionadas en función del cambio de titularidad del riesgo.

(50)



## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 99**

De adición al apartado 1 después de la primera línea.

Se propone la siguiente redacción para incluir un párrafo nuevo después de la primera línea del apartado 1 del artículo 99 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado “favoreciendo la compra pública social y la compra ética verde. No obstante, en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten, se podrá definir el objeto en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única.”*

## **MOTIVACIÓN**

La “innovación” es uno de los ejes de “Estrategia Europa 2020” para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, donde se considera la contratación pública una herramienta crucial para impulsar la innovación, que, a su vez, es de gran importancia para el crecimiento futuro de Europa. Con ese objetivo las nuevas Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación y concesiones, señalan que los poderes públicos deben hacer la mejor utilización estratégica posible sobre la contratación pública para fomentar la innovación, como medio para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, a la vez que impulsar nuevas ideas, plasmarlas en productos y servicios innovadores y, de ese modo, fomentar un crecimiento económico sostenible. En la Directiva 2014/23, sobre concesiones, se apela a la necesidad de introducir la innovación en este tipo de contratos de concesión administrativa.

Potenciar la innovación en los bienes, servicios y suministros que contrata el sector público requiere no sólo facilitar con una regulación precisa y sencilla figuras específicas como la compra pública de innovación o la compra pública pre-comercial, sino permitir introducir aspectos que incentiven a los licitadores la presentación de ofertas con componentes de innovación tecnológica, social y/o ambiental, en todas las fases de la contratación, desde la definición del objeto de los contratos, a los criterios de valoración de las ofertas y a la ejecución de los contratos.

**(8, 36 y 53)**

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 99.3**

**De modificación del apartado 3, segundo párrafo**

Se propone la siguiente redacción de modificación del segundo párrafo del apartado 3 en el artículo 99 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

#### **3. (...)**

*"Cuando el órgano de contratación decida no dividir en lotes el objeto del contrato o decida no calificar como reservado ninguno de los lotes, deberá justificarlo debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras o de concesión de servicios."*

## **MOTIVACIÓN**

Se propone por medio de la presente enmienda que las administraciones públicas y los poderes adjudicadores tengan siempre en cuenta la posibilidad de clasificar alguno de los lotes como contratos reservados, bien para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción, como -en su caso y para aquellos contratos específicos y pertinentes- para entidades de economía social, solidaria o sin ánimo de lucro.

De este modo, a través de dos simples modificaciones, se estará consiguiendo que todos los órganos de contratación deban conocer la figura de los contratos reservados, así como la obligatoriedad de reservar lotes de los contratos, y se les impone por una vía discreta el tener que cotejar los objetos contractuales con los sectores de actividad en los que operan dichas entidades, para finalmente, dilucidar si es pertinente calificar algún lote como reservado, y en caso contrario tener que justificarlo.

(13)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 99.4

De adición al apartado 4, incluir un punto (nuevo) c)

Se propone la siguiente redacción incluyendo un punto c) (nuevo) en el apartado 4 del artículo 99 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

**4. (...)**

***“c) Reservar alguno o algunos de los lotes para Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción o empresas de economía social o solidaria”.***

## **MOTIVACIÓN**

Los órganos de contratación deban conocer la figura de los contratos reservados, así como la obligatoriedad de reservar lotes de los contratos, y se les impone por una vía discreta el tener que cotejar los objetos contractuales con los sectores de actividad en los que operan dichas entidades, para finalmente, dilucidar si es pertinente calificar algún lote como reservado, y en caso contrario tener que justificarlo.

(13)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 99.4

De adición, creando un apartado d) (nuevo)

Se propone la inclusión de un apartado d) (nuevo) en el artículo 99.4 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

5. (...)

*“d) A efectos de las limitaciones previstas en las letras a) y b) anteriores, y en las uniones de empresarios, serán éstas y no sus componentes las consideradas candidato o licitador”.*

## **MOTIVACIÓN**

Mejora técnica para precisar que cada UTE es un candidato o licitador, por lo que las limitaciones previstas afectarían a las UTEs y no a sus componentes.

(5)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 100.1

De modificación

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 1 del artículo 100 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“1. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el importe de las prórrogas y las modificaciones previstas, salvo disposición en contrario.”*

## **MOTIVACIÓN**

Para determinar los procedimientos de adjudicación es necesario tener en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones previstas en los Pliegos, de forma que el importe real final se acomode al inicial que marcó el procedimiento y no se eludan las garantías establecidas para la adjudicación.

(36)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 100, Apartado 2

De adición

Se propone la adición de un inciso final, en el apartado 2) del artículo 100, que tendrá la siguiente redacción:

“2) /.../ En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios.”

## **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica. Tener en cuenta los salarios y costes laborales, determinados conforme las normas que emanan de la negociación colectiva, para fijar el presupuesto base de licitación.

(10)

### **ENMIENDA**

Al artículo 100

De adición, nuevo apartado 2 Bis

Se propone incluir un nuevo apartado 2 Bis en el artículo 100, con la siguiente redacción:

“2 bis.- Los órganos de contratación requerirán con carácter previo las siguientes evaluaciones:

1. Evaluación de la idoneidad de los costes o datos sobre los precios presentados por el contratista.
2. Evaluación de los procedimientos generales del contratista relacionados con las estimaciones de costes y la conformación del presupuesto para la oferta económica del contrato.
3. Evaluación de las estimaciones de costes del contratista relativas a la plantilla, que deberá reflejar los costes derivados de las normas legales y convencionales aplicables, los materiales y otros costes directos, así como los indirectos.
4. Evaluación de la razonabilidad de las previsiones económicas y de evolución de los costes presupuestados en el tiempo, cuando los contratos tienen un periodo largo de ejecución.
5. Evaluación y análisis del método de cálculo propuesto para la determinación del beneficio.
6. Comprobación de las estimaciones paramétricas de costes.”

### **MOTIVACIÓN:**

Se pretende con ello mayor seguridad para el órgano de contratación sobre la adecuación del presupuesto base de licitación, dotando de fiabilidad el sistema de control del contratista que garantice que éste no incurre en prácticas fraudulentas, así como dotar de consistencia la metodología aplicable al cálculo de costes y beneficio.

(72)

## ENMIENDA

Al artículo 101

De modificación

Se propone la modificación del artículo 101, que quedará con la siguiente redacción

«Artículo 101. Valor estimado.

1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será determinado como sigue:

a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.

b) En el caso de los contratos de **gestión de servicios públicos, concesión de obras y de concesión de servicios no públicos**, el órgano de contratación tomará el volumen total de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios.

2. En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta:

a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.

b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la cuantía de los mismos.

c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202, se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas.

3. Adicionalmente a lo previsto en el apartado anterior, en el cálculo del valor estimado de los contratos de **gestión de servicios públicos, concesión de obras y de concesión de servicios no públicos** se tendrán en cuenta, cuando proceda, los siguientes conceptos:

a) La renta procedente del pago de tasas y multas por los usuarios de las obras o servicios, distintas de las recaudadas en nombre del poder adjudicador.



b) Los pagos o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, concedidos al **contratista** por el poder adjudicador o por cualquier otra autoridad pública, incluida la compensación por el cumplimiento de una obligación de servicio público y subvenciones a la inversión pública.

c) El valor de los subsidios o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, procedentes de terceros a cambio de la ejecución del **contrato**.

d) El precio de la venta de cualquier activo que forme parte del **contrato**.

e) El valor de todos los **bienes**, suministros y servicios que el poder adjudicador ponga a disposición del **contratista**, siempre que sean necesarios para la ejecución de las obras o la prestación de servicios.

(...)

12. Cuando la realización de una obra, la contratación de unos servicios o la obtención de unos suministros destinados a usos idénticos o similares pueda dar lugar a la adjudicación simultánea de contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de dichos lotes.

Igualmente, cuando una obra o un servicio propuestos puedan derivar en la adjudicación simultánea de contratos de concesión de obras, de **concesión de servicios públicos** o de concesión de servicios **no públicos** por lotes separados, deberá tenerse en cuenta el valor global estimado de todos los lotes.»

Resto de apartados del artículo sin modificación.

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 101

De modificación, apartados 10 (primer párrafo) y 11 a) y b)

Se propone la modificación del primer párrafo del apartado 10 y la modificación del apartado 11 a) y b) del artículo 101, que tendrán la siguiente redacción:

“10 En los contratos de servicios en los que sea relevante la mano de obra el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación.

11. En los contratos de suministro o de servicios que tengan un carácter de periodicidad, o de contratos que se deban renovar en un período de tiempo determinado, se tomará como base para el cálculo del valor estimado del contrato alguna de las siguientes cantidades:

a) El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, en función de los cambios de cantidad o valor previstos para los doce meses posteriores al contrato inicial.

b) El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si este fuera superior a doce meses.”

## **MOTIVACIÓN:**

Se trata de prevenir eventuales maniobras por parte de empresas concurrentes orientadas a reducir de forma anormal o desproporcionada los precios de mercado y los costes vinculados al contrato en perjuicio de los derechos de los trabajadores y de la competencia.

(50)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 102**

#### **De supresión del último inciso del apartado 1**

Se propone la supresión del último inciso del apartado 1 del artículo 102 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El inciso que se propone suprimir es el siguiente:

*“(…) que en todo caso se indicará como partida independiente.”*

## **MOTIVACIÓN**

La razón de la supresión de dicho inciso es el hecho de que las prestaciones de asistencia social relativas a la protección de la infancia y la juventud, la asistencia de la tercera edad, la educación especial y asistencia a las personas con discapacidad, la asistencia a minorías étnicas, transeúntes y personas con cargas familiares no compartidas, la acción social comunitaria y familiar, la asistencia a ex reclusos, la reinserción social y prevención de la delincuencia, la asistencia a alcohólicos y toxicómanos y la cooperación al desarrollo, realizadas por entidades de carácter social, están exentas de IVA, según establece el artículo 20.8 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre.

Cuando dichas prestaciones son objeto de un contrato administrativo tal circunstancia deja en una peor situación a estas entidades exentas, toda vez que no pueden repercutir el IVA soportado por las prestaciones recibidas por proveedores para la ejecución del contrato.

Por consiguiente es correcto que el IVA se incluya en el precio del contrato, en unos casos será, cuando no se dé la exención descrita, para pagar el IVA que devengue la prestación contractual, en otros, cuando se dé la exención señalada para que la entidad de carácter social se resarza del IVA soportado. Para este caso la parte correspondiente al IVA no debería constar como partida independiente.

(32)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 102, Apartado 3

De Adición

Se propone la adición, en el apartado 3 del artículo 102, de un inciso final, que tendrá la siguiente redacción:

"3) /.../ En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios."

### **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica. Tener en cuenta los salarios y costes laborales, determinados conforme las normas que emanan de la negociación colectiva, para fijar el precio.

(10)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 103.1

De modificación al finalizar el segundo párrafo

Se propone incluir un nuevo texto de modificación después del segundo párrafo del artículo 103.1 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*No cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos, "salvo en el caso en que se produzca una modificación de los costes laborales, tributarios o de otra índole, que deba soportar el adjudicatario con causa en la publicación de normativa de ámbito estatal o autonómico que imponga dichos costes con posterioridad a la adjudicación, así como las variaciones de los costes de precios regulados por normativa estatal en cuyo caso procederá una revisión no periódica por el impacto que tenga dicha normativa, conforme a la memoria económica contemplada en el artículo 5 de la Ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía española."*

## **MOTIVACIÓN**

La enmienda tiene como objetivo no eliminar cualquier posibilidad de realizar una revisión periódica no predeterminada o no periódica en la revisión de precios del sector público. Establecer esta posibilidad respecto a nuevos costes ante el acaecimiento de algún hecho que lo justifique dimanante de modificaciones legales y la previsión del artículo 5, de la Ley de desindexación exigiendo un estudio y memoria económica ya supone una garantía de que tales revisiones, extraordinarias se realizarán ante supuestos específicos. El excluir tal posibilidad supone que queda cerrada la puerta para cualquier desarrollo reglamentario y ante por ejemplo la repercusión de un impuesto de nueva creación por parte del adjudicatario, que debería bien no se considerada revisión de precio, bien contemplarse como caso excepcional.

(5)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 103

De modificación, de los apartados 1 y 2

Se propone la modificación de los dos primeros apartados (1 y 2) del artículo 103 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

“1. Los precios de los contratos del sector público podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada, revisión periódica no predeterminada, y revisión no periódica, en los términos establecidos en este Capítulo.

Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean abonadas por la Administración o por los usuarios.

2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se refiere al artículo 4 de la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro, concesión de obras, concesión de servicios y en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el real decreto anteriormente citado.

En estos mismos contratos la revisión periódica no predeterminada y la revisión no periódica se podrá realizar siempre que se justifique en una memoria económica específica para este fin de conformidad con lo establecido en el Real Decreto al que se refieren el artículo 5 de la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.”

## **MOTIVACIÓN**

Estas modificaciones tienen por objeto:

- Acomodar la regulación de la revisión de precios periódica no predeterminada y no periódica a lo establecido en el artículo 5 y 4 de la Ley de desindexación de la economía española. Ello tiene por objeto evitar que determinadas concesiones y actividades no sujetas a la legislación de contratos del sector público (por ejemplo,

las concesiones demaniales) tengan, sin justificación alguna, un régimen jurídico diferente que las concesiones de obra o las concesiones de servicios públicos sometidas a la LCSP.

- Aclarar a las múltiples Administraciones, instituciones públicas, entes y organismos llamados a aplicar e interpretar esta norma los tipos de contratos a los que resulta de aplicación el régimen de revisión de precios. No tiene justificación que los únicos tipos de contratos mencionados legalmente a estos efectos sean el contrato de obras y el contrato de suministro de fabricación, sin hacer alusión específicamente al contrato de concesión de obra, concesión de servicio, sin perjuicio de los restantes contratos en los que la recuperación de la inversión tenga un plazo superior a cinco años.
- Dejar claro que la revisión periódica no predeterminada y la revisión no periódica se permitirán únicamente si así se justifica en una memoria y de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de desindexación en el que se regula esta modalidad de revisión. *(Conviene destacar que el Consejo de Ministros del pasado 3 de febrero ya ha aprobado el Real Decreto de desarrollo de la ley de desindexación y publicado el día 4 de febrero).*
- No parece objetivo que servicios públicos locales esenciales (como los del sector del agua urbana) no puedan revisar los precios para adaptarlos a la realidad de los costes garantizando sus sostenibilidad. Las revisiones de estos servicios se han venido haciendo a través de procedimientos de transparencia de costes como los que contempla la Ley de desindexación en el caso de revisiones periódicas no predeterminadas y revisiones no periódicas, y que ahora, por causas no justificadas se pretende restringir a revisiones que no responden a la realidad de la evolución de los costes de los servicios. Como ejemplo, cabe señalar que en las revisiones de precios que prevé el proyecto de ley no se permite repercutir la evolución de los salarios resultante de la negociación colectiva, limitándola a la de la variación de los de la función pública. Deberían admitirse, pues, al menos en el caso de servicios públicos esenciales (como los servicios del ciclo integral del agua urbana), las revisiones periódicas no predeterminadas y no periódicas.
- Aclarar completamente, para facilitar la interpretación y aplicación de la LCSP por todas las Administraciones públicas y los funcionarios a su servicio, que las revisiones de precios, periódicas y no periódicas, constituyen una técnica jurídica nítidamente diferente a la establecida históricamente en la legislación de contratos para garantizar el mantenimiento del equilibrio económico-financiero de las concesiones, lo que puede realizarse mediante la revisión extraordinaria del precio del contrato.

(64 y dos del 7)

## **ENMIENDA**

Al artículo 103

De adición, párrafo nuevo

Se añade un tercer párrafo al apartado 2 al artículo 103, con la siguiente redacción:

“La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, no será de aplicación a los contratos de concesión de obras y servicios con una duración igual o superior a cinco años. Para estos contratos, los pliegos introducirán fórmulas de revisión periódica y predeterminada de precios que sí podrán referirse a índices de precios o a las fórmulas que los contengan.”

## **MOTIVACIÓN**

La complejidad, duración y el volumen de inversión requeridos en los contratos de concesión hace necesaria la revisión de precios. La aplicación plena de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación a este tipo de contratos disuade a una tipología de inversores relevantes en este ámbito, como fondos de pensiones o similares, de la participación en estos contratos. Uno de los objetivos de estas entidades es la inversión a largo plazo protegida de la inflación. La eliminación de esta característica en los contratos de concesión disminuye una de las fuentes de inversión con más voluntad y liquidez actualmente para financiar la construcción o mantenimiento de infraestructuras. Se trata de un párrafo nuevo que no entra en contradicción con otras enmiendas en el mismo apartado del artículo 103.

(24)



## **ENMIENDA**

Al Artículo 103.5

De modificación

Se propone modificar el artículo 103.5 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión."*

## **MOTIVACIÓN**

La previsión del precio de los combustibles es acertada pero no cubre todos los suministros energéticos que se ven afectados por las incertidumbres del mercado, como es el resto de fuentes de energía.

(5)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 103

De adición, apartado 10 (nuevo)

Se propone añadir un apartado 10 (nuevo) del artículo 103 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“10. Lo establecido en este artículo y en la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de la posibilidad de mantener el equilibrio económico en las circunstancias previstas en los artículos 268 y 288, mediante una revisión extraordinaria del precio del contrato”.*

## **MOTIVACIÓN**

Dejar claro que la revisión periódica no predeterminada y la revisión no periódica se permitirán únicamente si así se justifica en una memoria y de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de desindexación en el que se regula esta modalidad de revisión. *(Conviene destacar que el Consejo de Ministros del pasado 3 de febrero ya ha aprobado el Real Decreto de desarrollo de la ley de desindexación y publicado el día 4 de febrero).*

(64)

### ENMIENDA NÚM.

Al artículo 107

De modificación

Se propone la modificación parcial del artículo 107, que quedará con la siguiente redacción

“Artículo 107. Exigencia de la garantía definitiva.

1. (...)

No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva, justificándolo adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, especialmente en el caso de suministros de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio, así como en los contratos privados de la Administración a los que se refieren los puntos 1.º y 2.º de la letra a) del apartado 1 del artículo 25 de la presente Ley. Esta exención no será posible en el caso de contratos de obras, de concesión de obras ni de concesión de servicios, **tengan la consideración de públicos o no.**

2. (...)

3. (...)

4. En la concesión de obras y en la concesión de servicios, **tengan la consideración de públicos o no**, el importe de la garantía definitiva se fijará en cada caso por el órgano de contratación en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en función de la naturaleza, importancia y duración de la concesión de que se trate.

5. (...)

### MOTIVACIÓN:

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 107**

#### **De modificación, apartado 1**

Se propone la siguiente redacción del apartado 1 del artículo 107 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

“1.

(...)

*No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva, justificándolo adecuadamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, especialmente en el caso de suministros de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio, contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, así como en los contratos privados de la Administración a los que se refieren los puntos 1º y 2º de la letra a) del apartado 1 del artículo 25 de la presente Ley. Esta exención tieneón no será posible en el caso de contratos de obras ni de concesión de obras.”*

## **MOTIVACIÓN**

Toda vez que la garantía tiene como finalidad responder de los eventuales incumplimientos del contratista (artículo 110 del Proyecto de Ley) parece que los únicos contratos en los que, en todo caso, sería necesario constituir garantía deberían ser aquellos que tienen como objeto la construcción de obras o dotación de infraestructuras en los que la garantía de la correcta de ejecución de las obras es importante; por lo tanto los contratos de obras y de concesión de obra pública, no las concesiones de servicios.

Por otra parte, como ya se ha dicho, las directivas de 2014 reconocen la posibilidad de un régimen jurídico diferenciado a los contratos relativos a la prestación de los servicios sociales y, en general, de atención a las personas, lo que justificaría esta exención expresa para que la obligada constitución de la garantía no pueda constituir una barrera para la prestación de dichos servicios. En todo caso, se deja al órgano de contratación que decida la procedencia o no de la constitución de la garantía.

(32)

### **ENMIENDA**

Al artículo 107

De modificación

Se modifica el segundo párrafo del apartado 2 al artículo 107, quedando como sigue:

“A estos efectos se considerará que constituyen casos especiales aquéllos contratos en los que, debido al riesgo que en virtud de ellos asume el órgano de contratación, por su especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato, resulte aconsejable incrementar el porcentaje de la garantía definitiva ordinaria a que se refiere el apartado anterior, lo que deberá acordarse mediante resolución motivada. En particular, se podrá prever la presentación de esta garantía complementaria para los casos en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incurso en presunción de anormalidad.”

### **MOTIVACIÓN**

Es justificado y recomendable que la nueva Ley aclare expresamente que, entre los casos en los que «por su especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones de cumplimiento» el contrato puede suponer un mayor riesgo para el órgano de contratación, se incluyen los contratos adjudicados a favor de una oferta que estuvo incuso en presunción de anormalidad

(24)

### ENMIENDA NÚM.

Al artículo 108

De modificación

Se propone la modificación del artículo 108, que quedará con la siguiente redacción

«Artículo 108. Garantías definitivas admisibles.

1. Las garantías definitivas exigidas en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas podrán prestarse en alguna o algunas de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

2. Cuando así se prevea en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la garantía definitiva en los contratos de obras, **gestión de servicios públicos**, suministros y servicios, así como en los de concesión de servicios **no públicos** cuando las tarifas las abone la administración contratante, podrá constituirse mediante retención en el precio. En el pliego de cláusulas administrativas particulares se fijará la forma y condiciones de la retención.

3. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante medios electrónicos.»

**MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.  
Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 113

De adición, apartado 3 (nuevo)

Se propone la siguiente redacción añadiendo el apartado 3 (nuevo) en el artículo 113 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

***“3. En caso de concurso, los créditos derivados de las obligaciones ex lege o los surgidos en virtud de actos administrativos tendrán la consideración de créditos con privilegio general conforme lo establecido en el art. 91.4 LC”.***

## **MOTIVACIÓN**

El precepto otorga a la Administración contratante una preferencia sobre “cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que derive su crédito”. Lo dispuesto en este precepto rompe las reglas y principios que subyacen en los Artículos 90 LC (créditos con privilegio especial) y 91 LC (créditos con privilegio general).

Lo primero que hay que dilucidar es qué se quiere decir cuando se confiere al acreedor una preferencia sobre cualquier otro acreedor sea cual fuere la naturaleza y el título del que derive su crédito. Parece casi dar a entender que los créditos públicos estarían incluso al margen del sistema de clasificación de créditos configurándose como una suerte de créditos “superprivilegiados”. Por su parte, el artículo 91.4 LC que se ocupa de los créditos tributarios y otros créditos de derecho público, viene a atribuir una preferencia, de carácter general y no especial. Encontraríamos aquí un conflicto entre la norma de contratación pública y lo previsto en la LC. Lo dispuesto en el artículo 113 PLCSP unido a que ciertas disposiciones administrativas en materia de contratos pueden tener como consecuencia que un crédito -por las previsiones sobre garantías exigidas en la contratación pública- llegue a ser clasificado como crédito con privilegio especial, podría llevarnos a entender que los créditos derivados de los contratos son créditos con privilegio especial.

El nudo gordiano de la cuestión radica en la propia configuración que la Ley Concursal hace de los privilegios especiales conforme a la cual éstos han de recaer sobre un bien o derecho integrado en el patrimonio del deudor que luego dará lugar a la masa activa.

El Artículo 90 LC agrupa una serie de créditos de naturaleza heterogénea pero



respecto de los cuales se puede decir que constituyen todos ellos formas tradicionales de garantías reales constituidas sobre cosas o derechos junto con otros que resultan equiparables en virtud de los efectos que producen (créditos a favor de arrendadores sobre los bienes dados en arrendamiento financiero y créditos refraccionarios). Así, según dispone el Artículo 155 LC, el pago de estos créditos se ha de efectuar con cargo a los bienes y derechos afectos.

Por su parte, los Artículos 107 y siguientes del PLCSP se ocupan de las garantías prestadas por el contratista a favor del contratante público efectuadas para asegurar la correcta ejecución del contrato. Se establece la necesidad de que el contratista constituya una garantía de un 5% del importe de la adjudicación pudiendo el órgano de contratación, en casos especiales, establecer en el pliego de cláusulas que se preste una garantía adicional del importe de la adjudicación hasta alcanzar el 10% del precio del contrato (Artículo 107 PLCSP).

Las garantías reconocidas en la legislación de contratos pueden ser de distinto tipo. Se admite tanto la prestación de garantías personales como reales y, bajo ciertas condiciones, se admite la retención en el precio (Artículo 108 PLCSP).

A tenor de lo dispuesto en el Artículo 108 PLCSP, en algunos casos resultará difícil la materialización del privilegio especial al no mediar ningún bien o derecho integrado en el patrimonio del deudor sino la vinculación del patrimonio de un tercero que ha prestado garantía; tal es el caso de aquellas garantías que consistieran en un aval o un seguro de caución. En estos casos, la Administración lo que debería hacer es ejecutar el aval y la entidad de crédito insinuar su crédito en el proceso concursal que ya no merecería su calificación como privilegiado especial. Es decir, el reconocimiento del privilegio se ve vacío de contenido. No habría lugar a privilegio especial alguno por cuanto que no mediaría afección de un bien sino la vinculación del patrimonio de un tercero. En estos casos, los créditos merecerían la clasificación como créditos ordinarios en el concurso del contratista.

Si, por el contrario, la garantía consistiera en la constitución de un depósito en efectivo en la Caja General de Depósitos o en organismos autonómicos o entidades locales o, incluso, en los casos en que se practique la retención en el precio, debería entenderse que estamos también ante un crédito ordinario. Asimismo, si la garantía consiste en unos valores de Deuda Pública depositados en la Caja General de depósitos u organismos equivalentes de las administraciones autonómicas o locales, el privilegio se materializaría en esos valores gravados conforme lo establecido en el Artículo 90.1.5 LC.

Junto a estos supuestos en que lo que encontramos son créditos públicos calificados como ordinarios y, excepcionalmente, alguno privilegiado, existen otros supuestos en los que surgen créditos pero de carácter subordinado. En caso de extinción del contrato, los intereses devengados habrán de considerarse créditos subordinados al

amparo del art. 92.3 LC. Esta solución debe mantenerse con independencia del tipo de garantía que el contratista hubiera prestado. De la misma manera, los recargos de apremio ordinario tienen naturaleza sancionatoria y merecen, en consecuencia, su consideración como créditos subordinados tal y como el propio TC en su Sentencia 276/2000 de 16 de noviembre y el TS en sus Sentencias de 21 de enero de 2009 o de 30 septiembre 2010 han señalado.

La razón de esta subordinación parece clara. Si el deudor concursado ha cometido un acto sancionable, el cobro de la sanción como crédito ordinario perjudicaría al resto de los acreedores ordinarios –sancionándoles– razón por la cual, en la jerarquía de créditos se les subordina.

Existe pues una contradicción entre las normas de contratación pública con la normativa concursal. Todo ello lleva a considerar que los créditos públicos son créditos con privilegio general. Es decir, y por insistir, el privilegio especial que parece atribuir el art. 113 PLCSP se vería de otro modo vacío de contenido y choca frontalmente con el planteamiento que subyace en la regulación de los privilegios que hace la Ley concursal. Es por ello por lo que parece más razonable entender que estamos ante un crédito con privilegio general.

(33)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 115**

#### **De modificación, apartado 1**

Se propone la siguiente redacción del párrafo primero del apartado 1 del artículo 115 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“1. Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. Para ello podrán, por ejemplo, solicitar o aceptar del asesoramiento de terceros, que podrán ser expertos o autoridades independientes, colegios profesionales, o, incluso, operadores económicos activos en el mercado. A dichas actuaciones se les dará difusión a través del perfil de contratante y la Plataforma de Contratos del Sector Público a efectos de que pudieran tener acceso y posibilidad de realizar aportaciones todos los posibles interesados.”*

## **MOTIVACIÓN**

Se elimina a los representantes sectoriales (asociaciones profesionales) de la posibilidad de asesoramiento acogiendo una recomendación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.

Se consigna el perfil de contratante como instrumento de publicidad para toda la información contractual de los órganos de contratación, incluida también la precontractual.

**(14 Y 36)**

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 115**

#### **De modificación, apartado 1**

Se propone la siguiente redacción de modificación del apartado 1 en el artículo 115 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“1. Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. Para ello los órganos de contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser expertos o autoridades independientes, colegios profesionales, representantes sectoriales o, incluso, con carácter excepcional operadores económicos activos en el mercado. Sus nombres y las razones para su elección formarán parte del expediente público del contrato publicado en el perfil del contratante. A dichas actuaciones se les dará difusión en los boletines oficiales correspondientes a efectos de que pudieran tener acceso y posibilidad de realizar aportaciones todos los posibles interesados”.*

## **MOTIVACIÓN:**

Creemos que la regulación precisa de este tipo de consultas, además de ser necesaria, es muy valiosa para mejorar la información del órgano de contratación ante una licitación. Eso sí, como en el resto de procesos, este paso debe ser público.

(9)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 115.3

De adición al final del apartado 3

Se propone la siguiente redacción de adición al final del apartado 3 del artículo 115 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

#### **Art 115. Consultas preliminares del mercado.**

(...)

***“La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en su caso se tramite”.***

### **MOTIVACIÓN**

Aclara que la participación en la consulta no impide participar como licitador en el procedimiento de contratación subsiguiente.

(8)

### **ENMIENDA**

Al artículo 115

De adición, nuevo apartado 4 BIS

Se propone incluir un nuevo apartado 4 en el artículo 115, con la siguiente redacción:

(Nuevo) “4 BIS.- Los operadores económicos que asesoren a la Administración y las empresas a ellas vinculadas, no podrán participar dicha licitación, ni durante los dos años siguientes, en procesos de licitación vinculados o relacionados con el asesoramiento prestado a la Administración contratante”.

### **MOTIVACIÓN:**

Se propone que los operadores económicos que asesoren a la Administración y las empresas a ellas vinculadas, no puedan participar en dicha licitación (Sería conveniente fijar un periodo de incompatibilidad – un año o dos – para evitar que el asesoramiento en un proceso de información privilegiada para sucesivas contrataciones cuando tengan el mismo objeto), ya que van a contar con una mayor información a la hora de preparar la oferta. Esta enmienda va correlativa a las enmiendas anteriores presentadas por el GPS.

(72)

## **ENMIENDA**

### **Artículo 116**

#### **De modificación apartado 1**

Se propone modificar el apartado 1 del artículo 116 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley. Que deberá ser publicado en el perfil del contratante.”*

## **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica de la enmienda para poner en valor medidas de transparencia.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Artículo 116**

#### **De modificación del apartado 4**

Se propone modificar el apartado 4 del artículo 116 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“1. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido previamente o que las normas de desconcentración o el acto de delegación hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la aprobación del órgano competente. Esta resolución deberá ser objeto de publicación en el Perfil del contratante”.*

## **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica de la enmienda para poner en valor medidas de transparencia.

(53)



## **ENMIENDA**

Al artículo 118

De modificación

Se propone la modificación del artículo 118, que quedará con la siguiente redacción

«Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores.

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de **gestión de servicios públicos**, suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 227 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente solo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 233 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.»

## **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 118.1

De modificación

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 1 del artículo 118 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 227 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano encargado competente para la proponer la contratación en el que se recoja la perentoriedad de la contratación y la imposibilidad de acudir al procedimiento simplificado. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan”.*

## **MOTIVACIÓN**

Se incorpora el informe del órgano competente en el que se justifique lo perentorio de la necesidad a satisfacer y la imposibilidad de acudir al procedimiento simplificado sin que el servicio público sufra esta demora.

Hay que incorporar garantías que aseguren la limpieza de la utilización de la figura del contrato menor sin que sea únicamente una fórmula de huir de cualquier garantía de transparencia siempre que no se rebase determinado importe.

(36)

### **ENMIENDA**

#### **Artículo 118**

De adición, incluir un apartado 1 (Bis) nuevo

Se propone incluir el apartado 1 bis (nuevo) al artículo 118 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

Art. 118. (...)

*"1.bis. Con la periodicidad que se determine reglamentariamente, los contratos menores celebrados serán sometidos al control "a posteriori" de los órganos de fiscalización."*

### **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica.

(53)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 118

De adición, nuevo apartado 3

Se propone la inclusión de un apartado 3 (nuevo) del artículo 118 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

#### **Art. 118.3 (apartado nuevo)**

*“3. En el expediente se garantizará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación y el contratista no haya suscrito más contratos menores en la misma anualidad, lo que comprobará el responsable del contrato.”*

### **MOTIVACIÓN**

Mejora técnica del artículo.

(4)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 118

De adición, apartado 4 (nuevo)

Se propone la siguiente redacción para incorporar un apartado 4 (nuevo) en el artículo 118 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“4. Los contratos menores no podrán suponer la contratación de personal por parte de los poderes adjudicadores”.*

### **MOTIVACIÓN**

Con esta medida se pretende garantizar el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público y prevenir la utilización de figuras con finalidad diferente para configurar la plantilla de las entidades públicas

(33)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 118

De adición, apartado 5 (nuevo)

Se propone la siguiente redacción que añade un apartado 5 (nuevo) al artículo 118 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“5. En los contratos menores deberá publicarse en las Plataformas de contratos en donde se publiquen las licitaciones, en el plazo de un mes desde su firma, sus aspectos esenciales, esto es, el contratista, objeto, plazo de ejecución y precio.”*

## **MOTIVACIÓN**

Con la medida propuesta se pretende garantizar la transparencia en los contratos menores para mejorar la gestión pública y la buena administración. Es, además, un mecanismo indirecto de prevención de conductas contrarias a derecho. En consonancia con las enmiendas anteriores.

(33)

### **ENMIENDA NÚM.**

Al artículo 119

De modificación

Se propone la modificación del artículo 119, que quedará con la siguiente redacción

«Artículo 119. Tramitación urgente del expediente.

1. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.

2. Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, con las siguientes especialidades:

a) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes.

Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada impida cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo pondrán en conocimiento del órgano de contratación que hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo quedará prorrogado hasta diez días.

b) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad, salvo los siguientes:

1.º El plazo de quince días hábiles establecido en el apartado 3 del artículo 151, como período de espera antes de la formalización del contrato.

2.º El plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, que se podrá reducir de conformidad con lo indicado en la letra b) del apartado 3) del artículo 154.

3.º Los plazos de presentación de solicitudes y de proposiciones en los procedimientos restringido y de licitación con negociación en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, que se podrán reducir según lo establecido en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 159 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 162, según el caso.

4.º Los plazos de presentación de solicitudes en los procedimientos de diálogo competitivo y de asociación para la innovación en contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, no serán susceptibles de reducirse.

5.º El plazo de 6 días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, para que los servicios dependientes del órgano de contratación faciliten al candidato o licitador la información adicional solicitada, será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido.

La reducción anterior no se aplicará a los citados contratos cuando el procedimiento de adjudicación sea uno distinto del abierto o del restringido.

6.º Los plazos establecidos en el artículo 157 respecto a la tramitación del procedimiento abierto simplificado, de conformidad con lo señalado en el apartado 5 de dicho artículo.

Las reducciones de plazo establecidas en los puntos 2.º, 3.º y 5.º anteriores no se aplicarán en la adjudicación de los contratos de **gestión de servicios públicos**, concesiones de obras y concesiones de servicios **no públicos** sujetos a regulación armonizada cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación utilizado, no siendo los plazos a que se refieren dichos puntos, en estos contratos, susceptibles de reducción alguna.

c) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la formalización.»

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)



### **ENMIENDA**

Al Artículo 122, Apartado 2

De adición

Se propone la de adición en el apartado 2 del artículo 122, entre la expresión “en el segundo párrafo del artículo 212.1;” y la expresión “y las demás menciones requeridas por esta Ley”, de la siguiente redacción:

“1. /.../ la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación, /.../”

### **MOTIVACIÓN:**

Se trata de prevenir eventuales maniobras por parte de empresas concurrentes orientadas a reducir de forma anormal o desproporcionada los precios de mercado y los costes vinculados al contrato en perjuicio de los derechos de los trabajadores y de la competencia.

(50 y 45)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 122, Apartado 3

De adición

Se propone la adición en el apartado 3 del artículo 122 de un inciso final, que tendrá la siguiente redacción:

“2. /.../ Asimismo, para los casos de incumplimiento de lo prevenido en los artículos 130 y 199.”

### **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores y de los convenios colectivos de aplicación.

(57)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 125

De modificación, de la denominación del artículo

Se propone la siguiente redacción de modificación de la denominación del artículo 125 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“Artículo 125. Cuestión de calidad normativa”*

## **MOTIVACIÓN**

Las definiciones o aclaraciones sobre los términos empleados en una norma con rango de Ley deben unificarse y situarse todas al inicio de la norma, tal y como determina el Manual de Estilo aprobado en Consejo de Ministros en el año 2.005.

(36)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 126, Apartado 2

De supresión

Se propone la supresión del inciso final del apartado 2 del artículo 126, que tiene la siguiente redacción:

"2. /.../ siempre que estén vinculados al objeto del contrato y guarden proporción con el valor y los objetivos de este."

### **MOTIVACIÓN:**

Todo lo que defina la calidad final de la obra está relacionado con el objeto de la misma, que es realizar una obra correcta, de calidad, segura, respetuosa con el medio ambiente, etc.

(50)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 126.4

De supresión

Se propone la supresión del apartado 4 del artículo 126 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

### **MOTIVACIÓN**

Todo lo que defina la calidad final de la obra está relacionado con el objeto de la misma, que es realizar una obra correcta, de calidad, segura, respetuosa con el medio ambiente, etc.

(61)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 127**

De adición, se añade un apartado 7 (nuevo)

Se propone la siguiente redacción añadiendo un apartado 7 (nuevo) en el artículo 127 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“7. Los órganos de contratación que deseen adquirir obras, servicios o suministros con determinadas características medioambientales o sociales, podrán igualmente exigir en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución etiquetas de tipo social o de tipo medioambiental, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el presente artículo. Por ejemplo, etiquetas ecológicas, de comercio justo, de responsabilidad social, de igualdad de género, o las que garantizan el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo”.*

## **MOTIVACIÓN**

El artículo 127 del Proyecto de Ley regula la exigencia de etiquetas por los órganos de contratación. Si bien en el punto 2.a), así como el último párrafo del punto 2, señala que las especificaciones de la etiqueta deberán referirse a “criterios vinculados al objeto del contrato”.

La enmienda pretende aclarar su efectiva incorporación a los pliegos, ya que la vinculación al objeto del contrato ha sido en muchas ocasiones malinterpretada en su aplicación, de modo restrictivo y limitativo.

Precisamente por ello, tanto la Directiva 2014/24/UE en su artículo 67.3, como el Proyecto de Ley de Contratos en su artículo 145.2. se han ocupado de describir, ampliar y aclarar que la vinculación al objeto del contrato, comprende todo aquello que se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su caso, las obras, los suministros o los servicios; así como en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte de su sustancia material.

Por lo tanto, se desea incorporar un punto específico que señale de forma expresa y ejemplifique la inclusión de etiquetado social y medioambiental, máxime cuando las salvaguardas y requisitos establecidos en el artículo 127.2 garantizan la libre concurrencia y la no discriminación, y además, en último término, se permite la aportación de una etiqueta “equivalente”, o acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.

Resulta así oportuno explicitar y darle la importancia debida a todo el etiquetado social y ambiental, procurando un beneficio social y ecológico añadido en la prestación contractual, garantizando la igualdad de trato, y estableciendo de modo claro para los órganos de contratación la posibilidad de emplear prescripciones técnicas, criterios de adjudicación o condiciones de ejecución del contrato con referencia a dichos etiquetados.

(13)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 128.1

De modificación, primer párrafo del apartado 1

Se propone la modificación del primer párrafo del apartado 1 del artículo 128 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“1. Siempre que sea posible los órganos de contratación podrán exigirán que los operadores económicos proporcionen un informe de pruebas de un organismo de evaluación de la conformidad o un certificado expedido por este último, como medio de prueba del cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas, o de los criterios de adjudicación o de las condiciones de ejecución del contrato.*

*(...)*

*(...)”*

### **MOTIVACIÓN**

La única forma de hacer medible el cumplimiento de prescripciones técnicas en materiales para la obra, muchas veces consiste sólo en la certificación por terceros del cumplimiento de calidad, de cuestiones medioambientales, etc. y también en conformidad con la definición de prescripción técnica del Artº 125.

(61)



## **ENMIENDA**

Al artículo 129

De modificación

Se modifica el artículo 129, quedando como sigue:

“Artículo 129. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales.

1. El órgano de contratación podrá señalar en el pliego el organismo u organismos de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato.

2. Cuando se facilite la información a la que se refiere el apartado 1, el órgano de contratación solicitará a los licitadores o a los candidatos en un procedimiento de adjudicación de contratos que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente.

Esto no obstará para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 147 sobre verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados.”

## **MOTIVACIÓN**

La obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad es una obligación legal, plenamente aplicable y vigente que debe ser imperativamente cumplida, suponiendo su incumplimiento una prohibición de contratar, por lo que resultará muy beneficioso para los propios licitadores que se informe a los mismos sobre el organismo u organismos en que puedan completar la información que requieran a tales efectos.

(43, 3, 36, 22 y 26)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 130

De adición

Se propone añadir un nuevo párrafo al artículo 130 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“En caso de que una administración pública decida prestar directamente un servicio, que hasta la fecha venía siendo prestado por un agente económico privado, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal o el convenio colectivo de aplicación”.*

### **MOTIVACIÓN**

Aportar seguridad jurídica a los licitadores, que en el caso de que una Administración tome una decisión unilateral como es la internalización de lo que hasta la fecha había sido un servicio externo, se encuentran con la obligación de asumir los elevados costes de finiquitar al personal que hasta la fecha prestaba el servicio. Se trata simplemente de aplicar a las administraciones públicas las mismas normas de subrogación que tienen que aplicar los operadores privados.

(32)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 130

De modificación

Se propone la modificación del último párrafo del artículo 130, que tendrá la siguiente redacción:

“Artículo 130. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.

/.../

*Asimismo, el pliego de cláusulas administrativas particulares siempre contemplará la obligación del contratista que finalice la ejecución de un servicio de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por una subrogación, así como de las cotizaciones a la seguridad social devengadas de aquellas, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda al nuevo contratista, aun en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los nuevos salarios, deberá proceder a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos. De no cubrirse íntegramente las cuantías debidas a los trabajadores, y acreditarse un indebido cumplimiento de la obligación a que alude el artículo 199 de esta Ley, los órganos de contratación asumirán subsidiariamente la obligación de pago de dichos salarios y cotizaciones sociales.”*

## **MOTIVACIÓN:**

En primer lugar, se considera inadecuada la referencia al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, a la luz de la Sentencia 276/2016 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que establece, con claridad, y la aplicación prevalente de lo dispuesto en las limitaciones de responsabilidad establecidas en los convenios colectivos sectoriales.

En segundo lugar, por razón de técnica legislativa, entendemos que es preciso aclarar adicionalmente que la responsabilidad por el impago de los salarios planteada por el legislador, le compete, efectivamente a la empresa que cesa en la ejecución de los servicios. Es preciso añadir, en el contexto de un reforzamiento de la lucha contra el

fraude, el impago de las cotizaciones a la seguridad social a la responsabilidad asumida por la empresa que cesa en la ejecución de los servicios.

En tercer lugar, y muy especialmente, es un objetivo esencial del legislador comunitario, acentuar la exigencia de velar por una adecuada ejecución de los servicios. El artículo 199 del proyecto de ley, recoge literalmente el contenido del artículo 18 de la Directiva. Sin embargo, al amparo del modelo francés, es menester atribuir una responsabilidad a la administración contratante ante una insuficiente adopción de medidas pertinentes para velar por la adecuada ejecución. En este sentido, sería esencial que, con carácter subsidiario a la responsabilidad que corresponde al contratista que no cumple con sus obligaciones con los trabajadores, cuando la Administración tenga una responsabilidad "in vigilando", se le atribuya una responsabilidad subsidiaria frente a dichos impagos, exonerando al nuevo contratista de toda responsabilidad frente a los mismos.

(10)

### **ENMIENDA**

Al artículo 130

De modificación, primer párrafo

Se propone modificar el primer párrafo del artículo 130, con la siguiente redacción:

*“Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el presente artículo.”*

### **MOTIVACIÓN:**

Resulta necesario contemplar en este Artículo de la ley, que recoge la información que deberá facilitarse cuando proceda la subrogación de personal, todos los supuestos por los que dicha subrogación puede darse. Por tanto, a los supuestos en los que la subrogación la imponga una norma legal o un convenio colectivo habrá que sumarle otros acuerdos de negociación colectiva de eficacia general (como los derivados del EBEP) y aquellos casos en los que así lo haya decidido, como medida de fomento de la estabilidad en el empleo, el correspondiente adjudicador.

(72)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 130

De adición

Se propone la adición de un nuevo párrafo final al artículo 130, que tendrá la siguiente redacción:

*“/.../*

*En los supuestos de subrogación de personal, ya fuere porque se imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse, o así estuviese establecido por convenio colectivo sectorial, se incorporarán, al menos, los listados de personal objeto de subrogación con la indicación del convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto año de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a subrogar.”*

## **MOTIVACIÓN:**

La evaluación de costes laborales de la plantilla a subrogar a que se refiere este precepto debería ser solicitada por el órgano de contratación al contratista actual en el momento de iniciar el nuevo expediente de contratación y ser aportado junto con la memoria. Está enmienda de adición es complementaria a la enmienda anterior.

(10)

### **ENMIENDA**

Al artículo 130

De modificación, párrafo cuarto

Se propone modificar el cuarto párrafo del artículo 130, con la siguiente redacción:

“Así mismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, el pliego de cláusulas administrativas particulares contemplará la obligación del contratista de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquéllos sean subrogados por el nuevo contratista. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.”

### **MOTIVACIÓN:**

La norma debe garantizar el cumplimiento de las condiciones de los contratos de los trabajadores afectados por la subrogación, de modo que, cuando se produzca un impago de salarios, la Administración deberá proceder en todos los casos a la retención de las cantidades debidas al contratista. Y las obligaciones de subrogación pueden nacer, no solo de norma legal o convenio colectivo, sino también de otros acuerdos de negociación colectiva de eficacia general que no necesariamente tienen la forma de convenio colectivo pero si despliegan iguales efectos legales.

(72)

### **ENMIENDA**

#### **Al Artículo 131**

De modificación, apartado 1

Se propone modificar el apartado 1 del artículo 131 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*"Sin perjuicio de las especialidades que para determinados contratos contemple la presente ley, los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las normas de la presente sección."*

### **MOTIVACIÓN**

Una de la previsiones relevantes de las directivas de 2014 es la de posibilitar un régimen diferenciado para los contratos referidos a los servicios sociales, en especial en lo que concierne al procedimiento de adjudicación de dichos contratos (artículos 74 y siguientes de la DCP y artículo 19, en relación con los artículos 31, apartado 3; 32; 46 i 47, todos ellos de la DC.), por ello parece conveniente que cuando se regulen con carácter general los procedimientos de adjudicación de los contratos se contemple dicha cláusula de salvaguarda de la regulación especial que las directivas contemplan para los contratos referidos a los servicios sociales.

(32)



### **ENMIENDA NÚM.**

Al artículo 131

De modificación, apartado 2

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 131, que quedará con la siguiente redacción

“Artículo 131. Procedimiento de adjudicación.

1. (...)

2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, **tengan la consideración de públicos o no**, que se adjudicarán mediante este último procedimiento”

En los supuestos del artículo 166 podrá seguirse el procedimiento negociado sin

### **MOTIVACIÓN:**

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Artículo 131.2**

#### **De modificación**

Se propone modificar el apartado 2 del artículo 131 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

***“2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento o mediante el procedimiento de negociación en aquellos casos en los que se cumplan los supuestos previstos en esta ley.***

***Los poderes adjudicadores podrán reservar a determinadas organizaciones el derecho de participación en procedimientos de adjudicación de contratos públicos exclusivamente en el caso de los servicios sociales, culturales y de salud sujetos a regulación armonizada incluidos en el Anexo IV.***

*En los supuestos del artículo 166 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en los casos previstos en el artículo 165 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con negociación y en los indicados en el artículo 175 podrá emplearse el procedimiento de asociación para la innovación”.*

## **MOTIVACIÓN:**

Como servicios especiales que son, resulta positivo que el procedimiento de adjudicación no se ajuste a la regla general de acudir al procedimiento abierto, sino al restringido, pero tampoco parece que haya motivo para que el poder adjudicador pueda acudir en ocasiones al procedimiento con negociación si se dan supuestos del art. 165 o 166 del proyecto.

Por otra parte, en cuanto a los contratos reservados de servicios sociales, están amparados por el art. 77 de la Directiva siempre a favor de entidades que, en esencia, actúen sin ánimo de lucro y reinviertan los beneficios obtenidos. Además, esta reserva ha sido amparado por relevante jurisprudencia comunitaria: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 (asunto C-113/13, as. *CroceRossa Italiana y otros*) o Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de enero de 2016 (asunto C-50/14).

Asimismo ha de tenerse en consideración que en la disposición adicional cuarta del Texto Refundido actual, se contempla la reserva de contratos también a favor de entidades sin ánimo de lucro en general, algo que ha desaparecido del texto del proyecto.

Sí se mantiene – en la disposición adicional cuarta – la referencia a los contratos reservado referidos a los centros especiales de empleo y empresas de inserción, lo cual se considera positivo y adecuado a lo previsto en la normativa comunitaria, por lo que no parece que haya razón para no incluir a las entidades sin fin de lucro.

(63)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 131

De adición incorporando como apartado nuevo el 6

Se propone la siguiente redacción en el artículo 131 incorporando el número 6 como apartado nuevo, dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“6. En la adjudicación de los contratos relativos a servicios de Arquitectura, los órganos de contratación podrán ponderar criterios a fin de propiciar la participación de profesionales jóvenes y de entidades o sociedades de profesionales de dimensiones reducidas.”*

### **MOTIVACIÓN**

Parece oportuno establecer esta previsión general -en la línea como se hace en el ordenamiento jurídico de Alemania-, que permita establecer alguna medida de estímulo o de incentivo en las bases de los concursos y pliegos de condiciones de las licitaciones, que propicien la participación y el acceso de jóvenes profesionales en la contratación pública, así como a entidades de colaboración entre profesionales de dimensiones pequeñas, en línea con la propia Directiva 2014/24/UE, que hace una apuesta decidida por adaptar la contratación pública a las PYMEs.

(18)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 132, Apartado 1

De adición

Se propone la adición, en el apartado 1 del artículo 132, de un inciso final, que tendrá la siguiente redacción:

“1. /.../ En ningún caso, podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación salvo en los contratos reservados para entidades recogidas en la Disposición Adicional Cuarta.”

## **MOTIVACIÓN:**

Esta propuesta se apoya en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, que está en vigor en España desde el 18 de Abril de 2016.

En el considerando 114 de dicha norma se indica que “las normas de la presente Directiva tienen en cuenta este imperativo al imponer solo la observancia de los principios fundamentales de transparencia e igualdad de trato y al asegurar que los poderes adjudicadores puedan aplicar, para la elección de los proveedores de servicios, criterios de calidad específicos” y añade “los Estados miembros y los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos esos servicios u organizar los servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación”.

Con esta redacción se está dejando clara la garantía del principio de igualdad de trato entre todas las entidades, sin diferenciar entre sus formas jurídicas, y estableciendo criterios de calidad en la elección de los proveedores. Es decir, que no sitúa el foco en el tipo de entidad que debe prestar el servicio sino que fija la atención en la calidad ofrecida por la misma. En este contexto, por tanto, la titularidad del servicio o el destino de los excedentes económicos de su trabajo no garantizan per se ningún nivel de adecuación a las necesidades del objeto del contrato.

Si bien parece lógica la reserva de contratos recogida en la Disposición Adicional Cuarta para facilitar la inclusión laboral de personas con especiales problemas para

lograr un empleo estable, se hace necesario recoger en los principios de igualdad, transparencia y libre competencia de la Ley, artículo 132, esta aclaración general que evite cualquier tipo de duda respecto a las excepciones que vienen marcadas en la Ley.

Por ello, consideramos imprescindible el que quede garantizado el principio de igualdad y de no discriminación que exige la Directiva de referencia con la inclusión de esta adición en el artículo 132 y con la referencia expresa de que no se pueda limitar la participación por la forma jurídica de la entidad o la existencia del ánimo de lucro, sin perjuicio de que sea desarrollada de manera reglamentaria posteriormente.

(50)

## ENMIENDA

Al Artículo 133

De modificación al apartado 2

Se propone la siguiente redacción que modifica el apartado 2 del artículo 133 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"2. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor **que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo**".*

## MOTIVACIÓN

El artículo 133.2 del borrador de anteproyecto de la Ley, de forma idéntica al artículo 140.2 del texto vigente del TRLCSP, establece que el contratista debe respetar la confidencialidad de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de la información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

La redacción propuesta contradice los principios jurídicos aplicables a las obligaciones contractuales, que declaran nulos los vínculos perpetuos.

Dado que nuestro Derecho es contrario a la perpetuidad de las obligaciones, que considera contraria a la libertad empresarial y atentatoria de los principios esenciales que configuran la naturaleza jurídica de la relación obligatoria, cualquier infracción de este límite provoca la nulidad de la obligación perpetua y la de cuantas prestaciones dependen de ella, pudiendo llegar, incluso, a anular el vínculo contractual completo en aquellos casos en que la perpetuidad afecta a toda la relación contractual.

Además, el establecimiento como perpetua de la obligación de confidencialidad da lugar a cargas económicas permanentes para la empresa, que resultan desproporcionadas, ya que le obligan a establecer a su coste medidas de control que permitan mantener la confidencialidad *ad aeternum*.

Por ello, entendemos que resulta necesario establecer que si el órgano de contratación considera necesario ampliar el plazo de cinco años establecido por defecto, deberá especificar el plazo concreto de esta obligación de confidencialidad.

(19)



### ENMIENDA

Al artículo 134

De modificación, apartado 1

Se propone la modificación del artículo 134, que quedará con la siguiente redacción

“Artículo 134. Anuncio de información previa.

1. Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, **gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministros o servicios que, estando sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo a que se refiere el apartado 5 del presente artículo”.

### MOTIVACIÓN:

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 134.2

De modificación al apartado 2

Se propone la siguiente redacción de modificación del apartado 2 del artículo 134 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“2. Los anuncios de información previa a que se refiere el apartado anterior se publicarán, con el contenido establecido en el Anexo III.A, a elección del órgano de contratación, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el perfil de contratante del órgano de contratación a que se refiere el artículo 63, siempre que en este último caso suponga una publicación simultánea en una Plataforma de Contratación estatal y autonómica”.*

## **MOTIVACIÓN**

Hay que reforzar las obligaciones de publicidad activa del órgano de contratación forzando a que los anuncios si son publicados en su perfil del contratante se simultaneen con la publicación en una Plataforma de carácter más general que aúne perfiles y haga posible el conocimiento por parte de futuros licitadores, objetivo que resultaría complicado alcanzar si los posibles interesados en concurrir a procedimientos de contratación tuvieran que consultar los más de 30.000 perfiles de contratación existentes en nuestro país.

(36)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 135

De modificación, primer párrafo del apartado 1

Se propone la siguiente redacción de modificación del primer párrafo del apartado 1 en el artículo 135 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“1. El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicarán en el perfil de contratante. En los contratos celebrados por la Administración General del Estado o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas, el anuncio de licitación se publicará además en el Boletín Oficial del Estado.  
(...)”*

### **MOTIVACIÓN:**

Pasa de obligar a publicar en el BOE las licitaciones de la Administración General del Estado (AGE), o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas, a hacerlo solo con la AGE. Nuestra propuesta pasa por volver a la redacción anterior.

(9)

## **ENMIENDA**

Al artículo 135

De modificación, apartados 2 y 5

Se propone la modificación de los apartados 2 y 5 del artículo 135, que quedará con la siguiente redacción:

Artículo 135. Anuncio de licitación.

(...)

"2. Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos para la adjudicación de contratos de obras, **gestión de servicios públicos**, suministros, servicios, concesiones de obras y concesiones de servicios **no públicos** no sujetos a regulación armonizada podrán ser anunciados, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

(...)

(...)

5. En los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, **tengan la consideración de públicos o no**, la convocatoria de licitación se realizará en todo caso mediante el anuncio de información previa a que se refiere la disposición adicional trigésima séptima".

## **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 135

De adición, apartado 6 (nuevo)

Se propone la siguiente redacción que añade un apartado 6 (nuevo) al artículo 135 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“6. Además de los mecanismos previstos en los apartados anteriores, los poderes adjudicadores realizarán un uso eficiente de las Plataformas de contratación, de tal manera que se realizará un intercambio automático de la información que conste en cada una de ellas, pasando a publicarse al mismo tiempo, también en una Plataforma de los Contratos del Reino de España, con el objeto de mejorar la transparencia, eficacia y eficiencia de los procesos de contratación pública”.*

## **MOTIVACIÓN**

La medida propuesta constituye un mecanismo para mejorar la publicidad de los contratos públicos, que permitirá ganar en eficacia y eficiencia y obtener un mayor número de propuestas que repercutirán en la calidad y precio de lo que se abona.

Al mismo tiempo, permitirá un cumplimiento más efectivo de las obligaciones en el marco del mercado interior comunitario.

(33)

## ENMIENDA

### Al artículo 138

#### De modificación

Se propone la modificación del artículo 138, que quedará con la siguiente redacción

«Artículo 138. Información a interesados.

1. Los órganos de contratación ofrecerán acceso a los pliegos y demás documentación complementaria por medios electrónicos a través del perfil de contratante, acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y que deberá poder efectuarse desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación o, en su caso, del envío de la invitación a los candidatos seleccionados.

2. Excepcionalmente, en los casos que se señalan a continuación, los órganos de contratación podrán dar acceso a los pliegos y demás documentación complementaria de la licitación, valiéndose de medios no electrónicos. En ese caso el anuncio de licitación o la invitación a los candidatos seleccionados advertirán de esta circunstancia; y el plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación se prolongará cinco días, salvo en el supuesto de tramitación urgente del expediente a que se refiere el artículo 119.

El acceso no electrónico a los pliegos y demás documentación complementaria de la licitación estará justificado cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan, en los términos señalados en la disposición adicional decimoquinta.

b) Por razones de confidencialidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 133.

c) En el caso de las concesiones de obras, **de servicios públicos** y de servicios **no públicos**, por motivos de seguridad excepcionales.

3. Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación, salvo que en los pliegos que rigen la licitación se estableciera otro plazo distinto. En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, **gestión de servicios públicos**,

suministros y servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación y así lo establezca el pliego de cláusulas administrativas particulares, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse públicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación.»

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.  
Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 142**

#### **De modificación al apartado 1**

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 1 del artículo 142, dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“1. Cuando en la adjudicación hayan detenerse en cuenta criterios distintos del precio el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores, siempre que las variantes se prevean en los pliegos. Se considerará que se cumple este requisito cuando se expresen los requisitos mínimos, modalidades, y características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del contrato.”*

## **MOTIVACIÓN**

La presentación de variantes debe ser uno de los mecanismos con los que cuenten los poderes adjudicadores para fomentar la investigación y la innovación a través de la contratación pública, siendo este uno de los objetivos perseguidos por las Directivas europeas de contratación que a se transponen al ordenamiento interno a través del presente Proyecto de Ley (Considerandos 47 y 48). En consecuencia la determinación que de las variantes deban contener los pliegos, debe hacerse en términos de requisitos mínimos y no de máximos (límites) que deben cumplir las variantes, pues de lo contrario se corre el riesgo de restringir la presentación de variantes a las preconcebidas previamente por la Administración en los pliegos en lugar de a las que resulten del proceso innovador llevado a cabo por los operadores económicos, restringiéndose con ello la innovación y la investigación. En este sentido, el vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se encuentra redactado en términos de requisitos mínimos que deben cumplir las variantes, más acorde con los objetivos de las Directivas que se transponen.

(7)



### **ENMIENDA**

Al Artículo 142

De adición de un nuevo párrafo al final del apartado 2

Se propone la siguiente redacción de adición de un nuevo párrafo al final del apartado 2 del artículo 142 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*2. La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indicará en el anuncio de licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su prestación.*

***“La precisión de las mejoras o variantes que se puedan admitir podrá hacerse en referencia a determinadas funcionalidades que puedan tener los bienes, obras o servicios objeto del contrato, o a la satisfacción de determinadas necesidades adecuadamente”.***

### **MOTIVACIÓN**

Viene a complementar lo expuesto en la enmienda al artículo 99.

(8)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 143, Apartado 2

De modificación

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 143, que tendrá la siguiente redacción:

*“2. La subasta electrónica podrá emplearse en los procedimientos abiertos, en los restringidos, en los negociados y en las licitaciones con negociación, siempre que las especificaciones del contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa en los pliegos que rigen la licitación y que las prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter intelectual como los servicios de ingeniería y arquitectura. No podrá recurrirse a las subastas electrónicas de forma abusiva o de modo que se obstaculice, restrinja o falsee la competencia o que se vea modificado el objeto del contrato. No podrán ser objeto de subastas electrónicas los contratos públicos de servicios y de obras, en los que la contratación de mano de obra es intensiva lo que implica que las partidas de costes laborales supongan la mayoría de los costes de ejecución de los servicios, en estos casos la definición de aspectos económicos y financieros del contrato es fundamental y está en relación directa con la estructura y el valor de los costes laborales.”*

### **MOTIVACIÓN:**

Se trata de impedir la posibilidad de recurrir a las subastas electrónicas en los contratos intensivos en mano de obra.

(10)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 145**

De modificación al primer párrafo del apartado 1

Se propone la siguiente redacción de modificación al primer párrafo del apartado 1 en el artículo 145 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“1. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato **conforme a la mejor relación calidad-precio** para la Administración se establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo y deberá figurar en el anuncio que sirva de convocatoria de la licitación, debiendo cumplir los siguientes requisitos:”*

## **MOTIVACIÓN**

Se propone sustituir la expresión “a la oferta económicamente más ventajosa” por la de “conforme a la mejor relación calidad-precio”, de acuerdo a lo planteado por la Directiva europea. Ésta, si bien incluye la misma referencia terminológica, en su propio párrafo lo aclara y especifica, haciendo referencia a la mejor relación calidad-precio e incluyendo expresamente la incorporación de criterios sociales y ambientales, cosa que no hace el proyecto de ley en su artículo 145.1. Proponemos, por lo tanto, evita contravenir un concepto jurídico determinante y que ejerce un papel primordial en el proceso de licitación pública.

(13)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 145.2

De modificación al apartado 2 completo

Se propone la siguiente redacción de modificación del apartado 2 incluyendo los puntos a) y b) correspondientes al artículo 145 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“2. Se considerará que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del contrato cuando se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen en los siguientes procesos:*

- a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su caso, las obras, los suministros o los servicios, con especial referencia a formas de producción, prestación o comercialización medioambiental y socialmente sostenibles y justas*
- b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte de su sustancia material”.*

## **MOTIVACIÓN:**

Dentro de los criterios vinculados al objeto del contrato no sólo hay que considerar criterios “clásicos” vinculados al precio o a las unidades, sino que hay que incorporar elementos medioambientales y sociales que hagan de la contratación pública un elemento de discriminación hacia formas de producción y de servicios más valiosas desde el punto de la sostenibilidad.

(36 y 43)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 145**

#### **De adición al apartado 2 (nuevo párrafo)**

Se propone añadir un nuevo párrafo al final del apartado 2 del artículo 145 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“En los contratos que tengan por objeto la inclusión laboral o social de personas pertenecientes a colectivos con riesgo de exclusión social, podrán incluirse, entre otros criterios de adjudicación, aquéllos que se refieran al empleo en la ejecución del contrato de personas pertenecientes a colectivos con dificultades de inclusión social o laboral, o a la realización de una política de personal favorecedora de la contratación estable para dichos colectivos.*

*Por su parte, en los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales, podrán incluirse entre otros, la prestación por el licitador de servicios dirigidos a sectores especialmente desfavorecidos.*

*Las siguientes cláusulas, así como otras de la misma naturaleza, se podrán aplicar indistintamente a ambos contratos referidos en los anteriores párrafos los que se refieran a: la reversión de los beneficios obtenidos en la ejecución del contrato a la mejora de los servicios contratado contratados; a la prestación por el licitador de servicios dirigidos a sectores especialmente desfavorecidos; al conocimiento del entorno físico y cultural del ámbito de prestación del servicio, a la realización de prácticas innovadoras en la prestación del servicio; al establecimiento de mecanismos de participación de los usuarios y de información y orientación de los mismos; a la aplicación de políticas de género y de conciliación de la vida familiar en el personal afecto a la ejecución del contrato más allá de las determinadas legalmente.”*

## **MOTIVACIÓN:**

La inclusión de cláusulas sociales en los criterios de adjudicación de los contratos de prestación de servicios sociales y, en general, de atención a las personas encuentra una clarísima apoyatura en los considerandos 114 y 54 de la DCP y de la DC, respectivamente, que señala atender al contexto cultural y al carácter delicado de dichos servicios a la hora de seleccionar a los prestadores de los mismos.

Por otra parte, en aquellos contratos cuyo objeto persigue de forma principal o de forma más accesoria la inclusión laboral o social de personas en riesgo de exclusión es claro también que los criterios de adjudicación referidos, de carácter social, conectan con dicho objeto del contrato.

(32)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 145.3**

#### **De modificación al apartado 3 a)**

Se propone la modificación de la letra a) del apartado 3 del artículo 145 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*"a) Criterios relacionados con los costes que, a elección del órgano de contratación, podrán referirse al precio IVA excluido, a excepción de los contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos en que el precio se referirá con el IVA incluido, a la renuncia a la revisión de precios, o a otro parámetro que permita identificar la oferta que presenta la mejor relación coste-eficacia, como el coste del ciclo de vida calculado según lo dispuesto en el artículo 146. Como criterio para valorar la oferta económica se deberán usar fórmulas estrictamente proporcionales a los precios ofertados. No se utilizará el porcentaje de rebaja en el precio, por no ser proporcional a dichas ofertas, pudiendo producir además diferencias de puntuaciones muy desproporcionadas con respecto al valor de otros criterios, como los de calidad."*

## **MOTIVACIÓN:**

Las prestaciones de asistencia social relativas a la protección de la infancia y la juventud, la asistencia de la tercera edad, la educación especial y asistencia a discapacitados, la asistencia a minorías étnicas, transeúntes y personas con cargas familiares no compartidas, la acción social comunitaria y familiar, la asistencia a ex reclusos, la reinserción social y prevención de la delincuencia, la asistencia a alcohólicos y toxicómanos y la cooperación al desarrollo, realizadas por entidades de carácter social, están exentas de IVA, según establece el artículo 20.8 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre.

Cuando dichas prestaciones son objeto de un contrato administrativo tal circunstancia deja en una peor situación a estas entidades exentas, toda vez que no pueden repercutir el IVA soportado por las prestaciones recibidas por proveedores para la ejecución del contrato. Por consiguiente el IVA se debería incluir en el precio de este tipo de contratos.

Por otra parte, el criterio fundamental para la valoración de los aspectos económicos de una oferta debe ser el precio total de la obra o del servicio, es decir, la oferta formulada por los licitadores. En caso de utilizarse no el precio de la oferta, sino los porcentajes de rebaja de unas y otras ofertas se produce una agudización de las diferencias entre las propuestas, que se traduce a la hora de la verdad en otorgar mucha mayor importancia al precio respecto de los factores técnicos. En ocasiones las

diferencias de puntuación que se generan pueden ser totalmente desproporcionadas y aberrantes. Así, por ejemplo, si el precio base de licitación es 100 y un licitador presenta una oferta de 99,9 y otro de 99,7, en el caso de utilizar el porcentaje de rebaja como criterio el segundo licitador tendrá tres veces mayor puntuación que el primero ya que su "porcentaje de rebaja es tres veces el del primero" (0,3% frente a 0,1%). La diferencia de puntuación así generada, incluso con rebajas irrisorias, puede ser totalmente desproporcionada con respecto al peso de otros criterios, por ejemplo de calidad y constituye una mala práctica que puede perjudicar seriamente los intereses de la ciudadanía receptora de los productos o servicios.

(32)

## **ENMIENDA**

Al artículo 145.3

De modificación del punto b) del apartado 3

Se propone la siguiente redacción del artículo 145, para modificar el punto b) del apartado 3, dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

3. (...)

*“b) Criterios cualitativos que permitan identificar la oferta que presenta la mejor relación calidad-precio, previa evaluación comparativa de todas las ofertas. Estos criterios podrán referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:*

*1º. La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las características sociales, **como el fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato**, las características medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus condiciones; debiéndose entender incluidos los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.*

*2º. **La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución.***

*3º. **El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha en que esta última debe producirse, el proceso de entrega y el plazo de entrega o ejecución.***”

## **MOTIVACIÓN:**

A estos efectos debe tenerse en cuenta la nueva Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, que ahora nos ocupa, y especialmente su artículo 67 sobre “criterios de adjudicación del contrato” en sus tres primeros apartados:



*"1. Sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales relativas al precio de determinados suministros o a la remuneración de determinados servicios, los poderes adjudicadores aplicarán, para adjudicar los contratos públicos, el criterio de la oferta económicamente más ventajosa.*

*2. La oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador se determinará sobre la base del precio o coste, utilizando un planteamiento que atienda a la relación coste-eficacia, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 68, y podrá incluir la mejor relación calidad-precio, que se evaluará en función de criterios que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales y/o sociales vinculados al objeto del contrato público de que se trate. Dichos criterios podrán incluir, por ejemplo:*

- a) la calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño para todos los usuarios, las características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus condiciones;*
- b) la organización, la cualificación y la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato, en caso de que la calidad del personal empleado pueda afectar de manera significativa a la ejecución del contrato, o*
- c) el servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha de entrega, el proceso de entrega y el plazo de entrega o el plazo de ejecución.*

*El factor coste también podrá adoptar la forma de un precio o coste fijo sobre la base del cual los operadores económicos compitan únicamente en función de criterios de calidad.*

*Los Estados miembros podrán disponer que los poderes adjudicadores no tengan la facultad de utilizar solamente el precio o el coste como único criterio de adjudicación o podrán limitar la aplicación de ese criterio a determinadas categorías de poderes adjudicadores o a determinados tipos de contratos.*

*3. Se considerará que los criterios de adjudicación están vinculados al objeto del contrato público cuando se refieran a las obras, suministros o servicios que deban facilitarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen:*

- a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de las obras, suministros o servicios, o*
  - b) en un proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida,*
- Incluso cuando dichos factores no formen parte de su sustancia material. (...)"*

Resultando también muy significativos los considerandos 92 y 93 de la misma Directiva:

*“(92) Al evaluar la mejor relación calidad-precio, los poderes adjudicadores deberían determinar los criterios económicos y de calidad relacionados con el objeto del contrato que utilizarán a tal efecto. Estos criterios deben, pues, permitir efectuar una evaluación comparativa del nivel de rendimiento de cada oferta respecto del objeto del contrato tal como se define en las especificaciones técnicas. En el contexto de la mejor relación calidad-precio, la presente Directiva incluye una lista no exhaustiva de posibles criterios de adjudicación que incluyen aspectos sociales y medioambientales. Se debe alentar a los poderes adjudicadores a elegir los criterios de adjudicación que les permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades.(...)”*

*(93) Cuando disposiciones nacionales determinen la remuneración de determinados servicios o establezcan precios fijos para determinados suministros, es preciso aclarar que sigue siendo posible evaluar la rentabilidad basándose en otros factores que no sean únicamente el precio o la remuneración. En función del servicio o producto de que se trate, dichos factores incluirían, por ejemplo, condiciones de entrega y pago, aspectos de servicio posventa (alcance de los servicios de atención al cliente y de repuestos) o aspectos sociales o medioambientales (por ejemplo si los libros se imprimen en papel reciclado o papel de la actividad maderera sostenible, el coste se imputa a externalidades medioambientales o si se fomenta la integración social de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato). Dadas las numerosas posibilidades de evaluar la relación calidad-precio basadas en criterios sustantivos, es preciso evitar el recurso a la división en lotes como único medio de adjudicación del contrato.”*

(3, 36 y 63)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 145

De modificación al apartado 6

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 6 del artículo 145, dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"6. Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos."*

### **MOTIVACIÓN:**

La expresión "siempre y cuando sea posible", adolece de falta de concreción. En orden a una mayor claridad y seguridad jurídica, sería conveniente emplear una formulación más simple o, en su defecto, establecer que para cuando no se dé preponderancia a los criterios indicados en el artículo, se deberá motivar por el órgano de contratación.

(7)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 145.6

De modificación, apartado 6 a)

Se propone modificar el apartado 6 a) del artículo 145 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“a) En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, celebrados por los órganos de las Administraciones Públicas, la valoración de los criterios cuya cuantificación de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, bien a un comité formado por expertos, que podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, bien a un organismo técnico especializado.*

*La valoración con preponderancia de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor sobre aquellos que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas procederá, en particular, cuando se trate de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura”.*

### **MOTIVACIÓN:**

La redacción no clarifica suficientemente la supresión de la exigencia de la Ley vigente que pedía que el comité de expertos estuviera “... formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada...”, ni hace referencia al tipo de contratos a los que debe aplicarse.

(67)

### **ENMIENDA**

Al artículo 145

De modificación, último párrafo del apartado 6

Se propone la modificación del artículo 145, que quedará con la siguiente redacción:

"6. (...) "

Cuando en los contratos de concesión de obras, **de concesión de servicios públicos** o de concesión de servicios **no públicos** se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de ayudas a la empresa, en todo caso figurará como un criterio de adjudicación evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente de contratación."

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

### **ENMIENDA**

Al artículo 145

De modificación, apartado 7, letra e)

Se propone la modificación del artículo 145, apartado 7, letra e), que quedará con la siguiente redacción:

"7. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en particular, en la adjudicación de los siguientes contratos:

e) Contratos de concesión de obras, **concesión de servicios públicos** y de concesión de servicios **no públicos**."

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos. Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

### **ENMIENDA**

Al artículo 145.

De modificación, al apartado 7 g).

Se propone la siguiente la modificación del apartado 7, letra g del artículo 145, dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

**"7.g) Los contratos de servicios o de gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista,** salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.

No obstante, en los contratos de prestación de servicios sociales de responsabilidad pública y de otros servicios sociales de interés general el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación y será valorado aun cuando concurren entidades exentas.

Además, se deberá verificar el cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la normativa relativa a los servicios a contratar y se deberán valorar los criterios de calidad en la atención que, necesariamente, se habrán de incluir entre los criterios de adjudicación. En particular, los poderes adjudicadores deberán tener en cuenta la necesidad de garantizar, entre otros aspectos, la calidad, la continuidad, la integralidad y la personalización de la atención, la accesibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad de los servicios, la implicación y participación de las personas usuarias y la innovación.

### **MOTIVACIÓN:**

En los procesos de contratación pública debe integrarse la acción positiva en el análisis, diseño, actuación y evaluación de todas las políticas públicas, resultando imprescindibles los instrumentos de desarrollo. Así lo ha recogido la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que han aceptado la llamada discriminación positiva, acción afirmativa, acción positiva o acción compensatoria.

Así, el principio de igualdad permite el tratamiento desigual ante situaciones de hecho desiguales, siempre que exista una discriminación previa y que las medidas aplicadas sean proporcionales y justificadas. El trato desigual dirigido a las entidades de iniciativa social se justifica por su papel fundamental en la configuración y comprensión del actual sistema de servicios sociales, pues, sin exagerar, pudiera decirse que son incluso preexistentes al mismo.

(16 y 53)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 145.7

De adición, apartado 7 h), nuevo

Se propone incluir un apartado 7, letra h) nueva en el artículo 145 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“h) Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación. Esto no será de aplicación a contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura”.*

### **MOTIVACIÓN:**

De conformidad con el cambio que la Directiva implica, que pone en valor criterios de adjudicación como el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la organización, la cualificación y la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato, en caso de que la calidad del personal empleado. El apartado h) actual del Proyecto de Ley pasaría a ser la última letra que corresponda al apartado 7 del artículo 145.

(67)



### **ENMIENDA**

#### **Al Artículo 145**

De adición, en el apartado 7. i), nuevo

Se propone la siguiente redacción en el artículo 145, apartado 7, letra i), nueva, dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

**"7. i)**

**(...)**

*"En la adjudicación de contratos de servicios de Arquitectura, los criterios relativos a la calidad arquitectónica y sus valores técnicos, funcionales, culturales y medioambientales, representarán un 80% del porcentaje total de criterios de adjudicación. La oferta económica representará el 20% del expresado porcentaje total."*

### **MOTIVACIÓN:**

Fomentar la calidad arquitectónica en la contratación pública, siguiendo las prescripciones de la Directiva 2014/24/UE, que permite que en determinados contratos -y los de servicios de Arquitectura así lo justifican-, se limite el criterio del precio o coste económico en la adjudicación. El apartado h) actual del Proyecto de Ley pasaría a ser la última letra que corresponda al apartado 7 del artículo 145.

**(18)**

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 145**

De modificación, segundo párrafo del apartado 8

Se propone la modificación del segundo párrafo del apartado 8 del artículo 145 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

"8. (...) "

*En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral mínimo del 50% de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo".*

## **MOTIVACIÓN:**

Exigir a los licitadores un umbral mínimo de calidad en los criterios cualitativos, de manera que si un licitador no alcanza el 50% de la puntuación, es decir, "no alcanza el aprobado" quede excluido del proceso.

(32)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 145

De adición, nuevo párrafo al apartado 8

Se propone añadir un nuevo párrafo al final del apartado 8 del artículo 145 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

"8. (...) "

(...)

*En los criterios cualitativos, a la mejor propuesta se le asignará la totalidad de puntos, recalculándose de forma proporcional a la misma la puntuación del resto de licitadores".*

### **MOTIVACIÓN:**

Igual que ocurre con la propuesta económica, donde la mejor oferta recibe la puntuación máxima, la mejor propuesta técnica ha de tener la puntuación máxima para evitar que a la hora de la verdad la ponderación de los criterios económicos sea superior a la establecida en los pliegos.

(32)

## **ENMIENDA**

Al artículo 145

De modificación

Se modifican el apartado 9 del artículo 145, quedando como sigue:

“9. Los órganos de contratación establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares criterios de adjudicación específicos para el desempate en los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas.”

## **MOTIVACIÓN**

En lo que al apartado 9 respecta, lo que se pretende con la enmienda propuesta es que la resolución de un posible empate de las ofertas con base a criterios sociales sea obligatorio para el órgano de contratación, y no meramente potestativo.

(43)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 145.10.a)

De modificación

Se propone la siguiente redacción:

“10. En defecto de la previsión en los pliegos a la que se refiere el apartado anterior, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor número de trabajadores con discapacidad **o en situación de exclusión social** en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla **o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.**”

## **MOTIVACIÓN:**

En nuestro país las cooperativas y sociedades laborales dan empleo directo a casi 335.000 personas y los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción emplean a más de 75.000 personas. A todas ellas hay que sumar, además, los del resto de las fórmulas de la Economía Social como, por ejemplo, las fundaciones, las asociaciones, las mutualidades o las cofradías de pescadores.

Se trata además de un empleo estable, tal y como demuestra el hecho de que, entre el cuarto trimestre de 2007 y el cuarto trimestre de 2013, la destrucción de empleo en las cooperativas ha sido casi seis puntos inferior en términos de afiliación a la Seguridad Social al del resto de las empresas o los datos que señalan un incremento constante del número de trabajadores de las empresas de inserción durante los años de mayores dificultades.

Además, se extiende la posibilidad de reserva en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a las empresas de inserción. Una posibilidad de reserva que ya existía para los Centros Especiales de Empleo, respecto de las personas con discapacidad, y que ahora se amplía para que también las empresas de inserción, esta vez en relación a los colectivos referidos en su normativa reguladora, puedan beneficiarse de la misma, ampliando por tanto el marco regulatorio actual en relación a la protección de los colectivos en riesgo de exclusión laboral.

(29)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 146, Apartado 3

De modificación

Se propone la modificación del primer párrafo del apartado 3 del artículo 146, que tendrá la siguiente redacción:

“3. Los órganos de contratación evaluarán siempre los costes mediante un planteamiento basado en el coste del ciclo de vida, indicando en los pliegos los datos que deben facilitar los licitadores así como el método que aquéllos utilizarán para determinar los costes de ciclo de vida sobre la base de dichos datos.

/.../”

### **MOTIVACIÓN:**

El coste del ciclo de vida de la obra integra el coste del ciclo de vida de todos los participantes en la misma, única manera de saber si trabajando de una forma u otra, usando unos materiales u otros, la obra resultante es mejor medioambiental, económica y socialmente.

(50, 17 y 61)

### **ENMIENDA**

Al artículo 147

De adición

Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 61 del artículo 147, con el siguiente contenido:

“La decisión del órgano de contratación, admitiendo o inadmitiendo la oferta, podrá ser objeto de recurso especial en materia de contratación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la presente Ley”

### **MOTIVACIÓN:**

En línea con la modificación propuesta para el artículo 44, se recuerda la posibilidad de recursos especiales en el ámbito de contratación pública.

(24)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 147, Apartado 4

De adición

Se propone la adición en el apartado 4 del artículo 147 de un inciso final, que tendrá la siguiente redacción:

“4. /.../ en aplicación de lo establecido en el artículo 199.”

### **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores y de los convenios colectivos de aplicación.

(57)



## **ENMIENDA**

Al Artículo 149

De modificación al apartado 1

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 1 del artículo 149 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

***“1. La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada asimismo en el perfil de contratante, el cual se producirá en el plazo de 30 días.”***

## **MOTIVACIÓN:**

La publicación de las adjudicaciones se debe realizar de la forma más amplia, como un mecanismo para garantizar la transparencia de los contratos públicos. Por ello, la publicación se deberá producir en el perfil del contratista. De hecho, el artículo 50 de la Directiva impone la publicación de un anuncio con la adjudicación del contrato.

(33, 9 y 53)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 149

De adición, apartado 5 (nuevo)

Se propone la siguiente redacción que incluye un apartado 5 (nuevo) en el artículo 149 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“5. La modificación de los contratos tendrá el mismo régimen de publicidad de la adjudicación”.*

### **MOTIVACIÓN:**

Habida cuenta de los efectos que puede tener la modificación de los contratos en la competencia y en el interés general se refuerza su régimen de publicidad, de tal manera que se deberá realizar la misma que en el momento de su adjudicación.

(33)

## **ENMIENDA**

### **Artículo 150**

#### **De modificación**

Se propone la modificación del artículo 150 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

**"Artículo 150. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración**

1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio o en el pliego, o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común.
3. Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por la imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas, por a la desaparición sobrevenida del objeto o por otras razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.
5. En el supuesto de acuerdos marco el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlos corresponde al órgano de contratación que inició el procedimiento para su celebración. En el caso de contratos basados en un acuerdo marco y en el de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o

celebrarlos se realizará a propuesta del organismo destinatario de la prestación."

### **MOTIVACIÓN:**

Eliminar el término renuncia para referirse a un modo de finalización anormal del procedimiento de adjudicación.

Eliminar toda referencia a los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.

Modificar la referencia a los candidatos del apartado 2.

Añadir la imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas y la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento como razones que justifican la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato.

Contemplar los acuerdos por los que se desista del procedimiento o se decida no adjudicar o celebrar el contrato entre las decisiones susceptibles de recurso especial: añadir la referencia expresa a los acuerdos.

Contemplar expresamente la posibilidad de decidir no adjudicar o celebrar un acuerdo marco.

(53)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 151.

De modificación, apartado 3

Se propone la siguiente redacción de modificación del párrafo primero del apartado 3 del artículo 151 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“3. En el caso de contratos sujetos a regulación armonizada, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes.”*

### **MOTIVACIÓN:**

En coherencia con la enmienda al art. 44, la extensión del ámbito objetivo del recurso especial en materia de contratación no puede ir en detrimento de la agilidad de los procedimientos de contratación pública, por eso parece prudente excluir del “plazo de espera” de quince días hábiles a los contratos no sujetos a regulación armonizada.

(14)

### **ENMIENDA**

Al artículo 151

De adición, apartado 6

Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 151, con el siguiente contenido:

“6. En ningún caso podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.”

### **MOTIVACIÓN:**

Se prohíbe expresamente la mala práctica consistente en la iniciación de las prestaciones del contrato antes de la formalización.

(24)

## **ENMIENDA**

### **Artículo 152**

#### **De modificación del apartado 1**

Se propone modificar el apartado 1 del artículo 152 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

"1. La formalización de los contratos deberá publicarse junto con el correspondiente contrato en un plazo no superior a treinta y cinco días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.

Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

## **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica de la enmienda para poner en valor medidas de transparencia.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 152**

De modificación, de los apartados 2 y 3

Se propone la siguiente redacción de modificación de los apartados 2 y 3 en el artículo 152 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“2. En los contratos celebrados en la Administración General del Estado o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas el anuncio de formalización se publicará además, en el plazo señalado en el apartado anterior, en el Boletín Oficial del Estado.*

*3. El órgano de contratación, cuando proceda, enviará el anuncio de formalización al «Diario Oficial de la Unión Europea» a más tardar 10 días después de la formalización del contrato.”*

## **MODIFICACIÓN:**

Proponemos dos cambios: uno, en la misma línea del artículo 149, para que se incluya a todas las entidades vinculadas a la AGE; y otro para acortar los plazos de envío a la UE. No tiene sentido que hablemos de 30 días, cuando en el anteproyecto eran 10.

(9)



## ENMIENDA NÚM.

### Al artículo 154

#### De modificación

Se propone la modificación del artículo 154, que quedará con la siguiente redacción

«Artículo 154. Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de licitación.

1. En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

2. En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, **gestión de servicios públicos en los que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministros y servicios, y a treinta días para las concesiones de obras, **de servicios públicos y de servicios no públicos**, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

3. En los contratos de obras, **gestión de servicios públicos en los que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministros y servicios, el plazo general previsto en el apartado anterior podrá reducirse en los siguientes casos:

a) Si el órgano de contratación hubiese enviado un anuncio de información previa, el plazo general de presentación de proposiciones podrá reducirse a quince días. Esta reducción del plazo solo será admisible cuando el anuncio voluntario de información previa se hubiese enviado para su publicación con una antelación máxima de doce meses y mínima de treinta y cinco días antes de la fecha de envío del anuncio de licitación, siempre que en él se hubiese incluido, de estar disponible, toda la información exigida para este.

b) Cuando el plazo general de presentación de proposiciones sea impracticable por tratarse de una situación de urgencia, en los términos descritos en el artículo 119, el órgano de contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a quince días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación.

c) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en cinco días.

4. En las concesiones de obras, **de servicios públicos** y de servicios **no públicos** solo se podrá reducir el plazo general cuando se dé la circunstancia establecida en la letra c) del apartado anterior.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 135 respecto de la obligación de publicar previamente en el Diario Oficial de la Unión Europea, en los procedimientos abiertos la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante deberá hacerse, en todo caso, con una antelación mínima equivalente al plazo fijado para la presentación de las proposiciones en el apartado siguiente.

6. En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. En los contratos de obras y de concesión de obras, **concesión de servicios públicos** y concesión de servicios **no públicos**, el plazo será, como mínimo, de veintiséis días.»

#### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 155

De adición

Se propone la adición de un nuevo apartado 3, con la consiguiente reenumeración de los apartados 3 a 6, que tendrá la siguiente redacción:

*“3. El órgano competente para las proposiciones excluirá a aquellos licitadores que no justifiquen razonadamente en su oferta el cumplimiento de las condiciones salariales aplicables conforme a los convenios colectivos sectoriales vigentes.”*

## **MOTIVACIÓN:**

El examen de las proposiciones y propuestas de adjudicación han de tener en cuenta la garantía de que los potenciales adjudicatarios cumplen sus obligaciones laborales, en general, y las condiciones salariales establecidas por negociación colectiva, en particular.

(10)

### **ENMIENDA**

#### Al artículo 157

#### De modificación

Se propone la modificación del artículo 157, que quedará con la siguiente redacción:

« Artículo 157. Procedimiento abierto simplificado.

1. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, **gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

a) Que su valor estimado sea inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de **gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior a los umbrales establecidos para ellos en los artículos 21 y 22 de la presente Ley relativos a contratos sujetos a una regulación armonizada.

b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinte por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el treinta por ciento del total.

(...)»

Resto de apartados del artículo sin variación.

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 157.1b)

De modificación al apartado 1b) completo

Se propone la siguiente redacción de modificación del apartado 1 b) completo del artículo 157 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

1. (...)

*“b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el treinta por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería, informática, arquitectura, publicitaria o artística, en que su ponderación no podrá superar el sesenta por ciento del total.”*

## **MOTIVACIÓN:**

Hay que posibilitar que el procedimiento abierto simplificado no sólo se utilice en aquellos contratos de obras, de construcción o fabricación de elementos fungibles sino también para aquellos contratos que incorporen innovación, creatividad y novedad; elementos que parecen asociados a empresas jóvenes y de reciente creación a las que hay que abrir la contratación pública como elemento de crecimiento y expansión.

(36)

### **ENMIENDA**

Al artículo 157

De modificación al apartado 3

Se propone la siguiente redacción:

*“3. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los contratos de obras el plazo será, como mínimo de 20 días.”*

### **MOTIVACIÓN:**

La reducción del plazo de presentación de ofertas a 10 días es excesiva para obras de la magnitud y complejidad de las que pueden ser objeto de este procedimiento que alcanza obras de casi 2.000.000 de euros.

La selección de la mejor oferta por parte de la Administración Pública se fundamenta sobre la presunción de que las empresas licitadoras han presentado la mejor de sus ofertas, lo cual sería bastante dudoso en procedimientos de cierta complejidad en que el plazo de presentación de ofertas ha sido de 10 días.

(35)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 157**

De supresión, letra a) del apartado 4

Se propone la supresión de la letra a) del apartado 4 del artículo 157 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

## **MOTIVACIÓN:**

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas es voluntaria (art. 335), por lo que, para el caso de exigirse en este procedimiento, se estaría convirtiendo, indirectamente, en un requisito obligatorio para participar en la licitación. Además, no puede obligarse a las empresas comunitarias a inscribirse en el ROLECE

La inscripción en el Registro tiene efectos declarativos, nunca constitutivos. Además, la exigencia de que el empresario se encuentre inscrito en el ROLECE no es una medida de simplificación en el marco del procedimiento simplificado que se diseña, pues el licitador debe presentar declaración responsable respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar (Cfr. letra c del mismo art. 4) y el adjudicatario habrá de acreditar documentalmente que posee la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incurso en ninguna prohibición para contratar (letra f apartado 3º). La inscripción obligatoria en el Registro de Licitadores no puede ser configurada como un requisito adicional para la simplificación (puede resultar un oxímoron), y en su caso, la presentación del certificado de inscripción en el ROLECE liberaría al contratista de presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares (art.140.3 2º pfo). De ahí que en lugar de reducir la participación de empresas inscritas en el ROLECE se proponga suprimir ese requisito y admitir a todos los que presenten una declaración responsable –el DEUC-, que ese sí que es un mecanismo de simplificación.

(14)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 158

De adición

Se añade un apartado 4 con la siguiente redacción:

*"4. Este procedimiento es especialmente adecuado cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería."*

## **MOTIVACIÓN:**

Reconocer el carácter de servicios de carácter intelectual a los trabajos de Arquitectura, Ingeniería, Consultoría y Urbanismo, de acuerdo con los criterios de la Directiva.

(30)



## **ENMIENDA**

### Al artículo 159

#### De modificación

Se propone la modificación del artículo 159, que quedará con la siguiente redacción

« Artículo 159. Solicitudes de participación.

1. En los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de las solicitudes de participación no podrá ser inferior a treinta días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

Cuando el plazo general de presentación de solicitudes sea impracticable por tratarse de una situación de urgencia, en los términos descritos en el artículo 119, el órgano de contratación para los contratos de obras, **gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministros y servicios podrá fijar otro plazo que no será inferior a quince días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 135 respecto de la obligación de publicar en primer lugar en el Diario Oficial de la Unión Europea, en los procedimientos restringidos la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante deberá hacerse con una antelación mínima equivalente al plazo fijado para la presentación de las solicitudes de participación en el apartado siguiente.

3. Si se trata de contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para la presentación de solicitudes de participación será, como mínimo, de quince días, contados desde la publicación del anuncio de licitación.

4. Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la documentación a que se refiere el artículo 140, con excepción del documento acreditativo de la constitución de la garantía provisional.»

## **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

### **ENMIENDA**

Al artículo 159

De modificación

Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 159, quedando como sigue:

"1. En los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de las solicitudes de participación deberá ser el suficiente para el adecuado examen de los pliegos y de las circunstancias y condiciones relevantes para la ejecución del contrato, todo ello en atención al alcance y complejidad del contrato. En cualquier caso, no podrá ser inferior a treinta días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea"

### **MOTIVACIÓN:**

Nuevamente, se trata de una enmienda dirigida a garantizar que la necesidad de que los plazos de presentación de solicitudes de participación y de proposiciones sean suficientes.

(24)

## **ENMIENDA**

Al artículo 162

De modificación

Se propone la modificación del artículo 162, que quedará con la siguiente redacción

«Artículo 162. Propositiones.

1. El plazo general de presentación de proposiciones en los procedimientos restringidos relativos a contratos sujetos a regulación armonizada será de treinta días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita.

El plazo general previsto en el párrafo anterior podrá reducirse en los siguientes casos:

a) Si se hubiese enviado el anuncio de información previa, el plazo general podrá reducirse a diez días. Esta reducción del plazo solo será admisible cuando el anuncio de información previa se hubiese enviado cumpliéndose los requisitos que establece la letra a) del apartado 3 del artículo 154.

b) Cuando el plazo general de presentación de proposiciones sea impracticable por tratarse de una situación de urgencia, en los términos descritos en el artículo 119, el órgano de contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a diez días contados desde la fecha del envío de la invitación escrita.

c) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en cinco días.

En las concesiones de obras, **de servicios públicos** y de servicios **no públicos** solo se podrá reducir el plazo general cuando se dé la circunstancia establecida en la letra c) anterior.

2. En los procedimientos restringidos relativos a contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para la presentación de proposiciones no será inferior a diez días, contados desde la fecha de envío de la invitación.»

## **MOTIVACIÓN:**

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

### **ENMIENDA**

Al artículo 162

De modificación

Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 162, quedando como sigue:

“1. El plazo general de presentación de proposiciones en los procedimientos restringidos relativos a contratos sujetos a regulación armonizada será el suficiente para la adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y complejidad del contrato. En cualquier caso, no será inferior a treinta días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita.”

### **MOTIVACIÓN:**

El objeto de esta enmienda es garantizar que los plazos de presentación de las solicitudes de participación y de proposiciones sean suficientes, fortaleciendo el principio de concurrencia.

(24)

## **ENMIENDA**

Al artículo 164

De modificación

Se propone la modificación del artículo 164, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 164. Caracterización y delimitación de la materia objeto de negociación.

1. En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 9 del artículo 167 respecto de la adjudicación a la oferta inicial sin previa negociación.

2. En el pliego de cláusulas administrativas particulares se determinarán los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las empresas; la descripción de las necesidades de los órganos de contratación y de las características exigidas para los suministros, las obras o los servicios, **tengan la condición de públicos o no**, que hayan de contratarse; el procedimiento que se seguirá para negociar; los elementos de la prestación objeto del contrato que constituyen los requisitos mínimos que han de cumplir todas las ofertas; los criterios de adjudicación; así como, en su caso, la mención a que se refiere el apartado 9 del artículo 167.

La información facilitada será lo suficientemente precisa como para que los operadores económicos puedan identificar la naturaleza y el ámbito de la contratación y decidir si solicitan participar en el procedimiento.

3. Los procedimientos con negociación podrán utilizarse en los casos enumerados en los artículos 165 y 166. Salvo que se dieran las circunstancias excepcionales que recoge el artículo 166, los órganos de contratación deberán publicar un anuncio de licitación.»

## **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al artículo 165

De modificación

Se propone la modificación del artículo 165, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 165. Supuestos de aplicación del procedimiento de licitación con negociación.

Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento de licitación con negociación en los contratos de obras, **gestión de servicios públicos**, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios **no públicos** cuando se dé alguna de las siguientes situaciones:

- a) Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponible en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores.
- b) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras.
- c) Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por los riesgos inherentes a la misma.
- d) Cuando el órgano de contratación no pueda establecer con la suficiente precisión las especificaciones técnicas por referencia a una norma, evaluación técnica europea, especificación técnica común o referencia técnica, en los términos establecidos en esta Ley.
- e) Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo se hubieren presentado ofertas irregulares o inaceptables.

Se considerarán irregulares, en particular, las ofertas que no correspondan a los pliegos de la contratación, que se hayan recibido fuera de plazo, que muestren indicios de colusión o corrupción o que hayan sido consideradas anormalmente bajas por el órgano de contratación. Se considerarán inaceptables, en particular, las ofertas presentadas por licitadores que no posean la cualificación requerida y las ofertas cuyo precio rebase el presupuesto del órgano de contratación tal como se haya determinado y documentado antes del inicio del procedimiento de contratación.»

**MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.  
Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Al artículo 165**

#### **De adición de un nuevo apartado c)**

Se propone la siguiente redacción del artículo 165 incorporando un nuevo apartado c dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*Nuevo c) "Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos que tengan por objeto dotar de continuidad en la atención a las personas, familias, grupos o comunidades que ya eran beneficiarias de un servicio, especialmente cuando éste se integra en un continuo de atención que, ofrecido por la misma entidad, añade valor al servicio a contratar, entre otros aspectos, en términos de personalización, integralidad y continuidad de la atención."*

## **MOTIVACIÓN:**

El Considerando 45 de la Directiva establece que en la utilización del proceso de licitación con negociación, la negociación debe ir dirigida a mejorar las ofertas con el objeto de permitir a los poderes adjudicadores la adquisición de obras, suministros o servicios perfectamente adaptados a sus necesidades específicas. Asimismo, prevé que la negociación pueda referirse a la inclusión, por ejemplo, de aspectos sociales, medioambientales o innovadores, en la medida en que no constituyan requisitos mínimos. En relación a aspectos relacionados con la innovación debemos entender incluidos aspectos relacionados con la innovación social, de conformidad con el Considerando 47, que ocupan un lugar central dentro de la Estrategia Europa 2020.

Por ello, para dar cumplimiento a dichas previsiones de la Directiva el texto resultante de la transposición deberá disponer que la adjudicación de los contratos de servicios sociales se sujete a las reglas del procedimiento negociado, de la forma más sencilla y simple posible.

Ello también permitirá la inclusión de aspectos concretos adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad que den cumplimiento a la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad a que se refiere el Considerando 3.

Así, el procedimiento negociado resulta especialmente indicado a la hora de garantizar el cumplimiento de los principios contemplados en el apartado 2 del artículo 76 de la nueva Directiva como son, entre otros, la calidad, la continuidad, la accesibilidad, las



necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos y los vulnerables, y la implicación y la responsabilización de los usuarios.

O incluso, puesto que se admitiría la inclusión de requisitos que no sean mínimos, es posible la introducción de criterios dirigidos a evitar situaciones de desarraigo o que garanticen la continuidad en la atención a las personas que ya eran beneficiarias de un servicio, de conformidad con el artículo 19 de la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad que establece que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde vivir.

(16)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 165**

De adición incorporando dos nuevos apartados, el f) y g).

Se propone la siguiente redacción en el artículo 165 incorporando dos apartados nuevos, el f) y g), dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“ f) Cuando se trate de contratos públicos de servicios sociales.*

*g) Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos que tengan por una de sus características determinantes el arraigo de la persona en el entorno de atención social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de continuidad en la atención a las personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio.”*

## **MOTIVACIÓN:**

El Considerando 45 de la Directiva establece que en la utilización del proceso de licitación con negociación, la negociación debe ir dirigida a mejorar las ofertas con el objeto de permitir a los poderes adjudicadores la adquisición de obras, suministros o servicios perfectamente adaptados a sus necesidades específicas. Asimismo, prevé que la negociación pueda referirse a la inclusión, por ejemplo, de aspectos sociales, medioambientales o innovadores, en la medida en que no constituyan requisitos mínimos. En relación a aspectos relacionados con la innovación debemos entender incluidos aspectos relacionados con la innovación social, de conformidad con el Considerando 47, que ocupan un lugar central dentro de la Estrategia Europa 2020.

Asimismo, y en consonancia con dicho Considerando, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 76 de la Directiva que establece que los Estados miembro serán libres de determinar las normas de procedimiento aplicables con la condición de que las mismas tengan en cuenta la especificidad de los servicios.

Por ello, para dar cumplimiento a dichas previsiones de la Directiva el texto resultante de la transposición deberá disponer que la adjudicación de los contratos de servicios sociales se sujete a las reglas del procedimiento negociado, de la forma más sencilla y simple posible.

Ello también permitirá la inclusión de aspectos concretos adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad que den cumplimiento a la Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad a que se refiere el Considerando 3.

Así, el procedimiento negociado resulta especialmente indicado a la hora de garantizar el cumplimiento de los principios contemplados en el apartado 2 del artículo 76 de la nueva Directiva como son, entre otros, la calidad, la continuidad, la accesibilidad, las necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos y los vulnerables, y la implicación y la responsabilidad de los usuarios.

O incluso, puesto que se admitiría la inclusión de requisitos que no sean mínimos, es posible la introducción de criterios dirigidos a evitar situaciones de desarraigo o que garanticen la continuidad en la atención a las personas que ya eran beneficiarias de un servicio, de conformidad con el artículo 19 de la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad que establece que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde vivir.

En definitiva proponemos que se modifique el Art. 165 del nuevo Proyecto, a fin de que se contemple expresamente la posibilidad de acudir al contrato negociado en el caso de contratos de servicios sociales de atención a las personas.

(3 y 15)

### ENMIENDA NÚM.

Al artículo 166

De modificación

Se propone la modificación del artículo 166, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 166. Supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad.

Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio de licitación únicamente en los siguientes casos:

a) En los contratos de obras, **gestión de servicios públicos**, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios **no públicos**, en los casos en que:

1.º No se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta adecuada; ninguna solicitud de participación; o ninguna solicitud de participación adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a un procedimiento restringido, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el presupuesto base de licitación ni modificar el sistema de retribución, y que se envíe un informe a la Comisión Europea cuando esta así lo solicite.

Se considerará que una oferta no es adecuada cuando no sea pertinente para el contrato, por resultar manifiestamente insuficiente para satisfacer, sin cambios sustanciales, las necesidades y los requisitos del órgano de contratación especificados en los pliegos que rigen la contratación. Se considerará que una solicitud de participación no es adecuada si el empresario de que se trate ha de ser o puede ser excluido en virtud de los motivos establecidos en la presente Ley o no satisface los criterios de selección establecidos por el órgano de contratación.

2.º Cuando las obras, los suministros o los servicios, **tengan la consideración de públicos o no**, solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico Español; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial.

La no existencia de competencia por razones técnicas y la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial solo se aplicarán cuando no exista una alternativa o sustituto razonable y cuando la ausencia

de competencia no sea consecuencia de una configuración restrictiva de los requisitos y criterios para adjudicar el contrato.

3.º Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 19.

b) En los contratos de obras, **gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministros y servicios, en los casos en que:

1.º Una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el artículo 119.

2.º Cuando se dé la situación a que se refiere la letra e) del artículo 165, siempre y cuando en la negociación se incluya a todos los licitadores que, en el procedimiento antecedente, hubiesen presentado ofertas conformes con los requisitos formales del procedimiento de contratación, y siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el precio de licitación ni modificar el sistema de retribución.

c) En los contratos de suministro, además, en los siguientes casos:

1.º Cuando los productos se fabriquen exclusivamente para fines de investigación, experimentación, estudio o desarrollo; esta condición no se aplica a la producción en serie destinada a establecer la viabilidad comercial del producto o a recuperar los costes de investigación y desarrollo.

2.º Cuando se trate de entregas adicionales efectuadas por el proveedor inicial que constituyan bien una reposición parcial de suministros o instalaciones de uso corriente, o bien una ampliación de los suministros o instalaciones existentes, si el cambio de proveedor obligase al órgano de contratación a adquirir material con características técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de mantenimiento desproporcionadas. La duración de tales contratos, así como la de los contratos renovables, no podrá, por regla general, ser superior a tres años.

3.º Cuando se trate de la adquisición en mercados organizados o bolsas de materias primas de suministros que coticen en los mismos.

4.º Cuando se trate de un suministro concertado en condiciones especialmente ventajosas con un proveedor que cese definitivamente en sus actividades comerciales,

o con los administradores de un concurso, o a través de un acuerdo judicial o un procedimiento de la misma naturaleza.

d) En los contratos de servicios, además, en el supuesto de que el contrato en cuestión sea la consecuencia de un concurso de proyectos y, con arreglo a las normas aplicables deba adjudicarse al ganador. En caso de que existan varios ganadores, se deberá invitar a todos ellos a participar en las negociaciones.

Así mismo, cuando se trate de un servicio concertado en condiciones especialmente ventajosas con un proveedor que cese definitivamente en sus actividades comerciales, o con los administradores de un concurso, o a través de un acuerdo judicial o un procedimiento de la misma naturaleza.

e) En los contratos de obras, **de gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista** y de servicios, además, cuando las obras o servicios, **tengan la consideración de públicos o no**, que constituyan su objeto consistan en la repetición de otros similares adjudicados al mismo contratista mediante alguno de los procedimientos de licitación regulados en esta ley previa publicación del correspondiente anuncio de licitación, siempre que se ajusten a un proyecto base que haya sido objeto del contrato inicial adjudicado por dichos procedimientos, que la posibilidad de hacer uso de este procedimiento esté indicada en el anuncio de licitación del contrato inicial, que el importe de las nuevas obras o servicios se haya tenido en cuenta al calcular el valor estimado del contrato inicial, y que no hayan transcurrido más de tres años a partir de la celebración del contrato inicial. En el proyecto base se mencionarán necesariamente el número de posibles obras o servicios adicionales, así como las condiciones en que serán adjudicados estos.»

#### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 181

De modificación al apartado 1

Se propone la siguiente redacción al apartado 1 del artículo 181 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“1. Son concursos de proyectos los procedimientos encaminados a la obtención de planos o proyectos y **dirección de las obras**, principalmente en los campos de la Arquitectura, el Urbanismo, la Ingeniería y el procesamiento de datos, a través de una selección que, a través de la correspondiente licitación, se encomienda a un Jurado.”*

### **MOTIVACIÓN.**

En razón a garantizar la calidad de la creación arquitectónica y de la edificación y también los derechos de propiedad intelectual del autor del proyecto, para lo cual se hace preciso que -como norma general y salvo que el órgano de contratación efectúe la adjudicación por fases y así lo justifique-, la adjudicación comprenda tanto el proyecto como la dirección de obra; evitando además varios procedimientos, ahorrando costes y asegurando que el profesional que ha redactado el proyecto y por tanto conoce plenamente el mismo, sea el que asuma la dirección de la obra.

(18)

### **ENMIENDA**

#### **Al Artículo 181**

#### **De modificación al apartado 2**

Se propone la siguiente redacción que modifica el apartado 2 del artículo 181 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

***“2. Cuando el objeto del contrato se refiera a la redacción de proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo, trabajos complementarios y dirección de las obras, deberán aplicarse las normas de la presente sección. Los concursos de proyectos pueden responder a uno de los dos tipos siguientes: “***

### **MOTIVACIÓN:**

Establecer con claridad que la adjudicación de este tipo de proyectos por parte de los órganos de contratación, requiere necesariamente la aplicación de las normas especiales relativas a los concursos de proyectos, por cuanto su objeto es el específico de este procedimiento. Así lo establece claramente la Directiva 2014/24/UE (artículo 78 y 80) y lo ha reafirmado la propia doctrina del Tribunal Supremo (sentencia de 23 de abril de 2012). De esta manera se evitará la práctica -bastante extendida- de licitaciones de proyectos en los que no se aplican estas normas especiales, con los efectos que ello produce.

(18)



## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 181**

#### **Adición de un apartado 4**

Se propone la siguiente redacción que añade un apartado 4 (nuevo) al artículo 181 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

“4. Los concursos de proyectos podrán organizarse mediante procedimiento abierto o procedimiento restringido.

a) En el procedimiento abierto: existirá una fase inicial en la que se presentará una idea concisa con respecto al objeto del concurso; y una segunda fase con los concursantes seleccionados, que presentarán una propuesta con desarrollo de anteproyecto, en la que se decidirá sobre la adjudicación.

b) En el procedimiento restringido: una primera fase de selección de los concursantes invitados y una segunda fase en la que los concursantes que hayan resultado seleccionados, presentarán propuesta técnica a nivel de anteproyecto, en la que se decidirá sobre la adjudicación”.

## **MOTIVACIÓN.**

Parece necesario precisar las dos modalidades de procedimiento que pueden darse en los concursos de proyectos: el abierto y el restringido. Y en ambos procedimientos establecer dos fases o dos vueltas, con lo que de una parte se garantiza el principio de libre acceso a las licitaciones y por otra parte, se agiliza el procedimiento, concretándose en la segunda fase la adjudicación de la mejor propuesta técnica.

(18)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 182

De modificación al apartado 2

Se propone la siguiente redacción que modifica el apartado 2 del artículo 182 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

***"2. En el caso de que se admitieran premios o pagos, las bases del concurso deberán indicar, según el caso, la cantidad fija que se abonará en concepto de premio. Los participantes, en los concursos de proyectos, tendrán derecho a recibir la compensación económica correspondiente, proporcionada a los trabajos realizados que presenten, en la segunda fase de los procedimientos, tanto abierto como restringido."***

## **MOTIVACIÓN**

El texto del apartado 2 del artículo 182 del Proyecto, supone sin duda un avance en orden a reconocer el derecho de compensación que tienen los participantes en los concursos de proyectos, que han realizado un trabajo y han dedicado un tiempo considerable a la elaboración de propuestas técnicas que se presentan a tales concursos. Hasta ahora, no se reconocía esta compensación y el texto en tal sentido supone un avance. Sin embargo, debe establecerse con carácter obligatorio, este reconocimiento, siempre y en todo caso por esa razón de equidad mencionada.

El esfuerzo y el trabajo realizado que constituyen una aportación a tales concursos, merecen una adecuada y justa compensación.

(18)

### **ENMIENDA**

Al artículo 182

De adición, añadiendo un apartado 3 (nuevo)

Se propone la siguiente redacción añadiendo un apartado 3 (nuevo) al artículo 182 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“3. En los concursos de proyectos, los criterios de adjudicación del contrato y valoración de las propuestas se referirán a la calidad de las mismas y sus valores técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y medioambientales. La oferta económica no regirá en la adjudicación, que se efectuará a través de la forma de un precio fijo de licitación.”*

### **MOTIVACIÓN:**

Los concursos de proyectos por su propia definición en el mismo texto del Proyecto, tienen por objeto la selección, tras la correspondiente licitación, de “los méritos de cada proyecto” (artículo 185.5 del propio texto del Proyecto). No se menciona el precio o coste económico. La propia Directiva Comunitaria 2014/24/UE, señala que los operadores económicos pueden competir únicamente en función de criterios de calidad y el factor coste adoptar la forma de un precio o coste fijo (artículo 67.2). La enmienda es pues congruente con el objeto del concurso de proyectos y acorde con la Directiva Comunitaria.

(18)

### **ENMIENDA**

Al artículo 185

De modificación, al apartado 3.

Se propone la siguiente redacción que modifica el apartado 3 del artículo 185 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“3. Cuando se exija una cualificación profesional específica para participar en un concurso de proyectos, al menos dos tercios de los miembros del jurado deberán poseer dicha cualificación u otra equivalente. La mitad de estos miembros del Jurado, deberán elegirse de las bolsas de profesionales acreditadas a tal efecto en los Colegios Profesionales correspondientes al ámbito territorial donde se ejecute la obra.”*

### **MOTIVACIÓN:**

Reforzar y garantizar plenamente el principio de especialidad en la composición del jurado, que ha de tener una mayoría significativa de miembros cualificados. Justamente por ser su función netamente técnica y especializada. Propiciar la participación de profesionales a través de las bolsas acreditadas de que disponen los Colegios Profesionales

(18)

### **ENMIENDA**

Al artículo 185

De adición, añadiendo un apartado 11 (nuevo)

Se propone la siguiente redacción que incluye como nuevo el apartado 11 del artículo 185 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“11. Las normas relativas a los concursos de proyectos previstas en esta Subsección, se completarán y desarrollarán reglamentariamente.”*

### **MOTIVACIÓN:**

Las normas que contiene la regulación del concurso de proyectos, tienen el carácter general propio del texto de una Ley. Por ello, parece oportuno y necesario establecer la previsión de que a través de un Reglamento se puedan desarrollar y completar aspectos de detalle precisos para una mejor concreción del procedimiento.

(18)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 196**

De adición al apartado 1 después del primer párrafo

Se propone la siguiente redacción para incluir un párrafo nuevo después del primer párrafo del apartado 1 del artículo 196 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

1. El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato, con arreglo al precio convenido.

***“El pago del precio podrá realizarse directamente por el órgano de contratación o por la entidad que éste designe en virtud de las obligaciones que dicha entidad tenga respecto al órgano de contratación”.***

## **MOTIVACIÓN**

Introducir la posibilidad que el contratista pueda ser pagado por entidades distintas al órgano de contratación en la medida en que dichas entidades previamente hayan sido obligadas a ello. Sería el caso, por ejemplo, de los supuestos en los que sean los concesionarios de servicios verticales los que, a su vez, y en lugar o paralelamente a la administración, paguen, por ejemplo, los servicios del prestador de servicios de plataforma.

(8)

## **ENMIENDA**

Al artículo 196

De modificación, apartado 4

Se propone modificar el apartado 4 del artículo 196, con la siguiente redacción:

*“4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la entrada de la factura, o solicitud de pago equivalente, en el registro administrativo, y si esta fecha fuera dudosa dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la recepción de los bienes o prestación del servicio, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 208, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.*

*Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 208 y en el apartado 1 del artículo 241, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.*

*En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.”*

## **MOTIVACIÓN:**

Tras las modificaciones introducidas en la Ley 3/2004 en el año 2010 (Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre) y el 2013 (Real Decreto 4/2013, de 22 de febrero y la Ley 11/2013 de 26 de julio, ambas de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo), el periodo de tiempo que tienen tanto empresas como administraciones públicas para comprobar o verificar la conformidad de los bienes entregados o servicios prestados

es de 30 días naturales desde la recepción de los bienes o la prestación de los servicios.

Por tanto, el artículo 196.4 del Proyecto de LCSP al posibilitar que mediante acuerdo expreso en contrato o cualquier documento que rijan una licitación las Administraciones Públicas puedan ampliar, sin indicar un máximo, el plazo para aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato, se configura como un precepto contrario a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Así mismo, el artículo 196.4 del Proyecto de LCSP es totalmente contrario a la Directiva 2011/7/UE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En primer lugar porque el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 2011/7/UE, 16 de febrero, determina el inicio del cómputo del plazo de pago que deben cumplir los poderes públicos en las operaciones comerciales con empresas (que es de 30 días), desde la recepción de la factura o solicitud de pago equivalente, o en caso que la fecha de dicha recepción sea dudosa, a partir de la recepción de los bienes o la prestación del servicio.

Mientras que el artículo 196.4 del Proyecto de LCSP determina el inicio del plazo de pago, siempre *a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados*, condicionando, consecuentemente, el pago por parte del deudor a un acto (verificación y comprobación) que ha de hacer éste, en el que no puede intervenir el acreedor y que se puede extender por encima de los 30 días naturales, ya que cabe la posibilidad que el mismo se amplíe por *acuerdo expreso o en alguno de los documentos que rijan la licitación*.

Y en segundo lugar, porque una deliberada ampliación por encima de los 30 días naturales, en la duración del procedimiento para la verificación o aceptación de los bienes entregados o los servicios prestados impuesta por la parte más fuerte de la relación contractual, como es la Administración, ya que cabe recordar que dicha ampliación del plazo puede estar en algunos de los documentos que rijan la licitación, conlleva una clara infracción del artículo 4 de la Directiva 2011/7/UE que regula las operaciones entre empresas y poderes públicos, y más concretamente el apartado 6 al establecer que *“Los Estados miembros se asegurarán de que en los contratos no se fijen plazos de pago más largos que los indicados en el apartado 3, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que ello esté objetivamente justificado por la naturaleza o características particulares del contrato y que, en ningún caso, excedan de 60 días naturales”*.

No pudiendo, consecuentemente, haber un periodo de tiempo para la verificación de la conformidad con los bienes entregados o los servicios prestados que no esté limitado



en el tiempo, como sucede con el artículo 196.4 del Proyecto de LCSP, ya que si el mandato europeo plantea que los poderes públicos paguen a los 30 días naturales desde la recepción de la factura, o desde la recepción de los bienes o prestación de servicios, si estos se reciben con posterioridad a la factura, pudiendo ampliar dicho plazo de pago hasta un máximo de 60 días para determinados supuestos, no es ajustado a derecho europeo que una Administración Española incumpla el plazo máximo de pago de 60 días desde recepción de bienes o prestación de servicios, a través de la ampliación del plazo del procedimiento de aceptación o verificación de los bienes entregados o los servicios prestados, que siempre es el procedimiento previo al pago de cualquier factura que debe pagar la administración en el Estado Español, tal y como reza en el primer párrafo del artículo 196.4 del Proyecto de LCSP: *" La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados,(...)"*

La Directiva 2011/7/UE establece en su articulado (4.3. iv) y 4.5) la posibilidad que se establezca un procedimiento de aceptación o comprobación para verificar la conformidad con los servicios o bienes entregados, pero nunca condiciona el inicio del cómputo del plazo de pago a la finalización de dicho procedimiento de verificación, sino todo lo contrario, ya que en tales supuestos el deudor debe seguir pagando a los 30 días de la recepción de la factura; y aún máxime, cuando el deudor debe iniciar su procedimiento de verificación a partir de la recepción de los bienes o servicios, o sea, con bastante anterioridad a la recepción de la factura. En virtud de lo expuesto, se comprueba que la directiva europea contra la morosidad, marca un día de inicio de cómputo del plazo de pago totalmente determinable (recepción de factura o solicitud de pago equivalente, y si la fecha de esta recepción fuera dudosa, desde la recepción de los bienes o la prestación de los servicios; independientemente que haya o no un proceso de verificación), y que dicho criterio objetivo de inicio de cómputo de plazo de pago no puede ser cambiado en perjuicio del acreedor por parte de los Estados miembros, tal y como sucede con el artículo 196.4 del Proyecto de LCSP, ya que la redacción dada a dicho artículo es un claro y fragante incumplimiento de la directiva europea, pudiendo ésta directiva ser de aplicación directa en el Estado miembro cuando su transposición no se ajusta a las directrices dadas.

Tanto la Directiva 2011/7/UE como la Ley 3/2004, tienen un mismo ámbito de aplicación como es regular todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración (poderes públicos), debiendo haber una correlación y armonía entre las normas que establecen plazos de pago, y no una dicotomía o una clara contradicción entre unas y otras, como sucede en la actual regulación española.

## **ENMIENDA**

Al Artículo 199

De adición al finalizar el párrafo de artículo

Se propone añadir un nuevo texto al finalizar el párrafo actual del artículo 199 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el Anexo V. *“Asimismo, los órganos de contratación podrán tomar las oportunas medidas para comprobar dichos cumplimientos en los licitadores.”*

## **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica ya que debería extenderse la obligación no solo a los contratistas sino también a los licitadores y evitar problemas posteriores de incumplimientos.

(5)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 200

De modificación, al título del artículo

Se propone modificar el título del artículo 200 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

“200. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético y medioambiental”.

### **MOTIVACIÓN:**

Se considera más apropiado y completo el título propuesto con relación a los aspectos y objetivos recogidos en el artículo 200.

(41, 13)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 200, Apartado 1

De modificación

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 200, que tendrá la siguiente redacción:

“1. Los órganos de contratación establecerán condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos.”

### **MOTIVACIÓN:**

Este artículo hace referencia, en su punto 2, a las emisiones de CO2, que son objetivo nacional del Reino de España y, por tanto, de toda obra pública suya.

(50)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 200.2

De modificación, apartado 2

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 2 en el artículo 200 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

2. *“Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social.*

***En particular, se establecerán –siempre que la naturaleza del contrato lo permita– consideraciones de tipo medioambiental servirán para mejorar los compromisos del Reino de España en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y de mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Asimismo, permitirán una gestión más sostenible del agua, fomentarán el uso de las energías renovables, promoverán el reciclado de productos y el uso de envases reutilizables e impulsarán la entrega de productos a granel***

*Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, entre otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral; eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar; combatir el paro; favorecer la formación en el lugar de trabajo; **medidas para prevenir la siniestralidad laboral, cumplimiento de los Convenios de la OIT 29, 87, 94, 100, 105, 138 y 182,** otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas aquellas consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables.”*

### **MOTIVACIÓN:**

El cumplimiento de los objetivos de lucha contra el cambio climático y la mejora de la sostenibilidad social y ambiental de los contratos públicos obliga a la introducción de medidas en el momento de la ejecución. El cambio es doble, por un lado se refuerzan los tipos de medidas que se pueden emplear, que superan una visión estrecha de los mismos. Al mismo tiempo, se impone la obligación de que en todo contrato en que por su naturaleza resulte posible se recojan este tipo de medidas ambientales y sociales.

(33, 13 y 50)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 200.2

De adición al apartado 2

Se propone incluir una frase de adición dentro de un párrafo determinado del apartado 2 del artículo 200 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

2. (...)

*(...) hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; "contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional;" promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral; (...).*

## **MOTIVACIÓN:**

Es fundamental poder ampliar la atención y la preferencia prevista por la contratación de personas con discapacidad, de forma que la contratación pública pueda ser un elemento decisivo de igualdad y de oportunidades. Esta enmienda va en consonancia con la anterior y posterior planteada por el GPS.

(36)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 200.2

De adición

Se propone incluir una frase de adición dentro de un párrafo determinado del apartado 2 del artículo 200 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

2. (...)

(...) hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional; promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral "a través de Empresas de Inserción"; (...).

### **MOTIVACIÓN:**

Proponemos incorporar las consideraciones de tipo social en consonancia con la Directiva Comunitaria 2014/24/UE. Esta enmienda va en consonancia con las anteriores planteadas por el GPS.

(29)



## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 200**

De adición apartado 3º (nuevo), de manera que el actual apartado 3º pase a ser el 4º.

Se propone adicionar un nuevo apartado 3 (nuevo), de modo que el actual párrafo 3 pase a ser el 4 dentro del artículo 200 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

“3 (nuevo). Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales de ejecución que obliguen a la empresa adjudicataria, a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con la legislación fiscal vigente sin incurrir en blanqueo de capitales, fraude fiscal, delito contra la Hacienda Pública o utilización de paraísos fiscales. En idénticos términos, se podrá exigir de la empresa adjudicataria que los ingresos o beneficios procedentes del contrato público no podrán en ningún caso destinarse a realizar operaciones en ningún país de aquellos incluidos en la lista de paraísos fiscales establecida por la OCDE, el Gobierno de España, o la Comisión Europea, bien sea de forma directa o a través de empresas filiales.

A tal efecto se podrá requerir de todas las empresas licitadoras una declaración responsable asumiendo el compromiso de cumplimiento de la citada condición especial de ejecución. Dichas declaraciones responsables podrán hacerse públicas.

A esta condición especial de ejecución se le podrá atribuir el carácter de obligación contractual esencial, lo que facultará al órgano de contratación a la imposición de sanciones o a la rescisión del contrato.

1. (...)”

## **MOTIVACIÓN:**

La enmienda propone establecer con plenas garantías jurídicas y técnicas una condición especial de ejecución que exija a las empresas adjudicatarias de los contratos públicos la utilización fraudulenta de paraísos fiscales.

Su legalidad deviene de la propia naturaleza de la obligación establecida, pues se limita a ampliar los supuestos ya establecidos a título ejemplificativo en el artículo 200.2. Por lo tanto, la enmienda se halla en plena consonancia con el propio artículo 200 del Proyecto de Ley, y en plena consonancia con el artículo 70 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

Debe advertirse el escrupuloso respeto a los principios que rigen la normativa de contratación pública, por cuanto la redacción propuesta se limita a la fase de ejecución del contrato, exclusivamente al ámbito de prestación del mismo y en ningún caso se

plantea en relación a la política general de la empresa, ni sobre otras cuestiones o aspectos ajenos a la propia ejecución contractual.

El propio artículo 129 del actual Proyecto de Ley, se refiere a la "Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales", resultando plenamente justificado el establecer dicha obligación.

Del mismo modo, el artículo 141 del Proyecto de Ley, establece que "Los órganos de contratación incluirán en el pliego, junto con la exigencia de declaración responsable, el modelo al que deberá ajustarse la misma".

(41)

## ENMIENDA

### Al artículo 203

#### De modificación

Se propone la modificación del artículo 203, que quedará con la siguiente redacción:

"Artículo 203. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales.

1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este artículo.

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes:

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios, **tengan la consideración de públicos o no**, adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, así mismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.

2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:

1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación.

2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo caso, se considerará que se amplía de modo importante el ámbito del contrato cuando las modificaciones supongan una alteración en su cuantía que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras, o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos.

Para el cálculo del precio mencionado en las letras a) y b) de este apartado se tomará en cuenta el precio actualizado, si el contrato incluye cláusula de revisión de precios. En los contratos de concesión de obras, **de concesión de servicios públicos** o de concesión de servicios **no públicos**, si la concesión no incluye cláusula de revisión de precios, el valor actualizado se calculará teniendo en cuenta la inflación media medida conforme al índice de precios de consumo”.

**MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 203

De supresión, del punto a) correspondiente al apartado 2

Se propone la supresión del punto a) correspondiente al apartado 2 en el artículo 203 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

### **MOTIVACIÓN:**

Supone una vía abierta a contratación adicional sin cumplir con los requisitos de publicidad, concurrencia e igualdad hasta en un margen del 50% de la contratación inicial.

(36)

## ENMIENDA

Al artículo 205

De modificación

Se propone la modificación del artículo 205, que quedará con la siguiente redacción:

“Artículo 205. Especialidades procedimentales.

1. En el caso previsto en el artículo 202 las modificaciones contractuales se acordarán en la forma que se hubiese especificado en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

2. Antes de proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 203, deberá darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

3. Los órganos de contratación que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a regulación armonizada, a excepción de los contratos **de gestión de servicios públicos**, de servicios y de concesión de servicios **no públicos**, enumerados en el Anexo IV, en los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 203 deberán publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea el correspondiente anuncio de modificación conforme a lo establecido en esta Ley.

Asimismo los órganos de contratación que hubieran modificado un contrato durante su vigencia, con independencia de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma.

3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 189”.

## MOTIVACIÓN:

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 209, Apartado 1

De adición

Se propone la adición de una nueva letra i) al apartado 1 del artículo 209, que tendrá la siguiente redacción:

*"i) Los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa."*

### **MOTIVACIÓN:**

Se trata de incluir, como causa de resolución de estos contratos, el incumplimiento de las obligaciones salariales por el contratista.

(10 y 30)



## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 210.5**

#### **De modificación**

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 5 del artículo 210 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"5. En caso de declaración en concurso la Administración potestativamente continuará el contrato si razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las garantías adicionales y suficientes para su ejecución.*

*Se entenderá por garantías suficientes:*

- a) aquellas complementarias en al menos un 5% del precio final ofertado por el licitador en cualquiera de las formas contempladas en el art. 108;*
- b) la fianza constituida como cláusula penal para el caso de incumplimiento por parte del contratista*
- c) la aprobación judicial del plan de viabilidad que acompañe la propuesta convenio cuando se prevea -para atender al cumplimiento del convenio- contar con los recursos que genere la continuación en el ejercicio de la actividad profesional o empresarial.*

*La decisión corresponderá al Juez concursal con la intervención de la Administración a través del correspondiente incidente concursal mediante informe vinculante de ésta.*

*La apertura de la fase liquidación dará lugar a la resolución automática del contrato."*

## **MOTIVACIÓN:**

La liquidación concursal es una fase del procedimiento a la que se llega bien directamente cuando el deudor sabe que no será posible alcanzar un acuerdo con los acreedores bien porque se incumple el convenio. Ello significa que la sociedad no tiene visos de recuperación y que, en consecuencia, no hay otra vía que Plan de liquidación tendente a la venta de los activos para, con su resultado, satisfacer las deudas de la entidad con los acreedores. Aun cuando se prefieren aquellas que garanticen la continuidad de la empresa y el mantenimiento de puestos de trabajo, el Juez puede autorizar la división de los elementos que integran el patrimonio social. En todo caso, la finalidad de la liquidación es la realización de los bienes y la desaparición del ente societario razón por la cual no parece razonable pensar en la posibilidad de que la Administración no resuelva el contrato. La protección del interés público parece

exigir que con la liquidación deban resolverse los contratos. En definitiva, si quien contrata con la Administración debe generar en todo momento confianza ésta no existe ni puede existir cuando se ha producido la apertura de la fase de liquidación cuya finalidad es la extinción del ente societario.

En cuanto al tema de las garantías suficientes:

Referirse a "garantías suficientes" no es sino emplear un concepto jurídico indeterminado cuya concreción ha planteado no pocos problemas y las opiniones que sobre la materia se han vertido son ciertamente opuestas por lo que resulta razonable su concreción. Parece que la Administración no pueda rehusar una petición del contratante si son realmente suficientes; esto es, han de prestarse garantías adicionales a las originariamente prestadas por el contratista (conectar con los arts. 107 y 108 PLCSP).

Algunos autores, en relación con el contrato de concesión de obra pública han entendido que debía propugnarse un planteamiento dinámico del concepto de "garantía" que atendiese no tanto a la riqueza en un determinado momento sino a las posibilidades de que se genere ésta como consecuencia de la continuación de la actividad que representa la concesión. De este modo, parecería razonable sostener que la Administración no debiera resolver el contrato de concesión salvo que ésta no estuviera conforme con el plan de viabilidad del deudor o éste no lo hubiera presentado.

La decisión de continuar o no el contrato hasta ahora ha sido potestativa de la Administración. No obstante, parece lógico que si se trata de un deudor concursado las actuaciones de la Administración se coordinen con el Juez Concursal que es quien, en definitiva, conoce la verdadera situación económico-financiera del empresario. Más aún, si en relación con los contratos privados es éste quien decide la oportunidad o conveniencia de su mantenimiento, parece razonable que éste tome la decisión sobre los efectos del concurso sobre los contratos administrativos aun cuando la tome sobre la base del Informe que elabore la propia Administración. No se es ni se puede ser ajeno al procedimiento concursal. No hay que olvidar, por otro lado, que muchos deudores concursados lo son como consecuencia de los impagos de la Administración lo que ha motivado diversas reformas y medidas en materia de lucha contra la morosidad.

(33)

## ENMIENDA

### Al artículo 212

#### De modificación

Se propone la modificación del artículo 212, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 212. Cesión de los contratos.

1. Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 98 y sin perjuicio de la subrogación que pudiera producirse a favor del acreedor hipotecario conforme al artículo 272.2 o del adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria en virtud del artículo 273, la modificación subjetiva de los contratos solamente será posible por cesión contractual, cuando obedezca a una opción inequívoca de los pliegos, dentro de los límites establecidos en el párrafo siguiente.

A tales efectos, los pliegos establecerán necesariamente que los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

2. Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los pliegos deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de **gestión de servicios públicos**, servicios que **consistan en el desarrollo de una actividad**, concesión de obras o concesión de servicios **no públicos**, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito

ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.»

### **MOTIVACIÓN:**

Se incluyen los contratos de gestión de servicios públicos, de servicios que consisten en el desarrollo de una actividad y de concesión de servicios no públicos en concordancia con la definición de los mismos dada en los artículos 15 y 17, respectivamente.

(53)

### **ENMIENDA**

Al artículo 212

De modificación

Se modifica el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 212, quedando como sigue:

"A tales efectos, los pliegos establecerán necesariamente que los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Cuando los pliegos prevean que los licitadores que resulten adjudicatarios constituyan una sociedad específicamente para la ejecución del contrato, establecerán la posibilidad de cesión de las participaciones en esa sociedad, así como el supuesto en que, por implicar un cambio de control sobre el contratista, esa cesión de participaciones debe ser equiparada a una cesión contractual a los efectos de su autorización de acuerdo con lo previsto en el presente artículo. Los pliegos podrán prever mecanismos de control de la cesión de participaciones que no impliquen un cambio de control en supuestos que estén suficientemente justificados"

### **MOTIVACIÓN:**

Se contempla expresamente la cesión de participaciones en sociedades contratistas de propósito específico (concesionarias), para crear una mayor certeza de la posibilidad y condiciones de la cesión, necesaria para la existencia de un mercado secundario de concesiones.

(24)

## **ENMIENDA**

### **Al artículo 212**

#### **De modificación**

Se modifica apartado 2 del artículo 212, quedando como sigue:

"2. Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los pliegos deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos:

- a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, transcurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.
- b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.
- c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
- d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública"

## **MOTIVACIÓN:**

Se establece un plazo reducido para la autorización de la cesión, un sistema de silencio positivo que agilice la autorización y se prevé, en línea con lo dispuesto en el artículo 86.3 modificado, que las condiciones de solvencia del cesionario puedan ser distintas en las diversas fases del contrato (por ejemplo, ya acabada la construcción en una concesión de obras públicas).

Se elimina la referencia a la cesión en la fase de liquidación de un concurso, habida cuenta de que con la modificación del artículo 210 en ese momento el contrato debe estar necesariamente resuelto.

(24)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 212, Apartado 2, letra c)

De modificación

Se propone la modificación de la letra c) del apartado 2 del artículo 212, que tendrá la siguiente redacción:

“c) Que el cesionario cumpla todas las condiciones de aptitud adecuadas al contrato.”

### **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica para promover la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en los procesos de contratación pública.

(57)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 213.1

De modificación, apartado 1

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 1 del artículo 213 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º de este artículo, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero.*

***En todo caso, el contratista deberá cumplir al menos con el 50% de cada una de las prestaciones incluidas en el contrato, que deberán ser, además, las esenciales desde un punto de vista técnico.***

*En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley respecto a los contratos de carácter secreto o reservado, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado”.*

## **MOTIVACIÓN:**

La enmienda pretende conseguir que la parte sustancial de cada contrato público sea cumplido efectivamente por el contratista. La subcontratación está produciendo distorsiones a la competencia y provoca perjuicios a las pequeñas y medianas empresas –sobre todo de ámbito local-. Al mismo tiempo, las subcontrataciones constituyen un factor que repercute en los salarios de los trabajadores.

(33)



### **ENMIENDA**

Al Artículo 213.2 a)

De modificación

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 2 a) del artículo 213 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

2. (..)

*"a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar. En el momento de la presentación de la oferta señalarán quiénes son los subcontratistas propuestos, a los efectos de valorar su cualificación profesional. Dicha indicación vendrá acompañada de una declaración responsable del subcontratista de que está de acuerdo en cumplir con las condiciones del contrato."*

### **MOTIVACIÓN:**

Se trata de una medida que incorpora el contenido del artículo 71.2 de la Directiva europea.

(33)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 213, Apartado 2

De adición

Se propone la adición, en el apartado 2 del artículo 213, de una nueva letra f), que tendrá la siguiente redacción:

“f) Los órganos de contratación de las regiones ultraperiféricas podrán exigir a las empresas a las que se concede un contrato público que contraten mano de obra local, siempre y cuando no exista discriminación directa ni indirecta en relación con la libertad de establecimiento y de prestación de servicios y se eviten los conflictos de intereses.”

## **MOTIVACIÓN:**

Debe tenerse en consideración que el impulso de la actividad de las empresas locales, que como ocurre en Canarias están domiciliadas en un territorio considerado como Región Ultraperiférica (RUP), no puede entenderse desligado del factor económico-social.

Tal y como se recogen en muchos textos comunitarios, como por ejemplo, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión “Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea: hacia una asociación en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, entre estas regiones se incluyen algunas con las mayores tasas de desempleo de la UE, de tal forma que el paro estructural constituye un problema muy grave para el desarrollo de estas regiones.

(50)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 213.2

De supresión, apartados b), c) y d)

Se propone la siguiente redacción que suprime los apartados b), c) y d) del artículo 213.2 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

### **MOTIVACIÓN:**

Es consecuencia de la enmienda anterior que impone la obligatoriedad de incorporar el la referencia de los subcontratistas

(33)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 213.7

De modificación al apartado 7

Se propone la modificación del apartado 7 del artículo 213 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“7. Los órganos de contratación podrán imponer al contratista, advirtiéndolo en los pliegos, la subcontratación con terceros no vinculados al mismo, de determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto del 60 por ciento del presupuesto base de licitación del contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación profesional o poder atribuirse su realización a empresas con una clasificación adecuada para realizarla. En el Pliego de Cláusulas Administrativas, el órgano de contratación podrá imponer que la subcontratación se realice con empresas o personas de reciente creación, con una presencia de mujeres superior a la media del sector, con incorporación a su plantilla de desempleados mayores de 45 años o en condiciones de difícil empleabilidad y que atiendan a las exigencias y requerimientos medioambientales y de sostenibilidad.*

*Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en el párrafo anterior tendrán simultáneamente la consideración de condiciones especiales de ejecución a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 190 y la de obligaciones esenciales a los efectos prevenidos en la letra f) del apartado 1 del artículo 209.”*

## **MOTIVACIÓN:**

La subcontratación es una fórmula para posibilitar el acceso de las PYMES y de las empresas de nueva creación (que normalmente no gozan de clasificación ni cumplen garantías de solvencia por su juventud) a la contratación pública. Ampliar su nivel de participación a los niveles de la normativa anterior, posibilita que estas empresas de escasa dimensión o trayectoria acumulen experiencia para futuras licitaciones.

(36)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 213.9

De supresión

Se propone suprimir el artículo 213.9 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

### **MOTIVACIÓN:**

Debe tenerse en cuenta que el artículo 71.3 de la Directiva 2014/24/UE, habilita a los Estados miembros a prever que, "a petición del subcontratista y cuando la naturaleza del contrato lo permita, el poder adjudicador transfiera directamente al subcontratista las cantidades que se le adeuden por los servicios prestados, los suministros entregados o las obras realizadas para el operador económico al que se haya adjudicado el contrato público (el contratista principal)".

Por ello proponemos la eliminación de la prohibición expresa y manifestamos la conveniencia de introducir reglamentariamente alguna fórmula que contemple dicho pago directo a los subcontratistas.

(11)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 214, Apartado 2

De modificación

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 214, que tendrá la siguiente redacción:

*"2. Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y se computarán desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con indicación de su fecha y del período a que corresponda."*

## **MOTIVACIÓN:**

En consonancia con lo establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Civil) en su Sentencia de 23 de noviembre de 2016, CAS 2883/2014, reconociendo el carácter abusivo de la cláusula contractual que establece un plazo superior a 60 días para el abono de las facturas al amparo de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

(52)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 214.5  
De modificación

Se propone la modificación del apartado 5 del artículo 214 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"5. Si el contratista no cumpliera con la obligación abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto en el apartado 2, los órganos de contratación abonarán las facturas deduciéndose el importe satisfecho y los correspondientes intereses de demora del precio del contrato."*

## **MOTIVACIÓN:**

En virtud del art. 214.2 del PLCSP El plazo de pago del contratista a los subcontratistas o suministradores no podrá ser más desfavorable que el de 30 días naturales, previstos en el artículo 196.4 para las relaciones entre la Administración y el contratista.

Este plazo conforme al espíritu de la ley contra la morosidad debe ser imperativo y no puede ser ampliado por acuerdo entre las partes.

La posibilidad de pacto entre las parte que introduce el art. 214.5 del PLCSP es contrario al referido espíritu y produce una incertidumbre legal sobre el plazo de pago máximo aplicable a los suministradores y subcontratistas del contratista, por lo que al amparo del principio de seguridad jurídica deben derogarse expresamente el artículo 214.5 del PLCSP.

(11)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 214, Apartados 5 y 6

De supresión

Se propone la supresión de los apartados 5 y 6 del artículo 214

## **MOTIVACIÓN**

En consonancia con lo establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Civil) en su Sentencia de 23 de noviembre de 2016, CAS 2883/2014, reconociendo el carácter abusivo de la cláusula contractual que establece un plazo superior a 60 días para el abono de las facturas al amparo de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

(52)



## **ENMIENDA**

### Al Artículo 215 De modificación

Se propone la modificación del artículo 215 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*Artículo 215. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores.*

*“1. Los órganos de contratación comprobarán el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas principales han de hacer a los subcontratistas o suministradores que participen en la ejecución del contrato. En todo caso, los contratistas principales presentarán al órgano de contratación el correspondiente plan de pagos en el plazo máximo de un mes tras el inicio de la ejecución del contrato.*

*A efectos de la comprobación señalada en el párrafo anterior, los órganos de contratación requerirán al contratista principal la información y justificantes que se indican en el apartado siguiente. La previsión que hagan los pliegos o el documento descriptivo en este sentido deberá calificar la obligación de información del contratista principal como condición especial de ejecución, cuyo incumplimiento conllevará, entre otras consecuencias previstas en esta Ley, la imposición de penalidades en los términos indicados en el artículo 190.*

*2. El requerimiento de información y justificantes a que se refiere el apartado anterior comprenderá:*

- a) Una relación detallada de aquéllos subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.*
- b) Las condiciones de subcontratación o suministro acordadas por el contratista principal con los subcontratistas o suministradores y que guarden una relación directa con el plazo de pago.*
- c) El justificante o justificantes de cumplimiento de los pagos a subcontratistas y suministradores, una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 214 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le resulte de aplicación”.*



**MOTIVACIÓN:**

La lucha contra la morosidad requiere un mayor control por parte de las Administraciones Públicas de los pagos que los contratistas adjudicatarios deben hacer a los subcontratistas.

Pero para que este control sea efectivo no basta que la comprobación de los pagos a subcontratistas sea una facultad del órgano de comprobación sino que es necesario que, en todo caso, sea una obligación.

(11 y 50)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 215**

#### **De modificación**

Se propone la siguiente redacción que modifica parcialmente algunos aspectos del artículo 215, incluyendo un párrafo final dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“Estas obligaciones, que **en todo caso** se incluirán en los anuncios de licitación y en los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos.”*

## **MOTIVACIÓN:**

En consonancia con lo establecido en:

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización Dictamen del Consejo de Estado número 1.116/2015 de 10 de marzo No parece oportuno restringir o condicionar la facultad del órgano de contratación de comprobar los pagos a subcontratistas y suministradores, la cual ha sido introducida para luchar contra la morosidad. Por ello, el artículo 215.1 debe reconocer la referida facultad a favor del órgano de contratación “en - 234 - todo caso”, y no solamente cuando así esté contemplado en la documentación contractual de 2016. Incluir en consonancia con la enmienda anterior un último párrafo en el nuevo apartado 1.

(17)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 215

De adición

Se propone la adición, en el artículo 215, de un tercer apartado (en consonancia con una enmienda anterior planteada), que tendrá la siguiente redacción:

“Artículo 215. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores.

(...)

(...)

*3º. A petición del subcontratista y cuando la naturaleza del contrato lo permita, el poder adjudicador transferirá directamente al subcontratista las cantidades que se le adeuden por los servicios prestados, los suministros entregados o las obras realizadas para el operador económico al que se haya adjudicado el contrato público (el contratista principal), en casos especiales a determinar reglamentariamente.”*

## **MOTIVACIÓN:**

En consonancia con lo establecido en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, según el Dictamen del Consejo de Estado número 1.116/2015 de 10 de marzo de 2016. Se trata de un tercer apartado en consonancia con una enmienda anterior presentada por el GPS que la completa.

(52)

**ENMIENDA NÚM.**

Al artículo 216

De modificación

Se propone la modificación del artículo 216, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 216. Sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas.

Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las Administraciones Públicas podrán concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación de obras, servicios, **tengan la consideración de públicos o no**, y suministros en servicios especializados, conforme a las normas de este Capítulo.»

**MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

### **ENMIENDA**

#### **Al Artículo 224**

De adición al finalizar el apartado 4

Se propone la siguiente redacción añadiendo un texto nuevo al finalizar el apartado 4 del artículo 224 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“4. Los órganos de contratación adjudicarán el contrato específico al licitador que hubiera presentado la mejor oferta, de acuerdo con los criterios de adjudicación detallados en el anuncio de licitación para el sistema dinámico de adquisición. Cuando proceda, estos criterios podrán formularse con más precisión en la invitación a los candidatos. **Según lo dispuesto en el artículo 165 apartado e), se considerarán irregulares o inaceptables las ofertas que no se ajusten a lo previsto en los pliegos; aquéllas que se hayan presentado fuera de plazo; las que muestren indicios de colusión o corrupción; las que hayan sido consideradas anormalmente bajas por el órgano de contratación; o aquéllas cuyo precio supere el presupuesto base de licitación**”.*

### **MOTIVACIÓN:**

Se propone su ajuste con el objeto de limitar las subastas a la baja de la misma manera que se limitan las ofertas a la baja en el resto de los procedimientos de adjudicación.

(19)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 226

De modificación al apartado 3

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 3 del artículo 226 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"3. Mediante los correspondientes acuerdos, las CCAA y las Entidades Locales podrán adherirse a sistemas de adquisición centralizada de otras entidades del sector público incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley. La adhesión al sistema estatal de contratación centralizada, en este último caso, se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 227 de la presente Ley."*

## **MOTIVACIÓN**

Se pretende, por un lado, simplificar la redacción y, por otro, contemplar lo establecido en la disposición adicional quinta de la ley 7/1985, reguladora de bases del régimen local, así como en el apartado 9 de la disposición adicional segunda del proyecto, que permiten a las asociaciones de Entidades Locales crear centrales de contratación.

(8)

## **ENMIENDA**

### **Al artículo 236**

**De adición, apartado 4 nuevo**

**Se propone incluir un apartado 4 (nuevo) en el artículo 236, con la siguiente redacción:**

**"4. En todo caso, se incorporarán como condiciones de ejecución las siguientes:**

- 1. El cálculo del precio de la licitación deberá desagregarse.**
- 2. El precio por unidad de trabajo no podrá resultar inferior al coste del convenio colectivo aplicable.**
- 3. Cuando legal o convencionalmente proceda la subrogación –art. 130 de la presente ley- del personal que estuviera adscrito a la prestación de la obra o servicio objeto de licitación, tal circunstancia se hará constar en los pliegos de condiciones, con mención expresa de volumen y coste.**
- 4. En los casos en que, procediendo la subrogación de personal, el volumen considerado como prestación de servicio público por parte del órgano adjudicador resulte inferior al de la anterior licitación y se trate de una concesión que permita la prestación en régimen de monopolio, pudiendo ampliarse el volumen de prestación, el contratista deberá indicar en su propuesta el volumen exacto que se propone prestar, a los efectos de valorar tanto la mejora introducida como la correcta subrogación del personal, sin que con posterioridad a la adjudicación pueda modificarse el contrato unilateralmente por el contratista ampliando el servicio.**
- 5. El incumplimiento de las obligaciones laborales durante la ejecución del contrato será causa de resolución del mismo, incurriendo el contratista en causa de prohibición de contratar del art. 71 b) de la presente Ley.**

**Los pliegos de condiciones han de contener previsiones que prevengan la posibilidad de que se produzcan infracciones de la normativa laboral, contribuyendo igualmente a que los licitadores puedan examinar con exactitud las obligaciones que han de asumir si resultan adjudicatarias en orden a formular sus ofertas, que deberán acomodar a los costes en circunstancias previstas y previsibles, evitándose así desfases entre el precio y los costes en que necesariamente ha de incurrir la empresa en la gestión del servicio."**



### **MOTIVACIÓN:**

En las condiciones de ejecución, contenidas en los arts. 200, 236 y 285 LCSP, se hace preciso concretar más que reproducir de forma genérica los preceptos objeto de transposición y en concreto el art. 70 de la Directiva 2014/24/UE y sus considerandos 37, 39 y 98, en paralelo al contenido de la Directiva 2014/25/UE en su artículo 87 y considerandos 102 y 103, conteniendo todos ellos condiciones especiales de ejecución relativas al empleo, con mención al cumplimiento del contenido de los convenios colectivos de aplicación.

(72)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 245.2 a)

De modificación

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 2a) del artículo 245 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"a) Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características esenciales. **Asimismo, se deberá justificar las ventajas cuantitativas y cualitativas que proporciona el recurso a la concesión frente a otros medios de ejecución del contrato, con indicación de los niveles de calidad que resultan necesario cumplir, la estructura administrativa necesaria para verificar la prestación así como las variables en relación con el impacto de la concesión en la estabilidad presupuestaria.**"*

### **MOTIVACIÓN:**

Con los elementos anteriores se intenta garantizar un estudio integral de las concesiones con carácter previo, que nos permita obtener un informe sobre el *value for money* que es usual en los países de nuestro entorno. Al mismo tiempo, permitirá ponderar de forma más adecuada las ventajas cualitativas que se obtendrían con la concesión frente a otros procedimientos de ejecución del contrato.

(33)

## **ENMIENDA**

### Artículo 245

#### De adición, apartado 7 (nuevo)

Se propone incluir un apartado 7 (nuevo) en el artículo 245 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

"7 (nuevo): El órgano de contratación deberá aprobar el estudio de viabilidad, o en su caso adoptar la decisión de sustitución mencionada en el apartado anterior, y publicar esta decisión en el correspondiente Perfil del contratante."

## **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica de la enmienda para poner en valor medidas de transparencia.

(53)

### **ENMIENDA**

Al artículo 248

De adición

Se añade un nuevo epígrafe a continuación del b) del apartado 1 del artículo 248, con el siguiente contenido:

“b (bis)) Posibilidad de que se produzca la cesión del contrato de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la presente Ley, así como de las participaciones en la sociedad concesionaria, de constituirse una sociedad de propósito específico por los licitadores para la ejecución del contrato. Criterios para la determinación de cuándo la cesión de las participaciones debe considerarse, por suponer un efectivo cambio de control una cesión del contrato y, en el caso de que se justifique por las características del contrato, mecanismos de control para cesiones de participaciones en la sociedad concesionaria que no puedan equipararse a una cesión del contrato”

### **MOTIVACIÓN:**

Enmienda dirigida a que figure una expresa previsión en los pliegos de la posibilidad de cesión del contrato, y a aquellos casos en los que la cesión de participaciones en la concesionaria debe ser considerada como un cambio de control. Igualmente, se incorpora la obligación de que figuren los mecanismos claros en los que se podrán articular las cesiones de participaciones de la sociedad concesionaria que no constituyan cesión del contrato.

(24)

### **ENMIENDA**

Al artículo 248

De adición

Se añade un nuevo epígrafe a continuación del k) del apartado 1 del artículo 248, con el siguiente contenido:

"l) (nuevo) Distribución de los riesgos relevantes en función de las características del contrato."

### **MOTIVACIÓN:**

Enmienda dirigida a que figure una expresa previsión en los pliegos de una distribución de riesgos adecuada al proyecto.

(24)

### **ENMIENDA**

Al artículo 249

De adición

Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 249, con el siguiente contenido:

“Tanto a la concesión de obras como a la de servicios le será aplicable el criterio de lotes. A tal efecto, se procurará sectorializar y fraccionar, sin merma de la eficacia de la prestación, el objeto del contrato, a fin de promover una mayor competencia y concurrencia.”

### **MOTIVACIÓN:**

Coadyuvar al acceso de las pyme a los contratos de concesión de obras y servicios, actualmente en muchos casos reservados a las grandes empresas debido a la entidad y complejidad del objeto de los contratos.

(22)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 264.1

De modificación

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 1 del artículo 264 incluyendo un texto del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“1. Las Administraciones Públicas podrán contribuir a la financiación de las obras mediante aportaciones que serán realizadas durante la fase de ejecución de las obras, tal como dispone el artículo 250, o una vez concluidas éstas, y cuyo importe será fijado por los licitadores en sus ofertas dentro de la cuantía máxima que establezcan los pliegos de condiciones. **En ningún caso, la contribución pública, directa o indirecta, en dinero o a través de avales u otras formas de garantía o préstamo, podrá ser superior al 30% del presupuesto de la obra.**”*

## **MOTIVACIÓN:**

Con la enmienda propuesta se pretende garantizar que el concesionario asume la parte esencial de los riesgos de construcción y explotación de la obra pública, incorporando unos límites que son usuales en los países de nuestro entorno.

La experiencia acumulada nos ha hecho ver que los instrumentos de apoyo a las concesiones han superado en muchas ocasiones lo que ha aportado el concesionario, y que los avales y otros instrumentos de apoyo para la obtención de créditos han hecho que, a la larga, haya sido el adjudicador el que haya acabado pagando el coste de la obra pública.

Es, además, una medida que hubiera evitado una crisis pública como la que provoca los rescates de las autopistas de peaje en España, tanto el de los años 80 del siglo pasado como el que se avecina.

(33)

### **ENMIENDA**

Al artículo 270

De modificación

Se modifica el séptimo párrafo del apartado 1 del artículo 270, quedando como sigue:

"La emisión de estos valores requerirá autorización administrativa previa del órgano de contratación, cuyo otorgamiento sólo podrá denegarse cuando el buen fin de la concesión u otra razón de interés público relevante lo justifiquen. El plazo para notificar la resolución sobre la solicitud de autorización será de un mes, transcurrido el cual sin resolución expresa la solicitud deberá entenderse estimada"

### **MOTIVACIÓN:**

Previsión de silencio positivo y plazo de un mes para la autorización de titulizaciones, con el fin de beneficiar este mecanismo de financiación escasamente utilizado.

(24)



## **ENMIENDA**

Al artículo 271

De modificación

Se propone la modificación del artículo 271, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 271. Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos.

1. Las concesiones de obras con los bienes y derechos que lleven incorporados serán hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, previa autorización del órgano de contratación.

No se admitirá la hipoteca de concesiones de obras en garantía de deudas que no guarden relación con la concesión correspondiente.

2. Las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en este artículo y en el siguiente se resolverán por el órgano competente en el plazo de un mes, debiendo entenderse desestimadas si no se resuelven y notifican en ese plazo.

3. Los derechos derivados de la resolución de un contrato de concesión de obras, **concesión de servicios públicos** o de concesión de servicios **no públicos**, a que se refieren los primeros apartados de los artículos 280, 293 y 314, respectivamente, así como los derivados de las aportaciones públicas y de la ejecución de garantías establecidos en los artículos 264 y 266, solo podrán pignorarse en garantía de deudas que guarden relación con la concesión o el contrato, previa autorización del órgano de contratación, que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado o en el correspondiente boletín oficial autonómico o local.»

## **MOTIVACIÓN:**

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 275.3**

#### **De modificación**

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 3 del artículo 275 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

***“3. En ningún caso, podrán los poderes adjudicadores ni otras entidades del sector público otorgar préstamos participativos a los concesionarios de obras públicas”.***

## **MOTIVACIÓN:**

La experiencia de los préstamos participativos otorgados por las Administraciones públicas aconseja que se elimine la posibilidad de su otorgamiento.

Por un lado, la propia naturaleza de los préstamos hace que se parezcan más a los fondos propios de la sociedad, esto es, que el prestamista sea accionista, que a los mecanismos propios de deuda. La práctica administrativa ha hecho que, esta situación se agrave, como puede apreciarse en algunos préstamos (es un buen ejemplo el Real Decreto de 31 de julio de 1998 que adjudica la autopista de peaje Alicante-Cartagena) en donde la retribución que hipotéticamente podría cobrar la administración es postergada incluso a que cobren los accionistas. Por ello, tiene incluso una peor condición que éstos.

Al mismo tiempo, supone una privatización de los fondos públicos que pasan a tener la condición peor dentro de los instrumentos de Derecho privado.

Por otra parte, la prohibición de que las entidades del sector público no puedan ser prestamistas a través de este tipo de instrumentos es mucho más adecuado para el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Con todo ello nos estamos encontrando, por último, en una situación que es contraria a las reglas de la estabilidad presupuestaria, en la medida en que sirven como medida de aseguramiento de deuda privada.

(33)

## **ENMIENDA**

### **Al artículo 278**

#### **De modificación**

Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 278, quedando como sigue:

“1. En los supuestos de resolución, la Administración abonará en todo caso al concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción, en su caso, del canon previsto en el artículo 263 y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicará el criterio de amortización previsto en la documentación contractual. En el documento de formalización del contrato se incluirá la cuantificación de estas inversiones y el método para realizar su amortización. La cantidad resultante se fijará dentro del plazo de seis meses, salvo que se estableciera otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.”

## **MOTIVACIÓN:**

Retorno al tradicional sistema del valor patrimonial de la inversión con ciertas mejoras para poder anticipar su cuantía. La nueva regulación tiene un origen absolutamente coyuntural, las radiales, a partir del cual no se puede generalizar una normativa. Considera que la obra concedida es un activo destinado a volver a ponerse en el mercado y hace girar la indemnización en todos los casos no imputables a la Administración sobre esa idea. Se ignora que, cuando la concesión se resuelve, ya no existe la concesión como activo, sino una infraestructura que revierte a la Administración que debe tener la libertad de gestionarla como considere mejor para el interés general (directamente o indirectamente mediante un nuevo contrato), sin que se justifique que, habiendo fracasado la concesión, la Administración deba necesariamente adjudicarla de nuevo

(24)

### **ENMIENDA**

Al Capítulo III, Sección 1ª

De modificación

Se propone la modificación "del título de la Sección 1.ª del Capítulo III" y "del título del Capítulo III", que quedarán con la siguiente redacción:

«CAPÍTULO III

Del contrato de **gestión de servicios públicos**

Sección 1.ª Delimitación del contrato **de gestión de servicios públicos**»

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Al artículo 282**

#### **De modificación**

Se propone la modificación del artículo 282, que quedará con la siguiente redacción:

**«Artículo 282. Ámbito y modalidades del contrato de gestión de servicios públicos.**

**1. Mediante el contrato de gestión de servicios públicos, la Administración y el resto de poderes adjudicadores** podrán gestionar indirectamente los servicios públicos de su competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. En ningún caso podrán prestarse mediante **este contrato los servicios públicos** que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

**2. Antes de proceder a la contratación de un servicio público, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por el poder adjudicador** respectivo como propia **del mismo**, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.

**3. El contrato expresará con claridad, en todo caso, el ámbito de la gestión del servicio público**, tanto en el orden funcional, como en el territorial.

**4. La contratación de la gestión de los servicios públicos adoptará una de las modalidades previstas en el artículo 15 de esta Ley: la concesión de servicios públicos cuando se produzca la transferencia al contratista del riesgo operacional en la explotación del servicio público, y cuando no tenga lugar tal transferencia, la gestión interesada, el concierto, el arrendamiento o la sociedad de economía mixta de conformidad con los criterios fijados en dicho artículo.»**

## **MOTIVACIÓN:**

Se adaptan los apartados 1, 2 y 3 a la figura del contrato de gestión de servicios públicos, con reproducción de los contenidos de la TRLCSP/2011: art. 275 (apartado 1 y 3) y 132 (apartado 132).

Se incluye la referencia, además de la Administración, a los *poderes adjudicadores* en concordancia con la mención general incluida en el art. 15, la cual ya se consignó en el PLCSP, así como en los ALCSP que le precedieron.



El apartado 4 se introduce para establecer la debida correlación con la definición de las modalidades del CGSP contenida en el art. 15, de acuerdo con la nueva redacción que se propone.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 282**

De modificación al apartado 3

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 3 del artículo 282 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

**3. “El contrato podrá incorporar la gestión unificada de dos o más servicios públicos previa acreditación, por parte del órgano de contratación en el expediente de contratación, de la necesidad objetiva de proceder a la gestión unificada de dichos servicios. En él se expresará con claridad, en todo caso, el ámbito de la concesión, tanto en el orden funcional, como en el territorial”.**

## **MOTIVACIÓN:**

Prever la posibilidad de que se pueda aglutinar bajo un mismo contrato, y siempre que se justifique adecuadamente en el expediente de contratación, la necesidad de licitar bajo el mismo contrato distintos servicios para la gestión unificada de distintos servicios públicos.

(8)

### **ENMIENDA**

A la Subsección 1ª

De modificación

Se propone la modificación del título de la subsección 1.ª de la sección 2.ª, que quedará con la siguiente redacción:

«Sección 2.ª Régimen jurídico

Subsección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de **gestión de servicios públicos**»

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)



## **ENMIENDA**

Al artículo 283

De modificación

Se propone la modificación del artículo 283, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 283. Pliegos, **estudio de viabilidad** y anteproyecto de obra y explotación.

1. **De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio público**, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fijarán las condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de abonar los usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o participación que hubiera de satisfacerse **al poder adjudicador**. **En cuanto a la revisión de tarifas, los pliegos de cláusulas administrativas deberán ajustarse a lo previsto en el Capítulo II del Título III del Libro Primero.**

2. En los contratos de concesión de servicios **públicos** la tramitación del expediente irá precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o, en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera, que tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del proyecto. En los casos en que los contratos de concesión de servicios **públicos** comprendan la ejecución de obras, la tramitación de aquel irá precedida, además, de la elaboración y aprobación administrativa del anteproyecto de construcción y explotación de las obras que resulten precisas, con especificación de las prescripciones técnicas relativas a su realización; así como de la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto de las obras.

En los supuestos en que para la viabilidad de la concesión se contemplen ayudas a la construcción o explotación de la misma, el estudio de viabilidad se pronunciará sobre la existencia de una posible ayuda de Estado y la compatibilidad de la misma con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

**Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de las concesiones de servicios públicos deberán incluir necesariamente, además de las estipulaciones generales y las específicas propias del contrato, y en función de la complejidad del mismo, las referidas a los siguientes aspectos:**

a) **Condiciones del riesgo operacional que asume el contratista, desglosando y precisando la imputación de los riesgos derivados de la variación de los costes de las prestaciones y la imputación de los riesgos de demanda de dichas prestaciones o los de suministro, o ambos.**

**b) Objetivos de rendimiento asignados al contratista, particularmente en lo que concierne a la calidad de las prestaciones de los servicios públicos y del resto de elementos puestos a disposición.**

**c) Determinación del sistema de tarifas para la remuneración del contratista y, en su caso, fórmulas de pago a cargo de la Administración u otros poderes adjudicadores actuantes y sus condiciones.**

**d) Causas y procedimientos para determinar las variaciones de la remuneración a lo largo del período de ejecución del contrato**

**e) Fórmulas de control por la Administración u otros poderes adjudicadores actuantes de la ejecución del contrato, especialmente respecto a los objetivos de rendimiento.»**

#### **MOTIVACIÓN:**

Se incorpora la mención al *poder adjudicador* en concordancia con la contenida en el art. 15 del PLCSP tal como ya se ha señalado.

Se añade el calificativo de públicos para clarificar la naturaleza de los servicios.

El último inciso del apartado 2, *sobre estipulaciones a incluir en la concesión de servicios públicos*, añade requerimientos para que quede definido en el pliego el riesgo operacional a transferir al contratista. El contenido de la propuesta se toma, extractado, del Anteproyecto de Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra (art. 202), hecho público por el Gobierno de esta Comunidad en diciembre de 2016 y accesible en:

<http://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/anteproyecto-ley-foral-contratos>

(53)

## **ENMIENDA**

Al artículo 283

De modificación

Se modifica el apartado 1 del artículo 283, quedando como sigue:

“1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas:

a) Fijarán las condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de abonar los usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración.

b) Regularán también la distribución de riesgos entre la Administración y el concesionario en función de las características particulares del servicio.

c) Definirán los requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y técnica que sean exigibles a los licitadores, pudiendo fijarse distintos requisitos de solvencia en función de las diferentes fases del contrato a los efectos de su posible cesión.

d) Preverán también de que se produzca la cesión del contrato de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la presente Ley, así como de las participaciones en la sociedad concesionaria, de constituirse una por los licitadores para la ejecución del contrato. Criterios para la determinación de cuándo la cesión de las participaciones debe considerarse, por suponer un efectivo cambio de control una cesión del contrato y, en el caso de que se justifique por las características del contrato, mecanismos de control para cesiones de participaciones en la sociedad concesionaria que no puedan equipararse a una cesión del contrato.

En los casos en que la concesión de servicios se refiera a servicios públicos, lo establecido en el presente apartado se realizará de acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio a que se refiere el artículo 282.2.”

## **MOTIVACIÓN:**

Se incluye una previsión dirigida a que los pliegos recojan expresamente el reparto de riesgos y la cesión de concesiones, con diferentes requisitos según la fase de control, en la misma línea ya apuntada en las enmiendas anteriores relativas al contrato de concesión de obras.

(24)

## **ENMIENDA**

### **Artículo 283 (bis)**

#### **De adición**

Se propone añadir un nuevo artículo 283 bis al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“283 (bis). Adjudicación de las concesiones relativas a servicios sociales y otros servicios específicos contemplados en el anexo IV.*

*Las administraciones públicas podrán adjudicar cualesquiera de los contratos de concesión de servicio público relativos a servicios sociales u otros servicios específicos contemplados en el anexo IV mediante cualquiera de los procedimientos de adjudicación que contempla el apartado 2 del artículo 132 de la presente ley, disponiendo de una amplia discrecionalidad para la determinación de los criterios de adjudicación del contrato, que deberán tener en cuenta, en todo caso, el contexto cultural y el carácter delicado de dichos servicios, pudiendo incluir en el correspondiente pliego, en su caso, los criterios de adjudicación referidos en el último párrafo del apartado 2 del artículo 145 de la presente ley, al objeto de poder garantizar la calidad del servicio, su continuidad, su asequibilidad, su disponibilidad y exhaustividad, las necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables; así como la implicación y responsabilidad de los usuarios en el servicio y la innovación, pudiendo primar los criterios de calidad y sostenibilidad sobre el precio en la adjudicación ”*

## **MOTIVACIÓN:**

La inclusión de dicho precepto es para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 y considerando 54 de la DC, que contemplan una regulación diferenciada de las concesiones; de acuerdo con el artículo 19 referido, para la adjudicación de dichas concesiones los poderes adjudicadores gozan de gran libertad hallándose vinculado tan solo a las obligaciones contenidas en los artículos 31.3; 32; 46 y 47 de la directiva.

(32)

### **ENMIENDA**

Al artículo 284

De modificación

Se propone la modificación del artículo 284, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 284. Efectos, cumplimiento y extinción.

Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de **gestión de servicios públicos** se regularán por la presente Ley, excluidos los artículos 206 y 208. Tampoco resultarán de aplicación, salvo en la fase de construcción cuando **el contrato** comprenda la ejecución de obras, el apartado 2 del artículo 190, el artículo 191 y el artículo 193.»

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

**ENMIENDA**

A la Sección 3ª

De modificación

Se propone la modificación del título de la Sección 3.ª, que quedará con la siguiente redacción:

«Sección 3.ª Ejecución del contrato de **gestión de servicios públicos**»

**MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

## ENMIENDA

Al artículo 285

De modificación

Se propone la modificación del artículo 285, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 285. Ejecución del contrato de **gestión servicios públicos**.

1. El **contratista** está obligado a organizar y prestar el servicio **público** con estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación.
2. **En todo caso**, la Administración y el resto de poderes adjudicadores conservarán los poderes de policía y las potestades de control y dirección necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios **públicos** de que se trate.
3. Las concesiones de servicios **públicos** únicamente podrán ser objeto de hipoteca en los casos en que conlleven la realización de obras o instalaciones fijas necesarias para la prestación del servicio, y exclusivamente en garantía de deudas que guarden relación con la concesión.»

## MOTIVACIÓN:

Se adaptan los apartados 1, 2 y 3 a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Se añade una referencia a las potestades de control y dirección en garantía de la prestación del servicio público.

(53)

## ENMIENDA

Al artículo 286

De modificación

Se propone la modificación del artículo 286, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 286. Obligaciones generales.

El **contratista** estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- a) Prestar el servicio **público** con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas. **En caso de extinción normal del contrato, el contratista ha de seguir prestando el servicio público hasta tanto otro se haga cargo de la gestión del mismo.**
- b) Cuidar del buen orden del servicio **público**, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía **y las potestades** a los que se refiere el artículo anterior.
- c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio **público**, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración.
- d) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de concesión de servicios.
- e) Cualesquiera otras previstas en la **legislación**, el pliego de cláusulas administrativas particulares **y en el resto de la documentación contractual.**»

## MOTIVACIÓN:

Se incorpora el calificativo público en concordancia con la figura del contrato de gestión de servicios públicos, con mención de las potestades incorporadas en el art. 285.

En la letra a), se consigna en concreto la obligación del contratista de tener que seguir prestando el servicio público hasta tanto otro se haga cargo de la gestión del mismo; previsión recogida en el ROASCat/1995 (235.a) y RBASOArág/2002 (269.1ª) y que



constituye una manifestación más de los principios de continuidad y regularidad del servicio público y no suspensión del mismo.

En la letra e) se sustituye la mención *a las leyes* por la remisión *a la legislación*, lo que permite, con mayor precisión jurídica, la aplicación de los reglamentos (desde el RServicios de 1955 hasta el ROASCat o el RBASO Arag), así como una referencia *al resto de documentación contractual*, para cerrar el círculo obligacional.

(53)

## **ENMIENDA**

Al artículo 287

De modificación

Se propone la modificación del artículo 287, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 287. Prestaciones económicas.

1. El **contratista** tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivos **los derechos a la explotación y a la gestión del servicio público**, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración **o de los otros poderes adjudicadores actuantes, o de unos y otros.**

2. Las contraprestaciones económicas pactadas, que tendrán la naturaleza de tarifa, serán revisadas, en su caso, en la forma establecida en el contrato, que se ajustará, en todo caso, a lo previsto en el Capítulo II del Título III del Libro Primero de la presente Ley, relativo a la revisión de precios en los contratos de las entidades del sector público.

3. Si así lo hubiera establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares, el **contratista** abonará a la Administración concedente un canon o participación, que se determinará y abonará en la forma y condiciones previstas en el citado pliego **y en lo que resulte de la adjudicación y formalización del contrato.**»

## **MOTIVACIÓN:**

Se adaptan los apartados 1 y 3 a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Se añaden precisiones sobre la retribución al contratista (hipótesis de abono mixto, por los poderes adjudicadores y los usuarios) y el pago por el contratista del canon (cuya concreción resulta normalmente de la oferta formulada por el adjudicatario que formaliza el contrato).

(53)

### **ENMIENDA**

Al artículo 287

De adición, párrafo nuevo de adición al final del apartado 2,

El artículo 287, quedando como sigue:

*“Artículo 287. Prestaciones económicas.*

*“3. Las tarifas revestirán la naturaleza de prestaciones patrimoniales públicas cuando los servicios prestados sean coactivos para los usuarios, es decir cuando no sean de solicitud o recepción voluntaria por ellos y se presten en régimen de monopolio de hecho o de derecho.”*

### **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica del apartado del artículo 287.

(35)



### **ENMIENDA**

A la Sección 4ª

De modificación

Se propone la modificación de la Sección 4.ª, que quedará con la siguiente redacción:

«Sección 4.ª Modificación del contrato **de gestión** de servicios **públicos**»

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Al artículo 288**

#### **De modificación**

Se propone la modificación del artículo 288, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 288. Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico.

1. La Administración y el resto de poderes adjudicadores podrán modificar las características del servicio público contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios, únicamente por razones de interés público y si concurren las circunstancias previstas en la Subsección 4.ª de la Sección 3.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley.

2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, se deberá compensar a la parte correspondiente de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato.

3. En el caso de que los acuerdos que dicten la Administración o los otros poderes adjudicadores actuantes respecto al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos.

4. Se deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la Administración o los otros poderes adjudicadores actuantes realicen una modificación de las señaladas en el apartado 1 del presente artículo concurriendo las circunstancias allí establecidas.

b) Cuando actuaciones de la Administración Pública, por su carácter obligatorio para el contratista, determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato.

Fuera de los casos previstos en las letras anteriores, únicamente procederá el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 237 de la presente Ley.

5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada

caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas a abonar por los usuarios, la reducción del plazo del **contrato** y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Así mismo, en los casos previstos en la letra b) y en el último párrafo del apartado anterior, podrá ampliarse el plazo del contrato por un período que no exceda de un 15 por ciento de su duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos legalmente.»

### **MOTIVACIÓN:**

Se adaptan los apartados 1, 3, 4 y 5 a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Se incluye la mención a los poderes adjudicadores en concordancia con el art. 15.

La previsión sobre el *factum principis* (apartado 4.b) se redacta en los términos que se contienen en el TRLCSP/2011 (art. 282.4.b) y textos anteriores; es decir, sin mención a si se trata de la Administración *concedente* u otra.

(53)

### **ENMIENDA**

A la Sección 5ª

De modificación

Se propone la modificación del título de la Sección 5.ª, que quedará con la siguiente redacción:

«Sección 5.ª Cumplimiento y efectos del contrato de **gestión** de servicios **públicos**»

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al artículo 289

De modificación

Se propone la modificación del artículo 289, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 289. Reversión.

1. Finalizado el plazo del **contrato**, el servicio **público** revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.
2. Durante un período prudencial anterior a la reversión, que deberá fijarse en el pliego, el órgano competente de la Administración **o de los otros poderes adjudicadores actuantes** adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas.
3. Los bienes afectos al **servicio público objeto del contrato** que vayan a revertir a la Administración **o a los otros poderes adjudicadores actuantes** en virtud de lo establecido en el presente artículo, no podrán ser objeto de embargo.»

## **MOTIVACIÓN:**

Se adaptan los apartados 1, 2 y 3 a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Se incluye la mención a los poderes adjudicadores en concordancia con el art. 15.

(53)



### **ENMIENDA**

Al artículo 290

De modificación

Se propone la modificación del artículo 290, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 290. Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares.

Si la Administración o los otros poderes adjudicadores actuantes no hicieren efectiva al **contratista** la contraprestación económica o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese la resolución del contrato o no la solicitase el **contratista**, este tendrá derecho al interés de demora de las cantidades o valores económicos que aquellos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo 196.»

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Se incluye la mención a los poderes adjudicadores en concordancia con el art. 15.

(53)

## **ENMIENDA**

Al artículo 291

De modificación

Se propone la modificación del artículo 291, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 291. **Secuestro o intervención del servicio público.**

1. Si por causas ajenas al contratista o bien del incumplimiento por parte de este se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio **público**, la Administración **o los otros poderes adjudicadores actuantes** podrán acordar el secuestro o intervención del mismo en los términos establecidos en el artículo 261. En todo caso, el **contratista** deberá abonar a la Administración **o a los otros poderes adjudicadores actuantes** los daños y perjuicios que efectivamente les haya ocasionado.

2. En cualquier caso, en los supuestos de incumplimiento por parte del **contratista** resultará de aplicación el régimen de penalidades establecidas en el artículo 262 de la presente Ley respecto de la concesión de obras, siempre que resulte compatible con la naturaleza de la concesión de servicios **públicos**.»

## **MOTIVACIÓN:**

Se corrige el título dado que en el PLCSP ya no solo se incluye como causa el incumplimiento, sino que se añaden causas ajenas al contratista, luego la denominación debe referirse al secuestro o intervención del servicio público, en concordancia también con el del art. 261 del proyecto al que se remite.

Se adaptó el precepto a la figura del contrato de gestión de servicios públicos y a la mención a los poderes adjudicadores en concordancia con la definición del art. 15 que se propone.

(53)

### **ENMIENDA**

A la Sección 6ª

De modificación

Se propone la modificación del título de la Sección 6.ª, que quedará con la siguiente redacción:

«Sección 6.ª Resolución del contrato de **gestión de servicios públicos**»

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el título a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

## ENMIENDA

Al artículo 292

De modificación

Se propone la modificación del artículo 292, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 292. Causas de resolución.

Son causas de resolución del contrato de **gestión** de servicios **públicos**, además de las señaladas en el artículo 209, con la excepción de las contempladas en sus letras d) y e), las siguientes:

- a) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en que así procediera, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
- b) La demora superior a seis meses por parte de la Administración o de los otros **poderes adjudicadores actuantes** en la entrega al **contratista** de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.
- c) El rescate del servicio **público** por la Administración o **los otros poderes adjudicadores actuantes** para su gestión directa por razones de interés público.
- d) La supresión del servicio **público** por razones de interés público.
- e) La imposibilidad de la explotación del servicio **público** como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración o **los otros poderes adjudicadores actuantes** con posterioridad a la **formalización del contrato**.
- f) El secuestro o intervención del **servicio público** por un plazo superior al establecido de conformidad con el apartado 3 del artículo 261, sin que el contratista haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones.»

## MOTIVACIÓN:

Se adapta el precepto a la figura del contrato de gestión de servicios públicos y a la mención a los poderes adjudicadores en concordancia con la definición del art. 15 que se propone.

(53)

## **ENMIENDA**

### Al artículo 293

#### De modificación

Se propone la modificación del artículo 293, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 293. Efectos de la resolución.

1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración **o a los otros poderes adjudicadores actuantes**, estos abonarán al concesionario en todo caso el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de los servicios **públicos** objeto del **contrato**, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicara un criterio de amortización lineal de la inversión.

Cuando la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración **o a los otros poderes adjudicadores actuantes**, el importe a abonar al **contratista** por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras y adquisición de bienes que deban revertir a la Administración **o a los otros poderes adjudicadores actuantes** será el que resulte de la valoración del **contrato**, determinado conforme lo dispuesto en el artículo 279.

En todo caso, se entenderá que no es imputable a la Administración **o a los otros poderes adjudicadores actuantes** la resolución del contrato cuando esta obedezca a alguna de las causas establecidas en las letras a), b) y f) del artículo 209, así como a las causas establecidas en las letras a) y f) del artículo 292.

2. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 211, el incumplimiento por parte de la Administración **o de los otros poderes adjudicadores actuantes** o del contratista de las obligaciones del contrato producirá los efectos que según las disposiciones específicas del servicio **público** puedan afectar a estos contratos.

3. En el supuesto de la letra b) del artículo 292, el contratista tendrá derecho al abono del interés de demora previsto en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales de las cantidades debidas o valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto para su entrega, así como de los daños y perjuicios sufridos.

4. En los supuestos de las letras b), c), d) y e) del artículo 292, y en general en los casos en que la resolución del contrato se produjera por causas imputables a la Administración **o a los otros poderes adjudicadores actuantes**, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la Administración **o los otros poderes adjudicadores actuantes** indemnizarán al contratista de los daños y perjuicios que se

le irroguen, incluidos los beneficios futuros que deje de percibir, cuantificados conforme a lo establecido en la letra a) del apartado 3 del artículo 278 y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de revertir a aquélla, habida cuenta de su grado de amortización.»

**MOTIVACIÓN:**

Se adapta el precepto a la figura del contrato de gestión de servicios públicos y a la mención a los poderes adjudicadores en concordancia con la definición del art. 15 que se propone.

(53)

## **ENMIENDA**

Al artículo 293

De modificación

Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 293, quedando como sigue:

“1. En los supuestos de resolución, la Administración abonará al concesionario en todo caso el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción, pago anticipado, en su caso, del canon al que se refiere el artículo el artículo 287 y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de los servicios objeto de concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicara el criterio de amortización previsto en la documentación contractual. En el documento de formalización del contrato se incluirá la cuantificación de estas inversiones y el método para realizar su amortización. La cantidad resultante se fijará dentro del plazo de seis meses, salvo que se estableciera otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.”

## **MOTIVACIÓN:**

Se incorpora una regulación paralela a la del contrato de concesión de obras prevista en la enmienda propuesta al artículo 278.

(24)

## **ENMIENDA**

Al artículo 293

De modificación

Se modifica el apartado 3 del artículo 293, quedando como sigue:

“3. En el supuesto de la letra b) del artículo 292, el contratista tendrá derecho al abono del interés de demora previsto en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales de las cantidades debidas o valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto para su entrega y hasta la liquidación de la indemnización resultante de la resolución, así como de los daños y perjuicios sufridos”

## **MOTIVACIÓN:**

Se incorpora una regulación paralela a la del contrato de concesión de obras prevista en la enmienda propuesta al artículo 278.

(24)



### **ENMIENDA**

A la Sección 7ª

De modificación

Se propone la modificación del título de la Sección 7.ª, que quedará con la siguiente redacción:

«Sección 7.ª Subcontratación del contrato de **gestión** de servicios **públicos**»

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el redactado a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

### **ENMIENDA**

Al artículo 294

De modificación

Se propone la modificación del artículo 294, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 294. Subcontratación.

En el contrato de **gestión** de servicios **públicos**, la subcontratación solo podrá recaer sobre prestaciones accesorias, resultándole de aplicación la regulación establecida en los artículos 213, 214 y 215 de la presente Ley.»

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el precepto a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)



### **ENMIENDA**

A la Sección 8ª

De modificación

Se propone la modificación del título de la Sección 8.ª, que quedará con la siguiente redacción:

«Sección 8ª Regulación supletoria del contrato de **gestión de servicios públicos**»

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el precepto a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

### **ENMIENDA**

Al artículo 295

De modificación

Se propone la modificación del artículo 295, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 295. Regulación supletoria.

En lo no previsto en el presente Capítulo respecto al contrato de **gestión** de servicios **públicos**, le será de aplicación la regulación establecida en la presente Ley respecto al contrato de concesión de obras, siempre que resulte compatible con la naturaleza de aquél.»

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el precepto a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

### **ENMIENDA**

Al capítulo V del Título II del Libro II

De modificación

Se propone la modificación del título del Capítulo V del Título II del Libro II, que quedará con la siguiente redacción:

«CAPÍTULO V

**Del contrato de servicios»**

### **MOTIVACIÓN:**

Debe mantenerse la configuración de los cuatro capítulos anteriores del Título II del Libro II, cuya denominación empieza con la preposición *de/* y la tipología contractual se expresa en singular.

(53)

## ENMIENDA

### Al artículo 306

#### De modificación

Se propone la modificación del artículo 306, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 306. Contenido y límites.

1. Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de este a la Administración **u otra entidad del sector público** contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.

2. A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad **del sector público** contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la **entidad contratante** deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista.

3. Las prestaciones *de hacer constitutivas del contrato de servicios* se efectuarán en dependencias o instalaciones propias del contratista, siempre que sea posible. De no ser esto posible, se harán constar las razones objetivas que con carácter excepcional motivan la prestación en centros dependientes de la entidad *del sector público* contratante. En estos casos, se intentará que los trabajadores de la empresa contratista no compartan espacios y lugares de trabajo con el personal al servicio de la entidad contratante y, de no ser así, se diferenciarán claramente las funciones y los puestos del personal de la entidad y los de la empresa adjudicataria, a efectos de evitar la confusión de plantillas. Los trabajadores y los medios de la empresa contratista se identificarán mediante los correspondientes signos distintivos, tales como uniformidad o rotulaciones.»

## MOTIVACIÓN:

Se adapta el precepto a la definición del contrato de servicios dada en el art. 17.1 de la propuesta que se formula, que incluye como contratantes, además de la Administración, el resto de entidades del sector público.

Se añade el apartado 3 proveniente del art. 310 por ser esta localización más idónea, al tratarse también de un *límite* al contrato de servicios (lo que lo identifica con el título de precepto) y tener una formulación general, bien que incorporando respecto de la redacción inicial las precisiones derivadas de la propuesta de definición del art. 17.1 antes aludida (identificadas en cursiva).

(53)

## **ENMIENDA**

### **Artículo 308 (bis)**

#### **De adición**

Se propone añadir un nuevo artículo 308 bis al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“Artículo 308 (bis). Adjudicación de los contratos de servicios referidos a servicios sociales u otros servicios específicos enumerados en el anexo IV*

*Con la salvedad de los contratos considerados por su cuantía como contratos menores, de conformidad con lo establecido en el artículo 118, que serán adjudicados de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 131, en los restantes casos las administraciones públicas podrán adjudicar cualesquiera de los contratos de servicios relativos a servicios sociales u otros servicios específicos contemplados en el anexo IV mediante cualquiera de los procedimientos de adjudicación que contempla el apartado 2 del artículo 132 de la presente ley, disponiendo de una amplia discrecionalidad para la determinación de los criterios de adjudicación del contrato, que deberán tener en cuenta, en todo caso, el contexto cultural y el carácter delicado de dichos servicios, pudiendo incluir en el correspondiente pliego, en su caso, los criterios de adjudicación referidos en el último párrafo del apartado 2 del artículo 145 de la presente ley, al objeto de poder garantizar la calidad del servicio, su continuidad, su asequibilidad, su disponibilidad y exhaustividad, las necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables; así como la implicación y responsabilidad de los usuarios en el servicio y la innovación, pudiendo primar los criterios de calidad y sostenibilidad sobre el precio en la adjudicación”*

## **MOTIVACIÓN:**

La inclusión de dicho precepto es para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74 y siguientes y en el considerando 114 de la DCP, que contemplan una regulación diferenciada de los contratos referidos a servicios sociales. Se incluye pues con dicha propuesta el referido régimen diferenciado.

(32)



## **ENMIENDA**

Al artículo 310

De modificación

Se propone la modificación del artículo 310, que quedará con la siguiente redacción:

**"Artículo 310. Especialidades de los contratos de servicios no públicos cuyos destinatarios sean los ciudadanos.**

**En los contratos de servicios que no tengan la consideración de públicos y cuyos destinatarios sean los ciudadanos, el pliego podrá prever para el contratista las obligaciones siguientes:**

- a) **Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono en su caso de la contraprestación económica fijada.**
- b) **Cuidar del buen orden del servicio.**
- c) **A la finalización del contrato, entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.**
- d) **Aquellas otras que la entidad del sector público contratante estime oportuno incluir en garantía de los ciudadanos receptores de los servicios".**

## **MOTIVACIÓN:**

De acuerdo con las determinaciones del art. 17.1.b) en la propuesta formulada, se prevé que los contratos de servicios integren prestaciones de hacer consistentes en la realización de una actividad cuyos destinatarios sean los ciudadanos y su objeto no tenga la consideración de servicio público. Esta calificación impide la aplicación de las prerrogativas del régimen legal de los servicios públicos. Ello no obsta a que por la vía contractual se establezcan algunas garantías en favor de los servicios prestados en atención a los ciudadanos receptores de los mismos, y de ahí la posibilidad de su inclusión en el pliego que se contempla en este precepto.

La aplicación de esta figura queda subordinada a la no transferencia del riesgo operacional al contratista, toda vez que de producirse tal transferencia el supuesto debería resultar subsumido en la concesión de servicios no públicos prevista en el art. 314 de la propuesta formulada.

(53)

### **ENMIENDA**

#### **Al Artículo 310**

De modificación al apartado 1 f)

Se propone la modificación de la letra f) del apartado 1 del artículo 310 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*"f). La prestación de los servicios a que se refiere el presente artículo se efectuará en dependencias o instalaciones propias del contratista, salvo en los supuestos en que, por conllevar la ejecución del contrato prestaciones directas a la ciudadanía, se considere adecuado la prestación en instalaciones o dependencias de la administración contratante. Tampoco se prestarán los servicios contratados en las dependencias o instalaciones del contratista cuando, sin concurrir las circunstancias antes referidas, ello no fuera posible. En este último caso, se harán constar las razones objetivas."*

### **MOTIVACIÓN:**

Cuando mediante la ejecución de un contrato de servicios se esté gestionando en realidad un servicio público si bien retribuido por la propia administración y no por el usuario es razonable que pueda considerarse adecuado la prestación del servicio en instalaciones de la propia administración.

(32)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 311, Apartado 1

De adición

Se propone la adición de una nueva letra d) al apartado 1 del artículo 311, que tendrá la siguiente redacción:

*"d) Los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa."*

### **MOTIVACIÓN:**

Se trata de incluir, como causa de resolución de los contratos de servicios, el incumplimiento de las obligaciones salariales por el contratista.

(10)

### **ENMIENDA**

A la Sección 4ª

De modificación

Se propone la modificación del título de la Sección 4.ª, que quedará con la siguiente redacción:

«Sección 4.ª De la subsanación de errores, **indemnizaciones** y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras»

### **MOTIVACIÓN:**

El título de la Sección 4ª olvida el del artículo 313, referido a las *indemnizaciones* por desviaciones en la ejecución de obras, por lo que debe incorporarse al mismo.

(53)

## **ENMIENDA**

A los artículos 313

De modificación

Se propone la modificación del artículo 313 que quedará fusionado en uno con la siguiente redacción:

### **«Artículo 313. Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras y responsabilidad por defectos o errores del proyecto**

1. Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en más de un 20 por ciento, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, se minorará el precio del contrato de elaboración del proyecto, en concepto de indemnización, en función del porcentaje de desviación, hasta un máximo equivalente a la mitad de aquél. El baremo de indemnizaciones será el siguiente:

a) En el supuesto de que la desviación sea de más del 20 por ciento y menos del 30 por ciento, la indemnización correspondiente será del 30 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.

b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por ciento y menos del 40 por ciento, la indemnización correspondiente será del 40 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.

c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40 por ciento, la indemnización correspondiente será del 50 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.

El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará, previa tramitación de expediente con audiencia del interesado.

2. Con independencia de lo previsto en el apartado anterior y en el artículo precedente, el contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto al órgano de contratación como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por ciento del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio pactado por el proyecto y será exigible dentro del término de diez

años, contados desde la recepción del mismo por la Administración o por las otras entidades del sector público contratantes, siendo a cargo de estas, en su caso, el resto de dicha indemnización cuando deba ser satisfecha a terceros.»

**MOTIVACIÓN:**

Se procede a la fusión de los art. 313 y 314 en un solo precepto, el 313, atendida la naturaleza indemnizatoria común de ambos, lo que se articula mediante la inclusión de sus contenidos respectivos en los apartados primero y segundo de este.

Por otra parte, esta fusión permite incluir en el art. 314 la regulación de la concesión de servicios no públicos.

(53)

### **ENMIENDA**

Al Capítulo VI del Título II del Libro II

De adición

Se propone la adición de un nuevo Capítulo, que quedará con la siguiente redacción:

#### **«CAPÍTULO VI**

**Del contrato de concesión de servicios no públicos»**

### **MOTIVACIÓN:**

Se incorpora este nuevo capítulo referido al contrato de concesión de servicios no públicos.

(53)



## **ENMIENDA**

Al artículo 314

De modificación

Se propone la modificación del artículo 314, que quedará con la siguiente redacción:

### **«Artículo 314. Contrato de concesión de servicios no públicos**

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 17.2, el contrato de concesión de servicios no públicos es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio de su titularidad que no tenga la consideración de servicio público y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio, lo que implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional en la explotación del servicio, abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos.
2. En los contratos de concesión de servicios no públicos cuyos destinatarios sean los ciudadanos, el pliego podrá prever para el contratista las obligaciones siguientes:
  - a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono en su caso de la contraprestación económica fijada.
  - b) Cuidar del buen orden del servicio.
  - c) A la finalización del contrato, entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.
  - d) Aquellas otras que la entidad del sector público contratante estime oportuno incluir en garantía de los ciudadanos receptores de los servicios.
3. En cuanto al régimen jurídico del contrato de concesión de servicios no públicos, resultarán de aplicación las determinaciones previstas para el contrato de servicios en la presente Ley, excepción hecha de lo referente al derecho de explotación del servicio y a la transferencia del riesgo operacional al contratista que se regulará por lo establecido respecto al contrato de concesión de obras, siempre que resulte compatible con su naturaleza.»



**MOTIVACIÓN:**

Se configura el contrato de concesión de servicios no públicos en concordancia con la definición del mismo dada en el artículo 17.2 de la propuesta que se formula.

(53)

## **ENMIENDA**

### Artículo nuevo

#### De adición

Se propone la adición de un nuevo artículo 314 bis al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

#### *“Artículo 314 bis. Régimen jurídico*

- 1. Los contratos de partenariado se regirán por las normas generales contenidas en el Título I del presente Libro.*
- 2. La duración de los contratos de partenariado no podrá exceder de 20 años.*
- 3. La financiación de los colaboradores privados en los contratos de partenariado, en los supuestos en que por razón del objeto tengan naturaleza de concesión de obra pública, se llevará a cabo en las condiciones y términos previstos para este último contrato.*

*La regulación de la financiación de los adjudicatarios de contratos de partenariado en los supuestos no previstos en el apartado anterior se regirá por las siguientes normas:*

- a) Cuando se determine el régimen de remuneración del contratista, con el alcance previsto en artículo 136, letras d), e) y f) de esta Ley, podrán establecerse previsiones sobre las garantías que conforme a lo previsto en las disposiciones reguladoras de la financiación privada de las concesiones de obras públicas puede obtener el contratista para la captación de la financiación necesaria para la ejecución de contrato.*
- b) El contrato preverá un régimen de notificación por el contratista de las operaciones financieras que concierne para la financiación del contrato.*
- 4. En lo no previsto en el presente Capítulo respecto al contrato de partenariado, le será de aplicación la regulación establecida en la presente Ley respecto al contrato de concesión de obras, siempre que resulte compatible con la naturaleza de aquél.”*

### **MOTIVACIÓN:**

Revitalizar el contrato de colaboración con un nuevo enfoque que permite mejorar las debilidades del planteamiento del Proyecto de Ley: el diseño de un marco adecuado para las relaciones contractuales entre el sector público y el privado, el contrato de partenariado.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Artículo nuevo**

#### **De adición**

Se propone la adición de un nuevo artículo 314. ter al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“Artículo 314 ter. Evaluación y estudio previos.*

2. *Con carácter previo a la iniciación de un expediente de contrato de partenariado entre el sector público y el sector privado, la Administración o entidad contratante deberá elaborar:*
  - a) *Un documento de evaluación en que se efectúe un análisis comparativo con formas alternativas de contratación que justifiquen en términos de obtención de mayor valor por precio, de coste global, de eficacia o de imputación de riesgos, los motivos de carácter jurídico, económico, administrativo y financiero que recomienden la adopción de esta fórmula de contratación. En ningún caso, el pago diferido puede considerarse por sí solo un criterio más ventajoso.*
  - b) *Un estudio de sostenibilidad presupuestaria que determine el coste completo de la operación contractual y sus consecuencias sobre las finanzas públicas, así como la identificación de las fuentes de financiación y la disponibilidad de los créditos.*
3. *La evaluación será realizada por un órgano colegiado donde se integren expertos con cualificación suficiente en la materia sobre la que verse el contrato.*
4. *El estudio de sostenibilidad presupuestaria deberá realizarse por un comité formado por expertos no integrados en el mismo departamento que el órgano proponente del contrato y con una cualificación adecuada.”*

## **MOTIVACIÓN**

Revitalizar el contrato de colaboración con un nuevo enfoque que permite mejorar las debilidades del planteamiento del Proyecto de Ley: el diseño de un marco adecuado para las relaciones contractuales entre el sector público y el privado, el contrato de partenariado.

(53)

## **ENMIENDA**

Artículo nuevo, 314 quáter

De adición

Se propone la adición de un nuevo artículo 314. quáter al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

“Artículo 314 *quáter*. Programa funcional.

El órgano de contratación, a la vista de los resultados de la evaluación a que se refiere el artículo anterior, elaborará un programa funcional que contendrá los elementos básicos que informarán el diálogo con los contratistas y que se incluirá en el documento descriptivo del contrato. Particularmente, se identificará en el programa funcional la naturaleza y dimensión de las necesidades a satisfacer, los elementos jurídicos, técnicos o económicos mínimos que deben incluir necesariamente las ofertas para ser admitidas al diálogo competitivo, y los criterios de adjudicación del contrato.”

## **MOTIVACIÓN**

Revitalizar el contrato de colaboración con un nuevo enfoque que permite mejorar las debilidades del planteamiento del Proyecto de Ley: el diseño de un marco adecuado para las relaciones contractuales entre el sector público y el privado, el contrato de partenariado.

(53)

## **ENMIENDA**

Artículo nuevo

De adición

Se propone la adición de un nuevo artículo 314. quinquies al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“Artículo 314 quinquies. Clausulado del contrato.*

*Los contratos de partenariado entre el sector público y el sector privado deberán incluir necesariamente, además de las cláusulas relativas a los extremos previstos en el artículo 28, estipulaciones referidas a los siguientes aspectos:*

*a) Identificación de las prestaciones principales que constituyen su objeto, que condicionarán el régimen sustantivo aplicable al contrato, de conformidad con lo previsto en la letra m) de este artículo y en el artículo 314 bis.*

*b) Condiciones de reparto de riesgos entre la Administración y el contratista, desglosando y precisando la imputación de los riesgos derivados de la variación de los costes de las prestaciones y la imputación de los riesgos de disponibilidad o de demanda de dichas prestaciones.*

*c) Objetivos de rendimiento asignados al contratista, particularmente en lo que concierne a la calidad de las prestaciones de los servicios, la calidad de las obras y suministros y las condiciones en que son puestas a disposición de la Administración.*

*d) Remuneración del contratista, que deberá desglosar las bases y criterios para el cálculo de los costes de inversión, de funcionamiento y de financiación y en su caso, de los ingresos que el contratista pueda obtener de la explotación de las obras o equipos en caso de que sea autorizada y compatible con la cobertura de las necesidades de la Administración.*

*e) Causas y procedimientos para determinar las variaciones de la remuneración a lo largo del período de ejecución del contrato.*

*f) Fórmulas de pago y, particularmente, condiciones en las cuales, en cada vencimiento o en determinado plazo, el montante de los pagos pendientes de satisfacer por la Administración y los importes que el contratista debe abonar a ésta como consecuencia de penalidades o sanciones pueden ser objeto de compensación.*

*g) Fórmulas de control por la Administración de la ejecución del contrato, especialmente respecto a los objetivos de rendimiento, así como las condiciones en que se puede producir la subcontratación.*

*h) Sanciones y penalidades aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato.*

*i) Condiciones en que puede procederse por acuerdo o, a falta del mismo, por una decisión unilateral de la Administración, a la modificación de determinados aspectos del contrato o a su resolución, particularmente en supuestos de variación de las necesidades de la Administración, de innovaciones tecnológicas o de modificación de las condiciones de financiación obtenidas por el contratista.*

*j) Control que se reserva la Administración sobre la cesión total o parcial del contrato.*

*k) Destino de las obras y equipamientos objeto del contrato a la finalización del mismo.*

*l) Garantías que el contratista afecta al cumplimiento de sus obligaciones.*

*m) Referencia a las condiciones generales y, cuando sea procedente, a las especiales que sean pertinentes en función de la naturaleza de las prestaciones principales, que la Ley establece respecto a las prerrogativas de la Administración y a la ejecución, modificación y extinción de los contratos.*

*En el caso de que proceda la resolución del contrato, el órgano de contratación, antes de acordar ésta, dará audiencia a los acreedores por si éstos ofrecen subrogarse en el cumplimiento del contrato, directamente o a través de una entidad participada, en condiciones que se consideren compatibles con su buen fin, siempre que reúnan los requisitos exigidos al adjudicatario.*

*Cuando la ejecución del contrato lleve aparejados costes de inversión iniciales y se prevea que las obras o equipamientos que se generen vayan a incorporarse al patrimonio de la entidad contratante al concluir o resolverse el contrato, podrá establecerse que, cuando proceda la resolución del contrato, la entidad contratante pueda poner a disposición de los acreedores una cantidad no superior al 80 por ciento del coste real de las inversiones realmente ejecutadas detrayendo esta cantidad de la liquidación del contrato."*

#### **MOTIVACIÓN:**

Revitalizar el contrato de colaboración con un nuevo enfoque que permite mejorar las debilidades del planteamiento del Proyecto de Ley: el diseño de un marco adecuado para las relaciones contractuales entre el sector público y el privado, el contrato de partenariado.

(53)



### **ENMIENDA**

#### **Al Artículo 316**

#### **De adición al primer párrafo**

Se propone añadir un inciso final al primer párrafo del artículo 316 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*"En todo caso la adjudicación de los contratos de concesión de servicio público y de servicio referidos a servicios sociales u otros servicios específicos enumerados en el anexo IV sujetos a regulación armonizada se registrarán por lo dispuesto en los artículos 283 bis y 308 bis, respectivamente".*

### **MOTIVACIÓN:**

Toda vez que los artículos 19 de la DC y 74 y siguientes de la DCP contemplan un régimen diferenciado para las adjudicaciones de concesiones de servicio público o contratos de servicios referidos servicios sociales u otros servicios específicos enumerados en el anexo IV, cuando dichas adjudicaciones procedan no solamente de una administración pública sino de cualquier poder adjudicador, tenga o no tenga la condición de administración pública, se deberá aplicar el régimen diferenciado señalado.

(32)

### **ENMIENDA**

#### **Al Artículo 316**

De adición al primer párrafo

Se propone añadir un inciso final al primer párrafo del artículo 316 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*"En todo caso la adjudicación de los contratos de concesión de servicio público y de servicio referidos a servicios sociales u otros servicios específicos enumerados en el anexo IV sujetos a regulación armonizada se regirán por lo dispuesto en los artículos 283 bis y 308 bis, respectivamente".*

### **MOTIVACIÓN:**

Toda vez que los artículos 19 de la DC y 74 y siguientes de la DCP contemplan un régimen diferenciado para las adjudicaciones de concesiones de servicio público o contratos de servicios referidos servicios sociales u otros servicios específicos enumerados en el anexo IV, cuando dichas adjudicaciones procedan no solamente de una administración pública sino de cualquier poder adjudicador, tenga o no tenga la condición de administración pública, se deberá aplicar el régimen diferenciado señalado.

(32)

## ENMIENDA

Al artículo 317.2

De modificación

Se propone la modificación del artículo 317.2, que quedará con la siguiente redacción:

*“2. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los órganos competentes de las entidades a que se refiere este artículo podrán adjudicar contratos no sujetos a regulación armonizada sin aplicar las instrucciones aprobadas por ellas con sujeción a las siguientes reglas:*

*a) Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de **gestión de servicios públicos**, servicios y suministros, podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional que, en su caso, sea necesaria para realizar la prestación objeto del contrato.*

*b) En los de obras, **gestión de servicios públicos**, suministros y servicios distintos de los anteriores, así como en los contratos de concesión de obras y concesión de servicios **no públicos** se utilizarán los procedimientos regulados en la Sección 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de esta Ley”.*

## MOTIVACIÓN:

Se adapta el precepto a la figura del contrato de gestión de servicios públicos y a la mención a los poderes adjudicadores en concordancia con la definición del art. 15 que se propone.

(53)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 317**

De adición, un nuevo párrafo al apartado 2 b)

Se propone añadir un nuevo párrafo al final de la letra b) en el apartado 2 del artículo 317 (pasando la actual letra b) a ser la nueva letra c) del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

"2. (...) "

(...)

*b) Los contratos de servicios referidos a servicios sociales u otros servicios específicos enumerados en el anexo IV cuyo valor estimado sea superior a 18.000 euros e inferior a 750.000 € serán adjudicados por los poderes adjudicadores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 bis de la presente Ley".*

## **MOTIVACIÓN:**

Toda vez que los artículos 19 de la DC y 74 y siguientes de la DCP contemplan un régimen diferenciado para las adjudicaciones de concesiones de servicio público o contratos de servicios referidos servicios sociales u otros servicios específicos enumerados en el anexo IV, cuando dichas adjudicaciones procedan no solamente de una administración pública sino de cualquier poder adjudicador, tenga o no tenga la condición de administración pública, se deberá aplicar el régimen diferenciado señalado.

(32)

## **ENMIENDA**

### **Al Artículo 319**

De modificación, del apartado 4

Se propone la siguiente redacción de modificación del apartado 4 en el artículo 319 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“4. Sin perjuicio de lo que para el ámbito de las Comunidades Autónomas establezcan sus respectivas normas, el Departamento ministerial y organismo al que esté adscrita o corresponda la tutela de la entidad contratante controlará y garantizará la aplicación por esta de las reglas establecidas en los apartados anteriores.*

*En el caso de los Partidos Políticos con representación en las instituciones, será el Ministerio del Interior el encargado de ese control, y remitirá la información referente a su aplicación a los organismos fiscalizadores de la contratación, además de hacerla pública para conocimiento general”.*

## **MOTIVACIÓN:**

Aclaración sobre la fiscalización de este tipo de entidades evitando que se defina reglamentariamente y ampliando su aplicación a los Partidos Políticos.

(9)

### **ENMIENDA**

Al Artículo 321.4

De modificación, apartado 4

Se propone la modificación del apartado 4 del artículo 321 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“4. En los casos en que el Consejo de Ministros autorice la celebración de un contrato deberá autorizar igualmente sus modificaciones, siempre que, no encontrándose las mismas previstas en el pliego, representen un porcentaje, aislada o conjuntamente, superior al 10 por cien del precio inicial del contrato, IVA excluido.”*

### **MOTIVACIÓN:**

Proponemos volver a la redacción del anteproyecto, que exigía que el Consejo de Ministros aprobara las modificaciones de contratos que deben ser aprobados por el propio órgano colegiado.

(9)

## ENMIENDA

Al artículo 321

De modificación, apartado 6

Se propone la modificación del artículo 321, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 321. Autorización para contratar.

(...)

6. En el ámbito del Sector Público Estatal, antes de celebrar un contrato de concesión de obras, **concesión de servicios públicos** o de concesión de servicios **no públicos**, cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros, será preceptivo y vinculante un informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que se pronuncie sobre las repercusiones presupuestarias y compromisos financieros que implique, así como sobre su incidencia en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Asimismo, en estos contratos, y con independencia de la cuantía del contrato, será igualmente necesario recabar el informe vinculante del Ministerio de Hacienda y Función Pública cuando, en su financiación se prevea cualquier forma de ayuda o aportación estatal, o el otorgamiento de préstamos o anticipos.

A tal efecto, el órgano de contratación deberá proporcionar información completa acerca de los aspectos financieros y presupuestarios del contrato, incluyendo los mecanismos de captación de financiación y garantías que se prevea utilizar, durante toda la vigencia del mismo.

En la elaboración del informe al que se refieren los dos primeros párrafos del presente apartado se deberá tener en cuenta, en el ámbito del sector público estatal, el informe que al respecto emita el Comité Técnico de Cuentas Nacionales, creado por la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2013 de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

En los casos en que se trate de contratos de concesión de obras o de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros y en los que en su financiación se prevea cualquier forma de ayuda o aportación estatal, o el otorgamiento de préstamos o anticipos, el informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública al que hacen referencia el párrafo primero y segundo del presente apartado, será único.

Por otro lado, los informes citados en el primer y segundo párrafo del presente apartado se solicitarán por el órgano de contratación con carácter previo a la tramitación de la autorización del Consejo de Ministros a la que se refiere el apartado primero del presente artículo en los supuestos en que la misma sea preceptiva, y en todo caso, con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación y a la aprobación del gasto.

7. En el ámbito de los sectores públicos autonómico y local, deberán remitirse al Comité Técnico de Cuentas Nacionales citado en el apartado anterior del presente artículo, todos los contratos de concesión de obras, **concesión de servicios públicos** o de concesión de servicios **no públicos** adjudicados en sus respectivos ámbitos, cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros, o en cuya financiación se prevea cualquier forma de ayuda o aportación estatal, o el otorgamiento de préstamos o anticipos.

El Comité Técnico de Cuentas Nacionales emitirá en relación con los mismos un informe sobre los efectos de la celebración del contrato en las cuentas económicas de la Administración contratante.»

Resto de apartados del artículo sin variación.

### **MOTIVACIÓN:**

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos atendida la necesidad de diferenciar su régimen jurídico, lo que no obsta a que sea comunes otras previsiones como la del presente artículo.

(53)



## **ENMIENDA**

### **Artículo 323**

De adición, apartado 7 (nuevo)

Se propone incluir un apartado 7 (nuevo) en el artículo 245 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

7 (nuevo): “Las Leyes de las Comunidades Autónomas y la legislación de desarrollo podrán establecer que las Mesas de Contratación puedan ejercer también aquellas competencias relativas a la adjudicación que esta ley atribuye a los órganos de contratación”.

## **MOTIVACIÓN:**

Aunque se podría optar por proceder directamente este cambio en este mismo Proyecto de LEY como ocurre con la posibilidad de crear Juntas de Contratación en la AGE (en el artículo 320.4).

(53)

## **ENMIENDA**

Al artículo 325

De modificación

Se propone la modificación del artículo 325, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 325. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado

(...)

3. En ejercicio de la función establecida en la letra c) del apartado anterior, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es el órgano competente para elaborar y remitir a la Comisión Europea cada tres años un informe de supervisión que, respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos de obras, **gestión de servicios públicos**, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios **no públicos** que estén sujetos a regulación armonizada, comprenda, si procede, lo siguiente:

a) Una relación de los principales incumplimientos detectados por los órganos, instituciones y poderes con competencia supervisora o jurisdiccional en materia de contratación pública.

b) Información sobre las fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta de la legislación de contratación pública o de inseguridad jurídica.

c) Información sobre el nivel de participación de las PYME en la contratación pública.

d) Información sobre la prevención, detección y notificación adecuada de los casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses y otras irregularidades graves en la contratación, así como sobre los problemas de colusión detectados.

4. En el informe de supervisión al que se refiere el apartado anterior se incluirán así mismo:

a) Un informe estadístico sobre los contratos públicos de obras, suministros y servicios no sujetos a regulación armonizada por no superar los umbrales establecidos en los artículos 20, 21 y 22, haciendo una estimación del valor agregado total de dichos contratos durante el periodo de que se trate. Esa estimación podrá basarse, en particular, en los datos disponibles en virtud de los requisitos de publicación, o bien en estimaciones realizadas a partir de muestras.

b) Información sobre cuáles son los órganos que darán cumplimiento a las obligaciones asumidas en virtud del derecho de la Unión Europea derivado en materia

de contratación. Así mismo, información sobre las iniciativas adoptadas para proporcionar orientación o ayuda gratuita en la aplicación de la normativa de la Unión Europea en materia de contratación pública o para dar respuesta a las dificultades que plantee su aplicación, así como para planificar y llevar a cabo procedimientos de contratación.

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado pondrá en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el informe de supervisión al que se refiere el apartado anterior, tras su remisión a la Comisión Europea.

(...)»

Resto de apartados del artículo sin variación.

#### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el precepto a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al artículo 328

De modificación

Se propone la modificación del artículo 328, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 328. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas.

1. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquél, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que el precio de adjudicación del contrato o en el caso de acuerdos marco, el valor estimado, exceda de 600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras, concesiones de servicios **públicos y concesión de servicios no públicos** y acuerdos marco; de 450.000 euros, tratándose de suministros; y de 150.000 euros, tratándose de **gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, servicios y de contratos administrativos especiales.

Así mismo, serán objeto de remisión al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma la copia certificada y el extracto del expediente a los que se refiere el párrafo anterior, relativos a los contratos basados en un acuerdo marco y a los contratos específicos celebrados en el marco de un sistema dinámico de adquisición, siempre que el precio de adjudicación del contrato exceda en función de su naturaleza de las cuantías señaladas en el citado párrafo.

(...)»

Resto de apartados del artículo sin variación.

## **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el precepto a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 328.1

De modificación al apartado 1

Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 328 dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“1. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquél, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que el precio de adjudicación del contrato o en el caso de acuerdos marco, el valor estimado, exceda de 600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras, concesiones de servicios y acuerdos marco; de 450.000 euros, tratándose de suministros; y de 150.000 euros, tratándose de servicios y de contratos administrativos especiales.*

*Asimismo, se remitirá una relación del resto de contratos celebrados, con independencia de su cuantía e incluyendo los contratos menores, donde se consignará la identidad del adjudicatario, el objeto del contrato y su cuantía. Dichas relaciones se ordenarán siguiendo el criterio de los adjudicatarios”.*

## **MOTIVACIÓN:**

La inclusión de la relación del resto de contratos, incluidos los menores, posibilita el acceso y control de la contratación pública para eludir técnicas frecuentes como el fraccionamiento de los contratos

(36)

## **ENMIENDA**

Al artículo 329

De modificación

Se propone la modificación del artículo 329, que quedará con la siguiente redacción:

«Artículo 329. Informes específicos sobre los procedimientos para la adjudicación de los contratos.

1. Los órganos de contratación redactarán un informe escrito sobre cada contrato de obras, **gestión de servicios públicos**, suministros o servicios o acuerdo marco, sujetos a regulación armonizada, así como cada vez que establezcan un sistema dinámico de adquisición, que incluya al menos lo siguiente:

a) El nombre y dirección del poder adjudicador, y el objeto y precio del contrato, del acuerdo marco o del sistema dinámico de adquisición;

b) En su caso, los resultados de la selección cualitativa y/o la reducción del número de ofertas y de soluciones, de conformidad con lo establecido en la presente Ley para los procedimientos restringido, de licitación con negociación, de diálogo competitivo, y de asociación para la innovación, concretamente:

i. Los nombres de los candidatos o licitadores seleccionados y los motivos que justifican su selección,

ii. Los nombres de los candidatos o licitadores excluidos y los motivos que justifican su exclusión;

c) Los motivos por los que se hayan rechazado ofertas consideradas anormalmente bajas;

d) El nombre del adjudicatario y los motivos por los que se ha elegido su oferta, así como, si se conoce, la parte del contrato o del acuerdo marco que el adjudicatario tenga previsto subcontratar con terceros; y, en caso de que existan, y si se conocen en ese momento, los nombres de los subcontratistas del contratista principal;

e) Para los procedimientos de licitación con negociación y los procedimientos de diálogo competitivo, las circunstancias establecidas en el artículo 165 y en el apartado 3 del artículo 170 que justifiquen el recurso a estos procedimientos;

f) Por lo que respecta a los procedimientos negociados sin publicación previa, las circunstancias contempladas en el artículo 166 que justifiquen el recurso a dicho procedimiento;

g) En su caso, los motivos por los que el poder adjudicador haya renunciado a adjudicar un contrato o un acuerdo marco o a establecer un sistema dinámico de adquisición;

h) En su caso, los motivos por los que se han utilizado medios de comunicación distintos de los electrónicos para la presentación electrónica de ofertas;

i) En su caso, los conflictos de intereses detectados y las medidas tomadas al respecto.

j) En su caso, las medidas tomadas en el marco del artículo 70.

Dicho informe no será exigido por lo que respecta a contratos basados en acuerdos marco, cuando estos se hayan celebrado con arreglo a los apartados 3 y 4.a) del artículo 219.

En la medida en que el anuncio de formalización del contrato contenga la información requerida en el presente apartado, los poderes adjudicadores podrán hacer referencia a dicho anuncio.

2. El informe, o sus elementos principales, se remitirán a la Comisión Europea o al Comité de cooperación en materia de contratación pública regulado en el artículo 326, cuando lo soliciten.»

### **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el precepto a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

### Artículo 329

#### De modificación

Se propone la modificación de la letra g) del apartado 1 del artículo 329 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“g) En su caso, los motivos por los que el poder adjudicador haya decidido no adjudicar o celebrar un contrato o un acuerdo marco o a establecer un sistema dinámico de adquisición;”*

## **MOTIVACIÓN:**

En coherencia con la enmienda propuesta al artículo 150 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

(53)



## **ENMIENDA**

Al Artículo 339.2 y 8

De modificación, apartado 4

Se propone la modificación de los apartados 2 y 8 de artículo 339 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“2. El Registro de Contratos del Sector Público constituye el sistema oficial central de información sobre la contratación pública en España, para la estadística en materia de contratos públicos, para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de información sobre la contratación pública, para las comunicaciones legalmente previstas a los órganos de las Administraciones Públicas de los datos sobre contratos y, en general, para la difusión pública de dicha información, de conformidad con el principio de transparencia. La información sobre la contratación pública deberá estar sistematizada siguiendo formatos y estándares abiertos adoptados a nivel internacional y se publicarán los datos obtenidos en su totalidad, no solo aquellas estadísticas generales sobre el tipo de contrato y su procedimiento.*

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

*8. El Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales un informe sobre la contratación pública en España, a partir de los datos y análisis proporcionados por el Registro de Contratos del Sector Público. El Ministerio de Hacienda y Función Pública pondrá en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el informe al que se refiere el párrafo anterior, tras su elevación por el Gobierno a las Cortes Generales, y lo publicará simultáneamente en su página web”.*

## **MOTIVACIÓN:**

El registro de contratos contiene apenas cuatro indicadores que no permiten extraer ningún tipo de conclusión significativa y a la vez es necesario mejorar la información.

(9)

## **ENMIENDA**

### **Artículo 339**

De modificación, apartado 3, primer párrafo

Se propone modificar el primer párrafo del apartado 1 del artículo 149 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“3. Los poderes adjudicadores comunicarán al Registro de Contratos del Sector Público, para su inscripción, los datos básicos de los contratos por ellos adjudicados, entre los que figurará la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación de los mismos, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor añadido (...)”*

## **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica de la enmienda para poner en valor medidas de transparencia.

(53)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 340

De modificación al apartado 2 y adición apartado 8 (nuevo)

Se propone la modificación del apartado 2 y la adición de un apartado 8 (nuevo) al artículo 340 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*2. Los perfiles de contratante de los órganos de contratación de todas las entidades del sector público estatal deberán alojarse de manera obligatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma. En las páginas web institucionales de estos órganos se incluirá un enlace a su perfil de contratante situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.*

*Las CC.AA. deberán interconectar sus datos con la Plataforma de Contratos del Sector Público, con el objetivo de que la información sobre la contratación de todas las administraciones públicas española esté centralizada, lo que ayuda a un mejor control y facilita la investigación y el análisis de las contrataciones. Además, no añade ninguna obligación de usar estándares abiertos que permitan el análisis*

*Añadir un punto 8:*

*La información se publicará en estándares abiertos y reutilizables*

## **MOTIVACIÓN:**

La LCSP vigente ya establece que las CC.AA. deberán interconectar sus datos con la Plataforma de Contratos del Sector Público, con el objetivo de que la información sobre la contratación de todas las administraciones públicas española esté centralizada, lo que ayuda a un mejor control y facilita la investigación y el análisis. Pero, pese a eso, solo una parte de las AA.PP. han incluido sus datos en alguna de las dos modalidades previstas (alojarlos allí directamente o interconectar con los propios). Esta reforma no incluye ninguna fecha límite ni plazo para esa deuda que arrastra la publicidad en las contrataciones. Además, no añade ninguna obligación de usar estándares abiertos que permitan el análisis.

(9)

## **ENMIENDA**

Al Artículo 340

De modificación

Se modifica el tercer párrafo del apartado 3, quedando como sigue:

*“En cualquier caso, e independientemente de la opción elegida por las Comunidades Autónomas o las Ciudades Autónomas, de entre las señaladas en los dos primeros párrafos del presente apartado, estas deberán publicar, bien directamente o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información en el caso de que contaran con sus propios servicios de información, la convocatoria de todas las licitaciones y sus resultados para todos los procedimientos que se inicien, así como de cualquier otra información relevante para los licitadores en la Plataforma de Contratación del Sector Público.”*

## **MOTIVACIÓN:**

Evitar adjudicaciones con costes laborales por debajo de las referencias del Convenio Colectivo del sector.

(30)

### **ENMIENDA**

Al Título I del Libro III (arts. 315, 316, 317 y 318)

De supresión.

Se propone la supresión del Título I del Libro III (arts. 315, 316, 317 y 318), dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

### **MOTIVACIÓN:**

De manera coherente con la enmienda de supresión de la Disposición Transitoria Quinta. La remisión a un régimen de "autorregulación" (vía Instrucciones Internas) para los contratos no sujetos a regulación armonizada por parte de los poderes adjudicadores no administración pública ha derivado en una infinidad de procedimientos, regulaciones y requisitos no uniformes que se aplican a la contratación de todas esas entidades. A los licitadores no les basta con conocer la Ley de contratos sino que deben conocer también todas las Instrucciones de todas las entidades con las que pretendan contratar. Las Instrucciones internas de contratación se han convertido en un obstáculo para la unidad de mercado. Se considera mucho más adecuado plantear un régimen uniforme para la contratación de todos los poderes adjudicadores

(14)

## **ENMIENDA**

De adición. Dentro de la Sección 2ª "Ejecución de los contratos de servicios".

Incluir Artículo 310 (bis)

Se propone la siguiente redacción que incluye un artículo nuevo, el 310 (bis) dentro de la Sección 2ª "Ejecución de los contratos de servicios" dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

**"310.bis.** *Especialidades de los contratos de servicios cuyo objeto sea la elaboración de proyectos arquitectónicos o de ingeniería.*

*Los pliegos de las licitaciones de contratos de servicios de arquitectura e ingeniería y las bases de los concursos de proyectos, contendrán al menos las siguientes determinaciones:*

*a) Contenido documental del proyecto, conforme a la normativa aplicable. Los órganos de contratación, podrán acordar la utilización de instrumentos o herramientas como manuales de calidad y otros documentos técnicos, elaborados por entidades o corporaciones sectoriales.*

*b) Presupuesto base de licitación. Para su determinación, los órganos de contratación podrán articular herramientas o instrumentos de bases de cálculo, al servicio de los poderes adjudicadores, en colaboración con entidades y corporaciones sectoriales.*

*c) Uso de herramientas electrónicas específicas para la elaboración de los proyectos. Los órganos de contratación, podrán exigir, en los contratos públicos y concursos de proyectos cuyo valor sea igual, o superior, a los umbrales establecidos en el artículo 4 de la Directiva 2014/24/UE, el uso de herramientas electrónicas para los proyectos y diseño electrónico de edificios, o herramientas similares, mediante la incorporación de los protocolos correspondientes en los pliegos de licitación o bases del concurso. En esos casos, los poderes adjudicadores ofrecerán medios de acceso alternativos, según lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 22 de dicha directiva."*

## **MOTIVACIÓN:**

Establecer las normas mínimas necesarias para una adecuada ejecución de este tipo de contratos, cuyo objeto sean proyectos de arquitectura e ingeniería en los propios pliegos de la licitación. De esta manera, se garantizará que los proyectos tengan la calidad adecuada, utilizando para ello los manuales y documentos técnicos correspondientes. Una determinación precisa y correcta del presupuesto base de licitación, a través de las herramientas informáticas que puedan disponer las entidades del sector público, como ya ocurre en otros países de la Unión Europea. Y posibilitar la

utilización de herramientas electrónicas o métodos de trabajo que ofrecen las nuevas tecnologías en la línea de lo que se señala en la Directiva Comunitaria 2014/24/UE (artículo 22.4), sin que ello restrinja el acceso de los operadores económicos a las licitaciones.

(18)

## ENMIENDA

### A la Disposición adicional segunda

#### De modificación

Se propone la modificación de la Disposición adicional segunda, que quedará con la siguiente redacción:

«Disposición adicional segunda. Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales.

1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, **de gestión de servicios públicos**, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios **no públicos** y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

(...)

5. En las Entidades Locales será potestativa la constitución de Juntas de Contratación que actuarán como órganos de contratación en los contratos de obras que tengan por objeto trabajos de reparación simple, de conservación y de mantenimiento, en los contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en los contratos **de gestión de servicios públicos** y de servicios cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de la Entidad, o cuando superen este importe las acciones estén previstas en el presupuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución de este.

Corresponde al Pleno acordar la constitución de las Juntas de Contratación y determinar su composición, debiendo formar parte de las mismas necesariamente el Secretario o el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y el Interventor de la misma. Los límites cuantitativos, que podrán ser inferiores a los señalados en el párrafo anterior, o los referentes a las características de los contratos en los que intervendrá la Junta de Contratación como órgano de contratación, se determinarán, en los municipios de gran población por la Junta de Gobierno Local y en las restantes entidades locales, por el Pleno, a





propuesta del Alcalde o del Presidente cuando sea, de acuerdo con el apartado 2, el órgano que tenga atribuida la competencia sobre dichos contratos.

En los casos de actuación de las Juntas de Contratación se prescindirá de la intervención de la Mesa de contratación.

(...)»

**MOTIVACIÓN:**

Se adapta el precepto a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

### **ENMIENDA**

A la Disposición adicional segunda.

De adición

Se añade un nuevo apartado 12, con el siguiente contenido:

*“12. Cuando las Entidades Locales presten servicios a través de una concesión de servicios, mediante la explotación de una concesión de obras, o a través de entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás entes locales que actúen en régimen de derecho privado, sean o no medio propio de los previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, las contraprestaciones económicas, ya se denominen retribuciones o tarifas, que constituyen ingresos propios de dichos gestores indirectos, si tuvieran la naturaleza de prestaciones patrimoniales públicas en los términos del artículo 287.3 de esta ley, deberán ser aprobadas por medio de una Ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha Ordenanza, las Entidades Locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas.”*

### **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica.

(35)

## **ENMIENDA**

A la Disposición Adicional Cuarta

De sustitución del texto.

Se propone la siguiente redacción de la Disposición Adicional Cuarta dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“Reserva de Contratos.*

*1. Los órganos de contratación reservarán la adjudicación de un porcentaje de un 10 por 100 del importe total anual de su contratación a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o reservarán la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100.*

*Quedan excluidos del cómputo los contratos de obras y de concesión de obra pública. El porcentaje de esta reserva social en cada órgano de contratación se establecerá sobre el importe total anual de su contratación en el ejercicio anterior.*

*2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición.*

*3. Únicamente podrá justificarse el incumplimiento del indicado porcentaje de reserva en la falta de presentación de ofertas aceptables en los expedientes en los que se solicitaron o en la no inscripción en el Registro de Contratistas de empresas que cumplan los requisitos y adecuación al objeto contractual reservable.*

*4. Los órganos de contratación eximirán de la obligación de constituir garantía a los centros, entidades y empresas contratados al amparo de la reserva a que se refiere la presente Disposición. Esta exención se reseñará y justificará en los pliegos en base a la importante función social que tales centros, entidades y empresas desarrollan.*

*5. A los efectos de esta Ley se entienden como Centros Especiales de Empleo de iniciativa social aquellos que sean promovidos y participados en más de un 50%, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya titularidad corresponda a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social."*

### **MOTIVACIÓN:**

Así, en aras de promover esta contratación pública de los Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción, se considera necesario establecer, con carácter legal, una reserva mínima de contratos a dichas entidades, la cual podría tener un importe mínimo obligatorio del 10% del importe de los contratos adjudicados en el ejercicio anterior.

De esta manera los concretos contratos a reservar se podrían seleccionar en base a un porcentaje aproximado del 10% del volumen de contratación anual del ejercicio anterior, pudiendo incluso quedar excluidos del cómputo, de entenderse ello necesario, los contratos de obras y de concesión de obra pública. Así se evitaría que dichos contratos reservados fueran muy poco significativos a efectos económicos, sin que tampoco alcanzaran en absoluto un número excesivo.

Al amparo de esa reserva en la adjudicación se podría prever igualmente que los órganos de contratación eximan de la obligación de constituir garantía a los centros, entidades y empresas contratados, en base, reiteramos, a la importante función social que éstos desarrollan.

Con esta reserva de contratos se muestra igualmente el compromiso de las Administraciones Públicas hacia el colectivo de personas con discapacidad, aplicando medidas de acción positiva. Además, no sólo no generaría coste económico alguno, sino que incidiría muy favorablemente en la creación de empleo y en la productividad y competitividad.

(3)

### **ENMIENDA**

A la disposición adicional cuarta

De modificación

Se propone añadir la siguiente frase al final del segundo párrafo del apartado 1:

*“Así mismo, se constituirá una comisión encargada del seguimiento y control de la aplicación efectiva de los porcentajes mínimos de reserva”.*

### **MOTIVACIÓN:**

Contar con medidas de control y seguimiento de la aplicación efectiva ya por parte de administraciones estatales, autonómicas, locales y provinciales

(29)

## **ENMIENDA**

A la disposición adicional cuarta

De modificación

La disposición adicional cuarta pasa a formar parte del articulado en el Libro Segundo, Título I, Capítulo I, Sección 2.ª, Subsección 1.ª (De la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas – Normas generales), con la con la consecuente supresión como disposición adicional del texto del proyecto, y con la siguiente redacción:

“Artículo X (nuevo). Contratos reservados.

“1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de contratos o de determinados lotes de los mismos, o en su ejecución, a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a Empresa de Inserción que cumplan con los requisitos establecidos en su respectiva normativa reguladora para tener dicha consideración.

En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior.

2. Con independencia de la fijación del porcentaje mínimo previsto en el apartado primero, los órganos de contratación quedan facultados para aplicar la reserva de contratos en todos aquellos supuestos en que lo estimen conveniente.

3. A los efectos de la reserva de contratos se entienden como Centros Especiales de Empleo de iniciativa social aquellos que sean promovidos y participados en más de un 50%, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya titularidad corresponda a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para la creación de oportunidades de empleo para personas

con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social.

4. En los procedimientos de adjudicación en que se aplique la reserva de contratos se eximirá a los licitadores de la constitución de garantías definitivas salvo en los casos en que el órgano de contratación, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, justifique motivadamente su exigencia en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia al presente artículo.”

**MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica.

(43)

### **ENMIENDA**

Disposición adicional (cuarta bis), NUEVA. Contratos reservados a Fundaciones, Cooperativas, Sociedades Laborales y Mutualidades.

De adición,

Se propone añadir una nueva disposición adicional cuarta bis (nueva), al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“1. Las administraciones públicas u otros poderes adjudicadores pueden reservar a determinadas organizaciones el derecho de participación en procedimientos de adjudicación de contratos públicos exclusivamente en el caso de servicios sociales, culturales y de salud. En dicho caso las organizaciones susceptibles de ser adjudicatarias de los referidos contratos serán las asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, cooperativas, sociedades laborales, y mutualidades, que tengan como finalidad social el servicio público, así como otras entidades con la misma finalidad que acrediten que los trabajadores, los usuarios o los asociados forman parte de las estructuras de dirección o de la propiedad y tienen capacidad de influencia, y que los beneficios que obtienen se reinvierten en la finalidad de la entidad o se redistribuyen entre los trabajadores o asociados en función del trabajo o actividad aportada.*

*2. Para acogerse a la referida reserva será preciso que, cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, la administración pública o poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un contrato para los servicios en cuestión con arreglo al presente escrito en los tres años precedentes y el contrato no tenga una duración que exceda a los tres años.*

*3. En la convocatoria de la licitación se hará referencia al presente artículo”*

### **MOTIVACIÓN:**

Con la referida propuesta se trata de transponer a la futura LCSP el artículo 77 de la DCP, que el Proyecto de Ley obvia. Teniendo en cuenta que la directiva regula los contratos cuyo valor supere los umbrales del artículo 4, contratos sujetos a regulación armonizada según la terminología de la legislación española, los requisitos que fija el artículo 77 de que no se haya adjudicado un contrato análogo en los tres años precedentes o que la duración del contrato adjudicado en base al referido precepto no tenga una duración superior a los tres años se circunscribe en la propuesta a los contratos armonizados.

(32)



## **ENMIENDA**

A la DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA XXX (nueva)

De adición

Se propone la siguiente redacción a una nueva Disposición Adicional Cuarta (XXX), dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA (XXX). Contratos reservados a entidades de economía social, de economía solidaria y sin ánimo de lucro, por encima de los umbrales de regulación armonizada.*

*1. Se podrá reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios sociales, culturales, educativos, de salud y otros servicios específicos señalados en el Anexo IV, o de lotes de los mismos, cuyo valor estimado sea superior a 750.000 euros, a las entidades que reúnan las siguientes condiciones:*

- a) que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público vinculada a la prestación de los servicios a contratar;*
- b) que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización; en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o redistribución deberá basarse en consideraciones de participación;*
- c) que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el contrato se basen en la propiedad de los empleados o en principios de participación o exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas, y*
- d) que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un contrato para los servicios en cuestión con arreglo al presente artículo en los tres años precedentes.*

*2. A los efectos previstos en el punto 1, se consideran entidades de economía social, de economía solidaria y sin ánimo de lucro aquellas organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, que responden a criterios de solidaridad y de participación social, amparadas bajo alguna de las figuras jurídicas sociales o societarias señaladas en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social; en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía*

*Sostenible; en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación; o en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.*

*3. La duración máxima del contrato no excederá de tres años.*

*4. En la convocatoria de licitación se hará referencia al presente artículo."*

### **MOTIVACIÓN:**

La regulación de los contratos reservados de importe inferior a 750.000 euros, sí que es obligatoria, ya que el artículo 4.d) de la Directiva, que es de transposición obligatoria, así lo establece. La justificación de su inclusión radica en la importancia que la economía social y el sector no lucrativo tienen en el ámbito de la cohesión social y el desarrollo económico del país y la necesidad de preservar su actividad frente a otros grandes operadores de carácter lucrativo que, en muchos caso, ni siquiera están radicados en el propio territorio. Por otro lado, la justificación jurídica comienza por la obligatoriedad de inclusión del artículo de 4. d) de la Directiva Europea, así como, en general, por las directrices emanadas por Europa en relación a la necesidad de discriminar positivamente a este tipo de organizaciones y empresas de carácter social.

(13)

## **ENMIENDA**

A la DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA XXXX (nueva)

De adición

Se propone la siguiente redacción a una nueva Disposición Adicional Cuarta (XXXX) dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“DISPOSICIÓN CUARTA (XXXX). Contratos de servicios sociales y de servicios específicos.*

- 1. Los contratos públicos de servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV, podrán ser objeto de adjudicación conforme a lo previsto en el presente artículo.*
- 2. Los poderes adjudicadores tendrán en cuenta para dichos contratos el principio de solidaridad, así como la necesidad de garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad de los servicios, las necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables, la implicación y la participación de las personas usuarias y trabajadoras, y la innovación. Además, podrán disponer que la elección del proveedor de servicios se haga sobre la base de la oferta con una mejor relación calidad-precio, teniendo en cuenta criterios sociales, de calidad y sostenibilidad.*
- 3. Los poderes públicos y los órganos de contratación podrán reservar la participación en la adjudicación de contratos públicos de servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV, o de lotes de los mismos, a las entidades de economía social, de economía solidaria y sin ánimo de lucro, conforme a los procedimientos previstos en los artículos x e y de esta Ley.*
- 4. Los poderes adjudicadores podrán utilizar un sistema diferenciado para la adjudicación de contratos de servicios sociales y otros servicios específicos del Anexo IV, debiendo publicar un anuncio de licitación o un anuncio de información previa conforme a lo previsto en esta Ley, y darán a conocer los resultados del procedimiento de contratación por medio de un anuncio de adjudicación de contrato que incluya lo especificado en la Sección 7ª del Anexo III de esta Ley.*

*A través de dichos sistemas, los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el Anexo IV, podrán ser objeto de adjudicación exclusivamente a operadores sin ánimo de lucro, a través de contratos reservados, o de procedimientos restringidos, o de procedimientos negociados, siempre que dichos sistemas garanticen una publicidad suficiente y se ajusten a los principios de transparencia y no discriminación.*

5. *Además, los poderes públicos podrán organizar estos servicios enumerados en el Anexo IV, siempre que el valor estimado sea inferior a 750.000 euros, de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios, mediante la concertación específica con operadores sin ánimo de lucro previamente acreditados, mediante convenios, o mediante la concesión de licencias o autorizaciones a los operadores económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador."*

### **MOTIVACIÓN:**

Se propone realizar la efectiva transposición efectiva de la Directiva Comunitaria 2014/24/UE, e incorporar su regulación específica para los contratos de servicios sociales sin interés transfronterizo, tal y como aparecen en la misma, en lo que cabe considerar una grave omisión del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público.

Resulta imprescindible que dicha regulación se incorpore al texto legal, además, para otorgar garantías a los órganos de contratación, evitar inseguridad jurídica y establecer sistemas homogéneos a nivel nacional (son muchas las Comunidades Autónomas que señalan la posibilidad de regular sistemas de adjudicación de servicios sociales de esta manera, sin respaldo de la Ley de Contratos Públicos).

Las directrices europeas reconocen la necesidad de regular este tipo de servicios de manera especial, permitiendo la posibilidad de reservar contratos a operadores de la economía social, hacerlo exclusivamente para operadores sin ánimo de lucro y/o con determinados servicios utilizar otras fórmulas de concesión fuera del ámbito de regulación de la Ley de Contratos Públicos. Una vez más, Europa reconoce el carácter comunitario y local de los servicios sociales, así como la importancia de su gestión por parte de entidades no lucrativas y empresas sociales que preservan su función pública y social.

(13)

## **ENMIENDA**

A la Disposición Adicional Decimoctava, en el apartado 1.

De modificación.

Se propone la siguiente redacción de la Disposición Adicional Decimoctava, en el apartado 1, dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“1. La prohibición de contratar establecida en el artículo 71.1.d) relativa al incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad será inmediatamente efectiva desde la entrada en vigor de la presente Ley.*

*No obstante, podrá llevarse a cabo un desarrollo reglamentario a efectos de concretar más los modos de acreditar el cumplimiento de ese requisito del 2 por ciento, que podrían ser mediante una certificación del órgano administrativo correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o mediante certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo, pudiendo valorarse en tal momento otros posibles medios de acreditación.*

*En todo caso, hasta el momento en que se produzca la aprobación del citado desarrollo reglamentario e incluso posteriormente, si se entendiera que sigue siendo un modo de acreditación apropiado, a efectos de apreciar la existencia o inexistencia del cumplimiento del requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, los pliegos de cláusulas administrativas particulares incorporarán necesariamente en la cláusula relativa a la documentación a aportar por los licitadores, la exigencia de que se aporte un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas, todo ello sin perjuicio de la posible comprobación de estos extremos por los órganos de contratación”.*

## **MOTIVACIÓN:**

Esta enmienda se propone “ad cautelam” para conseguir que la prohibición de contratar no quede en suspenso hasta que se produzca el desarrollo de la Ley.

(3)

## **ENMIENDA**

A la Disposición adicional vigésima

De modificación

Se propone la modificación de la Disposición adicional vigésima, que quedará con la siguiente redacción:

«Disposición adicional vigésima. Conciertos para la prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica celebrados por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

1. Los conciertos que tengan por objeto la prestación de servicios de asistencia sanitaria y que, para el desarrollo de su acción protectora, celebren la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas con entidades públicas, entidades aseguradoras, sociedades médicas y otras entidades o empresas, cualquiera que sea su importe y modalidad, tendrán la naturaleza de contratos de **gestión de servicios públicos** regulándose por la normativa especial de cada mutualidad y, en todo lo no previsto por la misma, por la legislación de contratos del sector público.

2. En todo caso, las referidas entidades darán a conocer su intención de celebrar los mencionados conciertos mediante un anuncio de información previa en el que figurará el contenido recogido en el Anexo III.B.Sección 3 de la presente Ley, que deberá publicarse en su perfil de contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Así mismo, les serán de aplicación lo señalado en el artículo 152 y en el Capítulo VI del Título I del Libro Primero de la presente Ley, referidos respectivamente a la publicación del anuncio de formalización y al recurso especial en materia de contratación.»

## **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el precepto a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

## **ENMIENDA**

A la Disposición Adicional Vigésima.

De modificación, al apartado 1 de la Disposición Adicional Vigésima

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 1 de la Disposición Adicional Vigésima, dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“1. Los conciertos que tengan por objeto la prestación de servicios de asistencia sanitaria y que, para el desarrollo de su acción protectora, celebren la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas con entidades públicas, entidades aseguradoras, sociedades médicas y otras entidades o empresas, cualquiera que sea su importe y modalidad, tendrán la naturaleza de contratos de servicios regulándose por la normativa especial de cada mutualidad y, en todo lo no previsto por la misma, por la legislación de contratos del sector”.*

## **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica. El concepto de concesión de servicios viene caracterizado, según el art. 15.2 por remisión al art. 14.4 por “la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable”. Esa transferencia de riesgos no se encuentra presente en los conciertos que regula esta Disposición Adicional.

(14)

## ENMIENDA

Grupo  
Socialista

A la Disposición adicional vigésima tercera

De modificación

Se propone la modificación de la Disposición adicional vigésima tercera, que quedará con la siguiente redacción:

«Disposición adicional vigésima tercera. Adjudicación de contratos de concesión de obras, **concesión de servicios públicos** y de concesión de servicios **no públicos** a sociedades de economía mixta.

1. Las concesiones de obras, de **servicios públicos** y de servicios **no públicos** podrán adjudicarse directamente a una sociedad de economía mixta en la que concurra mayoritariamente capital público con capital privado, siempre que la elección del socio privado se haya efectuado de conformidad con las normas establecidas en esta Ley para la adjudicación del contrato cuya ejecución constituya su objeto, y siempre que no se introduzcan modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la selección del socio privado.

La modificación de los contratos de concesión de obras, **concesión de servicios públicos** o de concesión de servicios **no públicos** que se adjudiquen directamente según lo establecido en el párrafo anterior, únicamente se podrá realizar de conformidad con lo establecido en la Subsección 4.<sup>a</sup> de la Sección 3.<sup>a</sup> del Capítulo I del Título I del Libro Segundo, relativa a la modificación de los contratos.

2. En el caso en que la sociedad de economía mixta pretendiera acceder como concesionaria a otros contratos distintos de los referidos en el apartado 1 anterior, deberá concurrir al correspondiente procedimiento de licitación de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

3. Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar medios de financiación tales como emisión de obligaciones, empréstitos o créditos participativos, las sociedades de economía mixta constituidas para la ejecución de un contrato de concesión de obras, **de concesión de servicios públicos** o de concesión de servicios **no públicos**, podrán:

a) Acudir a ampliaciones de capital, siempre que la nueva estructura del mismo no modifique las condiciones esenciales de la adjudicación salvo que hubiera estado prevista en el contrato.

b) Titulizar los derechos de cobro que ostenten frente a la entidad adjudicadora del contrato cuya ejecución se le encomiende, previa autorización del órgano de contratación, cumpliendo los requisitos previstos en la normativa sobre mercado de valores.»



**MOTIVACIÓN:**

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos atendida la necesidad de diferenciar su régimen jurídico, lo que no obsta a que sea comunes otras previsiones como la de la presente disposición.

(53)

## **ENMIENDA**

A la Disposición Adicional Vigésimo Tercera

De modificación, al apartado 1 Disposición Adicional Vigésimo Tercera

Se propone la siguiente redacción de modificación al apartado 1 de la Disposición Adicional Vigésimo Tercera, dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“1. Las concesiones de obras y de servicios podrán adjudicarse directamente a una sociedad de economía mixta en la que concurra capital público con capital privado, siempre que la elección del socio privado se haya efectuado de conformidad con las normas establecidas en esta Ley para la adjudicación del contrato cuya ejecución constituya su objeto, y siempre que no se introduzcan modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la selección del socio privado.”*

## **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica. La creación de sociedades de economía mixta con capital mayoritariamente privado es una técnica organizativa perfectamente válida. Y no existe impedimento en las Directivas ni la jurisprudencia europea que limite la adjudicación única para la selección del socio privado y la adjudicación de la concesión al supuesto de las sociedades de economía mixta con participación mayoritariamente pública. Así, la licitación única fue validada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 15 de octubre de 2009 (As. C-196/08, Acoset SpA), al señalar que [...] recurrir a una doble licitación casa mal con el ahorro de trámites que inspira las colaboraciones público-privadas institucionalizadas - como la que se discute en el litigio principal-, cuya creación reúne en el mismo expediente la selección del socio económico privado y la adjudicación de la concesión a la entidad de capital mixto que debe constituirse únicamente a estos efectos [...]. Con el sistema de licitación única, la elección del adjudicatario se convierte en un método para concretar el socio privado que asume el contrato, todo ello al amparo de un procedimiento de concurrencia competitiva, tal y como exige la normativa europea sobre contratos públicos.

(14)

## **ENMIENDA**

A la Disposición Adicional Vigésima quinta

De modificación

Se propone la modificación de la disposición adicional vigésima quinta, que tendrá la siguiente redacción:

“Disposición adicional vigésima quinta. Régimen jurídico de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), y de su filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima (TRAGSATEC).

1. La «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), y su filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima (TRAGSATEC), tienen por función la prestación de servicios esenciales en materia de desarrollo rural, conservación del medioambiente, adaptación y mantenimiento de aplicaciones informáticas, control sanitario animal, atención a emergencias, y cualquier otra y otros ámbitos conexos, con arreglo a lo establecido en esta disposición.

2. TRAGSA y su filial TRAGSATEC tienen la consideración de medios propios personificados y servicios técnicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, ayuntamientos y las restantes entidades del sector público dependientes de ellas, en cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 32.2, letras a), b) y d). 2.º; y estarán obligadas a realizar, con carácter exclusivo, los trabajos que estos les encomienden en las materias señaladas en los apartados 4 y 5, dando una especial prioridad a aquellos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia o no de las situaciones de emergencia que se declaren. De acuerdo con esta obligación, los bienes y efectivos de TRAGSA y su filial TRAGSATEC podrán incluirse en los planes y dispositivos de protección civil y de emergencias y cualquier encargo necesario para el cumplimiento del Estado y las Comunidades Autónomas para cumplir con los compromisos adquiridos y obligaciones con la Unión Europea.

Las relaciones de TRAGSA y su filial TRAGSATEC con los poderes adjudicadores de los que son medios propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de encargos de los previstos en el artículo 32 de esta Ley, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado.

La comunicación efectuada por uno de estos poderes adjudicadores encargando una actuación a alguna de las sociedades del grupo supondrá la orden para iniciarla, sin perjuicio de la observancia de lo establecido en el artículo 32.5.b).

Asimismo, TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de medios propios personificados y servicios técnicos de las entidades pertenecientes al sector público que no tengan la consideración de poder adjudicador y podrán recibir sus encargos, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece el artículo 33.

3. El capital social de TRAGSA será íntegramente de titularidad pública. Las Comunidades Autónomas podrán participar en el capital social de TRAGSA mediante la adquisición de acciones, cuya enajenación será autorizada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a iniciativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Las Comunidades Autónomas solo podrán enajenar sus participaciones a favor de la Administración General del Estado o de organismos de derecho público vinculados o dependientes de aquella.

4. TRAGSA y su filial TRAGSATEC prestarán, por encargo de las entidades del sector público de los que son medios propios personificados, las siguientes funciones:

a) La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación y protección del medio natural y medioambiental, de acuicultura, de pesca, sanidad animal así como los necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales. Igualmente podrán llevar a cabo la realización de actuaciones para la mejora de los servicios y recursos públicos (gestión. Tramitación, desarrollo informático, etc) incluida la ejecución de obras de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español en el medio rural, al amparo de lo establecido en el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

b) La actividad agrícola, ganadera, animal, forestal y de acuicultura y la comercialización de sus productos, la administración y la gestión de fincas, montes, centros agrarios, forestales, medioambientales o de conservación de la naturaleza, así como de espacios y de recursos naturales.

c) La promoción, investigación, desarrollo, innovación, y adaptación de nuevas técnicas, equipos y sistemas de carácter agrario, forestal, medioambiental, de acuicultura y pesca, de protección de la naturaleza y para el uso sostenible de sus recursos.

d) La fabricación y comercialización de bienes muebles para el cumplimiento de sus funciones.

e) La prevención y lucha contra las plagas y enfermedades vegetales y animales y contra los incendios forestales, así como la realización de obras y tareas de apoyo técnico de carácter urgente.

f) La financiación, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de la construcción o de la explotación de infraestructuras agrarias, medioambientales y de equipamientos de núcleos rurales, así como la

constitución de sociedades y la participación en otras ya constituidas, que tengan fines relacionados con el objeto social de la empresa.

g) La planificación, organización, investigación, desarrollo, innovación, gestión, administración y supervisión de cualquier tipo de servicios ganaderos, veterinarios, de seguridad y sanidad animal y alimentaria.

h) La recogida, transporte, almacenamiento, transformación, valorización, gestión y eliminación de productos, subproductos y residuos de origen animal, vegetal y mineral.

i) Mantenimiento, desarrollo, innovación adaptación de equipos y sistemas informáticos que den soporte a las diferentes administraciones

j) La realización de tareas para las que se le requiera por la vía de la urgencia o emergencia o actividades complementarias o accesorias a las citadas anteriormente.

TRAGSA y su filial TRAGSATEC también estarán obligadas a satisfacer las necesidades de las entidades del sector público de las que son medios propios personificados en la consecución de sus objetivos de interés público mediante la realización, por encargo de los mismos, de la planificación, organización, investigación, desarrollo, innovación, gestión, administración y supervisión de cualquier tipo de asistencias y servicios técnicos en los ámbitos de actuación señalados en el apartado anterior, o mediante la adaptación y aplicación de la experiencia y conocimientos desarrollados en dichos ámbitos a otros sectores de la actividad administrativa.

Asimismo, TRAGSA y su filial TRAGSATEC estarán obligadas a participar y actuar, por encargo de las entidades del sector público de las que son medios propios personificados, en tareas de emergencia, urgencia y protección civil de todo tipo, en especial, la intervención en catástrofes medioambientales o en crisis o necesidades de carácter agrario, pecuario o ambiental; a desarrollar tareas de prevención de riesgos y emergencias de todo tipo; y a realizar actividades de formación e información pública en supuestos de interés público y, en especial, para la prevención de riesgos, catástrofes o emergencias.

5. TRAGSA y su filial TRAGSATEC podrán realizar actuaciones de apoyo y servicio institucional a la cooperación española en el ámbito internacional.

6. TRAGSA y su filial TRAGSATEC no podrán participar en los procedimientos para la adjudicación de contratos convocados por las entidades del sector público de las que sea medio propio personificado. No obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá encargarse a estas sociedades la ejecución de la actividad objeto de licitación pública.

7. El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por TRAGSA y por su filial TRAGSATEC se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes. Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las

unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios realizados.

La elaboración y aprobación de las tarifas se realizará por las Administraciones de las que el grupo es medio propio personificado.

8. A los efectos de la aplicación de la presente Ley, TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de poderes adjudicadores de los previstos en el apartado 3 del artículo 3 de la presente Ley."

### **MOTIVACIÓN:**

Mejora técnica para mejorar el régimen jurídico de TRAGSA Y TRAGSATEC, garantizando su continuidad y pervivencia.

(58)

### **ENMIENDA**

A la Disposición adicional vigésima quinta.

De modificación, primer párrafo del apartado 2

Se propone la modificación del primer párrafo del apartado 2 de la Disposición adicional vigésima quinta del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“2. TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de medios propios personificados y servicios técnicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, **los Cabildos y Consejos Insulares, Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, Diputaciones y Ayuntamientos, Administraciones locales, Mancomunidades de municipios,** y las restantes entidades del sector público dependientes de ellas, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece el artículo 32.2, letras a), b) y d). 2.º; y estarán obligadas a realizar, con carácter exclusivo, los trabajos que estos les encomienden en las materias señaladas en los apartados 4 y 5, dando una especial prioridad a aquellos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren. De acuerdo con esta obligación, los bienes y efectivos de TRAGSA y su filial TRAGSATEC podrán incluirse en los planes y dispositivos de protección civil y de emergencias”.*

### **MOTIVACIÓN:**

El caso de los Consejos Insulares, donde en un mismo espacio confluyen hasta cuatro administraciones, -General, Autonómica, Consejo Insular y Ayuntamiento-, como es el caso de las actuaciones en costas, la horizontalidad de TRAGSA como medio propio de todos ellos, supondría una mejora en términos de eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las medidas como indica el Art. 12 de la normativa Europea (2014/24/UE), a la que la nueva LCSP se ha de adaptar. La enmienda modifica parcialmente el primer párrafo del apartado 2.

(39)

### ENMIENDA

A la Disposición adicional vigésima quinta.

De modificación, apartado 4 f)

Se propone la modificación del apartado 4 f) de la Disposición adicional vigésima quinta del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*Punto 4.*

(...)

“f) La financiación, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de la construcción o de la explotación de infraestructuras agrarias, medioambientales y de equipamientos de núcleos rurales, **desarrollo de sistemas informáticos, sistemas de información frente a emergencias, etc...**, así como la constitución de sociedades y la participación en otras ya constituidas, que tengan fines relacionados con el objeto social de la empresa”.

### MOTIVACIÓN

No se busca tanto la ampliación del objeto social, ya recogido en los Estatutos, sino redactar de forma clara lo que ya hace la empresa TRAGSA y su filial TRAGSATEC. Está enmienda enriquece el texto correspondiente al apartado 4 f) con relación a las funciones realizadas por ambas empresas.

(39)



## **ENMIENDA**

A la disposición adicional trigésima cuarta

De modificación

Se propone la modificación de la Disposición adicional trigésima cuarta, que quedará con la siguiente redacción:

«Disposición adicional trigésima cuarta. Contratos de **gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministros y servicios en función de las necesidades.

En los contratos de **gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministros y de servicios que tramiten las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público con presupuesto limitativo, en los cuales el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar éste, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración, deberá aprobarse un presupuesto máximo.

En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación. A tales efectos, habrá de preverse en la documentación que rija la licitación la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los términos previstos en el artículo 202 de esta Ley. La citada modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.»

## **MOTIVACIÓN:**

Se adapta el precepto a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

(53)

### **ENMIENDA**

A la Disposición adicional trigésima quinta

De modificación del título

Se propone la modificación de la Disposición trigésima quinta, que quedará con la siguiente redacción:

**“Disposición adicional trigésima quinta. Encomienda de determinados servicios públicos sociales a entidades sin ánimo de lucro”.**

### **MOTIVACIÓN:**

Al no suprimirse el contrato de gestión de servicios públicos, el redactado inicial de la disposición deja de tener sentido.

En su lugar se aprovecha para regular la reserva de determinados servicios públicos sociales a entidades sin ánimo de lucro.

(53)

### **ENMIENDA**

A la Disposición adicional trigésima quinta

De modificación

Se propone la modificación de la Disposición trigésima quinta, que quedará con la siguiente redacción:

“Las Leyes de las Comunidades Autónomas en materia de servicios sociales podrán establecer que las Administraciones públicas competentes en los distintos ámbitos, puedan encomendar la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer determinadas necesidades de carácter social a entidades que no tengan el carácter de operadores económicos mediante instrumentos que no tengan naturaleza contractual. En estos supuestos se aplicará la legislación de régimen jurídico y de procedimiento administrativo, así como la legislación de subvenciones”.

### **MOTIVACIÓN:**

Se aprovecha para regular la reserva de determinados servicios públicos sociales a entidades sin ánimo de lucro.

(53)

## **ENMIENDA**

A la Disposición adicional trigésima séptima

De modificación

Se propone la modificación de la Disposición adicional trigésima séptima, que quedará con la siguiente redacción:

«Disposición adicional trigésima séptima. Convocatoria de la licitación de contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, **tengan la consideración de públicos o no.**

Los órganos de contratación que celebren contratos de concesiones de servicios especiales del Anexo IV, **tengan la consideración de públicos o no**, utilizarán como medio de convocatoria de licitación un anuncio de información previa que deberá tener el contenido establecido en el Anexo III.B. Sección 3.

Estos anuncios se publicarán en el «Diario Oficial de la Unión Europea» y en el perfil de contratante.»

## **MOTIVACIÓN:**

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos atendida la necesidad de diferenciar su régimen jurídico, lo que no obsta a que sea comunes otras previsiones como la de la presente disposición.

(53)

### **ENMIENDA**

A la Disposición adicional trigésima novena.

De modificación

Se modifica el apartado 2 de la Disposición Adicional Trigésima Novena, quedando como sigue:

*“Disposición Adicional Trigésima Novena. La Oficina Nacional de Evaluación.*

*2. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se determinará la composición, organización y funcionamiento de la misma. En la composición de la Oficina Nacional de Evaluación se preverá la participación de representantes de las Administraciones Públicas, de las entidades locales en función del ámbito en el que se informe, y de representantes del sector privado relacionados con el objeto sobre el que esté informando en cada caso la Oficina Nacional de Evaluación”.*

### **MOTIVACIÓN:**

Con el objetivo de crear una verdadera Unidad de Colaboración Público-Privada, se proponen las modificaciones indicadas que podrá desarrollarse alternativamente.

(35)

### **ENMIENDA**

A la Disposición adicional trigésima novena.

De modificación

Se modifica el apartado 1, quedando como sigue:

“1. La Oficina Nacional de Evaluación, órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, tiene como finalidad principal analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios. La finalidad y funciones de la Oficina Nacional de Evaluación podrán ser ampliadas mediante la Orden a la que se refiere el siguiente apartado para incluir expresamente la función consultiva a que se refiere el apartado 7 de este artículo.”

### **MOTIVACIÓN:**

Se permite que, mediante Orden Ministerial, la Oficina Nacional de Evaluación asuma funciones de tipo consultivo, facilitando así su adaptación a las necesidades que la contratación pública, en cada momento, requiera.

(24)

## ENMIENDA

A la Disposición adicional trigésima novena

De modificación

Se propone la modificación de la Disposición adicional trigésima novena, que quedará con la siguiente redacción:

“Disposición adicional trigésima novena. La Oficina Nacional de Evaluación.

(...)

3. La Oficina Nacional de Evaluación, con carácter previo a la licitación de los contratos de concesión de obras, **concesión de servicios públicos** y de concesión de servicios **no públicos** a celebrar por los poderes adjudicadores dependientes de la Administración General del Estado y de las Corporaciones Locales, evacuará informe preceptivo en los siguientes casos:

a) Cuando se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la explotación de la concesión, así como cualquier medida de apoyo a la financiación del concesionario.

b) Las concesiones de obras, **concesiones de servicios públicos** y concesiones de servicios **no públicos** en las que la tarifa sea asumida total o parcialmente por el poder adjudicador concedente, cuando el importe de las obras o los gastos de primer establecimiento superen un millón de euros.

Asimismo informará los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, en los casos previstos en los artículos 268.2 y 288.4 respecto de las concesiones de obras, **concesiones de servicios públicos** y concesiones de servicios **no públicos** que hayan sido informadas previamente de conformidad con las letras a) y b) anteriores o que, sin haber sido informadas, supongan la incorporación en el contrato de alguno de los elementos previstos en éstas.

Cada Comunidad Autónoma podrá adherirse a la oficina nacional de evaluación para que realice dichos informes o si hubiera creado un órgano u organismo equivalente solicitará estos informes preceptivos al mismo cuando afecte a sus contratos de concesión.

Reglamentariamente se fijarán las directrices apropiadas para asegurar que la elaboración de los informes se realiza con criterios suficientemente homogéneos.

(...)”.



**MOTIVACIÓN:**

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos atendida la necesidad de diferenciar su régimen jurídico, lo que no obsta a que sea comunes otras previsiones como la de la presente disposición.

(53)



## **ENMIENDA**

### *Disposición Adicional 40 bis*

De adición, Disposición Adicional (nueva)

Se propone la adición de una Disposición Adicional 40 (Bis) nueva, dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"El Registro de Uniones Temporales de Empresas regulado en la Ley 18/1982 se publicará en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, indicando las empresas que la forman, su porcentaje de participación y la fechas de creación y disolución".*

## **MOTIVACIÓN:**

Mientras los datos de creación de cualquier otro tipo de sociedad son públicos en el Registro Mercantil, los de las UTE, sociedades que se crean para contratar con la administración, permanecen bajo candado. El Registro de las UTE del Ministerio de Hacienda y Función Pública, regulado en la Ley 18/1982, no es público. Así, es imposible saber en la mayoría de casos qué porcentaje tiene cada empresa en la unión e, incluso, quiénes son las empresas participantes. Esta información es imprescindible para cumplir la premisa de dar publicidad a los adjudicatarios de los contratos públicos.

(9)

## **ENMIENDA**

De adición de una nueva Disposición Adicional Cuadragésima Primera

Se propone la adición de una nueva Disposición Adicional Cuadragésima Primera, dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

**“Disposición Adicional Cuadragésima Primera. Requisitos de solvencia, criterios de valoración y condiciones de ejecución en los contratos de servicios sociales.**

En los procedimientos de contratación de servicios sociales, los órganos de contratación en todo caso incluirán requisitos de solvencia, criterios de valoración y condiciones de ejecución en los pliegos reguladores de la licitación que supongan la acción positiva para entidades que:

- a) Apliquen el principio de solidaridad y reinviertan sus excedentes en el bien común.
- b) Combatan las causas que producen exclusión social y promuevan de forma activa la extensión de los derechos ciudadanos.
- c) Se coordinen con otras entidades públicas o privadas a través de metodologías de cooperación y de participación y se relacionan de forma integrada con otros sistemas (sanitario, laboral, educativo, judicial, penitenciario, juvenil, cultural, etc).
- d) Atiendan a los colectivos más vulnerables y a las personas en situación o riesgo de exclusión social.
- e) Adapten su actividad al territorio, a la identidad local y sociocultural.
- f) Promuevan el voluntariado y faciliten la participación de las personas usuarias.
- g) Destaquen en la aplicación de políticas de género y las prácticas medioambientales”.

## **MOTIVACIÓN:**

En los procesos de contratación pública debe integrarse la acción positiva en el análisis, diseño, actuación y evaluación de todas las políticas públicas, resultando imprescindibles los instrumentos de desarrollo. Así lo ha recogido la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que han aceptado la llamada discriminación positiva, acción afirmativa, acción positiva o acción compensatoria.

**Así, el principio de igualdad permite el tratamiento desigual ante situaciones de hecho desiguales, siempre que exista una discriminación previa y que las**

medidas aplicadas sean proporcionales y justificadas. **El trato desigual dirigido a las entidades de iniciativa social se justifica por su papel fundamental en la configuración y comprensión del actual sistema de servicios sociales**, pues, sin exagerar, pudiera decirse que son incluso preexistentes al mismo.

Existen numerosos instrumentos que en los últimos años han establecido la viabilidad e idoneidad de regular reservas de contratos de servicios sociales a entidades sin ánimo de lucro, requisitos de solvencia técnica profesional social y criterios de adjudicación de carácter social

(16)

## **ENMIENDA**

**"DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.** Normas específicas de contratación pública de servicios de Arquitectura, Ingeniería, Consultoría y Urbanismo (nueva)

### **De adición**

Se propone la siguiente redacción que incluye una nueva Disposición Adicional, la cuadragésima segunda (normas específicas de contratación pública de servicios de Arquitectura, Ingeniería, Consultoría y Urbanismo), dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*"DISPOSICIÓN ADICIONAL CUADRAGÉSIMO SEGUNDA. Normas específicas de contratación pública de servicios de Arquitectura, Ingeniería, Consultoría y Urbanismo.*

*Se reconoce la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual a los servicios de Arquitectura, Ingeniería, Consultoría y Urbanismo, con los efectos que se derivan de las previsiones contenidas en la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública.*

*El Gobierno remitirá a las Cortes Generales en el plazo de seis meses el correspondiente Proyecto de Ley sobre el sector de la Arquitectura que regulará, entre otros aspectos, las singularidades propias de la contratación pública de dichos servicios profesionales."*

## **MOTIVACIÓN:**

La Directiva Comunitaria 2014/24/UE que se traspone mediante el Proyecto de Ley, destaca el carácter singular que tienen las licitaciones públicas en las que se adjudican servicios sobre Arquitectura, Ingeniería, Consultoría o Urbanismo, al tratarse de prestaciones de carácter intelectual, tanto por los profesionales que intervienen, como por el objeto de las ofertas y propuestas.

Por ello, una adecuada trasposición de dicha Directiva Comunitaria requiere contemplar de manera específica la regulación de tales servicios profesionales, para asegurar el cumplimiento de los criterios de calidad de las ofertas y correcta realización de la prestación, en beneficio de los consumidores y usuarios y del interés público para garantizar una utilización eficiente de los recursos y ahorros en los costes de inversión y conservación. A tal efecto, las especialidades propias de estos servicios profesionales, han de tener el correspondiente tratamiento normativo en la propia Ley de Contratos del Sector Público, y en la Ley sectorial que se refiera a la Arquitectura. El orden de la enmienda va correlativo a las enmiendas anteriores.

(18)

## **ENMIENDA**

### **Disposición Adicional Cuadragésima Tercera De adición**

Se propone incluir la Disposición Adicional Cuadragésima Tercera en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*“Disposición Adicional Cuadragésima Tercera. Valoración de Ofertas de Estudio de Impacto Social, Económico y Medio Ambiental.*

*En base a los criterios cualitativos previstos en el artículo 145, y de manera especial los relativos a características sociales, medioambientales e innovadoras, en los contratos de servicios o de concesión de servicios, cuando el importe sea superior a 1.500.000 euros y en los contratos de obras, o de concesión de obras, superiores a 5.000.000 euros, se incluirá para su valoración como criterio cualitativo la realización de un estudio del impacto social, económico y medioambiental de la respectiva oferta. El órgano de contratación competente, concretará en cada caso la metodología de impacto a utilizar y la asignación de valor a este criterio, siempre de acuerdo con la legislación vigente en esta materia y en coherencia con el objeto del contrato”.*

## **MOTIVACIÓN:**

Mejorar la redacción y ampliar los supuestos ejemplificativos en consonancia con otros supuestos. El orden va correlativo a las enmiendas anteriores.

(59)

## **ENMIENDA**

### **Disposición Adicional (nueva)**

#### **De adición**

Se propone la siguiente redacción de una Nueva Disposición Adicional dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

*“Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de la obligación de reservar un 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad en los términos establecidos en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, A tal efecto esta acreditación se realizará aportando un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas, todo ello sin perjuicio de la posible comprobación de estos extremos por los órganos de contratación.”*

## **MOTIVACIÓN:**

Sin perjuicio de que el hecho de no hallarse al corriente del cumplimiento de la obligación legal de reserva de empleo en favor de trabajadores con discapacidad o de las medidas alternativas de carácter excepcional a dicha reserva, establecida por el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, debe impedir que se obtenga la condición de beneficiario o de entidad colaboradora de subvenciones públicas, consideramos que para que esta medida resulta realmente más efectiva, debería previamente a la concesión de dicha subvención, acreditarse el correcto cumplimiento de la mencionada obligación de reserva de empleo para trabajadores con discapacidad.

Por ello y dando por reproducida también a los presentes efectos la justificación expresada en el apartado anterior, parece evidente que la obtención de cualquier subvención pública debería estar condicionada a que la empresa acreditara el cumplimiento de la obligación de reservar un 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad en los términos establecidos en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de

la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (antes artículo 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos -LISMI).

Debemos tener en cuenta que esta medida supondría sin ningún gasto para la Administración la implementación de la contratación de personas con discapacidad, como expresamente está previsto en la legislación vigente desde el año 1982. Reiteramos que no parecería nada lógico que se otorgaran subvenciones públicas a entidades que no cumplan sus obligaciones legales en la materia.

(3)

## **ENMIENDA**

Disposición Adicional XXXX (nueva)

De adición

Se propone incluir una disposición Adicional (nueva) al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

***“Disposición Adicional XXXX (nueva): Normas específicas de contratación. Prestación de servicios sociales. Concierto Social.***

*Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán aprobar normas específicas de contratación que regulen la adjudicación de contratos de servicios de carácter social, en el marco de un procedimiento que respete los principios de publicidad, igualdad y no discriminación.”*

## **MOTIVACIÓN:**

El proyecto de ley de Contratos del Sector Público, transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Las Directivas habilitan un tratamiento diferenciado a la prestación de servicios de carácter social, alejado de una perspectiva económica o de mercado y ofrecen a los Estados miembros un amplio margen de maniobra para organizar la elección de los proveedores de los servicios del modo que consideren más oportuno, imponiendo solo la observancia de los principios fundamentales de transparencia e igualdad de trato. La enmienda plantea, en virtud del principio de seguridad jurídica, que sea la propia Ley de contratos la que recoja y avale la inclusión de la figura del concierto social en la normativa estatal básica, para que las CCAA, en el ámbito de sus competencias y con pleno respeto a la normativa básica en materia de contratación pública, aprueben normas específicas del concierto social, en congruencia, asimismo, con las últimas regulaciones autonómicas.

(70)



## **ENMIENDA**

Disposición Adicional (nueva)

De adición

Se propone la siguiente redacción de enmienda para añadir una nueva Disposición Adicional dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

### **"DISPOSICIÓN ADICIONAL XXX. Régimen de contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias.**

*El régimen jurídico de los contratos que celebren Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias será el establecido en esta Ley para las entidades del sector público que, siendo poderes adjudicadores, no tienen la consideración de Administración Pública. Las instrucciones reguladoras de los procedimientos de contratación previstas en el artículo 317 de esta ley, serán aprobadas para estos Organismos públicos por el Ministro de Fomento, previo informe de la Abogacía del Estado"*

## **MOTIVACIÓN:**

La nueva delimitación del ámbito subjetivo que resulta del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, implicaría una modificación radical del régimen de contratación que hasta ahora tenían atribuido los Organismos públicos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

De acuerdo con la regulación en materia de contratación hasta ahora vigente, Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias forman parte del sector público y tienen la consideración de poder adjudicador, pero no tienen la consideración de Administración Pública. En efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 del vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales. Y, según lo establecido en la disposición adicional vigésima segunda de dicha Ley, el régimen de contratación de los Organismos públicos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias será el establecido para las entidades públicas empresariales.

Sin embargo, de la regulación contenida en el Proyecto de Ley resultaría que los Organismos públicos portuarios quedarían comprendidos en el concepto de

Administración pública que define el artículo 3.2, que incluye, entre las entidades que tendrán la consideración de Administraciones Públicas:

"b) (...) otras entidades de derecho público, en las que dándose las circunstancias establecidas en la letra d) del apartado siguiente para poder ser considerados poder adjudicador y estando vinculados a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas, no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas."

Los Organismos públicos portuarios operan en el sector del transporte y, por consiguiente, la mayoría de los contratos que celebran se encuentran comprendidos en el ámbito objetivo de aplicación de la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por las entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

Sin embargo, con la regulación contenida en el Proyecto de Ley, los Organismos públicos portuarios se someterían en su integridad a la Ley de Contratos del Sector público y no a la Ley sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales, que traspone la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.

Ello resultaría incongruente con el Derecho comunitario europeo que ha previsto, para los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, un régimen normativo de contratación distinto al aplicable a las Administraciones públicas que no actúan en estos ámbitos, garantizando en todo caso el respeto a los principios de publicidad y concurrencia.

Como señala la Exposición de Motivos de la vigente Ley 31/2007, de 30 de octubre, *"la Comisión Europea estimó en su momento, ponderando, como se preocupó de señalar, razones políticas, estratégicas, económicas, industriales y jurídicas, que era oportuno introducir criterios originales o específicos en el campo contractual de los entonces denominados sectores excluidos, ya que éstos, en el contexto de los países comunitarios, están gestionados por entidades u organismos públicos o privados de manera indistinta"*.

Pero, además, tal medida supondría que las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado deberían operar en el mercado de las infraestructuras portuarias con un modelo de contratación diferente al resto de los países de nuestro entorno más competitivo, y lo cierto es que debemos actuar con las mismas reglas que rigen la contratación de los países de nuestro entorno, dadas por la Unión Europea, y no sería razonable someterla a mayores rigideces que las que van a asumir el resto de los puertos con los que competimos.

Por otra parte, como ha puesto de manifiesto el Consejo de Estado en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, llama la atención "la falta de adecuación de las denominaciones y conceptos empleados en el precepto - artículo 3 del Anteproyecto- con las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público". Y, en el supuesto de los organismos públicos portuarios aún más, ya que con ello se viene a restringir el ámbito de autonomía de gestión del que están dotados dichos Organismos en su legislación específica, autonomía que aparece igualmente reconocida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuya disposición adicional duodécima establece:

"Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado se regirán por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que les sean de aplicación y, supletoriamente, por lo establecido en esta Ley".

(12)

## **ENMIENDA**

Disposición Adicional N° XX (nueva)

De adición

Se propone la redacción de una Disposición adicional XX (nueva) dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

### ***“Disposición adicional (XX). Garantía de la calidad del empleo en los supuestos de internalización de servicios o actividades.***

*Las entidades que integran el sector público solo podrán acordar la gestión directa, con sus propios medios o a través de una entidad vinculada o dependiente de las mismas con personalidad jurídica propia, de servicios públicos que viniera gestionando con anterioridad un operador económico al amparo de un contrato de servicios, de concesión de obras o de concesión de servicios, en caso de que no existan limitaciones y restricciones de índole presupuestaria en materia de crecimiento del número de empleados públicos o de su masa salarial que imposibiliten la sucesión de empresa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o la subrogación de dichas entidades en los contratos de trabajo celebrados por el operador económico que pueda contemplar el convenio colectivo de aplicación.*

*A tal efecto y previamente a la adopción del correspondiente acuerdo deberá recabarse informe favorable de la Intervención General correspondiente acerca de la existencia de dichas limitaciones y restricciones y de sus consecuencias.*

*Las entidades integrantes del sector público que acuerden gestionar directamente, con sus propios medios o a través de una entidad vinculada o dependiente de las mismas y con personalidad jurídica propia, servicios públicos que viniera gestionando con anterioridad un operador económico al amparo de un contrato de servicios, de concesión de obras o de concesión de servicios, deberán, siempre que exista sucesión de empresa o subrogación en los contratos de trabajo con arreglo al convenio colectivo de aplicación, modificar las relaciones de puestos de trabajo en lo necesario para cubrir de manera indefinida los que sean objeto de los contratos, dentro de los tres meses anteriores a la extinción del contrato celebrado con el operador económico, no pudiendo, de no modificarlas en dicho plazo, asumir efectivamente la gestión directa de los servicios públicos de que se trate.”*

### **MOTIVACIÓN:**

- En los procesos de internalización, esto es, de tránsito de una gestión externalizada (indirecta, por medio de contrato) a una gestión internalizada (directa, personificada o no personificada) de servicios públicos gestionados mediante contratos de concesión de obras, de concesión de servicios o de servicios (normalmente de largo plazo), en los que se produzca un supuesto de subrogación laboral con arreglo al artículo 44 del Estatuto de los trabajadores (sucesión de empresa), se hace necesario garantizar que los trabajadores afectados puedan mantener o recuperar lo antes posible su condición laboral indefinida.
- Para ello es necesario que por la Administración:
  - a) se respeten los límites que impone la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en materia de empleo público (límites que pueden llegar a impedir la modificación de la relación de puestos de trabajo), debiendo solicitar y obtener informe favorable de la Intervención General correspondiente acerca de dicho extremo, y
  - b) que en caso de que resulte posible acordar la gestión directa, diferenciada o indiferenciada, los trabajadores afectados por la internalización recuperen lo antes posible su condición laboral indefinida con pleno respeto de los principios de acceso a la función pública constitucionalmente reconocidos (igualdad, mérito y capacidad), resultando necesario que se modifique la relación de puestos de trabajo y convoque los correspondientes procedimientos con anterioridad a la terminación del contrato correspondiente. Todo ello, para evitar que los trabajadores pasen a estar, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 23.05.2014; STS 24.06.2014 y STS 14.07.2014) y de Tribunales Autonómicos (ej., STSJ de Castilla y León 9.11.2011), en una situación de precariedad e inseguridad laboral que se conoce como la del "trabajador indefinido no fijo".

(64)

## **ENMIENDA**

Disposición Adicional XXX

De Adición

Se propone la adición de una nueva disposición adicional XXX, que tendrá la siguiente redacción:

*“Disposición adicional XXX. Contratación de servicios de seguridad privada por las administraciones públicas.*

*En consideración a la relevancia para la seguridad pública de los servicios de seguridad privada, la determinación de la oferta económica más ventajosa implicará considerar una pluralidad de criterios de adjudicación, debiendo primar los criterios cualitativos a los que alude el artículo 145.3, siempre debidamente objetivados, sobre el criterio del precio.”*

## **MOTIVACIÓN:**

La ley de seguridad privada 5/2014, de 4 de abril, introdujo una Disposición adicional segunda, bajo el título “Contratación de servicios de seguridad privada por las administraciones públicas,” que introduce condiciones especiales de ejecución y penalidades en el caso de su incumpliendo, como consecuencia de la relevancia para la seguridad pública de los servicios de seguridad privada:

Dicha norma sectorial no debía, lógicamente ahondar en los criterios de adjudicación de los servicios de seguridad privada. Sin embargo, la consideración de la relevancia para la seguridad pública de los servicios de seguridad privada, más aún, en el contexto de las nuevas amenazas, en particular, en el ámbito de las infraestructuras críticas, aconseja exigir que los criterios cualitativos, siempre debidamente objetivados, sean los preponderantes en los procesos de adjudicación, más allá de la mera consideración del precio.

Difícilmente puede entenderse que los servicios de seguridad privada pueden asumir su papel complementario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que les atribuye el legislador, si la adjudicación se basa exclusiva o casi exclusivamente en el criterio de la oferta económica más barata.

(10)

## **ENMIENDA**

### **Disposición Adicional XXXX**

#### **Enmienda de adición.**

Se propone añadir una nueva Disposición Adicional XXXX (nueva) dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

(Nueva) “Disposición Adicional XXXX. Contratos de Servicios Sociales y otros.

- “1. La preparación y adjudicación de los contratos de servicios sociales y otros servicios del Anexo IV garantizarán, en todo caso, que los poderes adjudicadores respetan los principios de publicidad, transparencia y de igualdad de trato de los operadores económicos tanto en la accesibilidad a los procedimientos de licitación, como en su adjudicación.*
- 2. Los poderes adjudicadores de los contratos de servicios sociales y otros servicios del Anexo IV velarán por la garantía de la calidad, la continuidad, la accesibilidad a los procedimientos en igualdad de trato de todos los operadores económicos, la asequibilidad en el marco de la estabilidad presupuestaria, la disponibilidad y la exhaustividad de los servicios, teniendo especial atención en las necesidades de las distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables, la implicación y la responsabilización de los usuarios y la innovación.*
- 3. En todo caso la elección del proveedor de servicios se hará sobre la base de la oferta económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta criterios de calidad y de sostenibilidad en el caso de los servicios sociales.”*

## **MOTIVACIÓN:**

El denominado tercer sector no sólo realiza actividades solidarias propias del tercer sector, sino también actividades económicas: su participación en procedimientos para la adjudicación de contratos de servicios de atención a las personas es una manifestación de su calidad de operador económico. El texto propuesto reitera la previsión del art. 76 de la Directiva 2014/24/UE enfatizando la igualdad de trato entre operadores económicos que recoge el citado precepto en todo el procedimiento de licitación de naturaleza económica, empezando, especialmente por su acceso, para evitar que se excluyan, de entrada, unos operadores económicos y otros no. La presente enmienda se propone a fin de garantizar de forma plena el principio de igualdad entre todos los operadores económicos y evitar situaciones discriminatorias.

(6)

## **ENMIENDA**

De adición

Disposición Adicional XXXXX, nueva

Añadir una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

Disposición Adicional (nueva). Seguimiento de la contratación pública por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

“La Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, a través de una “Ponencia de carácter permanente para el control y seguimiento de la contratación pública” que se constituirá en los términos que dispongan los Reglamentos de las Cámaras, recibirá la más amplia información para hacer posible el control y la vigilancia de la contratación pública y la participación en las iniciativas de mejora normativa que se adopten en esta materia.”

(36)



## **ENMIENDA**

### **Disposición Transitoria primera**

#### **De adición, apartado 5 (nuevo)**

Se propone la redacción de una apartado 5 (nuevo) en la Disposición Transitoria primera dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

**Disposición Transitoria Primera.** Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

(...)

*(Nuevo) “5. El régimen contemplado en la Disposición adicional (XX) resultará de aplicación en aquellos casos en que las entidades integrantes del sector público pretendan acordar o acuerden efectivamente la gestión directa, con sus propios medios o a través de una entidad vinculada o dependiente de las mismas con personalidad jurídica propia, de servicios públicos que viniera gestionando un operador económico al amparo de contratos de concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, servicios o negocios jurídicos análogos a los anteriores celebrados previamente a la entrada en vigor de la presente Ley”.*

## **MOTIVACIÓN:**

- En los procesos de internalización, esto es, de tránsito de una gestión externalizada (indirecta, por medio de contrato) a una gestión internalizada (directa, personificada o no personificada) de servicios públicos gestionados mediante contratos de concesión de obras, de concesión de servicios o de servicios (normalmente de largo plazo), en los que se produzca un supuesto de subrogación laboral con arreglo al artículo 44 del Estatuto de los trabajadores (sucesión de empresa), se hace necesario garantizar que los trabajadores afectados puedan mantener o recuperar lo antes posible su condición laboral indefinida.
- Para dotar de efectividad a la nueva regulación propuesta resulta fundamental que la misma pueda aplicarse no solo respecto de los nuevos contratos de concesión de obras, concesión de servicios o servicios que puedan celebrarse

con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley sino también respecto de los contratos de concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos o servicios celebrados al amparo de la normativa anterior.

- Con la nueva regulación propuesta será necesario que por la Administración:
  - a) se respeten los límites que impone la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en materia de empleo público (límites que pueden llegar a impedir la modificación de la relación de puestos de trabajo), debiendo solicitar y obtener informe favorable de la Intervención General correspondiente acerca de dicho extremo, y
  - b) que en caso de que resulte posible acordar la gestión directa, diferenciada o indiferenciada, los trabajadores afectados por la internalización recuperen lo antes posible su condición laboral indefinida con pleno respeto de los principios de acceso a la función pública constitucionalmente reconocidos (igualdad, mérito y capacidad), resultando necesario que se modifique la relación de puestos de trabajo y convoque los correspondientes procedimientos con anterioridad a la terminación del contrato correspondiente. Todo ello, para evitar que los trabajadores pasen a estar, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 23.05.2014; STS 24.06.2014 y STS 14.07.2014) y de Tribunales Autonómicos (ej. STSJ de Castilla y León 9.11.2011), en una situación de precariedad e inseguridad laboral que se conoce como la del “trabajador indefinido no fijo”.

(64)

### **ENMIENDA**

A la Disposición Transitoria Quinta

De supresión

Se propone la supresión de la Disposición Transitoria Quinta dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

### **MOTIVACIÓN:**

De manera coherente con la enmienda de supresión del Título I del Libro III. La remisión a un régimen de "autorregulación" (vía Instrucciones Internas) para los contratos no sujetos a regulación armonizada por parte de los poderes adjudicadores no administración pública ha derivado en una infinidad de procedimientos, regulaciones y requisitos no uniformes que se aplican a la contratación de todas esas entidades. A los licitadores no les basta con conocer la Ley de contratos sino que deben conocer también todas las Instrucciones de todas las entidades con las que pretendan contratar. Las Instrucciones internas de contratación se han convertido en un obstáculo para la unidad de mercado. Se considera mucho más adecuado plantear un régimen uniforme para la contratación de todos los poderes adjudicadores

(14)

### **ENMIENDA**

#### **Disposición Final Primera (Bis)**

De adición,

Se propone la incorporación de una Disposición Final Primera (Bis) Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la siguiente redacción:

*"Nuevo. Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de las competencias que les confieren sus respectivos estatutos de autonomía, podrán transponer al ordenamiento interno las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de los contratos de concesión, y sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, respectivamente, en lo que se refiere a los contratos de concesión y de servicios de atención a las personas."*

### **MOTIVACIÓN:**

Con esta propuesta se pretende reforzar el papel de las comunidades autónomas en la transposición de las directivas europeas.

(32)

## **ENMIENDA**

A la Disposición Final Segunda

De adición, apartado 4º (nuevo)

Se propone la incorporación de un nuevo apartado cuarto a la Disposición Final del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 con la siguiente redacción:

*“4º. Los procedimientos de revisión de oficio de adjudicaciones previstos en esta Ley podrán ser utilizados desde la entrada en vigor de esta ley, aunque las adjudicaciones se hayan realizado con anterioridad”.*

## **MOTIVACIÓN:**

Concreción de la aplicación de los procedimientos de revisión de oficio para procedimientos anteriores a la norma por razón de la nulidad de las mismas.

(33)

## **ENMIENDA**

Disposición Final Segunda bis (nueva). Créditos tributarios y demás de Derecho Público.

De adición

Se propone siguiente redacción a una Disposición Final XXX (nueva) del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

### ***“Disposición Final Segunda Bis (nueva). Créditos tributarios y demás de Derecho Público.***

*Los créditos tributarios y demás de Derecho público -que se derivan de las obligaciones nacidas ex lege como aquellos surgidos en virtud de actos administrativos sujetos al Derecho público- ,así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2.º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe.”*

*La resolución de un contrato como consecuencia de la declaración de concurso puede convertir a la Administración en acreedora del deudor insolvente. Parece razonable entender -en la línea apuntada por algunos autores- que los créditos de la Administración contratante frente al contratista son de naturaleza pública. Sin embargo, no resulta tan evidente su clasificación”.*

## **MOTIVACIÓN:**

El Artículo 91 LC -que recoge los privilegios generales- nos conduce a pensar que dicho precepto no reconoce a los créditos derivados de los contratos celebrados con las Administraciones Públicas privilegio de ningún tipo. El ámbito objetivo del apartado 4 de ese artículo ha planteado muchos problemas; en particular, cuando se trata de definir o precisar cuáles son los créditos que se engloban en la expresión “créditos de derecho público”. Parece razonable entender que deben considerarse comprendidos tanto los créditos que se derivan de las obligaciones nacidas *ex lege* como aquellos surgidos en virtud de actos administrativos sujetos al Derecho público. En concreto, la expresión abarcaría tanto los créditos derivados de la resolución de un contrato con las Administraciones Públicas como consecuencia de la declaración de concurso (y apertura de la fase de liquidación); la declaración de nulidad del contrato por infracción

de la prohibición de contratar o por inhabilitación del concursado como consecuencia de la calificación culpable del concurso; supuestos de ejecución defectuosa o demora en la ejecución de las obligaciones derivadas de un contrato, reposición o reajuste de la garantía.

Su inclusión con carácter específico en el art. 91.4 LC supondría el reconocimiento de un privilegio de carácter general.

(33)

## **ENMIENDA**

### ***Disposición Final Cuarta bis (nueva).***

De adicción

Se propone la siguiente redacción de una ***Disposición Final Cuarta bis (nueva).***

dentro del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

### **Nueva “Disposición Final Cuarta bis (nueva). Acceso a las subvenciones públicas.**

Se excluye del acceso a las subvenciones públicas a las personas físicas o jurídicas incumplidoras de las normas que favorezcan a las personas con discapacidad o que realicen actos discriminatorios o contrarios a la dignidad de las personas y se consideraran las siguientes circunstancias:

- a) *Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos derivados de la realización de actos discriminatorios tipificados en los artículos 510 a 512 del Código Penal.*
- b) *Haber sido sancionados en sede administrativa por infracciones laborales muy graves en supuestos de actos contra la intimidad y la dignidad, discriminación y acoso, tipificadas en los apartados 11, 12, 13 y 13 bis del artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o por infracciones de empleo graves por incumplimientos en materia de medidas de reserva e integración laboral de personas con discapacidad, tipificada en el apartado 3 del artículo 15 de dicha Ley.*
- c) *Haber sido sancionados en sede administrativa por infracciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con el Título III del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.*
- d) *No hallarse al corriente del cumplimiento de la obligación legal de reserva de empleo en favor de trabajadores con discapacidad o de las medidas alternativas de carácter excepcional a dicha reserva, establecida por el*



*artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.”*

### **MOTIVACIÓN:**

Resulta importante excluir del acceso a las subvenciones públicas a las personas físicas o jurídicas incumplidoras de las normas que favorezcan a las personas con discapacidad o que realicen actos discriminatorios o contrarios a la dignidad de las personas.

Por una parte, la realización de actos discriminatorios puede ser constitutiva de delito, de acuerdo con los artículos 510 a 512 del Código Penal, dada su gravedad y la alarma social que originan dichas actividades. En ámbitos como el laboral, la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social tipifica y califica como muy graves o graves las conductas empresariales, respectivamente, discriminatorias o que vulneren las normas que favorecen a las personas con discapacidad. Sería una burla a las leyes que sujetos, personas físicas o jurídicas, que han sido condenados en el orden penal o sancionados en vía administrativa por tan graves conductas, obtengan beneficios o subvenciones como “premio” a su comportamiento, censurado, sin embargo, por las normas penales o de otros órdenes. En otros ámbitos, como el de la Ley reguladora del Derecho de Asociación, se ha excluido de cualquier subvención a aquéllas que promuevan el odio o la violencia, con base en la sanción penal de dichas conductas.

De igual modo, se considera que no deben obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora de las subvenciones públicas aquellas personas físicas o jurídicas que viniendo obligadas por la legislación social vigente no cumplan la reserva de empleo en favor de trabajadores con discapacidad, ya que desde los poderes públicos no se puede favorecer a quienes incumplen obligaciones legales dirigidas a favorecer a grupos vulnerables.

La introducción de estas nuevas cuatro letras en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, obliga igualmente a modificar en lo correspondiente (igualmente para su inclusión) los apartados 4, 5 o 6, según los casos, del mismo precepto.

(3, 16)

### ENMIENDA NÚM.

#### AI ANEXO III

#### De modificación

Se propone la modificación del Anexo III, que quedará con la siguiente redacción:

#### «ANEXO III

#### Información que debe figurar en los anuncios

A) Información que debe figurar en los anuncios de publicación de un anuncio de información previa en un perfil de contratante, de información previa, de licitación, de formalización y de modificación de contratos de obras, **gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministros y servicios

(...)

Sección 2. Información que debe figurar en los anuncios de información previa cuando no proceda la aplicación de la sección 3 siguiente

(...)

6. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución en los contratos de **gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministro y de servicios. Cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se facilitará para cada lote.

(...)

Sección 4. Información que debe figurar en los anuncios de licitación cuando no proceda la aplicación de la sección 5 siguiente

(...)

6. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución en los **contratos de gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministro y de servicios. Cuando la concesión esté dividida en lotes, esta información se facilitará para cada lote.

(...)

Sección 5. Información que debe figurar en los anuncios de licitación relativos a contratos de servicios especiales del anexo IV

(...)

2. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en los contratos de **gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministro y de servicios.

(...)

Sección 6. Información que debe figurar en los anuncios de formalización de contratos cuando no proceda la aplicación de la sección 7 siguiente

(...)

5. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución, en los contratos de **gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministro y de servicios.

(...)

Sección 7. Información que debe figurar en el anuncio de formalización de los contratos de servicios sociales y otros servicios específicos

(...)

3. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o ejecución, en los contratos de **gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministro y de servicios.

(...)

Sección 10. Información que debe figurar en los anuncios de modificación de un contrato durante su vigencia

(...)

3. Código NUTS del emplazamiento principal de las obras, en el caso de los contratos de obras, o código NUTS del lugar principal de entrega o de ejecución en los contratos de **gestión de servicios públicos en que no se transfiera el riesgo operacional al contratista**, suministro y de servicios.

(...)

B) Información que debe figurar en los anuncios de licitación, formalización y modificación de contratos de concesión de obras y concesión de servicios

Sección 1. Información que debe figurar en los anuncios de licitación de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, **públicos o no**.

(...)

Sección 2. Información que debe figurar en los anuncios de formalización de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, **públicos o no**, cuando no proceda la aplicación de la sección 5 siguiente

(...)

Sección 3. Información que debe figurar en los anuncios de información previa de concesiones de servicios especiales del anexo IV, **públicos o no**.

(...)

Sección 4. Información que debe figurar en los anuncios de modificación de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, **públicos o no**.

(...)

Sección 5. Información que debe figurar en los anuncios de formalización de concesiones de servicios sociales del anexo IV, **públicos o no**.

(...)»

Resto de apartados del Anexo III sin variación.

#### **MOTIVACIÓN:**

Adecuación del anexo III a la figura del contrato de gestión de servicios públicos.

Adecuación a la propuesta que distingue las figuras de la concesión de servicios públicos y de servicios no públicos atendida la necesidad de diferenciar su régimen jurídico, lo que no obsta a que sea comunes otras previsiones como la de la presente disposición.

(53)

## **ENMIENDA**

### Anexo IV

### De supresión

Se propone la supresión, en el Anexo IV, de la siguiente expresión:

*"79700000-1 a 79721000-4 [Servicios de investigación y seguridad, Servicios de seguridad, Servicios de vigilancia de sistemas de alarma, Servicios de vigilancia, servicios relacionados con el sistema de localización, Servicios de búsqueda de prófugos, Servicios de patrullas, Servicios de expedición de distintivos de identificación, Servicios de investigación y Servicios de agencia de detectives] 79722000-1 [Servicios de grafología], 79723000-8 [Servicios de análisis de residuos] Servicios de investigación y seguridad".*

## **MOTIVACIÓN:**

La inclusión en el anexo XV de la Directiva no impide someter al legislador nacional a determinadas categorías a un régimen más amplio y equiparable al resto de contratos administrativos.

En este sentido, cara a la existencia de unos plazos de recursos análogos y la posibilidad de interposición de los recursos especiales de contratación, se propone la modificación del anexo IV, excluyendo los servicios de investigación y seguridad del mismo (79700000-1 a 79721000-4).

(10)